

SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:

CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES, GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO DE DESARROLLO



**Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo**

Milano, Flavia.

Sector extractivo y sociedad civil: cuando el trabajo de comunidades, gobiernos e industrias es sinónimo de desarrollo / Flavia Milano ; [edición, Irene Irazábal Briceño y Viviane Espinoza ; coordinación, Volker Frank, Javier Caravedo, Iván Ormachea, Mitzy Canessa, Bruno Gomes].

p. cm. — (Monografía del BID ; 662)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Mineral industries-Social aspects-Latin America. 2. Mineral industries-Environmental aspects-Latin America. 3. Civil society-Latin America. 4. Economic development projects-Latin America-Citizen participation. 5. Economic development projects-Social aspects-Latin America. 6. Economic development projects-Environmental aspects-Latin America. I. Irazábal Briceño, Irene, editora. II. Espinoza, Viviane, editora. III. Frank, Volker, coordinador. IV. Caravedo, Javier, coordinador. V. Ormachea, Iván, coordinador. VI. Canessa, Mitzy, coordinadora. VII. Gomes, Bruno, coordinador. VIII. Banco Interamericano de Desarrollo. Vicepresidencia de Países. IX. Título. X. Serie. IDB-MG-662

L71; L72; L78; Q32; Q35; Q38

Sociedad Civil; Extractivas; Sector extractivo; Industrias extractivas; Gobiernos; Desarrollo sostenible



Copyright © [2018] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Esta es una publicación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vicepresidencia de Países.

SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:

CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES, GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO DE DESARROLLO

Publicación elaborada gracias al Fondo Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF) financiado por el Gobierno de Canadá

Liderazgo, coordinación de equipos y contenidos

Flavia Milano, Especialista Senior en Operaciones/Sociedad Civil, Vicepresidencia de Países, BID – Líder de Proyecto

Revisión y ajuste de contenidos

Martin Walter, Especialista de la Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID
Maria Dolores Vallenilla Sosa, Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID

Ediciones:

Irene Irazábal Briceño, Vicepresidencia de Países, BID
Viviane Espinoza, Vicepresidencia de Países, BID

Coordinación e investigación general:

Volker Frank (Fundación Futuro Latinoamericano)
Javier Caravedo (ProDiálogo)
Iván Ormachea (ProDiálogo)
Mitzy Canessa (Grupo de Diálogo Latinoamericano)
Bruno Gomes (Grupo de Diálogo Latinoamericano)

Equipo de investigación por país

Roberto Sarudiansky, Fundación EMPREMIN - Investigador y punto focal caso Argentina
María Gabriela Strazzolini, Fundación EMPREMIN - Investigadora y punto focal caso Argentina
Mitzy Canessa, Grupo de Diálogo Latinoamericano - Investigadora y punto focal caso Chile
María del Pilar Pardo Fajardo, Gestión Ambiental Estratégica - Investigadora y punto focal caso Colombia
Martha Cecilia Osorio Bustamante, Gestión Ambiental Estratégica - Investigadora y punto focal caso Colombia
Susana Cruickshank, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública - Investigadora y punto focal caso México (hidrocarburos)
Fabiola S. Sosa-Rodríguez, Universidad Autónoma Metropolitana - Investigadora y punto focal caso México (minería)
Marina Irigoyen, Centro IDEAS - Investigadora y punto focal caso Perú
Cristina Thomen Ginebra, Organismo Latinoamericano de Minería – Investigadora y punto focal caso República Dominicana

Especial agradecimiento

La líder de proyecto, el equipo de coordinación e investigadores país dan su especial agradecimiento y recordatorio a José Luis Lopez Follegatti, promotor del diálogo sobre minería y desarrollo sostenible en el Perú, quien en vida participó y jugó un rol importante para la conformación de este equipo y el desarrollo exitoso de esta investigación.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. LOS TRES ACTORES INVOLUCRADOS CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	11
1.1.1. <i>Empresas extractivas</i>	11
1.1.2. <i>Gobierno</i>	13
1.1.3. <i>Sociedad Civil</i>	17
1.2. LOS COSTOS DE LOS CONFLICTOS	19
2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL	22
2.1. ARGENTINA	24
2.1.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	24
2.1.2. <i>Introducción</i>	26
2.1.3. <i>Buenas prácticas</i>	27
2.1.4. <i>Análisis de actores</i>	40
2.1.5. <i>Marco legal</i>	43
2.2. CHILE	45
2.2.1. <i>Cuadro de resumen</i>	45
2.2.2. <i>Introducción</i>	47
2.2.3. <i>Buenas prácticas</i>	48
2.2.4. <i>Análisis de Actores</i>	58
2.2.5. <i>Marco Legal</i>	62
2.3. COLOMBIA	64
2.3.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	64
2.3.2. <i>Introducción</i>	66
2.3.3. <i>Buenas prácticas</i>	67
2.3.4. <i>Análisis de Actores</i>	76
2.3.5. <i>Marco Legal</i>	78
2.4. MÉXICO – Hidrocarburos	80
2.4.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	80
2.4.2. <i>Introducción</i>	82
2.4.3. <i>Buenas prácticas</i>	84
2.4.4. <i>Análisis de Actores</i>	92
2.4.5. <i>Marco legal</i>	94
2.5. MÉXICO – Minería	96
2.5.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	96
2.5.2. <i>Introducción</i>	99
2.5.3. <i>Buenas prácticas</i>	99
2.5.4. <i>Análisis de Actores</i>	119
2.5.5. <i>Marco legal</i>	122
2.6. PERÚ	124
2.6.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	124
2.6.2. <i>Introducción</i>	126
2.6.3. <i>Buenas prácticas</i>	127
2.6.4. <i>Análisis de Actores</i>	144
2.6.5. <i>Marco Legal</i>	146
2.7. REPÚBLICA DOMINICANA	149
2.7.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	149
2.7.2. <i>Introducción</i>	151
2.7.3. <i>Buenas prácticas</i>	152
2.7.4. <i>Análisis de Actores</i>	169
2.7.5. <i>Marco Legal</i>	171



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	173
3.1. CONCLUSIONES	174
<i>Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores</i>	174
<i>Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento</i>	174
<i>Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador</i>	175
<i>Sobre los principales actores</i>	175
<i>Sobre los temas abordados en las prácticas</i>	176
<i>Sobre el relacionamiento</i>	177
<i>Sobre las prácticas de relacionamiento</i>	178
3.2. RECOMENDACIONES	180
<i>Para las empresas</i>	180
<i>Para la Sociedad Civil</i>	181
<i>Para el Estado</i>	182
<i>Para los tres actores</i>	183
 4. HOJAS DE RUTA	184
HOJA DE RUTA DE COLOMBIA	186
HOJA DE RUTA DE PERÚ	191
HOJA DE RUTA DE REPÚBLICA DOMINICANA	196
HOJA DE RUTA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	201
 ANEXO 1: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO	219
ANEXO 2: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	224
ANEXO 3: OTRAS BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO	232
ANEXO 4: VALIDACIÓN FINAL DEL ESTUDIO	241

Siglas y acrónimos

ACM	Asociación Colombiana de Minería
ACP	Asociación Colombiana de Petróleo
AIDSEP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AMEXHI	Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
AMSA	Antofagasta Minerals
AMUCEP	Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
ANDI	Asociación de Industriales de Colombia
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAEM	Cámara Argentina de Empresarios Mineros
CAMIPE	Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Inc.
CAR	Corporaciones Autónomas Regionales
CEAS	Comisión Episcopal de Acción Social
CEMDA	Centro Mexicano en Derecho Ambiental
CERFORMOMALI	Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc.
CFE	Consejo Federal de Energía
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CITT	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
CMAP	Comité de Monitoreo Ambiental Participativo
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
COFEMA	Consejo Federal del Ambiente
COFEMIN	Consejo Federal de Minería
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONALEP	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONAP	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CORMIDOM	Corporación Minera Dominicana
CVSA	Cerro Vanguardia SA
DGM	Dirección General de Minería
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva
ENTRE	Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva
EVIS	Evaluación de Impacto Social
FALCONDO	Falconbridge Dominicana
FARN	Fundación Ambiente y Recursos Naturales
FFLA	Fundación Futuro Latinoamericano
FOMISAR	Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez
GDL	Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible
GDMDs	Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible
GMN	Grupo Multipartícipe Nacional de EITI
ICMM	International Council on Mining and Metals
IED	Inversión Extranjera Directa
IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad
INFOTEP	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
LWR	Lutheran World Relief
MAC	Asociación Minera de Canadá
MBV	Mesa de Buenos Vecinos
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MIMARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MSX	Minera San Xavier

OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organización de la Sociedad Civil
PACMA	Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
PAE	Panamerican Energy
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGS	Plan de Gestión Social
PIB	Producto Interno Bruto
PUCP	Universidad Católica del Perú
PVDC	Pueblo Viejo Dominicana Corporation / Barrick Pueblo Viejo
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RSE	Responsabilidad Social Empresaria
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER	Secretaría de Energía
SMCV	Sociedad Minera Cerro Verde SAA
SNMPE	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SODOGEO	Sociedad Dominicana de Geología.
SPH	Sociedad Peruana de Hidrocarburos
TSM	iniciativa “Hacia una minería sustentable”
UAGRO	Universidad Autónoma de Guerrero
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSAM	Universidad Nacional de San Martín
UTECO	Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

1. INTRODUCCIÓN

Los países ricos en recursos naturales y la consiguiente actividad extractiva de esos recursos no renovables -minerales, petróleo y gas-, impulsan varias perspectivas de aproximación. El análisis económico permite estimar los costos de inversión, la rentabilidad de las empresas y los aportes con los que el sector extractivo contribuye a la economía de una nación o región. Desde un punto de vista de adelantos tecnológicos, las industrias extractivas requieren el empleo de sofisticadas tecnologías de punta con el potencial de contribuir a reducir impactos adversos. Desde lo ambiental, por la dimensión propia de este tipo de proyectos, se habla de los impactos de las actividades extractivas en la naturaleza y la biodiversidad, la competencia por el uso de recursos hídricos, las consecuencias en los cultivos y la posible contaminación de ríos o fuentes acuíferas y donde, las tecnologías mencionadas, pueden jugar un papel decisivo en las medidas de ahorro y mitigación.

Desde la perspectiva social se requiere una sofisticación no menor para abarcar y analizar oportunidades y desafíos entre los actores involucrados, frente a las diferentes fases de los grandes proyectos, como la exploración, explotación y cierre, especialmente respecto a las comunidades aledañas¹.

El diagnóstico que se presenta a continuación se acerca al sector extractivo desde una perspectiva de relacionamiento entre los principales actores involucrados, el Gobierno, la Empresa y las Comunidades afectadas directa o indirectamente por la actividad extractiva. El diagnóstico se aleja de un enfoque clásico hacia las actividades extractivas como “de maldición de los recursos naturales” para investigar y poner en evidencia aquellos hallazgos donde el relacionamiento de actores efectivo representó una oportunidad de desarrollo.

El diagnóstico como línea inicial partió de información conocida basada en estudios previos y experiencia de campo, repasando que la actividad extractiva conlleva el involucramiento de esos tres actores en diferentes capacidades: (i) el **gobierno** y su rol a nivel nacional, provincial y/o municipal respecto a los pasos relacionados con la actividad extractiva como el diseño y asignación de pliegos de licitación, autorizaciones, monitoreo de implementación, con un lapso temporal de influencia de las decisiones políticas (en ausencia de instituciones que respalden dichas decisiones) más breve comparado con los otros dos actores, (ii) la **empresa** que por la naturaleza de la actividad extractiva a largo plazo permanece en el terreno por periodos en general comprendidos por decenios y que luego de



¿Cómo los gobiernos, las comunidades y las industrias pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?





obtenidas las autorizaciones y licencias (incluida la social), se emplaza geográficamente y pasa a formar parte de la vida de las comunidades aledañas a la zona de extracción. Esta particularidad no menor que define a la actividad extractiva, tiene una influencia en el tejido social y la economía local con impactos en la composición de los grupos tradicionales: (iii) las **comunidades**, además de ser responsables de dar información y comprender el alcance del proyecto para otorgar, la licencia social para operar permanecen en el terreno por generaciones y mantienen un relacionamiento en cada fase de la actividad (tratándose de extracciones “onshore”, desde la apertura al cierre de actividades). La actividad extractiva puede aportar oportunidades a las comunidades y también pueden conllevar nuevas tensiones al interno de la propia población. Entre estas oportunidades y tensiones estaría la empleabilidad de trabajadores provenientes de las comunidades. Por los requerimientos específicos y perfil técnico esta empleabilidad tiende a ser baja, generándose mayor competitividad por puestos de servicios. En ocasiones esta circunstancia puede abrir una brecha entre aquellos trabajadores provenientes de las comunidades versus miembros de la misma comunidad sin trabajo en la empresa. Las comunidades son susceptibles de fracturas internas donde no existían conflictos con anterioridad. Este factor también viene con el arribo de trabajadores fuera de la comunidad que generan un aumento significativo de la población local con nuevos habitantes en la zona y ajenos a las tradiciones y ritmos rurales. Esta circunstancia a su vez genera una natural presión sobre un mismo territorio y respecto a los mismos recursos. Nuevas construcciones de infraestructura y los tiempos

de obras que afectan la circulación al interno de las comunidades, son también otros de los conflictos registrados como así; posible aumento del consumo de alcohol; desbalance del número de hombres respecto a mujeres; potencial aumento de crímenes de género; inicio o aumento de actividades de prostitución. Mención aparte merece la capacidad de la empresa de influir en la cadena de valor con diferentes emprendimientos y organizaciones de servicios que pueden crecer en oportunidades de desarrollo por la llegada de la empresa y que también, en muchos casos, dejan a la empresa extractiva a merced de la fijación monopólica de los precios de esos servicios.

¿Cómo las partes involucradas pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?

Para responder a esa pregunta, el presente diagnóstico se enfocó en estudiar las buenas prácticas de relacionamiento, que han conseguido tanto resultados medibles y comparables susceptibles de ser replicados, como nuevos emprendimientos productivos o avances significativos como por ejemplo en sectores de educación y salud como también impactos intangibles como la generación de confianza y procesos de colaboración. El enfoque busca evidenciar lo que sí funciona en una actividad que representa para algunos de los países ricos en recursos naturales más del 50% de sus ingresos fiscales². Las buenas prácticas que se reúnen en esta publicación dan pautas y orientaciones para consolidar y mejorar el relacionamiento entre los tres actores y muestran caminos innovadores, por los que el sector extractivo pueda aportar al desarrollo nacional y local en los países de América Latina y el Caribe.



**La actividad extractiva
representa para
algunos de los países
ricos en recursos
naturales más del 50%
de sus ingresos fiscales.**

Las buenas prácticas muestran que un buen relacionamiento genera confianza, logra acuerdos sobre temas en disputa, fortalece la economía local, genera prácticas ambientalmente sostenibles y mejora la calidad de vida de la población. Las propias buenas prácticas también indican que el relacionamiento de actores es el resultado de procesos donde se requiere una visión de mediano y largo alcance, adherida a la asignación e inversión de recursos humanos y financieros.

Para este diagnóstico se seleccionaron países de la región ricos en recursos naturales con diferentes perfiles y experiencia en temas extractivos: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana.

Para la elaboración de este estudio se validaron las experiencias encontradas, triangulando las mismas con representantes de industria/empresa, comunidades/sociedad civil y gobiernos, para asegurar su acuerdo respecto a la experiencia considerada como buena práctica según criterios anteriormente definidos³. Ulteriormente, se realizó una segunda validación mediante diferentes fuentes de información como material escrito, entrevistas, visitas de campo y mesas de trabajo.

A fin de ordenar el universo de experiencias se agruparon metodológicamente los hallazgos en cinco niveles de relacionamiento⁴.



Información:

Este nivel comprende la entrega de datos y referencias sobre el proyecto extractivo por parte de la empresa y del gobierno. También, incluye la facilitación de información por parte de las organizaciones de la sociedad civil presentes sobre el territorio y los portadores de interés.



Diálogo:

El diálogo se refiere al intercambio activo, continuo e informal que a partir de diversos grados de contacto entre los actores en torno al sector extractivo busca crear o fortalecer relaciones constructivas entre las partes. Estos procesos pueden ser eventuales o sostenidos en el tiempo, con un potencial de cambio constructivo de las relaciones.



Consulta pública⁵:

La consulta se considera un proceso formal, público y organizado en etapas que responde a obligaciones legales o regulatorias, así como principios de mejores prácticas universales, con el objetivo de recibir insumos respecto a un proyecto extractivo.



Colaboración

Son las acciones en las que las comunidades, la empresa extractiva o gobierno elabora productos de conocimiento o en las que la misma comunidad participa en iniciativas de formación para agregar capital humano capacitado que beneficie el crecimiento económico local.



Alianza

Son las acciones en las que se incluyen y financian comunidades para que sean estas las encargadas de implementar un proyecto o componente proyecto en torno al proyecto extractivo.

1.1. Los tres actores involucrados con las actividades extractivas

1.1.1. Empresas extractivas

El término industria extractiva se refiere a todas las empresas – públicas o privadas – que tienen como objetivo extraer recursos naturales⁶. También incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que suministran torres de perforación). A su vez, excluye a todas las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de ductos, buques, gasolineras, etc. En el contexto de esta publicación técnica, no se incluye a la minería artesanal y de pequeña escala.

Las empresas extractivas operan en las zonas de periferia del mundo, cotizan en los mercados de valores internacionales, emplean tecnologías de punta, e interactúan localmente con los gobiernos y comunidades. A nivel mundial, las empresas extractivas asociadas en su mayoría en gremios globales, vienen impulsando un conjunto de iniciativas para fortalecer su relacionamiento con las comunidades locales. La industria minera cuenta con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) que lidera el campo de la responsabilidad social en el sector⁷. Es una organización conformada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable. ICMM, fundada en 2001, reúne a 23 de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como 34 asociaciones regionales, nacionales y de *commodities*. Dichas empresas y asociaciones se comprometen a mejorar su rendimiento en el desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que se necesita a nivel social⁸.

Igualmente, la industria hidrocarburífera, cuenta con la "International Association of Oil & Gas Producers" fundada en 1999 como la voz de la industria líder global⁹. Los miembros de la asociación producen más de un tercio del petróleo y gas que consume el mundo. La asociación opera apoyando a los reguladores de la industria para mejorar la seguridad y el desempeño ambiental y social. Es también un espacio único donde los miembros de la asociación intercambian conocimientos y buenas prácticas para mejorar la salud, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social¹⁰.



Para las industrias, la presencia de los gobiernos con regulaciones claras y el relacionamiento efectivo con la población local son elementos claves para la inclusión de los interesados en el mejor éxito de las operaciones. La experiencia ha enseñado que las empresas buscan un proceso continuo de relacionamiento con las comunidades locales, en miras a construir confianza y tener un apoyo de la mayoría de la población para el avance del proyecto extractivo. Existe una tendencia creciente por la que las empresas consideran a la población como un aliado potencial para la implementación del proyecto, y con la cual es necesario construir confianza, desarrollar vías de comunicación efectiva y acordar normas de un relacionamiento que implique resultados e impactos positivos para todos los actores involucrados¹¹.

Gracias a los resultados del presente diagnóstico pudo constatarse que la mayoría de las empresas fomentan una interacción con las comunidades que va más allá de compartir informaciones o mantener diálogos informales y promueven y elaboran planes de relacionamiento que ayudan a minimizar el impacto negativo y aumentan las oportunidades económicas y sociales que se abren con el proyecto extractivo. En esta línea y fuera del nivel comunitario, la sociedad civil se ha constituido en una masa crítica que junto a empresas responsables han impulsado y adherido a principios voluntarios de derechos humanos y negocios¹², cumpliendo a una misma vez con el respeto y promoción de otros derechos sociales y económicos¹³.

Se ha relevado también que existe un interés en promover a las empresas locales mediante su vinculación a la industria extractiva como proveedores de bienes y servicios. De esta manera se fomenta el fortalecimiento de la economía local, con el impulso del sector extractivo, constituyéndose en un interés compartido con el gobierno¹⁴.



En una misma línea, el diagnóstico ha arrojado evidencia, que las industrias, gestionan el relacionamiento con las comunidades y asignan recursos humanos y técnicos¹⁵. Por otro lado, las empresas que se dedican a actividades de exploración en la primera fase del proyecto extractivo suelen no tener los recursos económicos para desarrollar procesos de colaboración y alianzas por requerir de una planificación e inversión de recursos humanos y financieros más importantes, por lo que las acciones de información y diálogos iniciales son decisivas. En otro orden, algunos proyectos en fase de explotación no cuentan con recursos humanos y financieros preasignados para un relacionamiento empresa-comunidad eficiente. Algunas empresas al no contar con una planificación para su relacionamiento pueden fallar en comunicar las oportunidades y los límites de su accionar¹⁶.

Durante la implementación del proyecto, el gobierno –nacional y local- y la empresa se encuentran en una situación de colaboración necesaria y tienen roles complementarios en el relacionamiento con la comunidad. No obstante, no siempre los roles respectivos están claros y no en todos los casos existen las capacidades necesarias para cumplir con dichos roles¹⁷.

A lo largo del diagnóstico se ha comprobado que el relacionamiento en el sector extractivo se ha visto impulsado por avances importantes en el diseño y la implementación de principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el ICCM, las empresas han mejorado sus prácticas en aspectos como transparencia, derechos humanos y ambiente y buscan la forma de contribuir a un desarrollo sostenible a nivel país en los territorios donde operan¹⁸. Muchas empresas extractivas incluyen en su política de RSE programas de promoción de capacidades productivas, como también programas de salud, mejoramiento de infraestructura local y de educación formal¹⁹.

1.1.2. Gobierno

Los gobiernos nacionales de la región²⁰, sin distinción en cuanto a su orientación partidaria, han implementado políticas para la captación de inversiones extranjeras directas para proyectos que incluyen a las industrias extractivas²¹. Los altos precios de las materias primas han aumentado los ingresos fiscales de los países en América Latina y el Caribe y han incrementado la inversión y la actividad económica. Algunos gobiernos en la región ahorraron una porción de los ingresos y otros usaron dichas ganancias para incrementar el gasto fiscal. Es por eso que la reducción de los precios a finales de 2008 y con más fuerza entre 2012 y 2013 ha impactado de manera diferente en el desarrollo de los países²².

El auge de los precios de las materias primas ha tenido sus impactos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en la región²³. El sector extractivo también ha tenido efectos positivos en el empleo; no obstante, en comparación con el total de la Población Económicamente Activa (PEA) los aportes son relativamente modestos. En los países seleccionados para el diagnóstico, el porcentaje del empleo del sector extractivo frente a la PEA es de alrededor el 1% con excepción de Chile donde supera el 2%²⁴.

Los gobiernos buscan adaptar su marco institucional y legal para seguir captando ingresos a través del sector extractivo. La caída de los precios de los recursos mineros y petroleros a partir de 2013 ha llevado a los gobiernos nacionales a crear marcos normativos atractivos que aseguren la estabilidad económica y jurídica de las inversiones en el sector, lo que frecuentemente plantea dilemas para el equilibrio en su rol de regulador de las actividades extractivas y garante de los derechos humanos y recursos naturales²⁵.



Los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, han fortalecido sus sistemas democráticos e institucionales, han gestionado eficientemente la macroeconomía y han implementado políticas sociales incluyentes con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Aun así, el fin del boom de las materias primas ha develado problemas estructurales, en varios países de la región, referidos a asuntos fiscales e institucionales, así como a otros de tipo social, político y económico²⁶.

Los gobiernos nacionales crean el marco normativo e institucional bajo el cual se desarrolla el relacionamiento entre empresa y población local. Especial atención merece la consulta a Pueblos Indígenas considerada en marcos legales mediante la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo²⁷. Perú es el único país del estudio en el cual la consulta está reglamentada por una ley, mientras que en Chile, Colombia y México existen normas legales a nivel de decretos para este fin²⁸.

En otro orden y respecto al nivel de acceso a información también se encontró que está fuertemente regulado. En todos los países existen normas legales que facilitan el acceso a información de manera general, y en las leyes ambientales se especifica el acceso a informaciones sobre el estado de la naturaleza. La elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, incorporan en muchos casos derechos importantes para la población local como el acceso a información, a la consulta y otras formas de relacionamiento de actores²⁹.

Respecto al marco institucional del sector extractivo el gobierno nacional está conformado por diferentes ministerios que no necesariamente comparten las mismas prioridades, aunque su funcionamiento se rige por unos lineamientos generales de política pública. En todos los países del diagnóstico son los ministerios de minería y energía quienes diseñan las políticas para el sector extractivo y controlan el cumplimiento de los mismos³⁰. Por otra parte, existen los ministerios que velan por el ambiente y son los encargados de la aprobación de la licencia ambiental. Según cada país, intervienen otros ministerios en el relacionamiento con la población local. Por ejemplo, en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social quien a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena coordina la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las comunidades indígenas³¹. En cambio, el Ministerio de Interior de Colombia lidera la interlocución con las comunidades locales. En Perú, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, aunque ha perdido su rol en los últimos años³².

Aparte del poder ejecutivo, en los países que fueron analizados en el diagnóstico existen otros actores estatales a nivel nacional que intervienen en el relacionamiento entre empresa, comunidad y Estado en el sector extractivo. La Defensoría de Pueblo actúa como garante de los Derechos Humanos y en algunos países como Perú también es un promotor importante de diálogos a nivel local. En México, es la empresa estatal PEMEX quien diseña las políticas de relacionamiento en el sector petrolero. La Corte Constitucional de Colombia, frente a la ausencia de una ley que regula la consulta previa,

ha contribuido a darle cuerpo a esta norma internacional³³. En resumen, intervienen una serie de actores nacionales estatales en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Si bien este accionar cubre posibles vacíos regulatorios, esto también aumenta el riesgo de una falta de coordinación entre las diferentes instancias por un lado y entre estas y otros actores como empresas y comunidades por el otro³⁴.

El diagnóstico también encontró que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos³⁵. Mientras que las competencias sobre el sector extractivo son centralizadas en el gobierno nacional, los gobiernos locales juegan un rol fundamental como representantes e interlocutores de la población local.

Las posibilidades de relacionamiento con los gobiernos locales dependen de sus perspectivas y políticas frente al sector extractivo. El diagnóstico muestra que, por ejemplo, en Argentina existen gobiernos provinciales con normativas favorables para el desarrollo del sector extractivo responsable mientras que otros siete gobiernos provinciales del mismo país han dictado leyes

que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos³⁶. En Colombia, hasta mediados de 2017 los Concejos Municipales de cinco municipios colombianos han aprobado consultas populares en torno a proyectos extractivos, y en todas las consultas la población ha votado en contra de estos proyectos³⁷.

Los gobiernos locales no solamente son interlocutores importantes en procesos de diálogo y colaboración, sino también juegan un rol central para que los recursos provenientes del sector extractivo sean invertidos de manera efectiva en obras que benefician a las comunidades aledañas al proyecto. Dependiendo del país, hasta 50% de los ingresos fiscales son distribuidos a los gobiernos locales, siendo Chile el país en el cual más se centralizan los ingresos y Colombia y Perú los países con mayor proporción de recursos descentralizados³⁸. Una condición importante para que los recursos aporten al

El diagnóstico evidencia que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos.



desarrollo local es la capacidad de los gobiernos subnacionales para coordinar la inversión y efectuarla de manera eficiente. Los recursos constituyen una oportunidad para el desarrollo y una transformación de las dinámicas y economías locales, siempre y cuando en los territorios estén las capacidades instaladas para poder aprovechar esta oportunidad³⁹.

El diagnóstico muestra que la coordinación entre gobiernos de diferentes niveles, industrias extractivas y sociedad civil aumenta las oportunidades para que los recursos provenientes del sector extractivo contribuyan a un desarrollo local⁴⁰. Por ejemplo, en Argentina los tres sectores conformaron una la Agencia de Desarrollo a nivel local que contribuyó a que la economía local basada en la producción de lana, que atravesaba una fuerte crisis, se recuperara y generara alternativas productivas. La empresa minera que operaba en la zona impulsó la creación de la Agencia, participó activamente en ella, y financió algunos proyectos priorizados por la misma. Otro de los ejemplos es la Mesa de Buenos Vecinos que reúne a los tres actores en un municipio en Chile y orienta la inversión del sector extractivo hacia nuevas opciones económicas de desarrollo⁴¹.

Para los gobiernos locales, es de suma importancia que la inversión de los recursos se oriente a un plan de desarrollo del territorio y a un proceso de ordenamiento territorial, posibilitando de esta manera que los recursos sean destinados a las obras de mayor relevancia para los actores locales y respetando la planificación del gobierno local en lo que se refiere a sus posibilidades ambientales, económicas y sociales. Según esta perspectiva, el sector extractivo debería ser “un invitado en este proceso”⁴², que se suma y agrega valor a ese plan de desarrollo consensuado entre los grupos poblacionales y basado en la realidad del territorio.

En todos los niveles de gobierno, sobre todo en países con poca tradición extractiva, existe demanda para más capacitación y formación en temas relacionados con el sector. A nivel de los gobiernos locales se requiere la contratación de más técnicos especializados en estos temas. Un mayor conocimiento del sector extractivo facilitará una negociación más equitativa entre gobierno local y empresa extractiva y ayudará a consolidar y mejorar las prácticas de relacionamiento, lo que a su vez resultará en obtener más beneficios para la población local⁴³.





La diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos. Generalmente, las universidades gozan de legitimidad ya que son consideradas como instancias con alto grado de saber técnico por ende guiados por este y percibidos en un rol neutral. Un ejemplo es el Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (*Prodiálogo*) del Centro de Educación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades con más prestigio en México que organiza foros y talleres multisectoriales para promover el diálogo en torno al sector extractivo⁴⁴.

1.1.3. Sociedad Civil

La sociedad civil está conformada por una amplia gama de organizaciones y grupos humanos sin fines de lucro que representan sectores e intereses sociales, culturales y étnicos. Su radio de acción puede estar tanto a nivel rural como urbano, local, regional o internacional. A nivel nacional, se encuentran fundaciones, grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), academia, movimientos sociales, confederaciones de pueblos indígenas, iglesias, o fundaciones de las empresas extractivas que financian proyectos de desarrollo, y sindicatos. A nivel local, actúan comunidades, organizaciones comunitarias, asociaciones, grupos indígenas y grupos afrodescendientes. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ser formales (debidamente registradas en sus respectivos países) o informales (agrupaciones no registradas oficialmente).

La heterogeneidad de la sociedad civil se refleja también en los diferentes roles que asumen sus organizaciones en el relacionamiento con los sectores privado y público en torno al sector extractivo. Los diagnósticos de todos los países seleccionados reportan una polarización de la sociedad entre opositores y partidarios en torno al sector extractivo. Pero también reportan una diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo que difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

Por un lado, en los países analizados existen OSC que crean y fortalecen espacios de relacionamiento entre empresas, Estado y las mismas comunidades y facilitan la comunicación entre los tres actores a nivel nacional y local. Por otro lado, existen OSC que desde una perspectiva crítica buscan incidir en las políticas públicas y generan información para contribuir a que las actividades extractivas cumplan con los derechos de las comunidades y estándares ambientales y sociales. En tercer lugar, se encuentra una serie de OSC que se oponen a la actividad extractiva incondicionalmente y fomentan y acompañan acciones de resistencia de la población local.

El diagnóstico relevó que, en Argentina, Chile y México, las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en



Las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos.

Otros actores esenciales, son las comunidades aledañas a los proyectos extractivos como actores con rol de decisión. Las empresas requieren la licencia social lo que implica un cierto grado de consentimiento de las comunidades para poder desarrollar su proyecto.

El presente diagnóstico recoge casos en los que las comunidades aledañas a proyectos extractivos los consideran como oportunidades de desarrollo y están dispuestas a participar en un relacionamiento con la empresa para lograr resultados concretos y tangibles. En estos procesos, las comunidades se han comprometido en un respeto a sus propias visiones de desarrollo y se relacionan con las empresas sobre la base del cumplimiento de esa visión. También, se comprometen con el gobierno nacional para contar con su presencia institucional en el territorio y la garantía del cumplimiento de sus derechos.

El diagnóstico muestra la evolución del relacionamiento respecto a la inversión de recursos en territorios ancestrales. Muchas de las buenas prácticas reportan el fortalecimiento de asambleas comunitarias y otros mecanismos de toma de decisión tradicionales mediante la presencia de la empresa en estos espacios para proporcionar la información y buscar el consentimiento de las organizaciones indígenas. En Colombia, el enfoque intercultural del relacionamiento de la empresa Cerrejón con un resguardo del pueblo Wayuú incluía el respeto a su cosmovisión, el uso del idioma Wayuú y la integración de autoridades indígenas tradicionales en la comisión de negociación. De esta manera, se respondió a las demandas de los pueblos indígenas por participación y autodeterminación, entendida como derecho a poseer, controlar, manejar y desarrollar el territorio⁴⁵.

1.2. Los costos de los conflictos

Un relacionamiento deficiente donde las quejas y las preocupaciones de la comunidad se acumulan sin resolución durante largos periodos de tiempo causa e intensifica conflictos que a su vez generan costos para la empresa, Estado y comunidades.

Un estudio que analiza los costos para las comunidades de seis proyectos de inversión de gran escala (dos de agroindustria, dos de energía, y dos de minería) encuentra los siguientes tipos de costos que generan los conflictos a nivel comunitario⁴⁶.

1. Financiamiento del movimiento opositor (honorarios de dirigentes, campañas mediáticas y publicitarias contra el proyecto, redes sociales).
2. Financiamiento de asesorías legales que permitan judicializar los proyectos.
3. Financiamiento de estudios técnicos para contrastar informes de la empresa.
4. Financiamiento de traslados para las movilizaciones, reuniones informativas, visitas a autoridades políticas.
5. Depreciación de viviendas y actividades económicas por habitar próximos al proyecto y asumir impactos ambientales.
6. Fractura del tejido social, en tanto los conflictos generan efectos psicológicos y emocionales, desconfianza, competitividad y descalificaciones entre los propios habitantes.

Para el Estado, el mismo estudio indica los gastos relacionados con el encarecimiento del proceso de licenciamiento ambiental y con eventuales juicios y peritajes. Adicionalmente, el Estado tiene costos de personal para enfrentar los conflictos, para policía y militares y debe asumir también precios políticos. El país en general puede perder productividad e ingresos, competitividad e inversiones extranjeras⁴⁷.





El cálculo de los precios de los conflictos para las empresas resulta de la diferencia entre los gastos para la prevención y el abordaje de los conflictos (relacionados con la seguridad, contratación de personal especializado, capacitación del personal, entre otros) y los costos por los resultados del conflicto (modificaciones del proyecto, daños materiales, pérdida de productividad, reputación, entre otros)⁴⁸.

Mención aparte merecen los costos derivados de la mala reputación generada por un relacionamiento deficiente que dificulta la búsqueda de nuevo capital y los auspicios de inicio de una operación en un nuevo país⁴⁹.

Según una consulta realizada por el Fraser Institute, 36% de las empresas mineras encuestadas afirmó que la oposición pública a la minería ha afectado negativamente el proceso de autorización por parte del gobierno, resultando en demoras o rechazos de los permisos. La mayoría expresó que los argumentos de la oposición al sector extractivo fueron ambientales o de derechos de pueblos ancestrales⁵⁰. Por otro lado el BID, señala que de un total de 200 proyectos de infraestructura que se enfrentaron con algún tipo de conflicto, 36 fueron suspendidos debido a los conflictos, 162 enfrentaron retrasos y 116 sobrecostos⁵¹.



Según un estudio de la organización BDO International, la mayor preocupación para los ejecutivos internacionales mineros son los retrasos existentes y potenciales de los proyectos mineros. En una encuesta, ejecutivos financieros de alto nivel de Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia y Canadá expresaron sus inquietudes acerca del acceso a capital y créditos durante 2013, principalmente por las interrupciones observadas en diversos proyectos mineros⁵².

En 2008, un análisis de 190 proyectos de las empresas más importantes del sector petrolero arrojó como resultado que el tiempo hasta el inicio de la operación casi se había duplicado respecto de la década anterior. La razón fue el incremento de los costos. Un análisis más detallado mostró que los riesgos no técnicos constituían 50% del total de los riesgos y que entre este 50%, el riesgo más significativo fue el relacionamiento con otros actores sociales⁵³. Otro estudio de 19 empresas mineras de extracción de oro encontró que dos terceras partes de su valoración en el mercado fueron resultados de sus prácticas de relacionamiento con actores clave y solamente una tercera parte fue en función del valor del oro en el terreno⁵⁴.

De lo anterior se desprende la perspectiva de riesgos, donde los costos de los conflictos también señalan la necesidad de una planificación oportuna en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Este relacionamiento debe atender y equilibrar la diversidad de necesidades e intereses de todos los actores y así permitir un clima mejorado de inversión y el logro de beneficios comunes para todas las partes involucradas.

2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL



A continuación, se detallan los hallazgos de las buenas prácticas de relacionamiento identificadas y validadas en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. El análisis de cada país se inicia con un cuadro resumen del contexto, buenas prácticas, mapeo de actores y marco legal. Posteriormente, se describen las buenas prácticas con más detalles, las partes involucradas y el marco legal en el cual se insertan dichas buenas prácticas. Al final del documento, se presentan las conclusiones y recomendaciones principales.





2.1. ARGENTINA

Roberto Sarudiansky, Fundación EMPREMIN: rsarudi@gmail.com

María Gabriela Strazzolini, Fundación EMPREMIN: gstrazzolini@hotmail.com

2.1.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en 2016, el sector extractivo aportó el 3,8% al PIB⁵⁵. Los minerales metálicos más importantes fueron el oro y el cobre. El complejo oro y cobre en su conjunto contribuyó con el 4,6% a las exportaciones totales del país, mientras que el complejo petrolero y gasífero participó con el 3,3%⁵⁶. La mayor parte de la recaudación impositiva se realizó a través de impuestos nacionales (ganancias, créditos y débitos bancarios, valor agregado). Por el sistema de coparticipación federal, en 2017, la Nación retuvo el 37,89% del total de los impuestos nacionales coparticipables, el 3,75% de la Ciudad de Buenos Aires, el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias y los estados provinciales recibieron el 57,36% aproximadamente⁵⁷. Para 2016, el empleo de la industria extractiva alcanzó los 80.867 puestos de trabajo⁵⁸. Eso corresponde al 0,5% de la Población Económicamente Activa de Argentina en 2016⁵⁹.

Social: Argentina se caracteriza por contar con una sociedad civil organizada, cada vez más informada y con conciencia ambiental. Existe el movimiento “Vecinos auto convocados por el No a la mina”⁶⁰ que se opone a la actividad minera y cuenta con presencia territorial e incidencia en la opinión pública. La Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, conformada por diferentes sectores, es un espacio de referencia para llevar adelante discusiones sobre actividades extractivas⁶¹. El Atlas de Justicia Ambiental muestra 26 conflictos en Argentina de los cuales 23 corresponden al sector minero⁶².

Buenas prácticas



Vinculación con la comunidad, identificada en cuencas sociales, a través de la asociación de empresas (1994 – 2017, Información/Diálogo/Colaboración). Las empresas mineras en una misma zona de influencia coordinan la entrega de información a las comunidades y consensuan visiones y ejes de trabajo en los aspectos sociales con la mesa intersectorial como interlocutor en la cual confluyen los intereses de la sociedad civil y el gobierno local. El Estado provincial tiene un rol de coordinador y fiscalizador.

Firma de convenios de servidumbre en el sector minero (2012 – 2017, Diálogo/Colaboración/Alianza). En asambleas comunitarias, la empresa presentó información detallada y acordó convenios que han permitido la explotación del yacimiento, y prevén pagos por “servidumbre”, así como también capacitaciones, temas de infraestructura básica, salud y educación, entre otros. La empresa ha desarrollado protocolos para la comunicación e intercambios que han permitido un diálogo permanente, directo y fluido.

Conformación de Agencia de Desarrollo (2006 – 2017, Colaboración). La Agencia está conformada por representantes del sector público, privado y académico que como primer paso elaboraron el Plan Participativo de Desarrollo Sustentable a cuya ejecución aporta financieramente la empresa minera.

Mapa de Actores



Programa abierto de fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas en una localidad (2005 - 2017, Alianza). Articula con actores públicos, sociedad civil, incluyendo representantes de la academia, un proceso de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, sean proveedores de la compañía o no, para profesionalizar su gestión, certificar sus procesos y desarrollar sus productos y servicios, mediante capacitaciones, acceso a crédito y asesoramiento tecnológico-industrial, comercial y financiero.

El sector privado se encuentra constituido por empresas mayormente de capitales extranjeros agrupados en cámaras empresariales como también las empresas proveedoras de servicios y productos. Una excepción es Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de capitales públicos complementados con privados con una larga historia de “bandera argentina”.

Desde el sector público, puede visualizarse a nivel nación el Ministerio de Energía y Minería como responsable del diseño de la política nacional minera y energética y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable como responsable de velar por el ambiente. A nivel provincial, con impacto nacional también, se encuentran estas áreas representadas por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), el Consejo Federal de Energía (CFE) y el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

En el marco de las industrias extractivas, puede observarse un sector de la sociedad civil organizada integrado por OSC con diferentes posiciones frente a la actividad extractiva, así como organizaciones de tipo técnicas y la academia con un rol muy importante y presencia en todas las provincias con actividad extractiva. En muchos estados provinciales hay comunidades de pueblos originarios con distintos niveles de organización y reconocimiento, si bien aún no hay una agrupación que los represente a nivel nacional.

Marco Legal y Regulatorio



En cuanto a la normativa relativa al relacionamiento con la comunidad, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) referente a los derechos de los pueblos indígenas, fue aprobado y ratificado en 2000. La Ley General de Ambiente (25.675) sancionada en 2002 determina la responsabilidad de la información, prevé un sistema nacional integrado de información ambiental (art. 16 - 18) y establece el derecho a la consulta (art. 19-21). La Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) es una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. Fue sancionada en 2016 y rige desde septiembre 2017. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha anunciado la incorporación de la iniciativa “Hacia una minería sustentable” (TSM por sus siglas en inglés).



2.1.2. Introducción

El carácter federal de la Argentina establecido en la Constitución de 1994 determina que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Ante esta realidad es determinante la relación entre los estados provinciales y el estado nacional para que pueda existir una política nacional de la industria minera e hidrocarburífera. En la actualidad la relación Nación – Provincia al igual que los niveles de involucramiento entre sociedad, estado y empresa en cada una de las provincias se da de forma muy dispar desde la perspectiva institucional e inclusive regulatoria. Esta disparidad llega incluso al hecho de que convivan provincias que tienen legislaciones que permiten la minería a cielo abierto con otras provincias que la prohíben.

Asimismo, el sector público a nivel de gobierno provincial y municipal muestra problemáticas que se presentan también en distinto grado dependiendo de la jurisdicción en las áreas de capacidad institucional, planificación a corto, mediano y largo plazo, transparencia en la información sobre la gestión pública de los recursos, disponibilidad de recursos económicos y humanos, capacidades instaladas del personal, credibilidad en su rol de contralor, participación en el triángulo empresa – sociedad – estado⁶³.

En Argentina, desde principio de los años 2000 se han generado conflictos socioambientales vinculados principalmente con las actividades de prospección y exploración minera metalífera, en especial por el uso del agua y su posible contaminación. En relación con estos conflictos, siete provincias (Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego⁶⁴) han dictado leyes que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos. Existen por lo menos dos proyectos mineros en exploración que no han podido avanzar hacia su puesta en marcha por la oposición de organizaciones locales a la minería a cielo abierto con uso de sustancias peligrosas:

Famatina en la provincia de La Rioja y Esquel en la provincia de Chubut, conflicto que terminó en la sanción de una ley provincial que prohíbe este tipo de minería⁶⁵. En el ámbito del petróleo y el gas, han surgido en los últimos años movimientos opositores a la utilización del *fracking* en las operaciones de extracción. Esto se observa principalmente en la provincia de Neuquén, en el yacimiento de Vaca Muerta⁶⁶.

Durante la investigación de campo para el diagnóstico, se constató una sociedad civil dividida detrás de dos posiciones en cuanto a las industrias extractivas. Un segmento de la sociedad que está conformado mayoritariamente por organizaciones ambientalistas y habitantes de las poblaciones cercanas que perciben que los proyectos extractivos no mejoran su situación de vida y que reciben las consecuencias de una fuerte inmigración con el consiguiente colapso de la infraestructura, la aparición de nuevas problemáticas sociales además del temor a los impactos ambientales negativos que la actividad pueda generar; y otro segmento, que pone énfasis en la industria extractiva como generadora o motor de crecimiento con un fuerte efecto multiplicador de la economía en zonas con bajas o nulas posibilidades de desarrollar alternativas productivas.

2.1.3. Buenas prácticas

En Argentina pueden encontrarse diferentes experiencias de relacionamiento entre gobierno, del sector productivo de las industrias extractivas y las comunidades. Estas se desarrollan, mayormente, en un ámbito local, es decir, en localidades que se encuentran impactadas por los emprendimientos mineros o de hidrocarburos. Sin embargo, existen algunos ejemplos donde su aplicación fue nacional como el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) con su programa de educación energética en el nivel de información.

Entre los actores involucrados se presentan las empresas, el gobierno a través de sus diferentes organismos o instituciones provinciales y municipales y la sociedad civil, incluyendo poblaciones urbanas y rurales, así como minorías (pueblos originarios como los kollas, los huarpes, los mapuches) o grupos en situación de vulnerabilidad (como por ejemplo los jóvenes en situación de riesgo).

Las acciones abarcan todos los niveles de relacionamiento considerados en este estudio (información, diálogo, colaboración y alianza) a excepción de la consulta pública. No se han dado aún casos de consultas públicas ni dentro ni fuera del marco de la normativa de la OIT en proyectos de minería metalífera como parte del proceso de vinculación del sector privado con la comunidad. Sí se han llevado a cabo otro tipo de instancias de consulta como las audiencias públicas. En los niveles de información, las empresas suelen ser el principal impulsor de las acciones y actividades, mientras que, en los casos de diálogo y colaboración, el sector privado trabaja de forma conjunta con el resto de los actores, y en el caso de las alianzas se convierte en la fuente de financiamiento de proyectos llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil principalmente.

En Argentina, se han identificado y validado las siguientes buenas prácticas⁶⁷:

2.1.3.1. Cuencas Sociales como área de intervención

2.1.3.2. Firma de Acuerdos de Servidumbre

2.1.3.3. Conformación Agencia de Desarrollo

2.1.3.4. Programa Pymes

2.1.3.1. Cuencas Sociales como área de intervención

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Información



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

1994 – 2017⁶⁸



ACTORES PRINCIPALES

Mansfield Argentina, Cámara de Minería de Salta. Secretaría de Minas de la provincia de Salta, Municipalidad de Tolar Grande. Comunidad Kolla.



DESCRIPCIÓN

Hallazgo de oro: en 2000, la empresa Mansfield Argentina descubrió oro en el proyecto Lindero, próximo a la localidad Tolar Grande. Actualmente, el proyecto está en fase de construcción.

Alianzas con las estructuras mineras locales: la empresa Mansfield se insertó en la dinámica de la Cámara de Minería de Salta que, a la vez, desarrolló un proceso coordinado entre sus asociados bajo la identificación de “Cuencas Sociales” reuniendo localidades que fueran impactadas por varias empresas mineras de forma simultánea (aún en diferentes etapas del proceso).

La Cámara de Minería agrupa diferentes empresas para articular el trabajo y el relacionamiento con la comunidad. Las empresas se reúnen y definen consensuadamente los pasos y acciones a seguir y cada una determina cuál será su aporte (generalmente en relación al estado y dimensión de su proyecto o emprendimiento).

Mansfield Argentina comparte la “Cuenca Social” con Corriente Argentina S.A. (cobre, etapa de estudio económico), Litio Minera Argentina (litio, etapa de estudio económico), Regulus Resources (cobre, etapa de estudio económico), Posco (litio), entre otros. Mansfield es la única empresa que en este momento se encuentra iniciando la etapa de construcción para la posterior explotación.

Coordinación: las empresas coordinan la entrega de la información mediante charlas. Estas charlas son siempre fiscalizadas por el gobierno provincial quien redacta un acta en la que incluye necesidades, preocupaciones e intereses de la comunidad y los compromisos asumidos por las empresas.

Fiscalización: la Secretaría de Minería de la Provincia cumple un rol de coordinador y fiscalizador de las “Cuencas Sociales”. Es quien convoca a las empresas y a la comunidad y redacta el acta y luego la circula entre las partes involucradas.



Mesa Multisectorial: asimismo, como parte del proceso, en Tolar Grande, se ha constituido una mesa multisectorial (comunidades, intendencia, policía, escuela, iglesia, entre otros) que recibe y solicita información sobre cuestiones que preocupan o interesan a la comunidad. Esta mesa representa a la parte interesada por la comunidad y es quien asiste a las convocatorias.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

Anteriormente, la presencia de varias empresas en la provincia de Salta contribuyó a la difusión de información confusa, contradictoria y deficiente a las comunidades y al desarrollo de acciones individuales. Con la introducción del concepto de Cuencas Sociales, las comunidades cuentan con un espacio para plantear sus inquietudes y obtener una respuesta única y consensuada desde el sector empresarial en un proceso fiscalizado por el Estado. En su primera fase, se focaliza mayormente en el intercambio de información sobre los proyectos.⁶⁹



INNOVACIÓN⁷⁰

En un sector altamente competitivo, generalmente las empresas trabajan de manera individual. En esta Buena práctica, se cambió esta forma de trabajo. Lo innovador es el "trabajo en equipo" de las empresas entre sí y con las comunidades y el Estado provincial y municipal de forma tal que los mecanismos de información (demanda y oferta) se dan de forma fluida y enriquecedora desde todos los sectores involucrados, evitando especulaciones y oportunismos.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD⁷¹

- Participación institucionalizada: La práctica integra mecanismos unilaterales y bilaterales para informar y recibir información a través de las reuniones mantenidas por la empresa con la mesa multisectorial.
- Pertinencia metodológica: La agrupación de empresas resultó altamente positivo fijando prioridades y dando continuidad a las políticas implementadas (información oportuna y de calidad).
- Sostenibilidad institucional: El proceso de relacionamiento se desarrolla a través de canales de comunicación institucionalizados. La Secretaría de Minería de la Provincia cuenta con personal destinado a la temática de relacionamiento con la comunidad.



ENFOQUES⁷²

Enfoque de diversidad: la empresa se vincula desde una perspectiva de interculturalidad con comunidades indígenas y campesinas próximas al proyecto.

Enfoque de transformación de conflictos: quienes lideran el proyecto poseen una visión del conflicto como una instancia natural en las relaciones humanas y como motor de cambio.



LECCIONES APRENDIDAS

El trabajo consensuado entre pares se enriquece a través del aporte de experiencias y conocimiento de todos. La licencia social, entendida como la aprobación por parte de la comunidad de las actividades desarrolladas por la empresa, implica un trabajo constante con la sociedad civil porque siempre pueden surgir nuevas dudas o inquietudes. Es así como dentro de la Cámara de la provincia de Salta cada empresa realiza su aporte tanto en recursos económicos como en conocimientos y experticia de acuerdo a sus capacidades para llevar adelante su relacionamiento con la comunidad.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada a través de una visita de campo en la cual se mantuvieron entrevistas con representantes del gobierno municipal, el concejo deliberante (poder legislativo), la escuela y la comunidad kolla. También, se mantuvieron varias entrevistas con el CEO de la compañía.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.cmsalta.com.ar/>
www.cmsalta.com.ar

Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration – an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario



2.1.3.2. Firma de acuerdos de servidumbre

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2012 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Minera Exar. Comunidades originarias del grupo de Atacama.



DESCRIPCIÓN

Extracción de litio y pueblos originarios: el proyecto Cauchari-Olaroz para la explotación de litio está situado en tierras de pueblos originarios que pertenecen a las comunidades de Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar, Olaroz Chico y Susques, ubicados en el Departamento de Susques, Provincia de Jujuy.

Permiso de uso de tierras: estas comunidades en particular tienen que otorgar de forma explícita el permiso para el desarrollo de la actividad en sus tierras ya que son las dueñas de las mismas. Sin el mismo, quedaría la instancia judicial para resolver el conflicto.

Primer acercamiento: en 2008, Minera Exar inició sus actividades exploratorias y tomó contacto con los pobladores cercanos al yacimiento. En este contexto, participó de dos asambleas comunitarias en las que explicó el proyecto y solicitó la firma de un acuerdo para iniciar la exploración.

Presentación de informes: su participación en estas asambleas fue incrementándose de forma paulatina a medida que se avanzaba en el proyecto. Se presentaron más de tres informes de impacto ambiental, más un informe de línea de base antes de presentar el Informe de Impacto Ambiental de Explotación.

Firma de convenios: en 2011 y 2012, luego de varios intercambios de ideas, posiciones e intereses, la empresa y las comunidades indígenas llegaron a acuerdos que se tradujeron en la firma de convenios que permitían:

- La explotación del yacimiento, lo que se tradujo en pagos por “servidumbre”.
- Incluían como aporte adicional capacitaciones, temas de infraestructura básica, salud y educación, soporte a instituciones municipales, deportivas, religiosas, es decir, una suerte de “plan de desarrollo” concertados con la comunidad con base en las necesidades que ella misma expresó.
- Las comunidades de forma individual tenían a un abogado (elegido por ellos) y pagado por la empresa Exar. Los acuerdos se certificaron frente a escribano público y se adjuntaron a las actuaciones legales en minería, caso inédito ya que no es obligatorio hacerlo

Nuevos compromisos: se llevaron a cabo estas acciones y se renovaron los convenios con nuevos compromisos. Los acuerdos de servidumbre se actualizan cada 5 años. La



firma de seis acuerdos respondió a que estaban involucradas seis comunidades del Pueblo de Atacama en el área de influencia del proyecto. Se trató de un proceso donde las comunidades recibieron asesoramiento de profesionales independientes.

Protocolos para la comunicación e intercambios:

“se institucionalizaron las vías de comunicación entre empresa y comunidad a través de patrones y procesos que generaron previsibilidad. La empresa participa mensualmente de la asamblea comunitaria y cuando es convocada por un tema puntual”⁷³.

Institucionalización del relacionamiento:

la empresa cuenta desde su inicio con un área de relaciones comunitarias con contacto permanente con la comunidad y la responsabilidad de ejecutar programas para atender necesidades de la misma: empleo, capacitación y ayuda económica para fiestas, reparaciones de edificios comunitarios, escuelas, entre otras.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

El resultado es el alcance y firma de acuerdos que, por un lado, permitieron a la empresa llevar adelante sus actividades con la aprobación de la comunidad y, por el otro, la comunidad obtuvo beneficios a través de la implementación de los programas mencionados más arriba para su desarrollo local a partir de un proceso participativo.



INNOVACIÓN

El caso de Exar fue novedoso y conocido en Argentina porque involucró a una compañía que trabajó con la comunidad desde el inicio de la etapa de exploración en una vinculación con comunidades indígenas que fue más allá de un intercambio de información buscando un compromiso con el desarrollo de la misma, a través de acuerdos alcanzados por medio del diálogo y consenso, supliendo voluntariamente de alguna forma a la consulta que no está reglamentada en Argentina.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: existen espacios de diálogo de los portadores de interés en los que éstos plantean sus necesidades o inquietudes. Estos espacios se dan en las asambleas comunitarias mensuales en las que está presente la empresa⁷⁴.
- Pertinencia metodológica: la comunidad participa activamente en el diseño e implementación de los “planes de desarrollo” que son de su interés.
- Sostenibilidad institucional: se alcanzan acuerdos formales como consecuencia de los procesos de diálogo que se traducen en el marco de los acuerdos de servidumbre que se renuevan cada 5 años.



ENFOQUES

Enfoque de diversidad: esta práctica exigió a la empresa tener un enfoque intercultural ya que la práctica involucra población perteneciente a los pueblos originarios.

Enfoque de transformación de conflictos: los protagonistas en la negociación de los acuerdos tuvieron una mirada del conflicto como natural y constructivo al avanzar en el acercamiento de posiciones.



LECCIONES APRENDIDAS

La práctica ha contribuido a construir ciertas afirmaciones:

- Flexibilidad para recibir aportes y moldear propuestas en el intercambio con otros actores.
- Selección y entrenamiento del personal de la empresa que liderará los intercambios con las comunidades.
- Planificación de la política de vinculación con la comunidad y el plan de responsabilidad empresarial desde el inicio del proyecto.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada a través de entrevistas a profesionales independientes que participaron en la negociación de los acuerdos, así como representantes de la comunidad indígena del Grupo de Atacama y el área de responsabilidad social de la empresa. La buena práctica fue mencionada en la Mesa de Trabajo Multisectorial, realizada el 28 de junio del 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration – an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario.

<https://www.mineraexar.com.ar/comunidades>

2.1.3.3. Conformación de Agencia de Desarrollo

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Colaboración



DURACIÓN

2006 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Cerro Vanguardia S.A., Cámara de Comercio. Representantes del gobierno provincial de la Provincia de Santa Cruz, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Puerto San Julián (con representantes de la mayoría y minoría parlamentaria). Sociedad Rural de Puerto San Julián y de la Universidad de la Patagonia Austral.



DESCRIPCIÓN

Extracción de oro y plata: en 1997 comenzó la etapa de construcción del Proyecto Cerro Vanguardia (oro y plata), en la Provincia de Santa Cruz. La localidad de influencia primaria, es decir, el territorio donde se manifestarán los impactos por su proximidad al proyecto es Puerto San Julián que se ubica a unos 150 km del yacimiento.

Contexto: la principal actividad productiva de la localidad y sus alrededores se basaba en la cría de ganado ovino que atravesaba por un proceso de desertificación del campo, así como una baja en los precios internacionales de la lana. A esta realidad se sumó la erupción del volcán Hudson, en 1991, que cubrió de cenizas toda la meseta central de la provincia. En esta coyuntura se comenzó a desarrollar la actividad minera que siguió una etapa de crecimiento que continúa hasta hoy.

Creación de la Agencia de Desarrollo: en 2004, Cerro Vanguardia propuso la creación, gestión y puesta en marcha de una Agencia de Desarrollo para potenciar las fuentes de desarrollo socio-económico de la comunidad de Puerto San Julián. La Agencia está compuesta por representantes de los tres sectores (gobierno en distintos niveles, provincial y municipal, empresa y sociedad civil), lo cual le otorga legitimidad.

Acta de Acuerdo: en 2004, se firmó un Acta de Acuerdo para la creación de la Agencia de Desarrollo con un consejo directivo integrado por sector público, sector privado y sociedad civil para lo cual la empresa aporta recursos técnicos y profesionales.

Primeros consensos: entre 2004 y 2006, se dio una etapa de construcción de consensos y se atravesó un período de discusiones y acuerdos para la conformación de la Agencia, consensuando misión y visión de la misma, así como su constitución legal y su proceso administrativo.

Plan de Desarrollo: el objetivo específico inmediato de la Agencia fue la elaboración del Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de Puerto San Julián. Los foros y talleres sectoriales comenzaron en diciembre de 2006 y el Plan fue presentado a las autoridades y a la sociedad civil en junio de 2008, comprendiendo una amplia diversidad de áreas con una proyección 2007- 2020.

Ejecución de proyectos:

En 2010 se firmó un acuerdo marco entre la Agencia de Desarrollo, el Municipio y la empresa Cerro Vanguardia con el fin de conformar una estructura de apoyo local que permitiera la ejecución de los proyectos de la Agencia a través de un aporte monetario de la empresa, actualizado anualmente en base a las utilidades de la empresa

Validación de la práctica:

luego de varios años de funcionamiento de la Agencia de Desarrollo se ha logrado incrementar el capital social de la comunidad. Al momento de validar la práctica con representantes del sector público (Concejo Deliberante) y de la sociedad civil (Universidad de la Patagonia Austral) además

de quienes lideraron la práctica desde la empresa, se realizaron observaciones de algunos puntos a mejorar: las tasas de devolución de créditos productivos; agilidad en los procesos administrativo internos; niveles de aporte de los proyectos presentados al Plan Participativo; diversificación entre proyectos productivos y otros que se vinculan con otras facetas del desarrollo sustentable de una comunidad.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

Mejoras y equipamiento para el aeropuerto local que permitirán la recepción de vuelos comerciales, el saneamiento del basural municipal junto al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y aportes a proyectos productivos aprobados por la Agencia entre otros se desarrollaron en 2017. También se realizaron aportes al patrimonio cultural del lugar. Antes de la llegada de la empresa, la economía local basada en la producción de lana estaba atravesando una crisis. Con la llegada de la minería, la región no solamente contaba con nuevas inversiones, sino también se creó un espacio participativo donde están representados los actores principales de la sociedad civil, el Estado y la empresa con la finalidad de buscar acciones, proyectos y alternativas para un desarrollo sustentable de la localidad.



INNOVACIÓN

La utilización de una herramienta como la “agencia”, una institución sin fines de lucro, que planifica y toma decisiones de manera multisectorial y concertada, con gestión del municipio y recursos de la empresa es un aspecto innovador. La Agencia marca una diferencia en cuanto a que fija prioridades de forma estratégica para el desarrollo de la localidad.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: Se conformó un espacio multi-actor con la participación de representantes de distintos sectores (sector público, sector privado, sociedad civil) para colaborar en el análisis de las mejores propuestas para un desarrollo de la localidad de Puerto San Julián.
- Pertinencia según demanda: Con la creación de la Agencia, las partes involucradas cuentan con un plan de desarrollo sustentable a largo plazo para la localidad.
- Sostenibilidad por consenso: dada la participación de representantes de diversos ámbitos de la comunidad



ENFOQUES

Enfoque de desarrollo sostenible: esta práctica concibe el desarrollo como un modelo integral e integrador, que articula de manera equilibrada las dimensiones de la realidad (económica, social, cultural, ambiental).

Enfoque de transformación de conflictos: la creación de una herramienta como la Agencia implica una visión del conflicto como motor de transformación.

Enfoque de diversidad: esta práctica involucra a comunidades urbanas y rurales.



LECCIONES APRENDIDAS

La búsqueda de acuerdos conlleva un esfuerzo en el diálogo y la búsqueda de consensos que es compensada a través de la legitimidad de las acciones que surjan de la misma. En este tipo de organizaciones colaborativas la transparencia es fundamental para mantener su credibilidad.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada a través de entrevistas a representantes del sector público y académico que integran la Agencia como también de la empresa. La buena práctica fue mencionada en la Mesa de Trabajo Multisectorial, realizada el 28 de junio del 2017.



BIBLIOGRAFÍA /LINKS

<https://www.sanjulian.gob.ar/?q=fundacion-agencia-desarrollo>

<http://www.observadorcentral.com.ar/especializadas/desarrollo-local/puerto-san-julian-la-ciudad-que-penso-y-actuo-su-desarrollo/>

2.1.3.4. Programa Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

2005 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Pan American Energy (PAE), Cámara de Industria, Comercio y Producción de Comodoro Rivadavia, Cámara Industrial de Puerto Madryn Región Patagonia, consultoras del ámbito privado.

Ente Autárquico Comodoro Conocimiento (dependiente del Municipalidad de Comodoro Rivadavia)

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Chubut, Universidad de la Patagonia Austral en Santa Cruz, institutos y asociaciones como Asociaciones de Mutuales Israelitas Argentinas, Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, e Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Fundación Contribuir al Desarrollo Local.



DESCRIPCIÓN

La empresa: en 1997, nace Pan American Energy fruto de la fusión entre Bridas y Amoco Corp (hoy BP). Es una de las principales productoras de petróleo y gas de Argentina. Esta compañía opera en cuatro de las principales cuencas del país: Golfo de San Jorge, Noroeste, Neuquina y Marina Austral.

Relevamiento de información: en 2005, PAE detectó que en la región del Golfo San Jorge existía un contexto socioeconómico regional con posibilidades de fortalecer el desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) locales frente a la presencia de competidores internacionales con estándares sumamente competitivos. Así surgió el Programa PYMES para promover el desarrollo regional a través del apoyo a las empresas locales y con el distintivo de ser abierto a todas las empresas, sean o no proveedoras de PAE, y pertenezcan o no a la industria hidrocarbúfera.

Apoyo del programa: el programa ayuda a profesionalizar la gestión de PYMES, a certificar sus procesos y a desarrollar sus productos y servicios, mediante capacitaciones y asesoramiento tecnológico-industrial, comercial y financiero. Como parte de su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), PAE ha dirigido sus esfuerzos para contribuir a elevar el nivel de profesionalismo y de competitividad de las empresas y emprendedores, así como apoyarlas en el acceso al crédito. También estimula nuevos desarrollos acompañando a las empresas desde la idea proyecto hasta el plan de negocios.

Espacios: para llevar a cabo las actividades del programa se utilizaron las instalaciones de Comodoro Conocimiento (Agencia de Desarrollo de Comodoro Rivadavia) y otros espacios ofrecidos por las instituciones con las que el Programa PYMES de PAE interactúa en la región.

Ampliación geográfica: en 2005, el Programa inició y centralizó sus actividades en localidades de la región del Golfo San Jorge (GSJ) comprendida por el sur de Chubut (Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento) y el norte de Santa Cruz (Pico Truncado y Caleta Olivia). Hacia fines de 2013, el Programa comenzó a desarrollar sus actividades también en las provincias de Neuquén y Salta (en la localidad de Tartagal), acompañando a empresas y emprendedores de estas regiones. Así, el programa se expande a todas las áreas operadas por PAE y se vuelve replicable de acuerdo a la realidad y las necesidades de las comunidades locales.

Beneficiarios: esta buena práctica tuvo por destinatario a la población urbana y rural. Surgió de las necesidades de la empresa y la potencialidad de la comunidad.

Articulación: la comunicación con el sector PYMES mejoró ya que la comunidad percibió que la empresa estaba cercana a ella y que esto sería por período de mediano a largo plazo. PAE se considera articulador de una alianza entre las PYMES y el Estado en todos sus niveles y quienes tienen el saber técnico para el desarrollo de las actividades.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

A través del programa, la empresa creó un espacio donde interactúan empresas de diferentes tamaños, profesionales y técnicos, sector público a través de la agencia de desarrollo y academia.

Se desarrollaron acciones para contribuir al desarrollo de proyectos y alternativas productivas en la búsqueda de un crecimiento económico de la comunidad. Se observaron los siguientes impactos/alcances: a) 33% de las PYMES del programa aumentaron su facturación en los últimos dos años, b) se realizaron 262 capacitaciones abiertas en gestión administrativa, financiera y comercial, comunicación, liderazgo e informática, entre otras, c) en 2016, se realizaron 34 asistencias *in Company*, d) 70% de las empresas que participaron de las actividades son proveedores de PAE, e) 23 proyectos vinculados con innovación, mejora y sustitución de productos se presentaron en 2016, y f) más de 3.400 PYMES y emprendedores participaron de las propuestas del programa desde su inicio⁷⁵.



INNOVACIÓN

El programa busca el desarrollo de la región donde opera la empresa a través del apoyo al crecimiento de PYMES. Lo innovador es que la empresa apoya tanto a proveedoras como a no proveedoras de la compañía y que pueden ser del área hidrocarburífera así como de cualquier otro tipo de actividad económica. Se incentiva el emprendimiento a través de concursos y premios para generar nuevos negocios. La empresa juega un rol de articulador entre los diferentes actores antes mencionados para implementar este programa, a la vez que lo financia.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: Las PYMES solicitan la participación en las capacitaciones *in company* y abiertas y los asesoramientos que ofrece PAE
- Pertinencia según demanda: Esta práctica aborda un problema concreto (escasez de proveedores competitivos) y las soluciones están planteadas por los actores locales.
- Sostenibilidad por consenso: La empresa ha financiado este programa a través de sus alianzas con entidades públicas y privadas, así como profesionales independientes durante 11 años.



ENFOQUES

Enfoque de Desarrollo Sostenible: Esta práctica muestra un enfoque de desarrollo sostenible dado que apunta a la creación y expansión de un entramado productivo diversificado.



LECCIONES APRENDIDAS

Es fundamental el rol de los tres actores para avanzar en objetivos comunes a través de la vinculación entre Estado, OSC (incluidas universidades) y la empresa.

La participación de una comunidad con una actitud emprendedora permitió los buenos resultados de este tipo de programa. El rol de la empresa creando puentes con los demás sectores también ha sido fundamental para el éxito del programa



VALIDACIÓN

La práctica fue validada en una visita de campo a través de entrevistas a empresas y emprendedores que participan del Programa, así como a los representantes de las instituciones con las que conforma alianzas, como la Agencia de Desarrollo Comodoro Conocimiento y profesionales y técnicos. También, se entrevistó a representantes de Pan American Energy.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://www.pan-energy.com/comunidad/Paginas/programa-pymes-pae.aspx>
http://www.diariojornada.com.ar/176279/sociedad/comodoro_el_programa_pymes_de_pae_ratifico_su_compromiso_con_empresarios_y_emprendedores/
<http://www.conocimiento.gov.ar>

2.1.4. Análisis de actores

Los actores clave en el relacionamiento en torno al sector extractivo en Argentina son los siguientes.

Empresas

Las empresas mineras y del petróleo y gas buscan lograr acuerdos con los gobiernos y las comunidades que les permitan el desarrollo de los proyectos a cambio de los aportes tributarios y los aportes que realicen al desarrollo comunitario a través de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Su necesidad es obtener la licencia social y legal para desarrollar el negocio. Se vinculan con la sociedad civil, academia y gobierno y con sus casas matrices para la definición de la estrategia de relacionamiento con la comunidad. Generalmente, son empresas que cuentan con recursos humanos y materiales.

Por sus políticas corporativas, se adhieren a diversos protocolos e iniciativas internacionales para mejorar sus prácticas en distintas áreas (social, ambiental, laboral). Por ejemplo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) anunció la incorporación de la iniciativa “Hacia una Minería Sustentable” (TSM por sus siglas en inglés), para mejorar las prácticas sociales y ambientales de la industria minera. Esta es la segunda ocasión en la que el programa TSM es adoptado por una asociación minera fuera de Canadá y la primera vez en Latinoamérica. La Asociación Minera de Canadá (MAC) comparte el programa con otros países que buscan herramientas para mejorar la *performance* ambiental y social de sus industrias mineras incluyendo compromisos con la sociedad civil y mejoras en la transparencia y la rendición de cuentas⁷⁶.

A la vez, algunas empresas han sufrido un importante desprestigio y descreimiento en la opinión pública general, en particular, aquellas que han tenido incidentes ambientales. Por otra parte, el tema minero se ha transformado en un tema de la agenda política de los gobernadores en sus campañas, ubicándose los mismos en favor o en contra de la actividad⁷⁷.

En el caso del petróleo, con muchos más años de actividad en Argentina y siendo Yacimientos Petrolíferos Fiscales la principal empresa hidrocarburífera de capitales estatales, se registran niveles de conflictividad más bajos. Sin embargo, la extracción por *fracking* generó un incremento de la misma.

Gobierno

Las Secretarías o Direcciones de Minería y Energía de las provincias son autoridad de aplicación del Código de Minería y de las leyes provinciales de minería y energía como consecuencia de la federalización de los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo provincial. Su posición es la de promocionar y controlar el desarrollo de las actividades extractivas en sus jurisdicciones cumpliendo con la legislación nacional y provincial. Sus intereses son el cumplimiento de los requerimientos a las empresas (p.e. presentación de estudio de impacto ambiental) y de contralor. Su necesidad es aportar al desarrollo productivo provincial y mantener bajos los niveles de conflictividad social que la actividad extractiva pudiera generar dentro de la dinámica social.

El Ministerio de Energía y Minería de la Nación promueve una actividad extractiva responsable que genere un desarrollo sustentable cumpliendo con las normativas nacionales vigentes y protocolos internacionales. Sus intereses se traducen en la fijación

de políticas públicas a nivel nacional que sean aceptadas y aplicadas por los estados provinciales, dueños de los recursos naturales. Las necesidades se basan en lograr una coherencia y uniformidad en la política minera y energética en el marco del federalismo que permita atraer inversiones para el desarrollo de la industria. Tiene presencia territorial a través del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y el Consejo Federal de Energía (CFE).

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es la institución que vela por el cuidado del medio ambiente a nivel nacional. El Ministerio pone sus esfuerzos en que las leyes sean cumplidas y plantea exigencias y sanciones a aquellos que puedan afectar el medio ambiente. Como el Ministerio de Energía y Minería tiene presencia territorial a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Sociedad Civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden clasificarse de acuerdo a su forma de tratar el tema de las industrias extractivas.

OSC generadoras de espacios multi-actor

Estas organizaciones se caracterizan por mantener una posición dialoguista frente a las actividades extractivas ya que su objetivo es generar espacios de diálogo, buscando vincular al Estado, la sociedad civil y las empresas. Su interés está en lograr cierto acercamiento entre las partes, enriqueciendo el debate y buscando acuerdos para transformar el conflicto en una solución superadora que integre los intereses de los diversos actores.

PLATAFORMA ARGENTINA DE DIÁLOGO

Un ejemplo de cómo algunas organizaciones no gubernamentales promueven el diálogo es la Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales. La Plataforma es un espacio de referencia para adelantar discusiones sobre actividades extractivas integrado por organizaciones de la Sociedad Civil y universidades. La Fundación Cambio Democrático fue la promotora de la creación de la Plataforma Argentina de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable (hoy Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales). Actualmente la conforman Fundación Cambio Democrático, Fundación Directorio Legislativo, Universidad Nacional de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Universidad Católica Argentina. La Plataforma goza de legitimidad y posee capacidad de tender redes de forma horizontal y puentes con el sector gobierno y el sector privado. No obstante, falta su presencia en el territorio federal.

Estas organizaciones se relacionan con otras OSC nacionales e internacionales, con la academia, el Gobierno, embajadas de otros países, organismos internacionales y el sector privado.

Sus principales fortalezas son conocimiento y experticia en mediación y resolución de conflictos; experiencia en mapeo de actores y conflictos; capacidad para tejer redes de forma horizontal con la sociedad civil y construir puentes con los otros sectores; capacidad propositiva a través de soluciones a las verdaderas necesidades de los actores. Algunas de las debilidades son su falta de presencia en el territorio federal y recursos materiales insuficientes.

OSC críticas con respecto a las actividades extractivas

Principalmente, son ONG ambientalistas con una posición crítica de las actividades extractivas en general⁷⁸. Su interés se centra en un control estricto de estas actividades y restricción de las mismas a ciertas partes del territorio o a ciertas formas de explotación de los yacimientos o cierto procesamiento del mineral.

Sus fortalezas son, en la mayoría de los casos, contar con recursos humanos y materiales, tener influencia en la opinión pública y gozar de legitimidad. Su principal debilidad es la baja capacidad de construir puentes con otros sectores.

OSC opositoras a las actividades extractiva

Son ONG con una posición clara de oposición a la actividad minera. Su interés es parar las actividades extractivas, sobre todo mineras, que consideran que pueden generar desastres ambientales⁷⁹. No buscan acercar posiciones ni dialogar y representan una posición más intransigente y de confrontación.

Cuentan con recursos humanos y materiales, tienen influencia en la opinión pública, gozan de legitimidad, tienen llegada en los medios de comunicación, y tienen presencia territorial. Se considera una debilidad su falta de capacidades para el diálogo y soluciones consensuadas.

El sector académico

En este sector, hay que destacar el trabajo de las universidades nacionales que tienen áreas de formación académica, investigación y transferencia relacionadas con las actividades extractivas. Aunque las universidades plantean diversas posiciones con respecto a dichas actividades, se interesan por difundir el conocimiento técnico y académico sobre estas industrias para un mejor entendimiento de la sociedad. Tienen la necesidad de que se comprenda cómo opera la actividad extractiva y lo esencial de su existencia para la vida cotidiana. Algunas promueven la formación de profesionales en estas áreas y contribuyen a disminuir los grados de conflictividad social para que la industria prospere y los profesionales gocen de oportunidades laborales en Argentina. Las universidades tienen un rol fundamental dentro del entramado social en Argentina.

Uno de los centros académicos más activo es la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)⁸⁰. La UNSAM promovió una alianza con otras universidades públicas sumando algunas casas de altos estudios privadas para formar una red de profesionales que constituyen la “Red de Académicos por el Desarrollo Sustentable” que ofrece asesorías y asistencia a los responsables de tomar decisiones en cuanto a la política minera. La UNSAM también participa dentro de la Plataforma de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales.

Las fortalezas de las universidades son el saber técnico, la legitimidad y su anclaje territorial, ya que hay universidades presentes en todas las provincias con minería e hidrocarburos. Trabajan articuladas con la sociedad civil y con las empresas⁸¹. Una debilidad es la falta de consenso entre las unidades académicas que componen estas instituciones.

El sector sindical

Las organizaciones sindicales tienen por objetivo lograr beneficios para sus afiliados (mejoras en el salario y las condiciones de trabajo). Su necesidad es el desarrollo y crecimiento de la actividad extractiva para que los empleados mineros y del gas y petróleo tengan inserción laboral. En el caso de la actividad minera, existe un único sindicato a nivel nacional, Asociación Obrera Minera Argentina, con representaciones locales en las principales áreas mineras. En la industria hidrocarburífera, si bien existe

un sindicato a nivel nacional con la federalización de los recursos naturales se han ido desarrollando representaciones gremiales regionales o provinciales que han incrementado su protagonismo como ser el Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa entre otros.

Pueblos Indígenas

En Argentina son numerosas las comunidades y los pueblos indígenas que han solicitado se les restituya las tierras de sus antepasados⁸². En muchos casos, su reclamo ha sido reconocido por el Estado. Cada pueblo indígena, a su vez, se divide en numerosos grupos. Las posiciones frente a las actividades extractivas son diversas entre comunidades y dentro de las mismas. Su relacionamiento con la industria es de distinto tipo: desde obtener puestos de trabajo en el yacimiento, incluyendo solicitudes de información sobre los proyectos y su impacto, pedidos de aportes para contribuir al desarrollo de las localidades impactadas hasta manifestaciones que se oponen a la actividad. Cada comunidad tiene su idiosincrasia y de ahí se deriva un mayor o menor involucramiento a favor o en contra de la actividad.

2.1.5. Marco legal

Las actividades extractivas se regulan a través de una serie de normas. En esta parte, se hace mención sólo a las normas nacionales. La legislación provincial es extensa y diferente de acuerdo a la jurisdicción donde se emplace el proyecto extractivo⁸³. La legislación argentina en lo relativo a los niveles de relacionamiento se centra, principalmente, en el nivel de información y de consulta. No existe legislación que dé tratamiento a los otros niveles de relacionamiento.



Información

La Ley General del Ambiente sancionada en 2002 prevé una instancia de información en su art. 16, 17 y 18 que entre otros ítems contempla la elaboración de un Informe Anual del Ambiente. Este dejó de realizarse hace unos años atrás, pero fue retomado en 2016. El informe de 2016 menciona algunos impactos del sector extractivo sobre los recursos hídricos y biodiversidad y reporte actividades de remediación al cierre de algunas minas⁸⁴.

Adicionalmente, la Ley General de Ambiente prevé desarrollar un sistema nacional integrado de información ambiental. Este sistema permitiría monitorear los efectos del sector extractivo sobre los principales parámetros ambientales. Sin embargo, aún no se ha implementado un sistema de información que dé cumplimiento a esta ley.

En 2016 fue sancionada la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) y su puesta en marcha rige a partir del 29 de septiembre de 2017. Cada ciudadano podrá solicitar información pública en manos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y asimismo el Estado se obliga a publicar información de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable. La transparencia en la información juega un rol fundamental en la relación entre la industria extractiva y las comunidades, en particular, en lo relativo a impuestos y regalías y destino de la recaudación.



Consulta

En cuanto a la consulta pública, la Ley del Ambiente prevé una instancia de participación ciudadana en sus artículos 19 y 20 (derecho a ser consultado, institucionalización de la audiencia pública o consulta). También, agrega que la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio.

“En el Código de Minería no se prevé, entre otras cosas, la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Hecho que la Ley General del Ambiente si incluye. Las provincias deberían al reglamentar las leyes aplicar el principio de congruencia, pero cada provincia regula de manera distinta”⁸⁵.

Las audiencias públicas son instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que generen efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión de los participantes no es vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que estas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

En el caso de la minería existe la Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad Minera (Ley 24.585) que hace referencia a la obligatoriedad de presentar un informe de impacto ambiental de los responsables de llevar adelante operaciones mineras pero no prevé una instancia de consulta o audiencia pública. Sin embargo, algunos proyectos han llevado a cabo el proceso de audiencia pública (ej. Minera Triton Argentina).

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Congreso Nacional a través de la ley 24.071 en 2000 pero aún no ha sido reglamentado.



2.2. CHILE

Mitzy Canessa, Grupo de Diálogo Latinoamericano: mitzycanessa@gmail.com

2.2.1. Cuadro de resumen

Contexto



Económico: el sector minero⁸⁶ aportó con 9% al PIB en 2017⁸⁷. En 2015, Chile fue el principal productor de cobre con 30,5% del total mundial⁸⁸, y contó con las mayores reservas de cobre del mundo con 29,2%. En 2017, la participación de las exportaciones mineras representó 54% de las exportaciones totales del país⁸⁹.

En términos absolutos, e incluyendo las empresas estatales (CODELCO y ENAMI) la minería entregó aportes al fisco por 96.017 millones de dólares en el período 2004-2014, de los cuales el impuesto específico a la minería (Royalty) aportó 4.642 millones de dólares.⁹⁰

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)⁹¹, el sector minero generó en 2017 alrededor de 193 mil puestos de trabajo, lo que significa el 2,3% de la ocupación actual del país. La tasa de participación de mujeres en la minería fue de 8% en 2016, lo que equivale a 17.482 mujeres trabajadoras⁹².

Social: Durante la última década, las manifestaciones, protestas y judicialización frente a proyectos mineros principalmente desde la ciudadanía han ido en aumento⁹³. Las razones son diversas, desde las debilidades del sistema político, inexistencia de una política de ordenamiento territorial o reclamos por derechos de las personas. Con todos estos aspectos, la minería y las comunidades impactadas por esta han tenido conflictos. Algunos conflictos han alcanzado niveles internacionales aumentando su visibilidad y la cantidad de actores involucrados, impulsados principalmente por la sociedad civil (Urkidi, 2009).

La industria minera y la energía concentran los conflictos emblemáticos en Chile. El Instituto de Derechos Humanos, señala la existencia de 102 conflictos socioambientales desde 1990 hasta 2015 (último registro) entre conflictos activos y cerrados, de los cuales 19 casos de conflictos activos están relacionados con la actividad minera desde el 1990 hasta 2013⁹⁴.

Buenas prácticas



Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda (2006-2017, Información). La Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda surgió en 2006 y es una instancia que ha permanecido durante mucho tiempo. Su rol fundamental es mantener informada a toda la comunidad de Sierra Gorda de las actividades de relacionamiento, empleo y proyectos de desarrollo social de cada empresa minera. La comunidad es la que lidera esta instancia (dos juntas de vecinos, organizaciones sociales y vecinos), en la cual participan la municipalidad de Sierra Gorda y las empresas mineras Antofagasta Minerals, BHP Billiton, KGHM y Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Proceso de Diálogo, Consulta y Participación Caimanes (2015 – 2017, Diálogo/ Consulta). Es una iniciativa de diálogo impulsada por la empresa minera Los Pelambres después de 10 años de conflicto con la comunidad de Caimanes. La empresa realizó un giro para tener una comprensión del conflicto, reconociendo los errores y para procurar con la comunidad una forma de buscar soluciones.

Mapa de Actores



Marco Legal y Regulatorio



Para esto se generó un acercamiento con los dirigentes y comunidad de Caimanes para diseñar conjuntamente el proceso de diálogo y buscar un tercer actor que vele por el proceso y el cumplimiento de los acuerdos.

Participación ciudadana en etapa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero Nueva Unión (2016-2017, Consulta). El proyecto minero Nueva Unión es un *joint venture* entre las empresas Goldcorp y Teck. En agosto de 2016 comenzó un proceso de participación ciudadana anticipada, con la finalidad de informar e incluir tempranamente a las comunidades locales sobre el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, y consensuar mecanismos de diálogo que permitan recoger los temas de interés y preocupación, además de ir incorporándolos sobre los avances y resultados. Esta experiencia contó con la participación de la comunidad utilizando una serie de herramientas tales como “Casas Abiertas” y reuniones con las organizaciones y comunidades locales en varias ciudades y localidades cercanas a las áreas del proyecto. Además, se diseñó un proceso de participación ciudadana anticipada con pertinencia cultural indígena y de buena fe, coordinado con las propias instituciones representativas, tales como comunidades y asociaciones.

Los principales actores relacionados con la actividad extractiva en Chile son: desde el sector privado, empresas mineras, petroleras y gasíferas y sus respectivos gremios. Desde el Estado, son el Ministerio de Minería y Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente como entidad responsable de la evaluación ambiental de todos los proyectos extractivos y el Ministerio de Desarrollo Social, organismo que administra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Como sociedad civil, operan organizaciones no gubernamentales, comunidades urbanas y rurales, organizaciones indígenas, sindicato de pescadores y universidades y centros de estudios.

La Ley Indígena N° 19.253 (1993) establece procedimientos de participación respecto de materias relacionadas con cuestiones indígenas (artículo 34) y estipula que los pueblos indígenas deberán participar en el órgano a cargo de la dirección superior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) (artículo 42), que es el órgano competente para promover y asegurar el desarrollo integral de los indígenas urbanos y migrantes.

Chile ratificó el convenio 169 de la OIT que entró en vigencia en 2009. Mediante el Decreto 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social se regula el procedimiento de Consulta Indígena. Como responsable de los procesos de consulta se determina el órgano de la administración del estado que deba adoptar la medida objeto de consulta y es el responsable de coordinar y ejecutar el proceso de consulta.

Chile cuenta con una Ley Ambiental que se promulgó en 1994 y en 1997 comenzó a operar el reglamento en el cual se establecen las instancias de participación ciudadana y de la comunidad.

2.2.2. Introducción

La minería ha sido históricamente una importante palanca de desarrollo para Chile. Hoy se enfrenta con el desafío de mantener el atractivo de la inversión en minería, sostener el continuo crecimiento y así permanecer en la posición de liderazgo en la producción mundial de cobre y otros minerales. La magnitud y complejidad de dichos desafíos requieren que sean abordados en colaboración entre todos los actores relevantes para la industria minera, y que se cuente con un amplio apoyo político y social⁹⁵.

El crecimiento de la actividad minera también está asociado a impactos sociales, ambientales y económicos como la exclusión, la inequidad en la distribución del ingreso, la segregación territorial o la baja participación, y cuyos síntomas se hacen más presentes en las regiones donde hay mayor concentración de faenas mineras, las cuales por años han basado su vínculo con la comunidad desde una mirada “transaccional”, generando beneficios sociales y obras, entendiendo en muchos casos la mitigación ambiental como estrategias de inversión social.⁹⁶ Las empresas aún carecen de metodologías adaptadas a la realidad local para abordar la conflictividad más amplia. La característica principal del Estado es su ausencia en estos procesos y las empresas sustituyen el rol del Estado en el desarrollo local.

Chile no es un país rico en hidrocarburos convencionales. Importa el 96% del petróleo crudo que se refina internamente y el 80% del gas natural que consume. La actividad de exploración y producción de petróleo y gas de Chile se centra en la cuenca de Magallanes, tanto en el territorio continental como en la isla de Tierra del Fuego y en aguas del estrecho de Magallanes.

Se hace necesario potenciar una estrategia de relacionamiento basado en una mirada regional y territorial, generando un diálogo que se debe dar con todos aquellos actores que forman parte del desarrollo, que no son solamente el Estado y la empresa, sino además las comunidades y las organizaciones, considerando los componentes del territorio.

Los desafíos que deberá enfrentar el sector minero en los próximos años son importantes, sobre todo en lo que respecta a creación de valor, productividad, participación y desarrollo de una institucionalidad que favorezca los cambios. Con ello, el clima de diálogo y encuentro multisectorial que se ha venido produciendo permite visualizar un escenario favorable que podría impulsar al resto de los sectores de la economía chilena a avanzar en la misma dirección⁹⁷.

Chile tiene un desafío grande en los próximos años ya que se estima que la mitad de las reservas de cobre de Chile están en la zona central (Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y Región Metropolitana), por lo que el potencial de conflicto aumenta ya que en estas regiones



es donde existe mayor densidad poblacional. La competencia por territorio de las diferentes actividades económicas (y por factores como el agua) será fundamental para la actividad minera en el futuro, y por ende las relaciones de las empresas mineras con las comunidades pasan a tener una importancia estratégica para cualquier proyecto minero a desarrollar. La buena relación entre la empresa y la comunidad implica mayor legitimación de la operación, y potencialmente menores conflictos.

2.2.3. Buenas prácticas

Fue posible identificar y validar un total de tres buenas prácticas, en cada nivel de relacionamiento. Paralelamente, se han identificado otras prácticas de relacionamiento que no fueron consideradas por este estudio por no cumplir con alguno de los criterios definidos en la metodología, además de no contar con la información a tiempo de los actores involucrados. Sin embargo, se puede señalar que existen esfuerzos para avanzar en mejorar las relaciones comunitarias de la actividad minera en Chile.

Las buenas prácticas están en el siguiente orden:

2.2.3.1. *Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda (MBV)*

2.2.3.2. *Proceso de Diálogo, Consulta y Participación Caimanes.*

2.2.3.3. *Participación Ciudadana en etapa de elaboración del EIA proyecto Minero Nueva Unión*

2.2.3.1. Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda (MBV)

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



DURACIÓN

2006 – 2017

ACTORES PRINCIPALES

Minera Centinela del grupo AMSA, Minera Sierra Gorda, Minera Spence de BHP Billiton. Alcalde y funcionarios municipales de la municipalidad de Sierra Gorda. Organizaciones sociales (Junta de Vecinos N°1 y N°2).

DESCRIPCIÓN

Inicio de operación minera: la comuna de Sierra Gorda, que según los datos de 2013 cuenta con una población de 1.848 habitantes, había sufrido la constante migración de sus habitantes. Sin embargo, la actividad minera le dio nuevos aires hacia fines de la década de 1990 con la llegada de las grandes compañías mineras. En la década de 2000 se iniciaron las primeras actividades de explotación minera que hasta la fecha determinan la economía local, especialmente por cupos laborales para la población local y las actividades que indirectamente se benefician de esta, como el comercio y otro tipo de servicios que son ofertados a las empresas y contratistas de la minería⁹⁸. Actualmente en la comuna, están operando cuatro empresas mineras: Antofagasta Minerals, BHP, KGHM y Codelco.

Explotación actual: en 2001, con una inversión de más de 300 millones de dólares, se inauguró el proyecto minero El Tesoro. Esto representó un hito para este denominado distrito minero en términos de minería a gran escala. La empresa BHP Billiton inició sus operaciones en 2008. Dos años más tarde se inauguró el proyecto Esperanza, primera operación a gran escala a nivel mundial que comenzó a usar 100% de agua de mar desalada en sus procesos. Pocos meses después, la empresa Codelco (proyecto Gabriela Mistral) comenzó a operar. Posteriormente, en 2014, se inauguró el proyecto Sierra Gorda (empresa KGHM), cuyo rajo principal está a solo 4,5 km de la ciudad. El mapa de las operaciones para el distrito se completó con la fusión de El Tesoro y Esperanza para formar Centinela, controlada por el grupo chileno Antofagasta Minerals⁹⁹.

En 2016, la producción total sumaba 623 KTM de cobre y 213.000 onzas de oro. Las empresas en conjunto durante los últimos 12 años han realizado una inversión en sus proyectos mineros aproximada de 9.000 millones de dólares. En tanto, se estima que en los próximos 10 años se podrían invertir otros 9.000 millones en proyectos de expansión.

Mesa de Buenos Vecinos: la Mesa de Buenos Vecinos (MBV) de Sierra Gorda surgió en 2006 desde un impulso de la comunidad y nació como una experiencia única en Chile en materia de relacionamiento comunitario, asociatividad y focalización de la inversión social. Desde sus inicios, ha sido considerada como una instancia de encuentro y diálogo entre las organizaciones de Sierra Gorda y las mineras que operan en la comuna. Su primer objetivo fue tender un puente entre los dirigentes de las organizaciones sociales y las mineras para elaborar un programa de apoyo a la comunidad en materia medioambiental que apuntara a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Mesa como instrumento comunitario: después de once años de funcionamiento, este espacio se ha convertido en un instrumento comunitario para la toma de decisiones, la gestión de las expectativas y la prevención de conflictos. A su vez, desde la perspectiva de las empresas, la MBV ha permitido flujos de información mejor organizados hacia y desde la comunidad, y el desarrollo de proyectos colaborativos de alto impacto para la población de Sierra Gorda. Uno de los mayores logros ha sido crear una estructura para canalizar una parte de las contribuciones de las empresas mineras desarrollando cerca de 20 proyectos e iniciativas de colaboración comunitaria (relacionado con el apoyo a la gestión y el suministro de materiales a proyectos de infraestructura).

Se unen nuevos actores: con el pasar de los años, a la MBV se fueron sumando vecinos que no se sentían representados por las organizaciones sociales y también se sumaron las nuevas empresas mineras que comenzaron a operar en el sector y funcionarios del municipio. En la actualidad, la mesa es una instancia que representa a las organizaciones sociales de la comuna de Sierra Gorda, a vecinos no representados por las organizaciones, al municipio y a las empresas mineras que operan en la zona.





Funcionamiento de la Mesa: la Mesa de Buenos Vecinos se reúne una vez al mes. Actualmente participan cuatro operaciones mineras (Centinela, Spence, Sierra Gorda SCM y Codelco División Gabriela Mistral), los habitantes de la localidad de Sierra Gorda (sin representación y con derecho a voz y voto), un coordinador y la municipalidad. Entre sus principales objetivos está: canalizar las inquietudes de la comunidad y las organizaciones sociales respecto de la actividad minera, ordenar el trabajo de las mineras con la comunidad para evitar la duplicidad de esfuerzos y maximizar la inversión social¹⁰⁰. Además, el diálogo sirve como mecanismo de generación de confianza para involucrar en el proceso a las organizaciones comunitarias, promover y diseñar proyectos comunitarios relacionados con temáticas de empleo y proveedores locales, capacitación y educación, y medio ambiente que respondan a las problemáticas de Sierra Gorda y generen posibilidades de desarrollo para la comuna y sus habitantes.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

Un resultado importante es el reconocimiento por parte de las mineras a la comunidad como un interlocutor relevante y necesario para la correcta ejecución del presupuesto destinado para la inversión social. Este reconocimiento ayuda a la obtención de la licencia social para operar. Desde la comunidad, el resultado más valioso es el poder influir en los proyectos que cada empresa minera financia con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. En materia de impacto, actualmente esta práctica está siendo considerada como un programa piloto de diálogo territorial por parte del proyecto de Institucionalidad del Diálogo de la Alianza Valor Minero¹⁰¹.



INNOVACIÓN

Hasta hoy es un ejemplo único en el país, en el cual cuatro empresas que operan en una misma comuna coordinan las contribuciones al desarrollo y bienestar de la comunidad. En otras regiones, las empresas insisten en actuar de manera individual. Además, que la instalación de una mesa tripartita entre el municipio, cuatro empresas y la comunidad organizada, es un ejemplo de una buena práctica, ya que generalmente las empresas no buscan una articulación con la autoridad local.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación regular: la práctica considera la participación de todos los actores involucrados a través de reuniones mensuales y cuentan con un calendario de todas las reuniones durante un año.
- Pertinencia según necesidad: agrupa a las comunidades, a las autoridades comunales y a las empresas lo que responde a una forma de organización propia.
- Sostenibilidad institucional: los acuerdos logrados como mecanismo institucionalizado de la MBV implican beneficios para todas las partes.



ENFOQUES

Enfoque de Transformación de Conflictos: la forma de relacionarse entre los actores, la instancia de diálogo, el contacto directo con cada minera y el trabajo conjunto para la selección de las obras y proyectos sociales que se implementarán contribuyen a construir confianzas y a gestionar los conflictos.



LECCIONES APRENDIDAS

La comunicación fluida, permanente y honesta es un mecanismo efectivo de resolución de conflictos que permite acercar posiciones y generar instancias de trabajo colaborativo que vayan en beneficio de todos los actores involucrados.

A partir de esta buena práctica, Sierra Gorda se constituyó en comuna piloto para el proyecto de diálogo territorial impulsado por Alianza Valor Minero.



VALIDACIÓN

Entrevista con la dirigencia de la comunidad; conversaciones con el área de RSE de una de las empresas. Se realizó una visita de campo en la cual se asistió a una reunión de Mesa de Buenos Vecinos. Además, la buena práctica fue presentada y discutida por representantes del sector privado, el sector público y la sociedad civil en la mesa de trabajo que se realizó en el marco de la elaboración del diagnóstico, el 16 de agosto del 2017, en Santiago de Chile.





BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.consejominero.cl/mesa-de-buenos-vecinos-sierra-gorda-cuando-el-dialogo-con-la-comunidad-construye-confianza-y-el-desarrollo-social-va-mas-alla-de-una-marca-corporativa/>
<http://www.futurorenovable.cl/minera-centinela-inicia-proceso-de-dialogo-ciudadano-con-la-comunidad-por-nuevo-proyecto/>
<http://www.tell.cl/magazine/18246/antofagasta/marzo/2016/espacios/amor-por-la-gente.html>
<http://www.revistatecnicosmineros.com/2016/08/merito-san-lorenzo-entregan-vecinos-de-sierra-gorda-a-profesional-de-division-gabriela-mistral/>
<http://www.mch.cl/2013/04/22/minera-esperanza-suscribe-convenio-de-colaboracion-con-la-municipalidad-de-sierra-gorda/#>
<http://www.mch.cl/reportajes/claudio-echeverria-devaluacion-social-la-mineria/#>
<http://www.latercera.com/noticia/mineras-al-surelacion-las-comunidades/>
http://valorminero.cl/site/docs/2017/caso_estudio%20comuna_sierra_gorda_vision_comunidad_inversion_social_mineria.pdf
<http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2017/07/26/full/cuerpo-principal/7/>

2.2.3.2. Proceso de Diálogo, Consulta y Participación Caimanes

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Consulta



Diálogo



DURACIÓN

2015 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa minera Los Pelambres. Representantes de las comunidades Caimanes, Rincón y Pupío (región de Coquimbo), ONG Chile Transparente.



DESCRIPCIÓN

Inicio de la operación minera: desde 1999, la minera Los Pelambres, que forma parte del Grupo Antofagasta Mineral, explota cobre en el Valle de Choapa en la comuna de Salamanca. Antofagasta Minerals (AMSA) es el grupo minero privado más grande de Chile. El grupo opera las compañías mineras controladas por Antofagasta PLC y realiza actividades de exploración y desarrollo de proyectos. Las operaciones mineras de Antofagasta Minerals se dedican a la producción de concentrado y cátodos de cobre y algunos subproductos como molibdeno y oro.

El conflicto: el conflicto comenzó cuando Los Pelambres se instaló en la IV Región de Chile y anunció su plan de desarrollo. Se detectan tres hitos en la historia del conflicto: la instalación del terminal marítimo (1996), la construcción del tranque de relaves El Manque (2001), y las acciones realizadas para la construcción del tranque de relaves El Mauro (2004). Estos conflictos entre la empresa y la comunidad se mantuvieron por 10 años, con algunos procesos de negociación entre medio.

Estrategia de acercamiento: desde el equipo corporativo de AMSA, se comenzó a diseñar una estrategia para avanzar en el acercamiento con la comunidad. Esto llevó a un trabajo de diálogo con la comunidad a partir del giro que hizo la empresa en relación a la comprensión del conflicto, entendiendo que este posee un carácter social. Se buscó un acercamiento con los dirigentes de Caimanes y con todos los habitantes del valle.

Proceso de diálogo: el proceso de diálogo entre empresa y comunidad se dio entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 y buscaba poner fin a los conflictos judiciales y sociales que los afectaban. La iniciativa involucró procesos participativos y la generación de un acuerdo vinculante que sea legitimado por la comunidad afectada. El proceso inició con las comunidades de Caimanes, Rincón y Pupío (comuna de Ilapel Región de Coquimbo). Dicho proceso, contó con 12 instancias de participación (reuniones, asambleas, foros, etc.) que sentaron las bases para lograr el acuerdo que beneficiara a las comunidades y a la vez, diera cumplimiento al fallo judicial que afectaba a la empresa (derribar el tranque).

Chile Transparente: el proceso contó con la participación de la ONG Chile Transparente quien veló por dar garantías de transparencia y probidad a ambas partes del proceso¹⁰².

Propuesta de acuerdo: entre marzo y mayo de 2016 se elaboró la propuesta de acuerdo, que fue validada con la comunidad, ratificada por esta y firmada por el 80% de los habitantes de Caimanes. Es necesario destacar que, durante todo el proceso de diálogo, la comunidad participó activamente a través de comisiones.

Contenido de acuerdo: el acuerdo Caimanes se basa en tres pilares: a) agua (implementación de acciones por parte de la empresa que permitan asegurar el suministro de agua, su continuidad y calidad para consumo humano y otros fines); b) seguridad (desarrollo de planes y obras por parte de la empresa que responda a las necesidades, temores e inquietudes de la comunidad respecto de la seguridad del tranque); y c) fondo de desarrollo (creación, por parte de la empresa, de un fondo que financie iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de cada familia de la comunidad y creación de un fondo comunitario para el financiamiento de proyectos comunitarios orientados a mejorar la empleabilidad y el emprendimiento en el Valle de Pupío).



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

Acuerdo de Caimanes que considera la creación de un Fondo de Desarrollo Comunitario con la finalidad de desarrollar proyectos en infraestructura comunitaria y un Fondo de Desarrollo Familiar que consiste en entregar un monto de dinero una vez a las familias que suscribieron el acuerdo.



INNOVACIÓN

Este proceso fue el primero de su tipo en el país que buscaba dar respuesta a los problemas de la comunidad de forma tal que la operación de la empresa pudiera realizarse sin mayores contratiempos. Fue innovadora la forma de organizar las asambleas que fueron con herramientas pertinentes para todo el público. Se tomó el tiempo que fuese necesario, y contaron con el interés y la participación de gran parte de la comunidad, el respaldo de Chile Transparente y el que los acuerdos logrados tuvieran valor judicial son acciones innovadoras que promueven la confianza y la transparencia. Todo quedó registrado en videos y actas que eran públicas.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: se desarrollaron mecanismos de participación tales como reuniones, asambleas y foros abiertos
- Sostenibilidad institucional: el acuerdo cuenta con 84% de aprobación por parte de la comunidad y será válido mientras la minera tenga operaciones en la zona.



ENFOQUES

Enfoque de Transformación de Conflictos: la empresa señala que comenzó a ver a la comunidad y a las organizaciones civiles como un aliado y, por lo mismo, pudo establecer una nueva forma de relacionamiento y generar un conocimiento más profundo de la comunidad en la que la minera tiene sus faenas. Desde la perspectiva de la comunidad, surge una nueva configuración del poder de las organizaciones sociales. Se generó el surgimiento de nuevos líderes que representaron puntos de vista no considerados por los principales dirigentes de la comunidad.



LECCIONES APRENDIDAS

Ambas partes apoyadas de un tercero (Chile Transparente) lograron sentarse en una misma mesa y verse como aliados. Si bien el llamado Acuerdo Caimanes fue aprobado por poco más del 80% de la comunidad, hay un sector minoritario (cerca de 12 familias) que continúan en oposición al proyecto minero. A comienzos de 2017 presentaron una querrela por prevaricación en contra de los abogados de la minera que participaron en el proceso de diálogo.



VALIDACIÓN

Entrevistas a ejecutivos de la empresa. Validación en mesa de trabajo con la organización Chile Transparente. Adicionalmente, se realizó una visita de campo en la cual se visitó el tranque construido y se pudo conocer las preocupaciones de la comunidad.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

http://www.olca.cl/oca/chile/region04/mlp/olca_mlp/informes/informes_pdf/informe_II.pdf
<http://www.24horas.cl/nacional/conflicto-en-caimanes-dos-miradas-distintas-sobre-el-tranque-el-mauro-1603876>
http://ciperchile.cl/pdfs/elmauro_RCA+38-1.pdf
http://seia.sea.gob.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=6243
<http://www.theclinic.cl/2017/05/02/abogado-y-conflicto-en-caimanes-aqui-se-ha-mostrado-una-codicia-insaciable/>
<http://www.aminerals.cl/comunicaciones/noticias/2016/proceso-participativo-caimanes/>
http://www.aminerals.cl/media/3505/antofagasta-minerals_detalle-acuerdo-caimanes.pdf

2.2.3.3. Participación Ciudadana en etapa de elaboración del EIA proyecto Minero Nueva Unión

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Consulta



DURACIÓN

2016 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Nueva Unión (Joint Venture Teck-Goldcorp). Municipalidades de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, Región de Atacama. Comunidades indígenas Diaguitas, organizaciones de la sociedad civil.



DESCRIPCIÓN

Antecedentes: el proyecto Nueva Unión se emplaza en el Valle del Huasco, región de Atacama. El proyecto El Morro fue un proyecto de cobre y oro que fue paralizado por resolución de la Corte Suprema en octubre de 2014, luego de una compleja y extensa disputa legal iniciada por problemas en la implementación, de acuerdo con la justicia en el contexto de la consulta indígena. Debido a eso, la compañía decidió retirar su estudio de impacto ambiental e iniciar la exploración de oportunidades para un nuevo proyecto.

Características del proyecto minero: Nueva Unión SpA es una sociedad compuesta por las empresas Teck y Goldcorp, la cual busca generar sinergias para el desarrollo de los yacimientos Relincho y La Fortuna para la producción de cobre, oro y molibdeno, reduciendo su huella ambiental a partir del uso de infraestructura común para la operación de ambos yacimientos. Además, utilizará agua desalinizada para sus procesos en un horizonte de 36 años de vida útil.

Estudio de pre factibilidad: sus principales características como proyecto minero es que utilizan un enfoque participativo, la reducción de su huella ambiental y el uso sustentable del agua. Hoy el proyecto ha concluido su fase de prefactibilidad e iniciará su estudio de factibilidad en julio de 2018. Paralelamente, se está desarrollando el estudio de impacto ambiental que se presentara dentro de la etapa de factibilidad (entre julio 2018 y el junio 2019).



Participación ciudadana anticipada: Nueva Unión inició en agosto de 2016 un proceso de participación ciudadana anticipada, es decir antes de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingrese para ser evaluado ambientalmente con la finalidad de informar e incluir tempranamente las observaciones de las comunidades locales en el desarrollo del EIA y de esta forma consensuar a través de mecanismos de diálogo que permitieron recoger los temas de interés y dar cuenta de los avances y resultados.

Casas Abiertas: el proceso de participación anticipada se ha canalizado a través de casas abiertas y reuniones con las organizaciones y comunidades locales en varias ciudades y localidades cercanas a las áreas del proyecto, principalmente en la Provincia del Huasco. La casa abierta es un espacio físico comunitario (parecido a una oficina de informaciones) donde la empresa presenta el proyecto a la comunidad con videos, paneles informativos, maquetas, etc., y responde a las consultas de la comunidad

Culturalmente pertinente: la entrega de la información del proyecto se diseñó con los habitantes tradicionales ubicados en el área de influencia del proyecto, coordinando con las instituciones representativas de las comunidades, tales como organizaciones de comunidades indígenas de la etnia diaguita que cumplen un rol territorial y asociaciones indígenas diaguitas que cumplen un rol funcional, desde los temas a tratar, la forma de como abórdalos y responder a las preocupaciones reales.

Estándares nacionales e internacionales: este proceso de participación temprana se basa en las normativas y estándares, nacionales e internacionales y busca contribuir a la sustentabilidad del proyecto Nueva Unión y a su compromiso con la Región de Atacama. De acuerdo a la política de Pueblos Indígenas de Nueva Unión, la relación entre la empresa y los pueblos originarios se basa en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas y Minería del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM). Todos estos instrumentos sustentan los estándares de la empresa en materia de salud, seguridad, medio ambiente y comunidades.





RESULTADO PRINCIPAL

El proceso aun no finaliza por lo que no se pueden establecer resultados muy claros. Se encuentran en la cuarta fase de casas abiertas (noviembre 2017). Los principales temas de interés y preocupación son: la reubicación del tranque de relaves desde la cabecera del Río Huasco (4.000 msnm) a la zona de Relincho (2.000 msnm); la incorporación de una correa transportadora mixta (terrestre y aérea) para minimizar el impacto en las vegas y áreas sensibles; la contratación de mano de obra local; el desarrollo de la economía local; la inversión en educación y capacitación para las comunidades. La empresa logró revertir la desconfianza hacia este tipo de procesos y contó con la participación de gran parte de sus grupos de interés



INNOVACIÓN

La participación ciudadana anticipada es un proceso voluntario y sugerido por la autoridad ambiental. Nueva Unión comenzó este proceso en agosto de 2016 y hasta la fecha continua (2017). Ha contado con la participación de las organizaciones que han manifestado sus expectativas y preocupaciones respecto los proyectos mineros ¹⁰³. La entrega de la información del proyecto se realiza de manera temprana y con cobertura en todos los lugares de interés. Junto con ello, se puede señalar que el proceso ha tenido legitimidad y participación, en un territorio de conflictividad con dos proyectos mineros, energéticos y agroindustriales.¹⁰⁴



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: Se consideran mecanismos de participación como casas abiertas, reuniones con las comunidades, habilitación de sitio web para consultas, transparencia en la entrega de información.
- Dado que aún no termina, no es posible determinar su sostenibilidad.



ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: Nueva Unión considera en su política de pueblos indígenas el respeto a los derechos, culturas, intereses y aspiraciones de los Pueblos Indígenas y se compromete a construir relaciones robustas y duraderas que le permitan entender las perspectivas y prioridades mutuas¹⁰⁵.

Enfoque de Transformación de Conflictos: Esta práctica está inserta en la historicidad de dos conflictos mineros Pascua Lama y proyecto El Morro en un contexto de judicialización y oposición que hace necesario implementar nuevas formas de relacionamiento y de trabajo colaborativo.



LECCIONES APRENDIDAS

En el proceso "las comunidades nunca quisieron participar como conjunto, se vetaban mutuamente entre el consejo diaguita, el provincial y los Huascoalinos, así este proyecto, de algún modo, hereda procesos anteriores". Sin embargo, la participación de estos actores se fue desarrollando (entrevista realizada a ONG que facilitó el proceso).



VALIDACIÓN

En la mesa de trabajo se mencionó esta experiencia y luego se validó con entrevistas a asesores en materia comunitaria, entrevista con la Fundación Casa de La Paz.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.pulso.cl/empresas-mercados/teck-goldcorp-reactivan-exploracion-proyecto-minero-atacama-cuatro-anos-paralizado/>
<http://www.nuevaunion.cl/nuestro-proyecto>
<http://www.reportesostenible.cl/ProyectoNuevaUninysunueva>
<http://www.revistatecnicosmineros.com/2017/04/el-enfoque-que-le-ha-permitido-al-proyecto-minero-nueva-union-lograr-apoyo-de-comunidades-de-huasco-alto/>
http://atacamanoticias.cl/2017/05/02/proyecto-nuevaunion-inicia-tercera-ronda-de-casas-abiertas-con-la-comunidad/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
<http://www.mch.cl/2017/11/20/nuevaunion-entrega-novedades-de-su-proyecto-minero-a-comunidades-de-atacama/>

2.2.4. Análisis de Actores

El relacionamiento en materia del desarrollo extractivo y la sostenibilidad en Chile se enmarcan en un escenario de desconfianza generalizada entre todos los actores, tanto públicos como privados y sociedad civil. Esta desconfianza va desde los procesos y criterios de toma de decisión por parte del Estado, hasta los cuestionamientos de legitimidad de la información provista por las empresas por parte de las comunidades. Así, las posturas que adoptan los actores sociales respecto a los reales impactos que generan los proyectos de diversas industrias provocan también grados de incertidumbre creciente para quienes llevan adelante proyectos de inversión¹⁰⁶.

Empresa

Las empresas buscan desarrollar proyectos rentables, con el menor impacto ambiental y social, obtener licencia ambiental y social, aportar al desarrollo local, regional y nacional con los aportes tributarios y los aportes que realicen al desarrollo comunitario a través de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Cuentan con dos gremios de gran relevancia: el Consejo Minero que se creó en 1998. Es la asociación que reúne a 18 empresas productoras de cobre, oro, plata, molibdeno, hierro de mayor tamaño que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como extranjeros, sean de propiedad pública o privada. La Sociedad Nacional de Minería se creó en 1883 y es la organización gremial que agrupa a 76 compañías de la mediana y gran minería y empresas proveedoras, así como a 38 asociaciones mineras regionales que representan a más de tres mil pequeños empresarios mineros.

Las empresas mineras se vinculan con la sociedad civil, academia y gobierno en diferentes iniciativas gubernamentales y privadas tales como Alianza Valor Minero¹⁰⁷. En enero de 2015 se creó la Alianza Valor Minero, con el objetivo de coordinar e impulsar a los diferentes actores en la realización de las iniciativas de la agenda estratégica “Minería: una plataforma de futuro para Chile”; y convertirse en una plataforma promotora del encuentro y el diálogo entre las diferentes partes interesadas. Esta alianza está

compuesta por representantes de todos los sectores. Los principales avances que ha tenido esta alianza son: a) la creación de diálogos regionales con diversos actores para la construcción de una visión común y consensuada sobre la minería como plataforma de desarrollo, con una bajada regional, b) Propuesta de un diseño de un Sistema e Institucionalidad de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos de Inversión y la c) Constitución de la plataforma Diálogo Zona Central, que convoca a representantes de diversos sectores productivos, asociaciones gremiales, ONG, comunidades, académicos, expertos, autoridades locales.¹⁰⁸

Gran parte de las políticas corporativas se adhieren a diversos protocolos e iniciativas internacionales para mejorar sus prácticas en distintas áreas como International Council on Mining and Metals, Objetivos Desarrollo Sostenible, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La minería en Chile es un tema obligado de agenda política para todos los candidatos políticos en sus campañas. Durante 2017 se comenzó a gestar una plataforma de diálogo público privado, en torno al desarrollo de la actividad minera en la zona central¹⁰⁹. Esta zona alberga el 10% de los recursos de cobre del mundo.

Estado

El Ministerio de Minería es el encargado de liderar el desarrollo de políticas públicas de minería orientadas a elevar la contribución de la actividad minera al desarrollo nacional, diversificando la actividad para aprovechar los recursos disponibles en condiciones sustentables y valoradas por la ciudadanía¹¹⁰. De este ministerio dependen dos organismos de relevancia: por un lado la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) como organismo técnico y altamente especializado creado en 1976, que cumple el rol de asesor al Gobierno en materias relacionadas con la producción de cobre y sus subproductos, además de todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. Por otro lado está el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) que es el organismo técnico responsable de generar, mantener y difundir información de geología básica y de recursos y peligros geológicos del territorio nacional, regular y fiscalizar el cumplimiento de normativas mineras en materia de seguridad, propiedad y planes de cierre para contribuir al desarrollo de la minería nacional.

El Ministerio de Medio Ambiente es el órgano encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental y su regulación normativa. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), adscrito al Ministerio, es el órgano responsable de la evaluación ambiental de proyectos para que estos cumplan con lo establecido en la norma vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos.

El Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio encargado del diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables como las comunidades indígenas, a nivel nacional y regional. De este ministerio depende la *Corporación Nacional de Desarrollo Indígena* creada en 1993 por medio de la Ley Indígena 19.253, que se plantea como objetivo la promoción, la coordinación y la ejecución de la acción estatal de los planes de desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de Chile.

Sociedad Civil

En Chile las organizaciones de la sociedad civil son relativamente recientes. Más del 88% de las organizaciones de la sociedad civil fueron inscritas con posterioridad a 1990, es decir, tienen menos de 25 años de existencia. Este fenómeno de juventud de las organizaciones se debe no solo a un cambio en la legislación que ha facilitado los procesos de inscripción de las OSC (Ley 20.500 de 2011), sino que también responde a un impulso de la sociedad civil moderna a organizarse¹¹¹. Respecto a la industria extractiva, se puede clasificar las organizaciones de la sociedad civil de la siguiente manera:



OSC dialogantes. Estas organizaciones se caracterizan porque en sus objetivos institucionales buscan activamente los acuerdos, acercamiento e instancias de diálogo entre los diversos actores relacionados con la industria extractiva pero principalmente, buscan acercar a las empresas con las comunidades y en segundo lugar con el Estado. En la mayoría de las organizaciones los intereses son incidir en las políticas públicas de Chile, la búsqueda de acuerdos entre las partes, y destrabar controversias para el bien común. En Chile, las OSC actúan de manera aislada a pesar de las múltiples iniciativas que se han generado para lograr acuerdos. Sus principales fortalezas son conocimiento del territorio (experiencia de campo); conocimiento de las realidades de las comunidades y de los actores; equipos profesionales con experiencia en diagnósticos de escenarios; capacidad para tejer redes de forma horizontal con la sociedad civil y construir puentes con los otros sectores; legitimidad y reconocimiento del estado y la empresa. Por otro lado, se pueden identificar como debilidades la falta de presencia en las regiones, ya que la mayoría son de Santiago, falta de recursos y financiamiento constante.

OSC críticas con respecto al desarrollo de proyectos mineros de gran envergadura. Principalmente, ONG ambientalistas han manifestado su posición crítica al desarrollo de proyectos mineros¹¹². Su interés se centra en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental. En algunas ocasiones han influido en la paralización de proyectos mineros, en la multa y paralización, en la evaluación ambiental desfavorable de un proyecto. Una de sus fortalezas es que dentro de sus equipos profesionales cuentan con calificación técnica ambiental además del apoyo de consultores internacionales, y que tienen influencia en la opinión pública y legitimidad. Cabe señalar que una de las principales debilidades es que no construyen diálogos con la industria extractiva.

OSC que se oponen a la actividad minera. Son OSC que en su discurso y postura señalan que se oponen a la actividad minera y los proyectos que se quieran desarrollar. No buscan acercar posiciones ni dialogar y representan una posición más intransigente y de confrontación. La mayoría de estas organizaciones actúa como “asesoras” de las comunidades. Sus fortalezas son contar con recursos humanos y materiales, tener influencia en la opinión pública, tener llegada en los medios de comunicación, y contar con



presencia territorial a través de organizaciones sociales de base. Como debilidad se puede identificar la falta de voluntad para generar instancias de diálogo y soluciones consensuadas.

En la Academia podemos diferenciar entre las universidades a nivel central, las universidades regionales y los centros de estudios. Estos tres actores tienen áreas de formación académica, investigación y transferencia relacionadas con las actividades mineras. En las universidades (Universidad Católica - Centro de Políticas Públicas, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, por señalar algunas, ha surgido mucho interés por la creación de diplomados de temas relacionados con responsabilidad social empresarial, temas de relacionamiento comunitario, diplomados de conflictos socio ambientales, investigaciones en estas temáticas, seminarios, cursos de facilitación entre otros temas.

Los centros de estudios privados son centros de pensamiento independientes de las universidades que producen conocimiento, elaboran propuestas de políticas públicas y además actúan como agentes de *lobby*, denominados *Think Tank*. Algunos de ellos están ligados a un partido político. Los principales son: Centro de Estudios Público, Espacio Público, Instituto Libertad y Desarrollo, Instituto de Estudios de la Sociedad, Centro de Estudios del Desarrollo, Fundación Corporación de Estudios para Latinoamérica, Fundación Chile 21, por señalar algunos, la mayoría de estos estudios han manifestado su inclinación hacia el desarrollo de la industria extractiva a excepción del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo que tienen una postura más crítica a la industria.

En Chile las organizaciones sindicales tienen una relación bilateral con la empresa minera. Existen dos grupos que reúnen a los principales sindicatos de trabajadores de las empresas mineras: Federación Minera de Chile que agrupa a 18 sindicatos de la gran minería privada y la Confederación de Trabajadores del Cobre que reúne los sindicatos de la empresa estatal. En algunas apariciones públicas –seminarios, eventos mineros– han manifestado el interés de comprender la relación y los aportes económicos que establecen las empresas con las comunidades.

En Chile existen 9 etnias reconocidas (Mapuche, Aymara, Rapa nui (o pascuense), Atacameña, Quechua, Colla, Diaguita, Alacalufe (o kawashkar), Yagán (o yámana). Cada etnia se divide en varias organizaciones denominadas comunidades indígenas. A la fecha según información de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) existen 3.213 comunidades indígenas de las 9 etnias¹¹³. El Estado desde 1994 a la fecha ha restituido tierras y las comunidades siguen solicitado la restitución de las tierras de sus antepasados. En muchos casos su reclamo ha sido reconocido por el Estado y en otros casos están en disputa con el emplazamiento de proyectos mineros. Las posiciones frente a la actividad minera son diversas, según ubicación, emplazamiento, impactos, tiempo de permanencia del proyecto, entre otros¹¹⁴. Por ejemplo el caso del proyecto El Morro en el cual la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó tres recursos presentados por comunidades indígenas y agricultores en contra del proyecto minero de oro y cobre El Morro, ligado a Goldcorp (70%) y New Gold (30%) (2014). Según Matias Abogabir¹¹⁵

2.2.5. Marco Legal

La entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el año 2009 generó expectativas en distintos sectores políticos y sociales en la medida que posibilitaría un mayor control e interés ciudadano sobre las acciones del Estado y la promulgación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana, junto al Instructivo Presidencial firmado con fecha agosto de 2014 que contiene indicaciones complementarias para la “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, evidencian el esfuerzo del Estado por fortalecer la Participación Ciudadana.

Pese a lo anterior, el significado de la Participación Ciudadana en Chile ha permanecido en la ambigüedad y su despliegue ha sido acotado, fundamentalmente, por la falta de estandarización en los canales de participación; la insuficiente información a la ciudadanía sobre los mecanismos de participación y en algunos casos la capacidad del sector público para generar compromisos con los nuevos enfoques de participación ciudadana¹¹⁶.

El Ministerio del Medio Ambiente aprobó en julio de 2015, a través de la Resolución Exenta N° 601, la Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente que establece modalidades formales y específicas en el marco de la Ley N° 20.500. En su artículo 2, señala que los mecanismos de participación ciudadana se basan en 5 fundamentos: la participación como derecho; responsabilidad cívica; derecho ciudadano a la información pública; fortalecimiento de la sociedad civil e inclusión.

La misma Norma, en su título III, establece el Programa de Participación Ciudadana Temprana, que corresponde al conjunto de mecanismos o iniciativas de participación ciudadana impulsadas por el ministerio de manera voluntaria en las etapas más tempranas del diseño de planes, políticas, programas, normas o acciones que tiene como objetivo dar a conocer los antecedentes vinculados al instrumento que ha iniciado su proceso de elaboración e incorporar propuestas o aportes por parte de la ciudadanía. En 2013, se publicó la Guía para la Participación Anticipada de la Comunidad en Proyectos, la cual es una orientación para las empresas, ya que es un proceso voluntario para informar y vincularse oportunamente con las comunidades aledañas, y de esta forma conocer de manera anticipada las preocupaciones e inquietudes de la comunidad cercana al proyecto. Lo que busca esta guía es plantear que la participación anticipada es una oportunidad de vincular a la ciudadanía en las etapas tempranas del ciclo de vida de un proyecto.

Consulta Indígenas

La Ley Indígena N° 19.253 no aborda la consulta propiamente, sino que establece procedimientos de participación respecto de materias relacionadas con cuestiones indígenas (artículo 34); como también establece que los pueblos indígenas deberán participar en el órgano a cargo de la dirección superior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) (artículo 42), que es la encargada de promover y asegurar el desarrollo integral de los indígenas urbanos y migrantes.

Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT el 15 de Septiembre de 2008. Desde el año 2009, el Convenio N° 169 de la OIT es ley de la República en Chile, y por tanto, establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente. De esta forma, tal como reconoce en sus disposiciones el actual DS N° 66 que regula la consulta indígena¹¹⁷. La consulta que se realiza en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe tener por finalidad llegar a un acuerdo entre el órgano público que dicta

la medida y el pueblo indígena que eventualmente puede verse afectado. No obstante lo anterior, la consulta de las medidas administrativas que califican ambientalmente un proyecto ingresado al SEIA, deben considerar no solamente los legítimos intereses de los pueblos indígenas y del Estado, sino que también los aspectos técnicos entregados por la empresa del proyecto. En Chile, las empresas, se involucran en los procesos de consulta realizados por el Estado, a través de las obligaciones que imponen las normativas, en relación a la información que debe entregar la empresa en sus respectivos estudios.¹¹⁸

El Decreto 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, reglamento que regula este procedimiento de Consulta Indígena, el cual tiene por objeto ejecutar el derecho de consulta de los pueblos indígenas el órgano responsable de los procesos de consulta indígena es la administración del Estado que deba adoptar la medida objeto de consulta, que es el responsable de coordinar y ejecutar el proceso de consulta.

Normativas ambientales

Chile cuenta con una Ley Ambiental denominada Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que se promulgó en 1994. El decreto N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, señala que la participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas. En materia de comunidades indígenas, el Servicio diseña y desarrolla un proceso de consulta, que contemple mecanismos apropiados para que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental. De igual manera, el Servicio establecerá los mecanismos para que participen durante el proceso de evaluación de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de que pudiese ser objeto el Estudio de Impacto Ambiental.

En el caso de Estudios de Impacto Ambiental, el titular del proyecto (empresa minera) debe publicar en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional o regional, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con la finalidad de que toda la comunidad esté informada. Una vez publicado el extracto en el diario, la ciudadanía dispone de 60 días hábiles para participar y presentar sus observaciones por escrito ante el SEA, o a través del sitio web del servicio. Mientras dure el período de participación ciudadana formal, el SEA es el órgano que establece los mecanismos que aseguren la participación de toda la comunidad ubicada principalmente en el área de influencia del Estudio de Impacto Ambiental. Por otro lado, las observaciones que elabore la comunidad, la autoridad debe considerarlas. La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) será notificada a todos los que formularon observaciones. Existe una instancia de reclamación, donde cualquier persona que haya formulado una observación y que crea que esta no fue bien respondida puede presentar un Recurso de Reclamación dentro del plazo de 15 días.



2.3. COLOMBIA

María del Pilar Pardo Fajardo, Gestión Ambiental Estratégica:

mppardo@gestionambientalestrategica.com

Martha Cecilia Osorio Bustamante, Gestión Ambiental Estratégica:

mosorio@gestionambientalestrategica.com

2.3.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: el sector extractivo (minería e hidrocarburos) aportó 7,1% al PIB en 2016, de los cuales 5% corresponde a las actividades de hidrocarburos y 2,1% a minería¹¹⁹. La cifra correspondiente al 2010 fue 7%. En 2016, el sector extractivo en su conjunto aportó 49,01% a las exportaciones totales del país¹²⁰. En la producción minera, el carbón y el ferroníquel son los productos más importantes de las exportaciones tradicionales y aportan 15,81% a las exportaciones totales, mientras que el petróleo y sus derivados aportan 33,20%. El sector contribuyó entre regalías directas (entidades territoriales como beneficiarias) e indirectas con un valor de 2.300 millones de dólares estadounidenses a la economía nacional en 2015¹²¹. Estas se generaron en un 80% por el sector de hidrocarburos y el restante 20% por minería. El sector extractivo creó alrededor de 178.000 empleos directos en 2016, lo que corresponde al 0,78% de la población total ocupada a nivel nacional¹²².

Social: Para transformar e incidir en los territorios, el gobierno requiere el relacionamiento con los diferentes actores: la ciudadanía (organizada y no organizada), el sector privado, las agencias de cooperación y demás actores que les permitan avanzar en la consolidación de sus políticas. Estas organizaciones cuentan con diferentes intereses, visiones, recursos (técnicos, de información, económicos) los cuales suelen convertirse en barreras para la inclusión en los escenarios de decisión¹²³. El Atlas de Justicia Ambiental cuenta 69 conflictos (49 en el sector minero) en el sector extractivo¹²⁴. No existe un registro oficial de los conflictos socioambientales. En algunos casos, grupos armados ilegales intervienen en los conflictos¹²⁵.

Buenas prácticas



Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal (2010 - 2014, Colaboración). Diferentes empresas que sustraen carbón y autoridades ambientales acordaron un programa de fomento a proyectos productivos sostenibles y lograron más de 100 acuerdos con propietarios de terrenos agrarios sobre tipo de producción y condiciones de colaboración y la creación de una formación permanente.

Diálogo intercultural con pueblo indígena (2006 - 2013, Diálogo). Se desarrolló un proceso de diálogo entre los diferentes grupos representativos de la comunidad, incluyendo las autoridades tradicionales y la empresa Cerrejón, que contó con la participación de un asesor en temas culturales e involucró un equipo interdisciplinario de la empresa. El cumplimiento de los acuerdos fue validado en las asambleas regulares de la comunidad.

Mapa de Actores



En cuanto a las empresas y gremios, es importante resaltar la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Es la agremiación que agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles líquidos y lubricantes, y el gas natural. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) es una agremiación que nace de la integración de Asomineros de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), Cámara Colombiana de Minería y Sector Minería a Gran Escala, lo que permite

Marco Legal y Regulatorio



su proyección como un gremio articulador de la industria en su totalidad al representar exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero presentes en el país.

A nivel institucional nacional, el Ministerio de Minas y Energía es el ente rector encargado de la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos y energéticos. El Ministerio del Interior es la entidad encargada de la política de descentralización territorial, de derechos humanos y de la seguridad ciudadana. A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el encargado de definir la Política Nacional Ambiental y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental. A nivel regional y local, las gobernaciones y las alcaldías son las autoridades administrativas territoriales, entre otras, las encargadas de orientar las inversiones para el desarrollo territorial. Por otra parte, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible son las encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Existen numerosas organizaciones sociales que incluyen fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, academia, entre otras que inciden sobre las dinámicas de relacionamiento en torno al sector extractivo. A través de diversos canales de participación, velan principalmente para que las empresas cumplan con sus obligaciones en la gestión de los impactos ambientales, sociales y económicos de sus operaciones. Estas organizaciones tienen diferentes niveles de incidencia, algunas más a nivel nacional otras más de ámbito local.

El marco normativo colombiano es extenso, pues contiene disposiciones de carácter general para temas de participación, así como instrumentos legales (leyes, decretos y resoluciones) sectoriales.

Referente a la legislación sobre la participación ciudadana, es imposible negar el reconocimiento y la importancia que adquiere esta con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y sus posteriores desarrollos legislativos. A través de la Ley 134 de 1994 se dictaron las normas sobre los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Adicional a ello, existen otras normas que permiten a los ciudadanos participar de forma individual o colectiva en el control de la gestión pública, como es el caso de las Leyes 152 de 1994 (por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo). Por medio de la Ley 21 de 1991 se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y el Decreto 2613 de 2013 reglamenta este derecho. Mediante la Ley 850 de 2003 se reglamentan las veedurías ciudadanas.



2.3.2. Introducción

El gobierno colombiano decidió, a comienzos de la década pasada, promover a fondo la explotación de recursos naturales no renovables, aprovechando el aumento de precios de las materias primas en el mercado internacional. La decisión se basó en dos circunstancias: de un lado, la posibilidad de aprovechar el potencial geológico existente en el país, parte del cual ya venía siendo explotado por grandes empresas nacionales (Ecopetrol) y por otro, la oportunidad de apropiar un importante volumen de rentas provenientes de la actividad extractiva¹²⁶.

En Colombia, la actividad minera se encuentra estigmatizada ya que no existe un total entendimiento sobre lo que significa un proyecto minero, dado que en el país existen diversos tipos de minería¹²⁷, las cuales tienen diferentes tecnologías, obligaciones y generan diferentes impactos. La diversidad de clases de minería, minerales y volúmenes de producción complejiza tener una narrativa minera que permita entender realmente la dinámica sectorial, la necesidad del Estado por valorizar y concesionar los recursos naturales no renovables y los impactos ambientales y sociales que genera esta industria. Ante esta situación, existen polarizaciones que han llevado el discurso y en especial en épocas electorales a que se escoja entre agua y oro¹²⁸.

Las organizaciones de la sociedad civil han empezado a utilizar los mecanismos de participación que existen en el marco legal colombiano desde hace más de 25 años¹²⁹ como herramienta que garantiza y protege los derechos de las comunidades asentadas en los territorios con potencial minero.

En Colombia, el conflicto armado ha sido un determinante en las formas de entender el territorio. Con un Estado débil en zonas de conflicto, la ocupación se hizo con frecuencia de manera espontánea y sin planeación. El desplazamiento de la población a causa

del conflicto armado ha empujado la frontera agrícola y ha constituido un vector de expansión de grupos armados que construyeron su poder sobre la base del control territorial y social. Esta dinámica ha operado en una especie de círculo vicioso: el control territorial por parte de grupos armados impidió la presencia efectiva del Estado y la provisión de servicios básicos. Esta ausencia fue además terreno fértil para que se instalara la autoridad de grupos armados y prosperaran economías en la ilegalidad¹³⁰.

En noviembre de 2016, Colombia firmó un acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más grande y antigua guerrilla del continente. El acuerdo propone una transformación profunda de la organización política y social con el propósito último de integrar a todos los territorios bajo un solo proyecto de nación¹³¹.

La implementación del acuerdo de paz incluye i) profundas reformas rurales, ii) la lucha contra las economías ilícitas, en particular el narcotráfico y iii) una apertura democrática que dé amplios espacios de participación política a sectores marginados de campesinos y comunidades negras e indígenas, así como a la reintegración económica de los excombatientes¹³².

2.3.3. Buenas prácticas

Durante la investigación, fue posible identificar, documentar y validar un total de dos buenas prácticas, en los niveles de Diálogo y Colaboración. Asimismo, se han identificado otras experiencias de relacionamiento que, aunque fueron documentadas, no se reconocieron en los niveles de relacionamiento por no cumplir con alguno de los criterios definidos en la metodología. No obstante, estas experiencias demuestran esfuerzos que quizás puedan ser consideradas para su sistematización y difusión en el futuro. Estas prácticas se encuentran en el anexo 3. El proceso de validación se realizó a partir de la información oficial entregada por las empresas. Algunos detalles del proceso de negociación y concertación no están disponibles ni fueron autorizados para publicarlos en el informe.

Las buenas prácticas identificadas están en el siguiente orden:

2.3.3.1. Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal

2.3.3.2. Diálogo intercultural con pueblo indígena



2.3.3.1. Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Colaboración



DURACIÓN

2010 – 2014



ACTORES PRINCIPALES

Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones El Tesoro, Norcarbón S.A, Drummond Ltd., Colombia Natural Resources.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Municipio de la Jagua de Ibirico; Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar. Fundación Pro-Sierra, familias campesinas que viven en la Reserva Forestal Nacional Los Motilones.



DESCRIPCIÓN

Explotación minera: en el departamento del Cesar (La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, y Becerril) se encuentra una de las principales zonas mineras carboníferas del país. Las explotaciones están a cargo de las empresas mencionadas. En 2016, en todo el departamento fueron extraídas más que 48 millones toneladas de carbón, equivalentes al 44% de la producción total del país¹³³.

Reserva Forestal Motilones: en esta zona se ubica la Reserva Forestal de los Motilones que se extiende a lo largo de la Serranía del Perijá. El Ministerio de Ambiente autorizó la sustracción de áreas de la Reserva Forestal para continuar con las actividades de explotación minera de carbón concesionadas en la zona para las empresas mencionadas. Una vez autorizada la sustracción se estableció a cada una de las empresas sus respectivas obligaciones de compensación forestal.

Plan de Compensación Conjunto: en 2007, las empresas establecieron un Acuerdo de Voluntades para desarrollar un Plan de Compensación Conjunto, que además de cumplir con las obligaciones de compensación disminuía el área productiva de los predios que se acogieron al programa y aumentaba el área en conservación de la zona al implementar un plan que estableció un corredor de conservación y unos proyectos productivos que generaban ingresos adicionales a las familias que mejoraban sus ingresos. Dicho plan fue aceptado por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Regional Corpocesar¹³⁴. El Plan de Compensación Unificado propuesto, respondió a cada una de las obligaciones de compensación establecidas a cada empresa y es financiado en su totalidad por las mismas.

Conservación y producción: el plan contaba con dos componentes principales: una estrategia de conservación de las áreas por un lado y unos proyectos productivos para la mejora y diversificación de los ingresos de los habitantes de las zonas de influencia de las empresas por el otro lado.

Socialización: el desarrollo del plan inició con una socialización del mismo y un prediagnóstico de las fincas interesadas en participar. Se programaron tres reuniones con las comunidades en la cuenca del Río Sororia y tres en la cuenca del Río Tucuy a las cuales asistieron representantes del Ministerio de Ambiente, Corpocesar y la Alcaldía de la Jagua de Ibirico.

Acompañamiento e implementación: las empresas contaron con el acompañamiento de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta para la implementación del plan como socio local quien facilitó la interacción con las comunidades. También, lideró los talleres y reuniones para lograr los acuerdos de los proyectos productivos.

Selección participativa de proyectos: se elaboraron encuestas de campo y se adelantaron varias reuniones de concertación para seleccionar conjuntamente los proyectos productivos, con base en la experiencia técnica de la Corporación Regional, los conocimientos de los habitantes y los pisos térmicos de la zona. En las reuniones participaron representantes de las empresas, los propietarios de los predios y técnicos de la Corporación Corpocesar.

Acuerdo de Conservación: con cada una de las familias participantes, se firmó un acuerdo de conservación que incluía el pago de un incentivo económico por la conservación de las áreas, el cual correspondía a un pago semestral durante cuatro años y el establecimiento de un paquete de proyectos productivos (siembra de cultivos permanentes y transitorios como tomate, cacao, café, y otros de subsistencia), determinados según el área y la ubicación de los predios.

Mesas de trabajo: a través de mesas de trabajo y reuniones con la comunidad, se conocieron y priorizaron los intereses de las comunidades campesinas, dentro de las cuales se determinó la necesidad de asistencia técnica especializada para los cultivos.

Educación y capacitación: en el marco del programa, se crearon espacios de educación y capacitación permanente con las escuelas como centros de formación. Se realizaron capacitaciones con personal técnico provisto por las empresas con los participantes del Plan Unificado para crear brigadas técnicas, brigadas antiincendios y protectores ambientales como garantes de la zona. Estas actividades hacían parte de los acuerdos establecidos con las familias pertenecientes al plan y con quienes se firmaron los acuerdos de voluntades, aunque no eran actividades obligatorias fueron capacitadas todas las familias vinculadas al Plan Unificado.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

A la fecha se ha invertido por parte de las empresas más de 4,3 millones de dólares y se ha logrado conservar un corredor de cerca de 7.000 hectáreas lo que ha generado beneficios ambientales a la región.

Durante el proceso, se firmaron acuerdos con 195 predios donde se implementaron una diversidad de proyectos productivos (363,5 hectáreas) como siembra de cacao, aguacate, lulo (naranja), tomate de árbol entre otros, los cuales han generado ingresos adicionales a las familias participantes del programa y han logrado diversificar las actividades productivas de la zona. Eso ha disminuido la dependencia de empleos en la industria minera de los habitantes de la zona y la presión sobre los corredores de bosques establecidos para la conservación.



INNOVACIÓN

En el sector extractivo en Colombia no es común que las empresas que operan en una misma zona formulen programas conjuntos que respondan a obligaciones ambientales y sociales. Habitualmente, cada empresa por separado presenta un programa, que es ejecutado en zonas dispersas. En este caso, cuatro empresas mineras del departamento del Cesar establecieron un acuerdo de voluntades con responsabilidad solidaria donde lograron articular sus obligaciones para ejecutar un proyecto conjunto que ha logrado la protección de áreas, la restauración de zonas degradadas, el establecimiento y mantenimiento de sistemas productivos (cultivos) para las familias campesinas, el reconocimiento a la población rural de incentivos ambientales y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: los temas fueron postulados y priorizados por los habitantes de la zona en mesas de trabajo concertadas con las autoridades regionales y los representantes de las empresas.
- Pertinencia según necesidad: a través de un acuerdo de voluntades firmado entre grandes empresas mineras y autoridades se logró un Plan Unificado que reconoce las necesidades de la zona y sus habitantes.
- Sostenibilidad por consenso: el compromiso de las empresas, el seguimiento de las autoridades nacionales y regionales y la apropiación de la comunidad lograron un programa reconocido e institucionalizado que se está replicando en otras áreas de influencia de proyectos extractivos.



ENFOQUES

Enfoque de Desarrollo Sostenible: La práctica apunta a un desarrollo sostenible entendiéndolo como un modelo integral e integrador, que articula de manera equilibrada las dimensiones económica, social, ambiental y cultural¹³⁵. Esta práctica propone otras formas de integración entre empresas y comunidades campesinas buscando beneficios no solo ambientales sino sociales y económicos de largo plazo.



LECCIONES APRENDIDAS

Se logran mayores beneficios para las comunidades cuando se establecen acuerdos de voluntades entre las empresas de industrias extractivas de una misma zona, las autoridades nacionales y regionales y las comunidades directamente impactadas.

La formulación e implementación de los programas son más eficientes cuando se cuenta con un socio local que es validado y reconocido por las comunidades, en el caso del Plan Unificado fue la Fundación Pro Sierra Nevada.

Es necesario realizar un acompañamiento constante a las comunidades para lograr mayor apropiación de los temas y los programas establecidos. Las empresas están diseñando una fase de seguimiento y sostenibilidad de las acciones establecidas que incluye el monitoreo y seguimiento al corredor de conservación establecido y el apoyo de los sistemas productivos mediante un encadenamiento para la comercialización de los productos.



VALIDACIÓN

La práctica ha sido validada con los directores de sostenibilidad de las empresas, con habitantes de la zona y con miembros de la Fundación Pro Sierra que apoyaron el proceso de implementación de los acuerdos. Asimismo, fue validada durante la mesa de trabajo realizada en Colombia, el 11 de julio de 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://youtu.be/G-e4bTcTPEw>

<http://www.drummondLtd.com/programa-de-compensacion-forestal-de-la-serrania-de-perija/>

<http://www.grupoprodeco.com.co/es/sostenibilidad/gestion-ambiental/>

<http://www.corpocesar.gov.co/files/noticia179.pdf>

2.3.3.2. Diálogo intercultural con pueblo indígena

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



DURACIÓN

2006 – 2013



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Cerrejón. Resguardo Indígena (Wayuú) de Provincial (municipio de Barrancas), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.



DESCRIPCIÓN

La Mina Cerrejón: Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en La Guajira, departamento ubicado en el extremo norte de Colombia. La mina ubicada en la Guajira media está unida por un ferrocarril de 150 km al puerto de embarque de Cerrejón.

Resguardo Provincial: dentro de las comunidades del área de influencia de la mina está el Resguardo de Provincial que se encuentra ubicado en Jurisdicción del Municipio de Barrancas. Está compuesto por 447 hectáreas, 553 habitantes, 142 familias. La Asociación de Autoridades Tradicionales de Provincial está constituido por la autoridad tradicional (apushii). La jurisdicción territorial está compuesta por 6 sectores o comunidades: Provincial, Cerrito I y Cerrito II, Cardonalito, Tinajita y Atapchon. Provincial hace parte de la Asociación de Autoridades y cabildos Indígenas Wayuú del Sur de La Guajira “AACIWASUG”, agremiados a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Situación inicial: los conflictos entre la comunidad y la empresa giraban en torno a los impactos percibidos por miembros del resguardo en términos ambientales (aire: gases y olores, emisión de partículas; agua: arrastre de material estéril y carbón al río Ranchería, principal fuente hídrica de la comunidad; ruido y vibraciones por voladuras) y la dificultad para acceder y comprar tierras lo que limitaba sus actividades agropecuarias. La participación de los miembros de la comunidad en las actividades de información generada por la empresa era baja, dada la percepción negativa que tenían de la empresa ya que no se sentían escuchados y no veían una oportunidad de diálogo.

División del resguardo: existía una división entre los líderes del resguardo por el poder dentro del mismo lo que generó una baja fluidez en la información al interior del territorio. Esto sumado a la directriz del Cabildo Gobernador a la comunidad de no participar en los espacios de información ofrecidos por la empresa generó desinterés y desinformación en la comunidad.

Primer acercamiento: la empresa, en 2005, propició algunas reuniones con las que buscaba informar a la comunidad sobre los impactos de la actividad. Sin embargo, estas reuniones no tuvieron un reconocimiento claro de las necesidades e intereses de las comunidades.

Proceso pre judicial: dada la división al interior del resguardo, las autoridades del resguardo le otorgaron poder al Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo para acompañarlos en el proceso de diálogo con la empresa. El colectivo recomendó iniciar un proceso prejudicial para presionar espacios de diálogo y propiciar acuerdos en temas relevantes como los ambientales, sociales y productivos.

El Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo: es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia. En 1980 adquirió su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia, compuesta por abogados y abogadas.

Reconstrucción relacional: en vista del proceso prejudicial, la empresa promovió un espacio entre los representantes de la comunidad y la empresa que tuvo lugar durante un periodo de 6 meses y que se desarrolló con una periodicidad de 15 días aproximadamente.

Comisión negociadora: la comunidad seleccionó su comisión negociadora conformada por el Cabildo Gobernador, dos autoridades tradicionales, un profesor, un promotor de salud y un líder de la comunidad. Ocasionalmente eran autorizadas otras personas de la comunidad para participar en los espacios.

Analista Wayuú: la empresa hizo parte en las negociaciones con un grupo interdisciplinario y estableció la necesidad de contar con un analista de la etnia Wayuú, encargado del relacionamiento con este grupo de interés, considerando en todo momento sus usos, costumbres y lenguaje en las negociaciones.

Importancia de asambleas comunitarias: los espacios generados por la empresa permitieron fortalecer las asambleas del Resguardo como espacio existente, que se reconoció y sirvió para validar los acuerdos con la empresa, aún a pesar de las divisiones internas. Durante las asambleas se tomaron decisiones consensuadas y se informó a la comunidad en general y especialmente a las autoridades sobre el avance de los acuerdos.

Mesa de trabajo y concertación: la empresa y la comisión del resguardo conformaron una mesa de trabajo y concertación en la que se tomaron decisiones principalmente en los siguientes temas: tierras, ambiente, educación y trabajo en proyectos productivos.

Acuerdos: los miembros del resguardo y la empresa encontraron objetivos comunes los cuales fueron conciliados mutuamente y fortalecieron la capacidad para generar acuerdos que generaron beneficio mutuo para la comunidad y la empresa.

Acuerdo vinculante: comunidad y empresa construyeron un acuerdo mutuamente vinculante en el que reconocieron los temas de interés de la comunidad relacionados con tierras, generación de capacidades productivas, fortalecimiento de la vocación agrícola, incentivo a las prácticas responsables agrícolas y ganaderas, promoción de la seguridad alimentaria y promoción de la integración interna de la comunidad.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

La empresa, con el apoyo de un analista Wayuú, promovió los espacios de diálogo para reconocer los temas que afectaban e interesaban a la comunidad, logrando superar un proceso prejudicial y fortaleciendo los espacios de decisión de la comunidad como las asambleas del resguardo. Se crearon mesas de trabajo y concertación que lograron acuerdos que fueron consultados validados y aprobados de manera autónoma con el consentimiento de la comunidad.



INNOVACIÓN

Para recomponer el relacionamiento y lograr una relación de confianza, la empresa decidió incluir dentro de su comisión negociadora a un analista de la etnia Wayuú, encargado del relacionamiento con este grupo de interés que aseguró en todo momento la consideración de sus usos, costumbres y lenguaje en el relacionamiento. El contar con un analista, práctica poco común en los procesos con comunidades, garantizó el enfoque diferencial y la inclusión de la cosmovisión Wayuú, facilitando la elaboración de un acuerdo que refleja las necesidades, intereses y visión como comunidad.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: La buena práctica reconoce cultura, idioma e idiosincrasia de las comunidades. Como parte de la comisión negociadora se incluyen líderes formales e informales de la comunidad, el Cabildo Gobernador.
- Pertinencia metodológica: La comunidad seleccionó su comisión negociadora que consultó de manera autónoma con la comunidad los acuerdos de cada reunión. Nada fue aprobado sin el consentimiento de la comunidad.
- Sostenibilidad institucional: Se logran acuerdos de largo plazo, institucionalizando procesos y generando acuerdos mutuamente vinculantes en torno a temas claves para los actores.



ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: El relacionamiento entre la empresa Cerrejón y el Resguardo de Provincial reconoce la diferencia cultural lo que se evidencia en el respeto a la identidad étnica de la comunidad.



LECCIONES APRENDIDAS

Es necesario identificar los actores claves para mejorar el relacionamiento. El reconocimiento mutuo permite el fortalecimiento de la credibilidad. En el caso específico de Provincial fue importante que la comunidad nombrara una comisión negociadora con la que se sintieran representados y que facilitara los acuerdos ante la división por el poder del resguardo que existía al interior del mismo.

Se considera fundamental realizar visitas personalizadas a los actores, mantener un diálogo transparente en donde lo importante es escuchar los temas de interés para la comunidad.

Aún con el inicio de un proceso prejudicial, este proceso se pudo capitalizar y transformar a un diálogo abierto para potencializar los acuerdos con las comunidades.

Más allá de la atención de solicitudes aisladas del resguardo o del cumplimiento de las obligaciones legales, se construyó conjuntamente un acuerdo mutuamente vinculante en el que se incluyeron los asuntos de interés de la comunidad.

Hubiera sido relevante incluir dentro del proceso alianzas con entidades privadas y del Estado, para que sean garantes de los acuerdos y procesos. Asimismo, hubiera sido útil establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del avance de los programas y proyectos, así como espacios de rendición de cuentas de los representantes hacia su comunidad.



VALIDACIÓN

La práctica fue validada directamente con la empresa (División de Estándares y Estrategia de Responsabilidad Corporativa). Asimismo se realizaron entrevistas y revisaron documentos de organizaciones de la sociedad civil que fueron observadores del proceso de diálogo como Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Crudo Transparente y Fundación Ideas para la Paz y validada durante la mesa de trabajo realizada en el marco de este estudio.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/gestion-social/relacionamiento-con-comunidades-indigenas/programa-de-emprendimiento.aspx>



2.3.4. Análisis de Actores

Las industrias extractivas son actividades económicas que generan dinámicas de cambio en los territorios. En particular, se caracterizan por su impacto social y ambiental, transformando las dinámicas territoriales en especial en materia económica, política y demográfica. Debido a que sectores de la población también reciben beneficios por razón de la inversión y de los posibles encadenamientos productivos, el resultado es que el ingreso al territorio de las industrias extractivas pueda dividir a la población, según sus intereses y posibles oportunidades.



A nivel institucional existen problemas de integración intersectorial y articulación de las entidades, especialmente a nivel central y territorial. Se refleja una baja presencia institucional en las regiones y poca capacidad técnica para abordar las problemáticas de relacionamiento en las regiones, lo que termina siendo asumido por los proyectos a un alto costo¹³⁶.

La industria extractiva en Colombia cuenta con un historial de malas prácticas al trabajar de manera individualizada en los territorios, generalmente por blindarse de posibles consecuencias de su accionar, lo que localmente se interpreta como una falta de transparencia. En un contexto, además, donde a menudo ha coexistido un Estado débil a escala subnacional junto con la presencia de diversos grupos armados ilegales, se ha producido una ausencia de reglas del juego claras para el sector, con bajos niveles de gobernanza¹³⁷. Esta situación ha generado un clima de desconfianza a escala local entre la institucionalidad pública, las comunidades locales y las empresas extractivas que han resultado en conflictos sociales, ambientales y económicos para las partes en los cuales se evidencia que no hay ganadores.

Empresa

En cuanto a las empresas y gremios, es importante resaltar la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) como agremiación que agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles líquidos y lubricantes, y el gas natural. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) es una agremiación que nace de la integración de Asomineros de la ANDI, Cámara Colombiana de Minería y Sector Minería a Gran Escala, lo que permite su proyección como un gremio articulador de la industria en su totalidad al representar exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero presentes en el país.



Gobierno

A nivel institucional nacional, el Ministerio de Minas y Energía es el ente rector encargado de la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos y energéticos. Para atender el relacionamiento territorial, el Ministerio de Minas y Energía cuenta con el proyecto de "Fortalecimiento de la gestión institucional en el territorio y contribución a la gobernabilidad del sector minero energético nacional"¹³⁸ el cual tiene por objetivo mejorar el relacionamiento en territorio y reducir la conflictividad socio ambiental generada por el sector.

El Ministerio del Interior es el rector de la política de descentralización territorial, de derechos humanos y de la seguridad ciudadana, actor relevante ya que lidera el cumplimiento de acuerdos y la interlocución con las comunidades locales¹³⁹.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el encargado de definir la política nacional ambiental y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)¹⁴⁰ es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental. A nivel regional y local, son las gobernaciones y las alcaldías las autoridades administrativas territoriales, entre otras, las encargadas de orientar las inversiones para el desarrollo territorial y garantizar el acceso de la población a redes de bienes y servicios públicos que satisfagan debidamente sus necesidades básicas.

A nivel local, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se convierten en la primera autoridad ambiental a nivel regional. Son entes de carácter público, integrados por las entidades territoriales, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. También se encargan de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, convirtiéndose en una pieza clave del relacionamiento con las comunidades y su entorno. En relación con los recursos y condiciones con los que cada entidad cuenta para atender diversos retos y cumplir sus funciones como autoridad en materia ambiental, las mayores fortalezas de las corporaciones se encuentran en la gestión del talento humano, la ejecución de inversión y el apoyo organizacional, mientras que las principales debilidades están en la planificación del territorio, así como en la autoridad ambiental y capacidad física, tecnológica y financiera¹⁴¹.

Sociedad Civil

La sociedad civil en Colombia está conformada por una variedad de asociaciones formales y no formales con la capacidad de construir puentes entre actores con intereses opuestos y proporcionar información sobre la industria extractiva. La Corporación Transparencia por Colombia ejerce actualmente la secretaría técnica de la Mesa de la sociedad civil para Industrias Extractivas y tiene mucha capacidad para fomentar procesos de diálogo y tejer redes entre la diversidad de actores. Crudo Transparente es otra organización que trabaja especialmente con industrias extractivas -hidrocarburos-, promoviendo buenas prácticas y generando espacios de concertación entre empresas y comunidades locales. Iniciativas de diálogo cuentan también con el apoyo de organizaciones extranjeras con sede en Colombia, como son la Fundación Ford, la Fundación AVINA o el Centro Regional de Empresas Emprendimientos Responsables.

Otras organizaciones buscan más el debate informado y la incidencia en la política pública. Foro Nacional por Colombia genera boletines y publicaciones en torno a las industrias extractivas y la sociedad civil con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia y promover la convivencia de los colombianos y las colombianas. La Corporación Ocasá impulsó el acceso a la información pública en torno a la industria extractiva, trabajando sobre todo con y por jóvenes. Por su parte, Censat Agua Viva es una organización que está más en oposición a las actividades extractivas y busca trabajar con comunidades para resistir, movilizar y transformar. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), tienen la misión de defensa de sus territorios, lo que muchas veces les lleva a situaciones de conflicto con empresas de sector extractivo.

2.3.5. Marco Legal

El marco normativo colombiano es extenso y prolífico, pues contiene disposiciones de carácter general por ejemplo sobre temas de participación ciudadana, así como instrumentos legales (leyes, decretos y resoluciones) sectoriales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir formas de relacionamiento con el sector extractivo. En los instrumentos legales, la única oportunidad formal de relacionamiento entre los sectores Estado, empresa y sociedad civil está presente en la consulta previa (Ley 21 de 1991) y solo aplica para el caso de comunidades indígenas y negras con presencia en los territorios de influencia de los proyectos, dejando por fuera gran parte de las comunidades que no tiene este nivel de reconocimiento y estatus.



Información

En 2014, se expidió la Ley de Transparencia y *Acceso a la Información*. Con esta ley se busca que el Estado entregue a los colombianos la información pública que soliciten, de tal manera que tanto las entidades públicas y privadas además de responder a las solicitudes expresas de información de los ciudadanos, también estén en la obligación de divulgarla "proactivamente, respondiendo a los requerimientos de forma rutinaria, práctica, actualizada, accesible y comprensible".

Dicha ley constituye una nueva herramienta para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública de manera efectiva y transparente. Esto significa que no solo las entidades públicas, sino cualquier persona, movimiento, agrupación, partido o empresa con funciones públicas deben brindar acceso a dicha información, la cual debe ser entregada en igualdad de condiciones de manera ágil y mediante diferentes formatos, físicos o digitales, para que sea de fácil acceso para los peticionarios.



Consulta

Para el sector minero, la principal directriz legal es el Código de Minas, que fue expedido en 2001, el cual tiene como alcance “fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”. En los aspectos procedimentales de esta disposición se contempla un espacio de participación denominado Audiencia y Participación de Terceros (art. 259), que hace referencia a la etapa previa a la firma del contrato de concesión minera, en el cual pueden participar terceros interesados externos al proyecto, comunidades o grupos sociales, a través de figuras como terceros intervinientes.

A su vez, el Código de Minas establece las zonas mineras indígenas y de comunidades negras reconociendo el potencial minero que existe en áreas de propiedad de esas comunidades y el derecho de prelación frente a un interés de exploración y explotación de minerales. Adicionalmente, existe la posibilidad de asociarse con cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés minero; la norma no hace distingo alguno.

En el tema de consulta previa se definió un protocolo de coordinación institucional¹⁴² con el propósito de facilitar: i) la coordinación interna de las entidades públicas involucradas, ii) la integración de las competencias, iii) la distribución eficaz de los recursos, iv) la circulación de la información relevante, v) garantizar la transparencia en los procesos, vi) seguimiento al cumplimiento de los deberes de los funcionarios de las entidades responsables.

En el sector de hidrocarburos, el Código de Petróleos es la norma por excelencia que rige al sector; a pesar de ser de 1953 la gran mayoría de las disposiciones se encuentran vigentes. En el caso en que se requiera adelantar consulta previa, deberá seguir las mismas reglas como del sector minero, expuestas en la parte de arriba de este acápite.

Consulta Popular

Las comunidades de Colombia están convocando, acudiendo y utilizando las consultas populares como mecanismos de participación directa y como herramienta para defender sus derechos económicos, sociales y culturales, estipulados en la Ley 134 de 1994. El Estado colombiano aún no reconoce la voluntad expresada por las comunidades y los resultados obtenidos en las consultas populares cuando estos se oponen a la realización de proyectos dentro de sus territorios; aunque estas consultas se realizan de manera democrática y están ajustadas a la normatividad constitucional y legal colombiana. Mientras la Corte Constitucional revisa la sentencia del Consejo de Estado para definir en efecto qué pasa tras el mecanismo de participación, lo realmente importante es entender por qué se están aumentando estas iniciativas de consulta popular y su real efecto sobre la economía, el empleo y la inversión del país.

Uno de los principales problemas está en la creciente concentración de la toma de decisiones en materia de industrias extractivas y grandes proyectos desde el gobierno central, sin contar con la participación de las entidades territoriales o los ciudadanos. A esto se suma que los diferentes municipios del país están haciendo una apuesta a unos modelos distintos de desarrollo, teniendo en cuenta aspectos como la agricultura para nuevos proyectos en sus comunidades. Las comunidades están viendo que las actividades extractivas no se están traduciendo en mejores condiciones de necesidades básicas, ni con oportunidades de desarrollo por lo cual están exigiendo otro tipo de emprendimientos en su territorio¹⁴³.



2.4. México

Hidrocarburos

Susana Cruickshank, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública: susanacruickshank1967@gmail.com

2.4.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: el sector hidrocarburífero aportó el 10,2% al PIB de México en 2016, mientras que en 2010, este porcentaje fue de 6,9¹⁴⁴. Los estados que más se benefician de los ingresos petroleros son Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. Según estadísticas de PEMEX, empresa autónoma del Estado, los hidrocarburos representaron el 4,6% de las exportaciones en 2016.

En cuanto a empleo, en 2017, 397.240 personas se dedicaron específicamente a la industria extractiva y de la electricidad, de las cuales más del 86,9% son hombres y 13,1% son mujeres¹⁴⁵. Eso corresponde al menos de 1% del total de la población económicamente activa.

Social: México se caracteriza por una sociedad civil organizada incipiente, con alrededor de 35 mil organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender diferentes problemáticas¹⁴⁶. A partir de la intensificación de la inversión extranjera y nacional en proyectos extractivos, algunas organizaciones desarrollan procesos colaborativos mientras que algunos movimientos sociales han formado frentes de resistencia. Gran parte de estos movimientos ha solicitado amparos¹⁴⁷ y algunos han logrado frenar la construcción de los proyectos. El Atlas de Justicia Ambiental cuenta solo 8 conflictos en el sector de hidrocarburos¹⁴⁸. Otras cifras estiman un total de 80 conflictos sociales en el ámbito energético¹⁴⁹.

Buenas prácticas



Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) (2016 – 2017, Diálogo/Alianza). PACMA es un programa de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que impulsa una inversión social a través de la generación de alianzas estratégicas con los gobiernos estatales y municipales, los que en coordinación con el PACMA convocan a los actores clave; así como con la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil. La organización Transparencia Mexicana ha colaborado con PACMA en el diseño de las reglas de operación, que han hecho que los procedimientos sean más ágiles e institucionalizados. La inversión se decide en un proceso participativo en el que los actores sociales definen el proyecto a ser financiado por la empresa, la cual aporta con financiamiento y capacitación al proyecto.

Clúster de Energía Coahuila (2016 – 2017, Diálogo). La empresa GS Oil&Gas ha contratado al Clúster de Energía Coahuila, actor multisectorial en el norte de México, para que facilite el acercamiento con la comunidad. Los diálogos mantenidos han contribuido a un plan de gestión que incluye las necesidades de la comunidad. El diálogo abarca la planificación de los proyectos y se ha establecido un comité comunitario para su seguimiento. Se ha logrado establecer relaciones de confianza.

Mapa de Actores



La empresa estatal PEMEX está en un proceso de apertura hacia un relacionamiento transparente hacia las comunidades. Con la reforma energética en 2014, han entrado nuevas empresas nacionales y transnacionales privadas en el sector petrolero, como Shell, BP y otras. Algunas instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos tienen políticas y prácticas de transparencia y han ganado premios por su innovación. La Secretaría de Energía regula fundamentalmente el sector y se encarga de revisar las evaluaciones de impacto social y las consultas indígenas que competen a proyectos de hidrocarburos así como todos los organismos incluidos en la Reforma Energética, como el Centro Nacional de Control de Energía que regula particularmente el sector eléctrico en México.

Existen en México una serie de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con capacidad para tender puentes entre actores con intereses opuestos en torno de la industria hidrocarburífera. Actores académicos importantes son por ejemplo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con programas de formación tripartita, y el programa de Negociación, Mediación y Diálogo (Prodiálogo) del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que organiza debates multisectoriales sobre la temática. Algunas OSC como el Centro de Colaboración Cívica promueven procesos colaborativos, y otros, como el Centro Mexicano en Derecho Ambiental (CEMDA), hacen litigio en defensa de las comunidades que se acercan a solicitar su apoyo, y lo hacen sin cerrar las puertas al diálogo.

Marco Legal y Regulatorio



En 2011, México tuvo una reforma constitucional que incorpora los tratados internacionales sobre Derechos Humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1990, México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Ley de Hidrocarburos (diciembre de 2014) prevé un estudio de impacto social respecto de las áreas objeto de asignación o contrato (capítulo V, artículo 119) que debe incluir medidas de mitigación e incluye la obligatoriedad de la instrumentación de la consulta indígena (artículo 120). Por otro lado, el artículo 2 de la constitución mexicana, establece que deberán respetarse los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas para definir sus formas de gobierno, cultura y organización, así como preservar sus tierras, entre otros temas referentes al respeto de los pueblos indígenas. En materia de acceso a la información pública, México cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a partir de la reforma de 2017 permite conocer los fondos públicos que reciben personas jurídicas, sindicatos, instituciones autónomas y el poder legislativo además de las instancias de la administración pública.



2.4.2. Introducción

El diagnóstico de relacionamiento debe considerar dos referentes clave: la historia de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus formas de relacionamiento con los actores sociales y políticos; y la reciente reforma energética que entró en vigor a fines de 2014 y que ha permitido la participación del sector privado en el sector. La política de relacionamiento histórico de PEMEX ha generado antecedentes que afectan las posibilidades de relacionamiento entre los actores del sector privado, gobiernos locales y comunidades actualmente.

Para este informe, es indispensable conocer la historia de lo que hoy es el área de Responsabilidad Social de PEMEX. La reforma energética en México es muy reciente y la historia de PEMEX en los estados en los que operó durante décadas determina aún en gran parte el relacionamiento entre empresas y comunidades, y empresas y gobiernos subnacionales. En la década del 70, PEMEX generó un tipo de relación, que con el tiempo resultó en la generación de algunas fallas con presidentes municipales y líderes comunitarios cuando comenzó lo que ahora se conoce como el programa de “Donativos y Donaciones”. En entrevista, dos académicos especialistas en PEMEX¹⁵⁰ explicaron las formas de relacionamiento con algunas comunidades: las donaciones se daban a movimientos sociales que, defendiendo el territorio, no permitían que PEMEX operara sino sólo a cambio de que resarciera los daños causados. Por otro lado, los donativos se destinaban al municipio para obras públicas. Ambas comenzaron a convertirse en cuotas obligatorias que permitían trabajar a PEMEX sin problemas y bajo normas institucionales con enormes vacíos o sin cumplimiento. Actualmente el

programa de “Donativos y Donaciones” de PEMEX sigue existiendo, pero está tomando caminos institucionales, lo que implican una restricción a las normas de las reglas de operación y también cambios en la cultura institucional de PEMEX, en las comunidades y en los gobiernos municipales¹⁵¹.

Las empresas internacionales y nacionales que llegan a instalar proyectos de exploración, explotación o distribución, se enfrentan a una cultura paternalista en las comunidades, muy difícil de abordar, o enfrentan enojo y resistencia por parte de las mismas, debido a los pasivos sociales y ambientales que PEMEX heredó¹⁵². Es importante señalar que PEMEX está en un cambio profundo de cultura institucional. Ya no es una empresa del Estado sino una empresa autónoma del Estado y se encuentra en cambios estructurales y de cultura interna. Actualmente, ya existen criterios para lograr la licencia social de las comunidades y se deben instrumentar las evaluaciones de impacto social y la consulta a pueblos indígenas, igual que todas las empresas privadas¹⁵³.

La reforma energética y la participación del sector privado han obligado a PEMEX a implementar políticas institucionales de relacionamiento. Eso ha generado cierto descontento en comunidades y líderes que se han acostumbrado a políticas más clientelares¹⁵⁴. La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha hecho obligatorio que se desarrollen procesos de consulta indígena a comunidades indígenas y una evaluación de impacto social. Estos dos elementos, pueden ser instrumentos de acercamiento a los actores sociales. Sin embargo, en la práctica, algunos movimientos sociales los han rechazado por percibirlos como un mero trámite administrativo y no como instrumentos que pueden garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas del país¹⁵⁵.

En ese contexto, durante 2014, la Secretaría de Energía realizó procedimientos de consulta con la comunidad indígena zapoteca de El Espinal, Oaxaca; con comunidades del pueblo rarámuri en Chihuahua; con la tribu yaqui en Sonora y con la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza; también en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca¹⁵⁶. No todas las consultas han resultado en procesos de aceptación. Por ejemplo, con la etnia yaqui se suscribió el Acta Marco de Consentimiento, tras haber realizado un procedimiento de consulta previa sobre la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro, que atraviesa en un tramo de 100 kilómetros por su territorio¹⁵⁷. El proceso ha sido complejo, los líderes de la comunidad yaqui aceptaron en un principio que se realizara la consulta previa, libre e informada y aceptaron también la servidumbre de paso.¹⁵⁸ Después de que se realizó la consulta previa, libre e informada, hubo conflictos entre las mismas autoridades de las tribus yaquis, resultando en un proceso conflictivo y a la fecha el proyecto está parado y la comunidad enfrentada.

En 2017 en Yucatán, en el marco de la construcción del Parque Eólico Tizimin, se han realizado consultas en las comunidades de Sta. Clara Dzibalkú, Xkalax Dzibalkú, San Francisco Yohactún y Yohactún de Hidalgo. A julio de 2017, se encuentran en curso consultas indígenas en Muna y Sacalum sobre la construcción de un parque solar. Este proceso ha recibido denuncias de no ser previo, ni libre ni informado. Aún no se ha comenzado la construcción del parque solar, pues el proceso de consulta no está finalizado¹⁵⁹.

El proceso de consulta en México ha sido un proceso de conflicto y algunos proyectos están detenidos, como es el caso del gasoducto Aguaprieta en Lomas de Bacum, en Sonora¹⁶⁰, debido a que las comunidades han argumentado que las consultas no cumplen con los requisitos de ser “previas, libres e informadas” o no respetan las decisiones de los pueblos, a lo cual la Secretaría de Energía ha presentado documentos que acreditan que los procedimientos han sido con base en la legislación. El derecho a la consulta previa tiene una importancia fundamental en tanto se encuentra interconectado con

la protección de otros derechos colectivos. En ese sentido, la Sener, en la Ronda de Licitación de Hidrocarburos 2.2 para exploración, excluyó dos bloques por haber sido rechazado el proceso por comunidades zoques.

México tiene regiones en las que la relación con la industria privada de hidrocarburos y con PEMEX es muy diferente. Esta depende de su historia y su cultura, pero también del tipo de relacionamiento que se ha tenido con gobiernos y sector privado desde la sociedad civil y comunidades indígenas. Por un lado, hay estados como Veracruz, Tabasco y Campeche en los que las características de la cultura y el territorio han generado en algunos casos una forma específica de relacionamiento de las comunidades con PEMEX, diferente al relacionamiento en estados del norte de México como Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas y también muy diferente a la forma de relacionamiento con algunas de las comunidades en estados como Oaxaca y Guerrero donde se observan movimientos de resistencia de las comunidades frente a la construcción de represas, la instalación de minas y de parques eólicos¹⁶¹.

Un enorme reto es que se generen procesos que fortalezcan la confianza de todas las partes y se dé el cumplimiento de la normatividad de manera integral para comenzar a construir un buen ambiente para todos los actores, sea cual sea la cultura local y la historia con otros actores.

2.4.3. Buenas prácticas

La apertura del sector hidrocarburífero con la reforma energética de 2014 permitió la entrada de empresas nacionales y transnacionales privadas. La reforma estableció nuevas formas en el relacionamiento, por ejemplo, con la obligatoriedad de la consulta previa, y también facilitó el desarrollo de nuevas formas de relacionamiento¹⁶². Con eso, el modelo anterior de PEMEX está en proceso de ser revisado y ajustado, sea por la propia empresa o por empresas que operan en zonas que anteriormente contaron con la presencia de PEMEX. Cabe mencionar que también la integración de México en la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva en México, aprobada en 2017, ha impulsado nuevos debates sobre temas de acceso a la información y participación de la sociedad civil en el sector.

Las dos buenas prácticas identificadas hasta 2017 ilustran esta transformación. El Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de PEMEX ha vivido cambios en los últimos años hacia una mayor transparencia, participación, diálogo y sostenibilidad. Por otro lado, el ejemplo de GS Oil&Gas demuestra formas de diálogo, en los que nuevas organizaciones intermediadoras juegan un rol importante en el relacionamiento.

Las dos buenas prácticas que siguen a continuación son:

2.4.3.1. Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)

2.4.3.2. Clúster de Energía Coahuila



2.4.3.1. Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



Diálogo



DURACIÓN

2016 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresas Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa de geo servicios CGG, Compañía de Nitrógeno Cantarell S.A.¹⁶³.

Municipio del Carmen.

Organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana, comunidades (localidad Nuevo Campechito, Municipio Carmen, en el estado de Campeche; y la localidad Nuevo Progreso, en el Municipio Carmen, en el estado de Campeche).



DESCRIPCIÓN

Empresa nacional: PEMEX es la empresa petrolera nacional que hasta la reforma energética en 2013 era la única empresa que podía extraer hidrocarburos del subsuelo.

Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente: para lograr la licencia social, PEMEX puso en marcha el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente

(PACMA), que busca impulsar el desarrollo social a partir de la corresponsabilidad entre los sectores público y privado en comunidades en las que opera PEMEX.

Financiamiento de PACMA: el PACMA opera a través de la aportación, bajo criterios específicos, de alrededor del 2% del valor de los contratos suscritos entre PEMEX y sus proveedores o filiales.

Nuevas reglas de operación: la organización Transparencia Mexicana ha colaborado con el programa en la elaboración de las reglas de operación aportando con objetivos claros, metas e indicadores a ser cumplidos para que los proyectos sean sostenibles. Hacer más ágiles los procedimientos, así como tener formatos específicos e institucionalizados, fue otro aporte de la organización. Las reglas de operación prevén la participación comunitaria para la decisión del proyecto, la revisión técnica y la viabilidad del mismo.

Articulación con gobiernos locales: para llegar a determinar el proyecto en que la empresa filial de PEMEX contribuirá, la coordinación del PACMA trabaja muy de cerca con los gobiernos locales para conocer a los actores locales clave con los que se trabajará. Se revisan los posibles impactos y las poblaciones que serán potencialmente impactadas de forma directa e indirecta.

Diálogo con la comunidad: una vez definido el grupo meta, se revisan los padrones oficiales de pescadores o cooperativas o de la población que sea clave y se convoca a los representantes de los grupos identificados de manera conjunta: PACMA, gobierno local y empresa filial. Se realizan las reuniones que sean necesarias para dar la información que se requiera, escuchar a los representantes de los actores locales, a las organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas. Dependiendo del proyecto y del nivel de conocimiento y confianza que se tenga entre los actores, el proceso puede durar entre tres y seis meses incluso. Una vez que se tiene el consenso de los actores en todos los aspectos, se comienza el proyecto. Si no se tiene el acuerdo de todas las partes, no se comienza el proyecto. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, se determina quién construye el proyecto: si es de infraestructura, se contrata a quien lo construya. En el caso de la fábrica de hielo, se opera por la misma cooperativa de pescadores con acompañamiento técnico. Lo mismo sucede con las cabinas hidropónicas, en donde se brindó capacitación para su operación a las mujeres encargadas.

Definiciones y acuerdos: se comenta que es difícil acordar entre las diferentes visiones dentro de la comunidad sobre lo que necesita, -ya que en muchas ocasiones el conflicto surge cuando no hay acuerdo en las comunidades de qué necesitan- por un lado, y lo que la empresa cree que necesita y lo que la empresa puede aportar por el otro lado. También en muchas ocasiones, las decisiones de los líderes no son compartidas por toda la comunidad. Por eso se tienen varias reuniones para revisar propuestas alternativas y la viabilidad de todas las posibilidades y esto puede llevar mucho tiempo en tomar la decisión definitiva.

Participación local: existe un Comité Técnico conformado por el promotor del PACMA en la región, por un representante del grupo local que propone el proyecto y por un representante de la empresa filial que evalúa cada proyecto mediante una matriz que se levanta con objetivos, metas e indicadores. Los promotores trabajan muy de cerca con los habitantes o líderes del proyecto, que son los operadores del proyecto. Esto implica que los habitantes de la comunidad o todos los beneficiarios del proyecto expresan constantemente sus necesidades y opiniones, mismos que se integran en los formatos y que posteriormente son evaluados por personal técnico según su capacidad y viabilidad técnica.



RESULTADO PRINCIPAL

Se han visitado dos comunidades beneficiarias de PACMA. En la comunidad Nuevo Campechito, que cuenta con 1200 habitantes, se logró armar una fábrica de hielo para un grupo de pescadores, lo que les ahorra importantes gastos. Producen una tonelada de hielo al día, lo que les permite también vender hielo a otras comunidades de pescadores. El grupo beneficiario está constituido por 457 personas. El capital lo puso la empresa CGG de México. En la comunidad Nuevo Progreso se benefician 10 familias de pescadores. En esta comunidad, se ha instalado cabinas de producción de forraje hidropónico. En agosto de 2017 llevan dos meses funcionando y están comenzando a tener ganancias. Producen a diario alrededor de 450 kilos de forraje, a un precio aproximado de 10 centavos de dólar por kilo. En este caso son las mujeres de la familia quienes aportan el dinero. Las mujeres reciben capacitación técnica y el forraje se vende para animales y para consumo humano.



INNOVACIÓN

El aspecto innovador es la sistematización del programa mediante reglas de operación, formatos y lineamientos institucionalizados, que incluye la participación de todos los actores locales y que toma en cuenta las demandas y necesidades de las comunidades o actores impactados directa o indirectamente. En este momento en México, las empresas del sector de hidrocarburos o bien no tienen procedimientos establecidos y sistemáticos que fomenten la participación activa de los actores locales o como es el caso de Shell y BP los tienen sistematizados de manera general, pero apenas están experimentando la forma de instrumentarlo en las culturas locales en México. El PACMA es un programa probado durante muchos años y su sistematización ha implicado la revisión continua con las comunidades, la empresa y otros actores de la sociedad civil.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: La práctica integra mecanismos unilaterales y bilaterales participativos para informar y recibir información a través de las reuniones mantenidas por PEMEX con la comunidad. El PACMA incluye en sus reglas de operación los mecanismos de participación para las comunidades.
- Pertinencia según necesidad: Se realizó un estudio de mercado junto con los grupos de pescadores, por parte de PEMEX y de la empresa que financia, que analizó las necesidades de los pescadores y en tal sentido el proyecto se planteó como una respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad de pescadores.
- Sostenibilidad por consenso e institucional: Los tres sectores de la sociedad (comunidad, empresa y gobierno) reconocen este proceso de relacionamiento y lo utilizan a través de canales de comunicación institucionalizados por el PACMA. PEMEX ha dado apoyos para la capacitación técnica y se ha comprometido a estar acompañando el proceso de la fábrica de hielo. Son normas que se establecen en las Reglas de Operación del PACMA.



ENFOQUES

Enfoque de diversidad: En Campeche la comunidad de pescadores es diversa, ya que pertenecen a grupos indígenas de la región, siendo todos nativos de la comunidad. En este sentido el área de Responsabilidad Social de PEMEX, no hace diferencia para apoyar los proyectos que ellos, a partir de sus formas y prácticas, acuerdan y proponen para ser financiados.

Enfoque de Transformación de Conflictos: La práctica también contribuye a la transformación de conflictos por la colaboración y el consenso tanto entre los pescadores, como con otros actores, PEMEX y las empresas. La comunidad de pescadores explicó en una entrevista que para definir el proyecto, pasaron por varias reuniones en las que algunos de los pescadores querían enfrentarse con PEMEX y no aceptar el proyecto. Tuvo que haber un proceso de manejo pacífico de las diferencias en el que al final algunos de los integrantes de la Cooperativa salieron, pero muchos otros decidieron quedarse y continuar con el proyecto.

Enfoque de Género: En proyecto de cabinas hidropónicas tomó en cuenta la capacidad de las mujeres de la comunidad en cuanto a tiempo y traslado.



LECCIONES APRENDIDAS

El éxito de los proyectos depende en gran medida de la actitud de los actores locales y de las personas que los instrumentan. Con actitud se hace referencia a una actitud que no sea de confrontación, sino más bien cooperativa y de diálogo y escucha. PEMEX tiene pasivos sociales históricos y aún le cuesta mucho trabajo generar confianza en la población, por lo que en muchas ocasiones, los líderes de grupos o actores clave manifiestan desconfianza o exigen dádivas sin querer realizar los trámites institucionales que ahora requiere el PACMA.

Una alianza en este contexto tiene mejores resultados tanto sustantivos como de relacionamiento si parte procesos de diálogo y colaboración previos que vayan creando las condiciones para una relación que busca el desarrollo sostenible.



VALIDACIÓN

Entrevistas con el Subgerente de Planeación y Vinculación de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social de PEMEX y con el Coordinador Operativo de PACMA; la responsable de colaborar con las reglas de operación del PACMA desde la organización Transparencia Mexicana. Entrevistas con integrantes de los grupos de pescadores y con las familias encargadas de las cabinas de forraje, así como con la ingeniera que apoyó técnicamente las cabinas. Se visitaron los proyectos de la fábrica de hielo y de las cabinas de forraje hidropónico, entre otros. La buena práctica fue mencionada en la mesa de trabajo, realizado el 14 de julio de 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_2015.pdf

<http://www.pemex.com/procura/estrategias-de-abastecimiento/Documents/10.%20ANEXO%20PACMA.pdf>

2.4.3.2. Clúster de Energía Coahuila

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo

DURACIÓN

2016 – 2017

ACTORES PRINCIPALES

Empresa GS Oil&Gas. Clúster de Energía Coahuila, habitantes del Ejido Buena Vista en Río Bravo, Tamaulipas.

DESCRIPCIÓN

Inicio de la operación: en Río Bravo, estado de Tamaulipas, opera la empresa GS Oil&Gas S.A. de C.V. Esta es una empresa mediana de capital nacional que licitó por primera vez en 2016, ganando la operación y el mantenimiento de varios gasoductos de PEMEX. Comenzaron a operar en la zona el 23 de noviembre de 2016.

Forma de relacionamiento: para el relacionamiento con la comunidad, GS Oil&Gas contrató al Clúster de Energía Coahuila. Esta organización, se dedica a generar diálogo entre empresas y comunidad en proyectos de energía en la región. El Consejo del Clúster está integrado por empresas, gobiernos locales y academia. Están recientemente comenzando a integrar a representantes comunitarios a su Consejo.

Proceso de intermediación: el Clúster de Energía Coahuila, realiza mediación basada en procesos de planificación participativa de los proyectos. Construyen planes de participación a partir de 4 etapas:

1. Etapa informativa y de sensibilización. A través de un taller para el personal de la empresa se sensibiliza en temas de impacto social, riesgo social, relacionamiento con las comunidades y licencia social para operar.
2. Investigación documental y de campo. El equipo consultor realiza una investigación documental acerca de las comunidades que le permita tener un conocimiento previo del sitio donde se realizará el estudio y se lleva a cabo un acercamiento inicial con actores claves.



3. Inmersión y acuerdos comunitarios. Se realiza una inmersión comunitaria cuyo eje principal es la participación comunitaria. Se realizan recorridos de sitio, cuestionarios específicos y desarrollo de talleres participativos en las comunidades; todas las actividades son adaptadas a la dinámica social de la comunidad donde se trabaje.
4. Construcción de planes de gestión y participación social. Se emiten las recomendaciones a la empresa en materia de comunicación y vinculación con la comunidad a través de un Plan de Gestión Social¹⁶⁴, donde también se considera las medidas de tratamiento a impactos sociales, plan de inversión social y estrategia para el monitoreo del Plan de Gestión Social. Además de esto se proponen auditorías para dar seguimiento al Plan.

Intermediación con Ejido Buena Vista: en el caso de la empresa GS Oil&Gas, la organización Clúster de Energía Coahuila promovió el relacionamiento con la comunidad y realizó intermediación con el Ejido Buena Vista. La intermediación ha implicado brindar información a la comunidad sobre los impactos y tiempos del proyecto, así como sobre medidas de seguridad. El Clúster generó pláticas con la comunidad para escuchar sus preocupaciones sobre el proyecto y se les dio a conocer la legislación a la que pueden apelar en caso de que la empresa incumpla con alguna normatividad. Esto ha permitido que se cambie una situación de desconfianza que tenían los habitantes del ejido hacia la empresa, debido a la historia que se tuvo con PEMEX.

Construcción de confianza: actualmente, la empresa está en diálogo con la comunidad para revisar el tipo de proyectos con los que puede generar beneficios compartidos. La relación entre la empresa y la comunidad se realiza con algunos de los dueños de las tierras y líderes ejidales tomando en cuenta sus dudas, sus necesidades, sus propuestas. Se la asume como una relación de vecindad en la que mutuamente se deben respetar las partes. Los propietarios de la tierra han cambiado su actitud de estar molestos con PEMEX, a tener confianza en la empresa GS Oil&Gas y en el Clúster de Energía Coahuila.

Plan de Gestión: se ha propuesto un comité del ejido que participará en la elaboración y el seguimiento al Plan de Gestión¹⁶⁵. La comisariada ejidal estará a cargo del seguimiento desde la comunidad. El Plan de Gestión incluye los proyectos productivos que financiará la empresa para la comunidad, los caminos y proyectos de infraestructura, las becas, así como los proyectos de resarcimiento ambiental que haya que generar y el tiempo en que serán realizados y sus formas de seguimiento.



RESULTADO PRINCIPAL

Aún es poco el tiempo de relacionamiento entre estos tres actores, pero las reuniones de diálogo e información, las becas, el aporte al equipo de béisbol, el trabajo con las niñas, los niños y los jóvenes, así como la construcción del camino para entrar al ejido, han sido parte de la construcción de una relación de confianza. Estos proyectos y aportes se enmarcan en el Plan de Gestión Social (PGS).

Los programas y estrategias que integran el PGS reflejan la realidad sociodemográfica, económica y de organización comunitaria de la zona, así como el compromiso social que la empresa llevará a cabo durante la permanencia del proyecto. Cabe destacar que aún y cuando el PGS se encuentre en aprobación por la Secretaría de Energía existen diversas acciones que se enmarcan en el PGS y que han sido llevadas a cabo por la empresa.



INNOVACIÓN

La organización Clúster de Energía Coahuila ha comenzado a incorporar recientemente a su Consejo Directivo a representantes comunitarios, empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos comunitarios con el fin de solventar las diferencias que haya entre los actores, específicamente en proyectos de energía en la región norte de México. El tener institucionalizado el diálogo entre diferentes actores, es innovador, pues hasta ahora sólo se han dado algunos espacios que buscan construir diálogo en el ámbito federal y algunas experiencias en el ámbito local, que no han sido institucionalizadas.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: la práctica integra mecanismos para informar y recibir información a través de las reuniones mantenidas por el Clúster de Energía Coahuila con la comunidad del Ejido Buena Vista. Los mecanismos de participación son parte de la estrategia que el Clúster de Energía Coahuila presenta a la empresa para su relacionamiento con la comunidad.
- Pertinencia metodológica y por demanda: el Clúster de Energía Coahuila diseña el relacionamiento a partir de las voces de todas las partes. Esta organización tiene formas estandarizadas para entablar la relación con las comunidades y con las empresas de la región. A la fecha de este diagnóstico, la mayor parte de los acuerdos tomados para el Plan de gestión, han sido propuestos por la comunidad.
- Sostenibilidad institucional y por consenso: Se ha acordado un Plan de Gestión Social entre la empresa y la comunidad, que está en proceso de ser aprobado por la SENER y que está planeado a cinco años con compromiso de monitoreo y evaluación de éste por parte de comunidad, empresa y el Clúster de Energía Coahuila.



ENFOQUES

Enfoque de género: Es importante mencionar que la líder de la comunidad, la Comisaria ejidal es quien tiene la representación de la comunidad con la empresa y esta última reconoce los liderazgos femeninos de la comunidad. Para otorgar las becas a los niños y niñas que viven lejos de sus centros escolares, se toma en cuenta que un porcentaje sea de niñas para favorecer la educación de estas.

Enfoque de Desarrollo Sostenible: la funcionaria encargada desde la empresa busca la sostenibilidad en la participación de beneficios. Un ejemplo es que dentro de las acciones se encuentra la reparación de un camino principal cuyo material se busca que no cause daños al medio ambiente y que sea de alta duración.



LECCIONES APRENDIDAS

La práctica se desarrolla en el norte de México, en el que la cultura es diferente a la del sur y sureste del país. Los conflictos que suceden en el Norte han sido históricamente diferentes. La gente en esta zona acepta la inversión económica y tiene una actitud de diálogo. Uno de los retos de la práctica, es que el diálogo lleve a generar prácticas que permitan que la inversión realmente reditúe en desarrollo para las comunidades y no se pierda en acciones poco útiles o que simulen el diálogo y la inclusión. Otro reto es fomentar que las prácticas se mantengan durante toda la vida del proyecto y que se

fortalezca la perspectiva de género, pues las prácticas con enfoque de género que se realizan ahora, no han sido planeadas exactamente con una perspectiva de género, sino que han surgido como una necesidad observada.

La legislación y la normatividad han sido clave para ordenar los niveles de relacionamiento y las demandas.



VALIDACIÓN

Entrevistas con el presidente del Clúster de Energía Coahuila, así como con el director de la organización y con la directora del Comité de Impacto Social y Ocupación Superficial de la misma organización; con la gerente de seguridad, salud y protección ambiental de la empresa y dos habitantes de la comunidad.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.clustercoahuila.org>

2.4.4. Análisis de Actores

Los actores clave, para fines de este informe, están caracterizados ya sea por su capacidad de generar diálogo e interlocución entre diversos actores, o por su legitimidad social, la seriedad de su trabajo y por su capacidad de generar una amplia opinión pública.

Empresa

PEMEX ha construido una cultura histórica en el país, dejando pasivos sociales y ambientales en las comunidades en las que ha operado. En el marco de la reforma energética, PEMEX está ahora obligada a cumplir con evaluaciones de impacto y consulta a poblaciones indígenas afectadas. Esto no es un proceso inmediato, pues implica cambiar una cultura institucional y la cultura clientelar que generó en diferentes comunidades, problemáticas a las que se enfrentan las empresas privadas nacionales e internacionales que comienzan a trabajar en México a partir de la reforma energética de 2014.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) aglutina a empresas grandes y pequeñas, nacionales e internacionales, y es un actor clave en el diálogo con gobiernos y con comunidades. En el marco de la AMEXHI, se plantean protocolos de funcionamiento ético y de compromiso con los derechos humanos. En la AMEXHI se encuentran entre otras empresas: Shell, British Petroleum, Chevron, Exxon Mobil, Statoil.

Gobierno

En las instancias públicas se destacan a las instituciones que tienen la capacidad de regulación y propuesta de políticas públicas en la materia. Todas ellas: SENER, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y algunas de las generadas por la reforma tienen la capacidad de generar espacios de diálogo entre diferentes actores y de hecho participan en espacios multi-actores de diálogo¹⁶⁶. En el caso de las federales, destacan la Secretaría de Energía (SENER), particularmente la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial que junto con la Dirección de Vinculación con sociedad civil de la Subsecretaría de Electricidad



realizan los procesos de consulta indígena en materia de hidrocarburos y electricidad a nivel nacional; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que de manera estratégica mantiene prácticas de transparencia en las licitaciones públicas para las empresas de hidrocarburos. Las licitaciones como también los contratos de exploración y extracción se encuentran en línea permitiendo conocer tanto los criterios de asignación como los montos.

Sociedad Civil

Destaca el papel de tres centros de investigación:

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, que a partir de una maestría en medio ambiente y energía y un diplomado en evaluación de impacto social y consulta indígena, genera diálogo entre funcionarios de empresas,

líderes comunitarios, académicos y líderes de la sociedad civil. Su objetivo es generar especialistas en los temas de impacto social y consulta indígena. Su seriedad y rigor, le dan credibilidad con diferentes actores en México.

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a través del Programa Prodiálogo, ha generado espacios de debate entre comunidades, académicos, estudiantes de posgrado y funcionarios de empresas, de tal manera que se ha convertido en un actor clave en la materia. Además, es el primer centro en impartir en México un taller avanzado en mediación de conflictos empresa - comunidad con expertos internacionales. El Tecnológico de Monterrey, a través de la EGADE Business School, está construyendo espacios de profesionalización en administración de empresas energéticas, en particular en conocimiento tecnológico y en la nueva legislación energética.

Destacan las organizaciones de la sociedad civil con trabajo a nivel nacional que acompañan los procesos de diálogo entre diferentes actores y que buscan el fortalecimiento de capacidades de actores comunitarios así como incidir en espacios y políticas gubernamentales para fortalecer los ámbitos que lo requieran. Se subraya el papel del Centro Mexicano en Derecho Ambiental (CEMDA) que por un lado hace litigio estratégico en defensa de derechos ambientales, pero también tiene la capacidad de construir espacios de diálogo entre comunidades y empresas. En el mismo sentido, el Centro de Investigación y Análisis FUNDAR, que acompaña fundamentalmente procesos de resistencia pero que, a partir de informes de investigación crítica, genera opinión pública e incide en políticas y programas públicos. En este mismo ámbito, se encuentra la organización Project PODER, que busca incidir en la agenda empresarial, de tal forma que las empresas cumplan con los derechos humanos de las comunidades en las que desarrollan proyectos.

En cambio, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) son considerados Think Tanks. Transparencia Mexicana es parte de la iniciativa EITI y además es parte del Consejo Ciudadano de PEMEX. Contribuye con asesoría técnica a empresas estatales y a instancias públicas. El IMCO también, a partir de información técnica, contribuye a EITI con la generación de propuestas técnicas. La organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social es reconocida por su contribución al

fortalecimiento del tejido social en comunidades afectadas por proyectos de desarrollo. Fundamentalmente, ha contribuido a la generación de protocolos de beneficios compartidos de proyectos de desarrollo. El Centro de Colaboración Cívica, además de generar espacios de fortalecimiento de capacidades, genera espacios de mediación y transformación del conflicto.

Existen dos espacios de interlocución: el Foro de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas, que es una plataforma global para examinar e intercambiar experiencias sobre la aplicación de los principios sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas en el cual desde México participan organizaciones de sociedad civil, algunas empresas e instancias del gobierno mexicano.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos fue instalado en 2015 por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, con el objetivo principal de implementar la Estrategia 4.4 del Programa Nacional de Derechos Humanos, que impulsa al Gobierno de México para promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado a través de la realización de un Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Se instaló como un espacio plural y participativo, integrado por representantes del sector empresarial, empresas productivas del Estado, sector académico, gobierno, expertos, organismos internacionales, sindicatos, poder judicial, poder legislativo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Este espacio se considera como un actor clave, por la confluencia de actores en él y por la influencia en empresas y gobiernos. La fortaleza de estos espacios radica en la capacidad de convergencias que se han logrado entre actores con distintos intereses y posiciones, encaminadas a generar acercamiento en las posiciones de empresas y comunidades, con base en un marco de derechos.

2.4.5. Marco legal

México suscribió el Convenio 169 de la OIT el 3 de agosto de 1990. El derecho a la consulta previa se extiende en diversas modalidades a cualquier disposición legislativa o administrativa que pueda afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o tribales.

A nivel nacional, en 2011 México tuvo una reforma constitucional que incorpora los tratados internacionales sobre Derechos Humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹⁶⁷, y se contempla los niveles de relacionamiento información y consulta en la nueva legislación y en sus reglamentos. En el artículo 1 y 2 se reconoce que el Estado Mexicano es pluricultural y se garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, “así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” También se reconoce el derecho de las poblaciones indígenas a la libre determinación y que ésta se debe reconocer en las legislaciones nacional y local.

Ley de Hidrocarburos

El artículo 118 de la Ley de Hidrocarburos señala que el desarrollo del sector energético se realizará atendiendo principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos. Para implementar dicho enfoque dispone de tres instrumentos fundamentales: mecanismo para los términos y condiciones del uso superficial de las tierras; estudios y evaluaciones de impacto social: consultas previas, libres e informadas a pueblos y comunidades indígenas¹⁶⁸.

El objetivo principal del estudio y evaluación de impacto social (Evis) es identificar y analizar los potenciales impactos en los derechos humanos y la dinámica social de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de las obras y actividades relacionadas con proyectos energéticos, de tal manera que se puedan diseñar soluciones adecuadas de mitigación y gestión social. La Evis conseguirá que los proyectos energéticos se lleven a cabo exitosamente al asegurar una relación armoniosa y productiva entre la empresa, el proyecto y las comunidades impactadas por el proyecto. Los reglamentos de la ley detallan los requisitos mínimos que deberá cumplir un Evis y de igual manera, establecen que deberán publicarse las disposiciones administrativas de carácter general respectivas. Las disposiciones, que servirán de guía para la elaboración de una Evis, se encuentran en proceso de comentarios por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)

La misma ley dispone en su Capítulo V. Del Impacto Social, en el artículo 119, que la Secretaría de Energía, previo al otorgamiento de una asignación, o de la publicación de una convocatoria para la licitación de un contrato para la exploración y extracción, realizará un estudio de impacto social respecto de las áreas objeto de asignación o contrato, a fin de que se pueda prever la presencia de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y la necesidad de realizar acciones para salvaguardar sus derechos.

Además dispone en su artículo 121 que los interesados en desarrollar proyectos en el sector hidrocarburos deberán presentar ante la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de las actividades que se pretenden desarrollar, así como las medidas de mitigación correspondientes, en los términos que habrán de precisarse en el reglamento de la ley correspondiente.

Finalmente, y con la intención de salvaguardar los intereses y derechos de las comunidades en las que se desarrollen proyectos del sector hidrocarburos, el artículo 120 establece que deberán llevarse a cabo los procedimientos de consulta libre, previa e informada por parte del Estado, en los cuales pueden participar las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias y filiales, así como particulares, conforme a la normatividad aplicable.

Ley de la Industria Eléctrica¹⁶⁹

En el artículo 119 se establece que con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan.

- En dichos procedimientos de consulta podrán participar la Comisión Reguladora de la Energía, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales, así como los particulares.
- Existen varios proyectos para una Ley General de Consulta y a nivel estatal como la “Ley de Consulta Indígena para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí”.



2.5. MÉXICO

Minería

Fabiola S. Sosa-Rodríguez, Universidad Autónoma Metropolitana: fssosa@gmail.com

2.5.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en 2016, la industria minera (metálica y no metálica) aportó 2,78%¹⁷⁰ al PIB¹⁷¹, con respecto a 1,03% del total del PIB que aportó a la producción la industria minera en 2010. Con con 75,5% de los ingresos recaudados por los derechos especiales y extraordinarios se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (conocido como Fondo Minero), el cual recibió en 2016 recursos por 116,55 millones de dólares, que se transfirieron a 199 municipios en 25 estados mineros del país¹⁷²: 62,5% del total se transfirió a los municipios donde se extraen los minerales, y 37,5% restante a la entidad federativa correspondiente para la realización de obras de infraestructura ambiental, social y educativa. Finalmente, en 2016, la minería metálica generó 354.702 empleos directos totales en la industria minera metálica, lo que equivale a 0,67 % del total de empleados en México. Del total del personal contratado en la minería metálica 92% son hombres y 8% mujeres¹⁷³.

Social: la percepción actual de la minería en México atraviesa por posiciones encontradas. Por un lado, se percibe rechazo porque la actividad minera no se ha traducido en mejores condiciones de vida para algunas comunidades afectadas, desplazando actividades económicas existentes y generando desempleo al cierre de la mina, además de existir una creciente preocupación por los impactos ambientales y a la salud resultado de esta actividad. Esta situación ha contribuido a la ocurrencia de conflictos socioambientales¹⁷⁴. El Atlas de Justicia ha identificado 21 casos de conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera¹⁷⁵. En una revisión hemerográfica se identificó que los conflictos registrados en el Atlas de Justicia están subestimados; no existe ninguna fuente oficial que registre dichos conflictos y sus características.

Por otro lado, también existen opiniones favorables para atraer más inversión en proyectos mineros, al ser considerados como una estrategia de desarrollo económico. En este sentido, la minería es considerada como un sector estratégico de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyas estrategias (estrategia 4.8.2) se encuentra promover las inversiones y competitividad del sector minero, mejorando su financiamiento, cadena de valor, las capacidades para las pequeñas y medianas empresas, además de modernizar la normatividad institucional¹⁷⁶.

Buenas prácticas



Plan Integral de Cierre (2014 – 2017, Diálogo/Colaboración/Alianza). La empresa canadiense New Gold, en su proyecto Minera San Xavier, elaboró, comenzando dos años antes del propio cierre, un plan de cierre integral en forma comunicativa y participativa. Fue el primer plan participativo de cierre en México, siendo considerada una práctica innovadora al poner en evidencia la relevancia de planificar con antelación el cierre de operaciones, no solo desde un enfoque económico sino también social y ambiental. El plan fue construido mediante mesas de diálogo con la comunidad y los empleados. Las mesas fueron facilitadas por Centro de Colaboración Cívica¹⁷⁷.

Mapa de Actores



Plan de Reasentamiento Participativo Torex Gold, Minera Media Luna (2013 - 2016, Diálogo/Colaboración/Alianzas). Dos años antes del inicio de las actividades de explotación, la empresa canadiense Torex Gold inició el proceso del reasentamiento participativo de dos comunidades (La Fundición y Real del Limón, las cuales incluyen 102 hogares, conformados por 500 habitantes) con el fin de permitir el inicio de la fase de explotación de oro por medio de Minera Media Luna. Un estudio de línea base social y ambiental, así como un relacionamiento profundo con las familias informaron sobre el plan de reasentamiento.

Casa Grande: Grupo México (2008 - 2017, Alianza). Grupo México cuenta con la mayor producción de minerales metálicos en México y es el cuarto productor de cobre más grande del mundo. Esta empresa lleva a cabo en sus zonas de operación un programa de desarrollo comunitario denominado Casa Grande. Este programa se basa en la realización de diagnósticos participativos sobre el estado actual y las aspiraciones de la comunidad. Para ello, se constituyó un Comité Comunitario compuesto por miembros voluntarios de la comunidad, quienes supervisan que se lleven a cabo los proyectos de desarrollo seleccionados con el financiamiento de Casa Grande.

Monitoreo participativo de la calidad del agua (2016 - 2017, Información/Diálogo/Colaboración). Las comunidades de Nuevo Balsas, Guerrero, cuya principal actividad económica es la pesca, hicieron un reclamo a la empresa minera Media Luna (Torex Gold) como resultado de su preocupación por posibles impactos de sus operaciones en la calidad del agua de los ríos donde realizan esta actividad. Con este antecedente, la empresa inició un proceso de monitoreo participativo de la calidad del agua en colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) y miembros de la comunidad.

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) (2013 - 2017, Información/Diálogo). La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una normativa internacional que promueve la transparencia en los flujos económicos derivados de la explotación de minerales, petróleo y gas de los países que son miembro. Está diseñada y supervisada por una coalición de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSC), inversores y organizaciones internacionales. México ha trabajado por más de tres años para presentar su candidatura, la cual fue aprobada por el Secretariado Internacional en 2017.

La industria minera está conformada tanto por empresas con capital mayoritaria o totalmente mexicano, así como por empresas extranjeras, principalmente de capital canadiense. Las empresas que cuentan con financiamiento internacional, cumplen con los requisitos que las instituciones que las financian les exigen para garantizar un ambiente favorable de negocios¹⁷⁸; por ende, sus prácticas suelen ir más allá de lo que exige la normatividad mexicana vigente. Existen empresas que aunque no reciben financiamiento internacional, realizan de manera voluntaria acciones que favorecen mejores prácticas de relacionamiento social y ambiental. Sin embargo, también existen empresas que cumplen con lo mínimo que exige la normatividad mexicana, con visiones más tradicionales sobre el actuar de la industria.

Marco Legal y Regulatorio



La participación del gobierno está enfocada en aspectos administrativos y de promoción de la inversión en la minería como actividad estratégica; siendo un ente regulador entre las empresas y las comunidades. A nivel federal, las diversas secretarías cumplen con sus funciones en materia de planificación, coordinación y administración de las políticas públicas enfocadas en la minería; además de intervenir en la administración del Fondo Minero, en el fortalecimiento de la transparencia en la industria minera y sus flujos económicos, y en la regulación de las condiciones de trabajo y ambientales¹⁷⁹. En el caso de los gobiernos estatales y locales, éstos mantienen una relación estrecha con las empresas mineras, dado que sus inversiones son consideradas clave para el desarrollo de sus municipios y estados. Son los gobiernos locales los que tienen una mayor interacción con las comunidades, al ser las instancias que atienden en primer lugar denuncias, conflictos o el desarrollo de proyectos para la mejora en las condiciones de vida de las comunidades.

Las universidades juegan un rol relevante en el sector, dadas sus capacidades para formar capital humano y generar conocimiento; cuentan con vínculos en todos los otros sectores, lo que les permite influir en la opinión pública y toma de decisiones. En el caso de las OSC, muchas cuentan con la confianza de las comunidades. Algunas tienen la capacidad de tejer redes entre actores participando en procesos de negociaciones o capacitaciones, pero pocas colaboran con las empresas del sector para emprender planes o proyectos conjuntos. Un hallazgo de la investigación, es que son las organizaciones comunitarias las que participan más activamente, con posiciones tanto de confrontación como de colaboración con las empresas mineras con el fin de que sus comunidades reciban los mayores beneficios posibles durante la operación y cierre de las mismas.

La legislación que regula la minería en México se deriva del artículo 27 constitucional, en donde se establece que es propiedad de la Nación el dominio de todos los recursos del subsuelo, definiéndose un régimen de concesiones particulares la explotación de los minerales. La Ley Minera fue modificada en 1992 durante la apertura económica, favoreciendo un incremento de la inversión extranjera, al facilitar los trámites para la asignación de concesiones y apertura de empresas. En materia de acceso a la información la promulgación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gubernamental y Protección a Datos Personales fue un avance significativo, a la que se sumó el compromiso del gobierno federal en materia de transparencia en las industrias extractivas con la incorporación de México como país candidato en 2017 al (EITI). Aunque México firmó el Convenio 169 de la OIT, hasta el momento, no se ha realizado una consulta de este tipo, ya que por lo pronto no han coincidido operaciones mineras y pueblos indígenas, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). La CDI, a solicitud de la Subsecretaría de Minería, es la instancia que determina las comunidades que son consideradas como indígenas o equiparables, y por ende, cualquier decisión que afecte su territorio deberá ser consultada previamente¹⁸⁰.

2.5.2. Introducción

México es un país con tradición minera que cuenta con una gran variedad de recursos minerales, por lo que ocupa un lugar privilegiado para la inversión extranjera y nacional. Es el país número uno en producción de plata y se encuentra entre los diez primeros productores de oro, cobre, plomo, cadmio y zinc. En la última década, su producción minera se ha incrementado significativamente, registrándose 1.190 proyectos mineros: 74% en exploración, 17% en operación, 5% en suspensión y 4% en desarrollo¹⁸¹. Dichos proyectos forman parte de 25.510 mil concesiones mineras, que comprenden 12% del territorio nacional¹⁸².



Debido a las modificaciones en el marco legal durante la apertura económica a principios de la década del noventa, se crearon condiciones más favorables para la inversión extranjera, convirtiéndose México en un destino de gran interés de inversión para la industria minera. Con respecto al número de empresas, previo a las reformas en la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera, la actividad minera en el país se concentraba en tres grandes empresas con capital mayoritaria o totalmente mexicano: Grupo México, Industrias Peñoles y Frisco. Actualmente, se registra un total de 267 empresas con capital extranjero que operan 927 proyectos en México¹⁸³. La inversión extranjera alcanzó un máximo histórico en el 2012 con un monto de 8.043 millones de dólares, siendo los capitales canadienses la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) al concentrar 65% del total de la inversión recibida, seguidos de capitales provenientes de Estados Unidos (17%), China (5%) y Japón (2%)¹⁸⁴.

Actualmente, el entorno de volatilidad en el valor de los metales, la falta de fuentes de financiamiento y los cambios en las contribuciones a las que están sujetas las empresas mineras, han obligado a la industria a reevaluar sus proyectos en México. Esta situación se suma al reto de crear un ambiente de negocio sostenible, para lo cual es indispensable que las empresas mejoren su relacionamiento con otros actores clave en la industria, basado en criterios de mayor transparencia y acceso a información, de responsabilidad social corporativa, y de un compromiso por mitigar los impactos sociales y ambientales a lo largo de la vida de los proyectos. Si bien, la industria minera en México ha sido una actividad de una gran tradición en el país, también es cierto que se requiere seguir trabajando para crear las condiciones que permitan que esta actividad se convierta en una actividad estratégica que promueva el desarrollo económico del país y de las comunidades en donde se realiza esta actividad.

2.5.3. Buenas prácticas

En esta sección se detalla el proceso que siguieron cinco de las buenas prácticas identificadas para mejorar el relacionamiento con la sociedad civil y las comunidades de la industria minera en México. En el anexo 3 se pueden consultar las fichas informativas de otras prácticas identificadas, pero no validadas.

Con base en la investigación realizada, se identificó que las OSC que han colaborado con las empresas mineras en las buenas prácticas mencionadas, actuaron para mejorar la colaboración y el éxito de estas prácticas y garantizar la transparencia y el acceso a la información. Otro aspecto clave para el éxito de las mismas, fue la integración de los miembros de la comunidad en el diseño y decisiones del proyecto; esto con el fin de facilitar la formación de capacidades, así como su apropiación por parte de la comunidad.

A continuación, se analizarán buenas prácticas en los niveles de relacionamiento de Información, Diálogo, Consulta, Colaboración y Alianza, que incluyen:

2.5.3.1. Plan Integral de Cierre

2.5.3.2. Plan de Reasentamiento Participativo

2.5.3.3. Programa de Desarrollo Comunitario “Casa Grande”

2.5.3.4. Monitoreo participativo de la calidad del agua

2.5.3.5. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

2.5.3.1. Plan Integral de Cierre

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2014 – 2016



ACTORES PRINCIPALES

Empresa San Xavier (New Gold). Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. ONG Centro de Colaboración Cívica y Futuros Económicos Sustentables, Tecnológico de Monterrey, comunidades Zapatilla y Portezuelo (empleados, población).



DESCRIPCIÓN

Inicio de extracción de oro: en 2007, la empresa canadiense New Gold empezó sus operaciones con la extracción de oro como parte del proyecto San Xavier, en el municipio del Cerro de Pedro, en San Luis Potosí, México. Para mediados de 2016, inició el cierre gradual de operaciones.

Preparación del cierre de actividades: en 2014, la empresa inició la comunicación y la organización de mesas de diálogo para informar a los empleados, contratistas y comunidades sobre el cierre de la mina. Elaboró planes participativos que consideraban aspectos relacionados con la remediación biofísica, económica, laboral y cultural.

Colaboración de actores: para el proceso participativo que retroalimentara el plan integral de cierre, New Gold promovió la colaboración con una organización de la sociedad civil. Centro de Colaboración Cívica (CCC) y New Gold establecieron acuerdos en materia de transparencia y acceso público a los resultados. Durante 10 meses, CCC

desarrolló talleres y mesas de trabajo con las comunidades y los empleados para elaborar un primer diagnóstico, orientado a determinar en qué medida las comunidades dependían de la actividad económica que la minería generaba. Asimismo, CCC realizó infografías que ayudaron a proponer talleres y programas de desarrollo comunitario. Con los empleados de la mina, se organizaron encuestas y talleres para identificar qué capacidades les gustaría desarrollar para su reinserción laboral o para iniciar sus propios negocios al cierre de la mina.

Programas de emprendimiento y talleres de capacitación: con base en los resultados del proceso participativo, New Gold desarrolló programas de emprendimiento y talleres de capacitación impulsados por instituciones locales públicas y privadas, con las cuales se iniciaron nuevas colaboraciones y alianzas tanto con universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales.

Ejemplos de los programas: el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) apoyó para capacitar a los empleados en mecánica automotriz, plomería, electricidad y computación. Con el Tecnológico de Monterrey se impartieron talleres “yo emprendo” y “cursos de ahorro y finanzas personales” para sentar las bases y conocimientos en materia de cultura empresarial. La organización canadiense Futuros Económicos Sustentables apoyó con la intención de otorgar mejores herramientas y conocimientos para que las comunidades desarrollen proyectos productivos exitosos. New Gold estableció un convenio estratégico con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto de Capacitación para el Trabajo para priorizar la creación de oportunidades para el empleo y la capacitación para el autoempleo.

Programa de emprendimiento: gracias a estas acciones, que han mejorado la autoestima y la confianza de la población de las comunidades de la zona de influencia de Minera San Xavier, sus pobladores siguen impulsando programa de emprendimiento para colaborar en la economía local y participar en el comercio de su comunidad y su entorno.

Cierre ambiental: otro de los planes de cierre que la empresa se ha encargado de trabajar es el plan participativo de cierre ambiental. El plan respondió a la preocupación de las comunidades por los pasivos históricos ambientales¹⁸⁵. Desde 2016, Minera San Xavier ha estado realizando diversas tareas de cierre biofísico, dando inicio al programa de disposición de suelo¹⁸⁶ vegetal para la revegetación y reforestación de terrenos del tajo. Este plan también incluye la remediación y desarrollo del “Paseo Patio Victoria”, un patio antiguo de mina que se está remediando ambientalmente para que constituya un camino que permita a los turistas llegar al centro del municipio de Cerro de San Pedro, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la zona¹⁸⁷.

Legado de New Gold: New Gold tuvo la capacidad de sumar el conocimiento de la sociedad civil y de las comunidades a proyectos que hoy día pueden permanecer en el tiempo como un legado de esta empresa. Entre estos emprendimientos se encuentran: la elaboración y comercialización de productos gastronómicos de alta calidad, promover el cultivo del cactus nopal para su comercialización local y estatal, e impulsar el desarrollo del turismo en el municipio del Cerro de San Pedro, buscando obtener el distintivo de “Pueblo Mágico”.¹⁸⁸ Otro emprendimiento relevante es la creación de la fundación “Todos por Cerro de San Pedro”, la cual operará los fondos semillas para que la comunidad continúe desarrollando alternativas económicas después del cierre de la mina.



IMPACTO/ RESULTADO PRINCIPAL

Los pobladores del Cerro de San Pedro, Real del Potosí y las comunidades de la Zapatilla, Calderón, Portezuelo, Joyita de la Cruz, Monte Caldera y Divisadero siguen impulsando programas de emprendimiento para colaborar en la economía local y participar en el comercio de su comunidad y su entorno, tanto con un taller de platería, la apertura de restaurantes y hoteles en el municipio, así como con la capacitación como guías de turistas para apoyar la transición hacia las actividades turísticas como una alternativa económica para el desarrollo de este municipio y sus comunidades.

Se ha invertido en obras de infraestructura para las comunidades del Cerro de San Pedro como la rehabilitación y construcción de caminos (i.e., la calle Benito Juárez, el empedrado de la Calle Hidalgo, el camino de la comunidad La Zapatilla a Portezuelo), redes eléctricas, obras de drenaje y agua potable, asfaltado de caminos, construcción y equipamiento de aulas, escuelas y clínicas (i.e., Centro de Salud Comunitaria en Planta del Carmen), y la rehabilitación y restauración de edificios y monumentos históricos (i.e., la Casa Ejidal Cerro de San Pedro, rehabilitación del Templo San Pedro Apóstol). Se han reforestado 393 hectáreas de la huella ambiental de la mina.



INNOVACIÓN

Este es el primer plan participativo de cierre económico y plan participativo de cierre ambiental que se realiza en México por parte de una empresa minera, que incorpora las preocupaciones, intereses y propuestas de la comunidad para desarrollar las capacidades requeridas en aras de garantizar la estabilidad y diversificación económica de la comunidad y mejorar la calidad ambiental después del cierre de la mina. También es la primera vez en México que una empresa minera toma la decisión de hacerse cargo de los pasivos ambientales históricos¹⁸⁹ en los sitios en donde se encuentran sus operaciones al cierre de su mina, realizando una de las obras de recuperación ambiental de espacios urbanos más importantes a nivel estatal.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el plan de cierre siguió una metodología propia que incluyó varias fases de sistematización de opiniones con las familias de las comunidades aledañas, trabajadores, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, cuyo carácter mostro ser vinculante.
- Pertinencia según demanda: al ser tomadas en cuenta las opiniones e intereses de los trabajadores y de las comunidades de la zona de influencia, se dio un proceso de apropiación por la comunidad del plan integral de cierre, además de reducirse la incertidumbre económica resultado del cierre de la mina.
- Sostenibilidad financiera: New Gold apoyó la creación de la Fundación “Todos por Cerro de San Pedro”, que cuenta con un “fondo semilla” en el que la empresa ha invertido, y que se seguirá gestionando junto con la comunidad para continuar con el desarrollo de nuevos proyectos productivos en las comunidades de zona de influencia.



ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: se hizo un esfuerzo especial para la restauración de edificios y monumentos históricos en la zona para atraer el turismo, pero también mantener las tradiciones de las comunidades. Adicionalmente, los programas y talleres realizados en las comunidades consideraron la participación de diversos grupos sociales. Los talleres intentaron involucrar las diferentes ideologías de los pobladores a través del respeto, el diálogo y la comprensión.

Enfoque de Género: se promovió el desarrollo de nuevos proyectos productivos por parte de las mujeres de la comunidad, quienes comercializan los productos que elaboran tanto a nivel local como estatal (i.e., conservas), y han participado en la conformación de restaurantes y hoteles en el municipio, además de recibir capacitación como guías de turista.



LECCIONES APRENDIDAS

El éxito del plan integral de cierre radica en la colaboración y conformación de alianzas basadas en la formación de capacidades y la transparencia y acceso a la información resultado de los talleres y mesas de trabajo por parte de todos los sectores involucrados (trabajadores, miembros de la comunidad, OSC, autoridades locales y estatales y empresa).

Mejorar el relacionamiento entre actores requiere el compromiso de las empresas de ir más allá de lo que exige la normatividad vigente, comprometiéndose con el desarrollo económico y ambiental de los lugares en donde están sus operaciones, para lo cual debe existir la apertura por parte de la empresa de integrar a las comunidades en la planeación del cierre de operaciones, favoreciendo un proceso de apropiación de las estrategias que se implementarán.

La participación del gobierno en la definición de estos planes de cierre económicos y ambientales es fundamental, no sólo por el acompañamiento que pueden proporcionar a la comunidad, también porque se pueden crear sinergias que favorezca el desarrollo económico y ambiental de las zonas de intervención, mediante la definición de programas y planes que acompañen las operaciones de las empresas mineras y que den garantía a los pobladores de la adecuada prestación de servicios públicos en sus comunidades después del cierre de operaciones de las empresas mineras.



VALIDACIÓN

Se entrevistó a los actores clave involucrados como representantes de la empresa New Gold/ Minera San Xavier (MSX), Centro de Colaboración Cívica, y empleados de las comunidades de la Zapatilla, Calderón, Portezuelo, Joyita de la Cruz, Monte Caldera y Divisadero, así como miembros de las comunidades mencionadas que no laboran en la mina. La práctica se validó y analizó con los miembros de los tres sectores que asistieron al taller sobre mejores prácticas de relacionamiento entre actores en la industria minera en México, 13 de julio de 2017



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

- New Gold (2017). Operating and Financial Highlights. Second quarter report 2017. New Gold, Canada.
- ____ (2016). Reporte de Sustentabilidad 2016: Cerro de San Pedro, Minera San Xavier. New Gold, México.
- Lambert R.J., Moreton C., Krutzemann H. (2010). Technical report on the Cerro San Pedro Mine, San Luis Potosí, México. Scottwilson, Canada.



2.5.3.2. Plan de Reasentamiento Participativo

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2013 – 2016



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Torex Gold. Procuraduría Agraria, Municipio de Cocula.

Población de los ejidos La Fundición y Real del Limón; organizaciones comunitarias como el Comisariado Ejidal de La Fundición y Real del Limón y sus asambleas ejidales, grupos religiosos y de mujeres, y de ejidatarios de ambas comunidades.



DESCRIPCIÓN

Preparación pre-explotación de oro: en 2013, dos años antes del inicio de la operación de Torex Gold de capital canadiense en el municipio de Cocula, Guerrero, hubo un acercamiento por parte de la empresa con dos comunidades, La Fundición y Real del Limón. Estas comunidades serían afectadas por la operación de la mina El Limón-Guajes; uno de los yacimientos de oro a cielo abierto más ricos del mundo con una ley de 2,65 g/t. Una vez alcanzada su plena producción, se estima una producción anual promedio de 370 mil onzas de oro.

Reasentamiento participativo: a fin de mitigar los impactos que las operaciones de la mina pudieran tener sobre estas comunidades, el proyecto requirió el reasentamiento de dos comunidades constituidas por aproximadamente 102 hogares, conformados por 500 habitantes. El reasentamiento fue solicitado por los pobladores de las comunidades, ya que el cerro El Potrerillo estaba en peligro de desintegrarse. Este proceso siguió el Estándar 5 de Desempeño sobre Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC), siendo un ejemplo de colaboración permanente entre la empresa y la comunidad.

Mesas de diálogo: el marco del plan de reasentamiento fue realizado considerando la información resultado de un estudio de línea base social. De manera sistemática, la empresa y las comunidades participaron en mesas de diálogo para discutir la selección del sitio de destino, los diseños conceptuales para las nuevas viviendas y la compensación por activos perdidos.

Compensaciones transparentes: en la fase de indemnización y beneficios para las personas desplazadas, se trabajó en un marco compensatorio. Este establece que la adquisición de tierras tiene que ser transparente y equitativa, por lo que debe asegurar que cada persona que forma parte de este proceso sea compensada por el mismo concepto, además de estar de acuerdo con la compensación que recibirá.

Relacionamiento empresa-comunidad:

para mantener una comunicación abierta y permanente con la comunidad, se realizaron visitas domiciliarias, reuniones entre ejidatarios, asambleas comunitarias y reuniones regulares con miembros de la comunidad en las que se atendían las preocupaciones y solicitudes de cada una de las familias. Cabe mencionar que en varias de estas reuniones participó la Procuraduría Agraria, que es una institución de la Administración Pública encargada de la defensa de los derechos agrarios y de la regulación de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica del campo. El diseño de las casas que formaron parte del plan se realizó junto con la comunidad, cuyos miembros definieron en dónde estarían ubicadas las escuelas, los edificios municipales, los espacios verdes y las iglesias.



Temas culturales: dado que los habitantes de las comunidades reasentadas profesan la religión católica, y también un número importante son testigos de Jehová, los feligreses de cada una de estas religiones se pusieron de acuerdo para determinar en dónde se reubicarán sus iglesias. Estas negociaciones fueron un trabajo constante que logró ser exitoso, debido al relacionamiento diario entre la empresa y la comunidad.

Planes de desarrollo: la empresa sostuvo diálogos permanentes con las familias para saber sus aspiraciones y ayudarlos a elaborar planes de inversión familiar y desarrollar nuevas alternativas económicas.

Programa de cohesión social: Torex Gold implementó un programa de cohesión social, porque con el reasentamiento se conformó una nueva comunidad, lo cual ha generado cambios, ya que dos comunidades que eran vecinas ahora están compartiendo el mismo espacio, requiriéndose realizar trabajos para su integración y adaptación al nuevo entorno.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

En el nuevo asentamiento se cuenta con calles pavimentadas, alumbrado público, agua potable, un sistema de tratamiento de drenaje que descarga a un humedal y cada familia habita una casa construida con materiales durables y de calidad. Estos reasentamientos cuentan con oficinas para autoridades municipales y ejidales, así como áreas recreacionales como una cancha de basquetbol, un área de juegos para niños, y edificios públicos para cubrir las necesidades educativas.

Como resultado del reasentamiento se habilitó un camino de acceso a la nueva comunidad con 5 km de carretera. Las nuevas viviendas incluyen tres recámaras, bodega, granero, baño, cuarto de lavado, cocina y terraza y un espacio destinado a una granja, lo cual permite a las familias desarrollar las actividades productivas tradicionales.



INNOVACIÓN

Esta práctica buscó desde sus inicios ser distinta a los mecanismos que se suelen presentar en otros proyectos mineros en que por motivos de reasentamiento solo se paga a la comunidad por su casa y donde se termina generando una situación permanente de conflictos. La empresa Torex Gold decidió realizar un plan de reasentamiento participativo, el primero de su tipo en México, el cual ha sido considerado como exitoso.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación regular: Prácticamente a diario se reunía la empresa con miembros de la comunidad a fin de atender las preocupaciones y solicitudes de cada una de las familias con respecto a los materiales, diseño y ubicación de la nueva propiedad.
- Pertinencia según necesidad: La práctica mejoró sustancialmente la calidad de vida de los pobladores. Todas las familias cuentan con los servicios de electricidad, agua y alcantarillado; servicios de los cuales carecían previo al reasentamiento.
- Sostenibilidad institucional: Cada uno de los nuevos dueños cuenta con un título legal de su vivienda. Adicionalmente, el Municipio de Cocula ha aceptado formalmente la responsabilidad del mantenimiento y operación de la infraestructura de la comunidad, lo cual garantiza que ésta siga operando de manera eficiente en el largo plazo.



ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: Los habitantes de las comunidades profesan la religión católica y son testigos de Jehová. Los feligreses se pusieron de acuerdo para determinar en dónde se reubicarán sus iglesias en el sitio de reasentamiento. También, originalmente solo la comunidad de La Fundación sería reasentada, pero dada la estrecha relación con la comunidad Real del Limón, y que el reasentamiento podía afectar el tejido social de dichas comunidades, Torex Gold apoyó el reasentamiento de ambas.



Enfoque de Género: Las nuevas viviendas construidas atendieron problemas relacionados con el tiempo invertido por las mujeres para garantizar el acceso al agua, siendo beneficiadas en mayor medida las mujeres de las comunidades mencionadas.



LECCIONES APRENDIDAS

El reasentamiento debe ir más allá de solo pagar por las tierras y después construir nuevas viviendas, sino que debe basarse en mejorar la calidad de vida de la población que se está reasentando.

Un componente modular para un reasentamiento exitoso es la participación permanente de la comunidad en todo el proceso, dotándola de información y haciéndola participe de las tomas de decisiones. Por consiguiente, la comunidad debe participar activamente en la determinación del diseño de las viviendas, sus características, y su ubicación.

Finalmente, los procesos de reasentamiento requieren la implementación de programas de cohesión social que faciliten la conformación de un sentimiento de pertenencia a la nueva comunidad, además de facilitar la integración de los miembros de la comunidad y su adaptación al nuevo entorno.



VALIDACIÓN

Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad La Fundición y Real del Limón, a la empresa Torex-Gold, al gobierno del Estado de Guerrero y a personas involucrados en el reasentamiento. La práctica se validó y analizó con los miembros de los tres sectores que asistieron al taller sobre mejores prácticas de relacionamiento entre actores en la industria minera en México, oficinas del BID, 13 de julio de 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

- Proyecto de reubicación de las localidades “La Fundición” y “Real del Limón”, municipio de Cocula, Guerrero. Presentado en 2012.
- Torex Gold Resources Inc. (2015). Corporate Responsibility Report 2014. Torex Gold Resources Inc., Canada.
- Neff D.H., Davidson R., Drielick T.L., Connolly B., Hertel M., Orbock III E.J.C., Susi B., Habbu P., Levy M., Ugorets V., Monaghan J.J. (2015). NI 43-101 Technical Report El Limón Guajes Mine Plan and Media Luna Preliminary Economic Assessment Guerrero State, Mexico. M3-PN140115. September 2015. Tucson, AZ: M3 Engineering & Technology Corporation.

2.5.3.3. Programa de Desarrollo Comunitario “Casa Grande”

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

2008 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Grupo México. Gobiernos locales. Comités comunitarios, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, y población.



DESCRIPCIÓN

Antecedentes: Grupo México se ubica en el primer lugar de producción de minerales metálicos en México, además de ser el cuarto productor de cobre más grande del mundo y contar con las mayores reservas de cobre a nivel mundial. Cuenta con 15 minas subterráneas y a cielo abierto. La empresa tienen presencia en México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España.

Desarrollo comunitario: Casa Grande es un modelo de desarrollo comunitario que Grupo México implementó en las zonas en donde tiene operaciones desde el 2008, que comprenden 11 estados de la República Mexicana⁹⁰. Por medio de este modelo se busca promover el involucramiento y la participación de las comunidades en corresponsabilidad con la empresa, para impulsar su desarrollo económico y social, mediante el financiamiento de proyectos sociales de responsabilidad compartida con los habitantes, instituciones y autoridades. Estos proyectos consideran los ejes: educación, medio ambiente, salud, seguridad y desarrollo productivo, con especial atención a que dentro de la población beneficiada estén niños y jóvenes.

Relacionamiento empresa-comunidad: este programa promueve el involucramiento y participación de las comunidades en corresponsabilidad con la empresa, con el fin de fortalecer relaciones sanas y de largo plazo entre Grupo México y las comunidades.

Centros comunitarios: cada una de las sedes del programa Casa Grande es un centro comunitario que cuenta con diversas áreas como biblioteca, activación física, salones para talleres (i.e., cocina, computación, artes plásticas), entre otras instalaciones.

Diagnóstico participativo: para el establecimiento del programa Casa Grande en las comunidades, primero se elaboran diagnósticos participativos con personas con capacidad de liderazgo, interesadas en transformar sus comunidades. Se reflexiona sobre las condiciones actuales en que se encuentra la comunidad y la visión a futuro que tienen sobre esta, así como las actividades necesarias que se requieren realizar para alcanzar los objetivos.

Comité comunitario: el comité comunitario es un organismo de participación ciudadana, plural y transparente, conformado por ocho miembros voluntarios, reconocidos como líderes en su comunidad. Adicionalmente, el comité se conforma por un representante

de Grupo México o sus filiales y un representante de desarrollo comunitario. El comité está encargado de revisar, aprobar y vigilar el buen funcionamiento de los proyectos de vinculación comunitaria, los cuales serán financiados por Grupo México; asimismo, es el responsable de discutir los proyectos prioritarios de la comunidad con base en sus necesidades y definir las convocatorias para la recepción de propuestas de proyectos.

Elaboración de los proyectos comunitarios: para la elaboración de proyectos por parte de la comunidad, se organizan talleres con personal capacitado, que les proporcione las herramientas necesarias no solo para definir una idea de proyecto, sino también para garantizar su sostenibilidad e impacto social en el largo plazo. Las propuestas de proyectos deben ser comunicadas en forma de solicitudes para el financiamiento por el fondo creado por Grupo México.

Evaluación: los anteproyectos son evaluados por el comité comunitario y los resultados se dan a conocer en medios públicos. Los proyectos seleccionados son apoyados únicamente con recursos en especie, otorgando el capital semilla para impulsarlos.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

El programa ha logrado transformar un entorno de conflicto y desconfianza en uno más positivo que promueve el diálogo, la colaboración y las alianzas. Ejemplos de proyectos aprobados y financiados por medio de Casa Grande incluyen:

Asistencia en salud - “Camino a la vida”: este proyecto propuesto por la comunidad de Cananea, Sonora, fue aprobado por el comité comunitario en 2010, y consiste en el traslado, con un enfoque humanitario, de pacientes de hemodiálisis oncológicos desde sus comunidades hasta los hospitales donde reciben tratamiento sin costo. Se realizan dos viajes a la semana, por lo que en cinco años se tiene un estimado de 700 viajes.

Promoción del deporte juvenil - “Choko Gym”: este proyecto fue aprobado en 2014 por el comité comunitario de Santa Eulalia, Chihuahua y consiste en un gimnasio que ayuda a los jóvenes a salir de sus problemas sociales que enfrentan por medio del deporte. Con el equipamiento del gimnasio, se creó un espacio que ha beneficiado a más de 900 niños y jóvenes que viven en situación de calle y que están expuestos al consumo drogas.

Nuevas tecnologías - “Estufas ecológicas o Patsari”: en Taxco, Guerrero, en 2016 se aprobó este proyecto para los adultos mayores en extrema pobreza, quienes cocinaban sus alimentos con leña. El objetivo es reducir la incidencia de enfermedades respiratorias por la exposición en el largo plazo del monóxido de carbono. Con la estufa Patsari se reduce en 95% la generación de dióxido de carbono y se evita el humo dentro del hogar, además de ahorrar 60% del consumo de leña. Con este proyecto se han beneficiado a 1.000 personas y se han construido 250 estufas, en 6 comunidades de Taxco, Guerrero.

Apoyo a la cultura y formación - “Caminito de los Cuentos”: aprobado por el comité comunitario de Taxco, Guerrero, en 2013, es un proyecto donde se crea un modelo de enseñanza de literatura para los niños, niñas y jóvenes, pidiendo a los niños y niñas que escriban un cuento de los cuales se elabora un libro. Mediante este proyecto se promueve la creatividad y el gusto por la literatura a los niños, no solo como lectores sino también como escritores. Ha beneficiado a 50 instituciones en la zona, realizándose cuatro libros con la impresión de mil ejemplares por publicación.



INNOVACIÓN

Generalmente, las comunidades no tienen la posibilidad de aprobar y monitorear los proyectos que financian empresas extractivas para beneficio de sus comunidades. A diferencia de este tipo de práctica, en el caso del programa de desarrollo comunitario Casa Grande es la propia comunidad, por medio de sus líderes, la que define las prioridades y necesidades que serán atendidas por medio de la realización de diversos proyectos que recibirán financiamiento por parte del fondo creado por Grupo México. Estos líderes comunitarios se encargan de revisar, aprobar y vigilar el buen funcionamiento de los proyectos propuestos por la comunidad, orientados a mejorar su calidad de vida y fortalecer el tejido social. De esta manera, la comunidad se empodera de los proyectos que emprende, al ser parte del proceso de definición y realización de los mismos.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el comité comunitario es un organismo de participación ciudadana, plural y transparente, conformado por ocho miembros voluntarios de la comunidad, reconocidos como líderes en su comunidad en diversos sectores.
- Pertinencia según demanda: esta práctica respondió a una demanda de la población para mejorar las relaciones entre la empresa y las comunidades en el largo plazo, basado en la atención de las necesidades prioritarias identificadas por los propios miembros de la comunidad. El monitoreo en las comunidades sirvió como herramienta para fortalecer sus capacidades de emprendimiento de actividades económicas alternativas, además de mejorar sus condiciones de vida en materia de salud, educación, deporte, medio ambiente, y desarrollo económico.
- Sostenibilidad institucional: Se destinó tiempo y recursos para la realización de talleres organizados entre la empresa y las comunidades, con personal capacitado proporcionan las herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad e impacto social de los proyectos en el largo plazo.



ENFOQUES

Enfoque de diversidad: los proyectos están encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, con especial atención a que dentro de la población beneficiada estén niños y jóvenes.

Enfoque de Género: las mujeres han sido beneficiadas por este programa, dado que pueden someter proyectos que les beneficien a este grupo vulnerable: tienen acceso a talleres de capacitación que les permiten crear nuevos negocios, como una alternativa económica a la minería (i.e., panadería, repostería, estilista), favoreciendo su independencia económica y empoderamiento.



LECCIONES APRENDIDAS

La conformación de un comité comunitario constituido por líderes reconocidos y respetados por la comunidad, y la participación de la comunidad en la definición de proyectos comunitarios, para la atención de problemáticas relevantes en sus comunidades ha sido un elemento clave para mejorar y fortalecer las relaciones entre la empresa y comunidad con una visión de largo plazo.



VALIDACIÓN

Entrevistas realizadas a Grupo México, comité comunitario, miembros de la comunidad beneficiada y autoridades locales. La práctica se validó y analizó con los miembros de los tres sectores que asistieron al taller sobre mejores prácticas de relacionamiento entre actores en la industria minera en México, 13 de julio de 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

Grupo México (2017). Casa Grande. Centro de Desarrollo Comunitario. Grupo México.
Grupo México (2017). Informe de desarrollo sustentable 2016. Grupo México, México.

2.5.3.4. Monitoreo participativo de la calidad del agua

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Información



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2016 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Media Luna (subsidiaria de Torex Gold). Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), habitantes de las comunidades de Nuevo Balsas, Guerrero.



DESCRIPCIÓN

La mina: desde 2015, a las faldas del cerro Media Luna, está ubicada la Mina El Limón-Guajes, al norte del río Balsas, la cual es uno de los yacimientos de oro a cielo abierto más ricos del mundo con una ley de 2,65 g/t. Esta mina, a cargo de la empresa de capital canadiense Torex Gold, se enfoca en la extracción de oro.

Reclamo: en 2016, la empresa recibió un reclamo de los habitantes de las comunidades de Nuevo Balsas, Guerrero, quienes principalmente se dedican a la pesca, ante su preocupación de que el agua de los sitios en donde pescan estuviera contaminada con vertidos de los jales de la mina y el polvo generado por las detonaciones. Los habitantes de estas comunidades argumentaban que debido a estos impactos ambientales se había reducido la pesca.

Estudios de impacto: este reclamo impulsó a que la empresa solicitara la colaboración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), por medio de su Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT), para realizar un estudio que analizara la calidad del agua, determinando si existía evidencia de contaminación resultado de las operaciones de la mina. Los investigadores de la UAGRO firmaron con Minera Media Luna un convenio asegurando la transparencia y el acceso a la información resultante por parte de la comunidad.

Relacionamiento empresa-comunidad: la negociación de acuerdos entre el personal del área de relaciones comunitarias de la minera, las autoridades municipales de Colula, las autoridades comunitarias de Nuevo Balsas, y los representantes de las cooperativas pesqueras, requirió un diálogo basado en una escucha asertiva y respetuosa, permitiéndoles conocer las preocupaciones y prioridades de cada una de las partes involucradas. Se acordó que los resultados del monitoreo fueran presentados a la comunidad y que sus miembros libremente elegirían los sitios en los que se tomarían las muestras de agua.

Monitoreo participativo: entre la empresa, la universidad y las comunidades se acordó el número de muestras de agua que se analizarían y se convocó a una asamblea comunitaria para definir los sitios en donde se tomarían las muestras. Previo al proceso de muestreo, los investigadores de la UAGRO impartieron diversos talleres en la comunidad para explicar a detalle los parámetros que se requería analizar para evaluar la calidad del agua, su medición, la toma de muestras y el procedimiento para

preparar las muestras para su traslado a un laboratorio certificado en Canadá y al laboratorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, en estos talleres los investigadores respondieron las dudas de la comunidad sobre el funcionamiento de los equipos, el procesamiento de las muestras y las implicaciones de los resultados obtenidos; precisando las concentraciones de estos metales que pudiera considerarse un riesgo para la salud o para las actividades económicas. Un grupo de pobladores participó en el muestreo, acompañando a los investigadores a realizar los trabajos de colecta de las muestra de agua en los sitios seleccionados por la comunidad.

Altos niveles de arsénico: el análisis mostró valores de arsénico por arriba de límite permitido que no se originaban de la actividad extractiva del oro, sino que estaban presentes de manera natural. Asimismo, se concluyó en la investigación realizada que ningún metal pesado está presente en el tejido y órganos de los peces.

Seguimiento: para continuar con el monitoreo participativo, la empresa propuso a la universidad que capacitara a miembros de la comunidad para que siguieran realizando los muestreos de agua, con el fin de que la comunidad diera seguimiento a la calidad presente en los efluentes poniendo especial atención en la evolución de la concentración de arsénico en el agua. Adicionalmente, Torex Gold propuso hacer un estudio de la salud en las comunidades y continuar con las reuniones multisectoriales que atendieran las preocupaciones de la población con relación a la calidad del agua.



IMPACTO/ RESULTADO PRINCIPAL

La buena práctica cambió la percepción, comunicación y relación que tenía la empresa con la comunidad de una manera positiva, fortaleciendo un relacionamiento de largo plazo; además de favorecer el desarrollo de capacidades para el seguimiento de la calidad del agua de sus efluentes.

Se capacitó la comunidad para realizar los muestreos del agua en los sitios de interés, lo que favoreció un intercambio de información con expertos y mejoró el conocimiento que tienen sobre la materia y sus impactos en la salud. Los resultados del monitoreo redujeron la incertidumbre y ansiedad de los habitantes ante potenciales riesgos a su salud o a sus actividades económicas. Cabe mencionar, que gracias a los resultados del análisis que validaron que no había contaminación en los efluentes, el precio por kg de pescado que comercializaba la comunidad aumentó, lo cual trajo beneficios económicos para los pobladores.



INNOVACIÓN

Se trata de uno de los primeros ejercicios de monitoreo ambiental participativo que se realiza en México, en donde gracias a la colaboración entre la empresa, la comunidad y la universidad, se mejoró la percepción, la comunicación y el relacionamiento entre la empresa y la comunidad.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: Se consideró la participación de los grupos sociales para la realización del monitoreo ambiental, explicando los metales que se analizarían y lo que implicaban ciertas concentraciones de los mismos en el agua. Los miembros de la comunidad participaron en la selección de los sitios analizados y en la mejora de los mecanismos de monitoreo.

- Pertinencia según necesidad: Al responder la empresa asertivamente a una situación de conflicto con la comunidad, apoyando la realización de un muestreo participativo de la calidad del agua, creó las condiciones para favorecer mecanismos de colaboración y alianzas.
- Sostenibilidad por consenso: Esta alianza entre la comunidad, la UAGRO y la empresa, evidencia un relacionamiento de largo plazo, que permitirá planear colectivamente nuevos proyectos de interés para la comunidad además de favorecer un mejor clima de negocios en la zona, previniendo la emergencia de posibles conflictos.



ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: el monitoreo participativo requirió la organización de talleres con la Asamblea Ejidal, permitiendo la integración de los miembros de la comunidad en las decisiones de planeación del muestreo, con base en las formas de organización comunitarias.

Enfoque de Género: en los talleres organizados, se contó con una mayor participación de mujeres, quienes estaban interesadas en conocer los resultados del análisis de la calidad del agua; participaron activamente en estos talleres informándose sobre los parámetros que se medirían, los equipos que se utilizarían y el proceso que se seguiría de colecta y análisis de las muestras.



LECCIONES APRENDIDAS

Por medio del diálogo y la colaboración, se logró llegar a acuerdos sobre las fases que seguiría el monitoreo, dónde se realizarían los muestreos del agua, los laboratorios donde se analizarían las muestras obtenidas, y la manera en la que se comunicarían los resultados.

El que la universidad y la empresa compartieran los resultados del monitoreo con la población de Nuevo Balsas, favoreció la transparencia del proceso, y permitió crear y fortalecer relaciones de confianza, reconociéndose el compromiso de Torex Gold para evitar impactos ambientales e involucrar a la comunidad en el monitoreo de la calidad del agua.



VALIDACIÓN

Entrevistas realizadas a los representantes de la minera Media Luna, investigadores responsables del monitoreo participativo de la UAGRO, autoridades estatales y locales, y miembros de la comunidad. La práctica se validó y analizó con los miembros de los tres sectores que asistieron al taller sobre mejores prácticas de relacionamiento entre actores en la industria minera en México, 13 de julio de 2017.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

UAGRO-Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (2016). Resultados del proyecto Minera Media Luna y su relación con los factores ambientales: caso del agua en las comunidades aledañas. Responsables del proyecto: Dr. Joel Ramírez y M. en C. Eduardo Herrera. UAGro, México.

2.5.3.5. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Información



DURACIÓN

2013 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Representantes del sector privado de la industria extractiva. Representantes de las OSC, grupo amplio de las OSC. Gobierno de México, Secretariado Internacional de EITI.



DESCRIPCIÓN

Compromiso de México para EITI: en su Plan de Acción 2013-2015 en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), se incluyó el compromiso 26, que estableció la adhesión de México a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Uno de los primeros retos que enfrentó este proceso fue la conformación del Grupo Multipartícipe Nacional (GMN), por medio del cual se elaboraron y discutieron los documentos requeridos para presentar su candidatura. Actualmente, el GMN está trabajando en la definición de la materialidad, alcances y flujos económicos que se incorporarán al primer reporte y a los informes posteriores.

Grupo Multipartícipe Nacional: la conformación del GMN, realizado el 22 de noviembre de 2016, fue una fase estratégica para su adecuado funcionamiento. La integración de este grupo tomó cerca de dos años, ya que un requisito fundamental fue la construcción y fortalecimiento de confianza, así como el reconocimiento de los representantes como actores legítimos. La conformación del GMN requirió que cada uno de los tres sectores (gobierno, industria y sociedad civil) eligiera a sus representantes¹⁹¹.

Principios EITI: un aspecto particular del caso de México, fue que en la primera reunión del GMN los representantes firmaron los “Principios EITI México” para declarar el compromiso de colaborar entre los sectores con respecto y participación de todos, con máxima transparencia y de promover y respetar los derechos humanos y temas sociales y ambientales.

Reglas de operación: en la segunda reunión se aprobaron las Reglas de Operación y los Objetivos País de México. La presentación pública de estas reglas de operación implicó reuniones semanales de trabajo por cerca de ocho meses, para que los tres sectores estuvieran de acuerdo en el contenido de las mismas. En la tercera reunión se aprobó el plan de trabajo, con el cual se cumplió el quinto y último requisito para presentar la candidatura de México al Consejo Internacional EITI.

Apoyo de actores externos: otros actores que han acompañado el proceso de candidatura de México al EITI, incluyen varias agencias de cooperación¹⁹², las cuales han financiado la capacitación y participación de miembros de la sociedad civil en diversos eventos relevantes para la presentación de la candidatura y del primer informe.

Relación de confianza: cabe mencionar que por medio de frecuentes reuniones de trabajo, basadas en el diálogo respetuoso y abierto, así como una escucha efectiva de las preocupaciones y prioridades de la sociedad civil, se logró construir a lo largo de dos años una relación de confianza, que continúa fortaleciéndose.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

Entre los beneficios del estándar destacan:

- Garantiza el acceso a información de calidad sobre flujos económicos y socio ambientales de las industrias extractivas.
- Fortalece la participación y vigilancia pública de las industrias extractivas.
- Construye confianza en las instituciones.
- Disminuye la conflictividad entre las empresas, gobiernos y comunidades.
- Protege la reputación de las empresas.



INNOVACIÓN

México ha sido el primer país en el que los tres sectores firmaron una declaratoria de principios, además de que los representantes de la sociedad civil están respaldados por un grupo de aproximadamente 40 organizaciones de la sociedad civil. Otra innovación importante es el acuerdo entre los tres sectores que conforman el Grupo Multipartícipe Nacional (GMN) para incorporar en el primer reporte de México flujos económicos relacionados con temas sociales y ambientales.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: la participación activa del gobierno, las empresas y la sociedad civil en el proceso para la presentación de la candidatura y en la elaboración del primer informe ha sido crucial para el fortalecimiento de la confianza por parte de los actores involucrados, además de mejorar la comunicación entre estos sectores.
- Pertinencia según demanda: con este mecanismo, se está atendiendo la solicitud de los tres sectores (gobierno, empresas y sociedad civil) de transparentar los flujos económicos relacionados con las industrias extractivas, además de incorporar información en materia de flujos ambientales y sociales. Lo anterior permitió el reconocimiento internacional de México como país candidato al EITI.
- Sostenibilidad institucional: EITI cuenta con lineamientos y guías que apoyan a que los países formen parte de este estándar de manera permanente.



ENFOQUES

Enfoque de Diversidad: por medio de un diálogo asertivo, los diversos sectores involucrados (gobierno, empresas y sociedad civil) han compartido sus preocupaciones y posiciones en materia de transparencia. En el caso de la sociedad civil, las organizaciones involucradas en esta iniciativa trabajan en una gran diversidad de contextos sociales, culturales y económicos, siendo sus opiniones transmitidas y negociadas por el grupo de representantes y suplentes de la sociedad civil.



60

LECCIONES APRENDIDAS

No existían espacios en los que estos tres sectores (empresa, sociedad civil y gobierno) se reunieran a definir objetivos y metas comunes. Por consiguiente, la conformación del GMN ha permitido fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto por parte de estos tres sectores en favor de la transparencia de las industrias extractivas. Promover la transparencia es un objetivo de largo plazo que requiere el compromiso y esfuerzo de los tres sectores, con el fin de que la información que se haga accesible apoye la toma de decisiones y la gobernanza de los recursos minerales, empoderando a las comunidades.

✓

VALIDACIÓN

Entrevistas realizadas a los miembros que forman parte del Grupo Multipartícipe Nacional (GMN) provenientes del sector gobierno, empresas y OSC; asimismo, se entrevistaron OSC cuyo interés se centra en la transparencia y acceso a la información, así como autoridades gubernamentales y agencias de cooperación internacional involucradas en promover esta iniciativa. La práctica se validó y analizó con los miembros de los tres sectores que asistieron al taller sobre mejores prácticas de relacionamiento entre actores en la industria minera en México, 13 de julio de 2017.

💻

BIBLIOGRAFÍA / LINKS

Secretaría de Energía (2016a). Instalación del grupo multipartícipe nacional para la adhesión de México a EITI. SENER, México.

____ (2016b). El Proceso de Adhesión de México a la EITI, Informe de Actividades, junio.

2.5.4. Análisis de Actores

Entre los actores involucrados en estas prácticas destacan: (1) las empresas mineras con capital mayoritariamente mexicano y extranjero, (2) los diferentes niveles de gobierno, y (3) la sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, universidades y organizaciones comunitarias. Es importante destacar que, son las organizaciones comunitarias las que principalmente han colaborado con las empresas para mejorar sus prácticas de relacionamiento social, lo cual se atribuye a su interés por mejorar sus condiciones de vida, promover actividades alternativas que favorezcan el desarrollo económico de sus comunidades, reducir posibles impactos en el medio ambiente, y aprovechar todos los beneficios que la minería pudiera representarles.

Empresa

La industria minera es un sector estratégico para México. La industria minera está conformada tanto por empresas con capital mayoritaria o totalmente mexicano (i.e., Grupo México, Peñoles, Frisco, Fresnillo plc, Carrizal), así como por empresas extranjeras principalmente de capital canadiense (i.e., New Gold, Goldcorp, Torex Gold, Leagold, Agnico Eagle, First Majestic, Panamerican Silver). Las empresas que cuentan con financiamiento internacional cumplen con los requisitos que las instituciones que las financian les exigen para garantizar un ambiente favorable de negocios¹⁹³, por ende, realizan diversas prácticas orientadas a mejorar su relacionamiento social y ambiental. Estas prácticas en ocasiones van más allá de las exigencias en la normatividad mexicana vigente para la minería, pero son requisitos a nivel internacional para recibir financiamiento o mantenerlo. Existen otras empresas que realizan de manera voluntaria acciones que favorecen mejores prácticas de relacionamiento social y ambiental, que no reciben financiamiento internacional, pero que reconocen la importancia de fortalecer el tejido social de las zonas de influencia de sus operaciones y mejorar sus estrategias de colaboración y alianzas con organizaciones sociales comunitarias y con OSC, en aras de promover un ambiente de negocio con mayor certeza jurídica y menores riesgos económicos, sociales y ambientales. Finalmente, también existen empresas que cumplen con lo mínimo que exige la normatividad mexicana.

Estado

La participación del sector gobierno en la industria minera se centra en cuestiones administrativas y relacionadas con el diseño y supervisión de la normatividad. El Estado colabora con las empresas para promover la inversión y la realización de proyectos mineros conforme lo estipulado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno funciona como un ente regulador entre los diversos actores involucrados. A nivel federal, las diversas secretarías cumplen con sus funciones en materia de planificación, coordinación, administración e implementación de las políticas públicas nacionales para el desarrollo económico, fomentando la actividad minera. Otras secretarías y órganos gubernamentales se encargan de proteger, conservar y aprovechar los recursos naturales, vigilando el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de la industria¹⁹⁴. Otras instancias intervienen en la administración del Fondo Minero, en el fortalecimiento de la transparencia en la industria minera y sus flujos económicos, y en la regulación de las condiciones de trabajo. En este sentido las autoridades gubernamentales a nivel federal tienen grado de influencia sobre la industria minera en México, existiendo una estrecha relación con las empresas. A este nivel de gobierno, la relación con las comunidades y las OSC es limitado, dado que dentro de las funciones que realizan dichas instancias no se precisa el acompañamiento a las comunidades en donde existen proyectos mineros. Tanto el gobierno local como el estatal, suelen mantener una relación estrecha con las empresas mineras, dado que sus inversiones son consideradas clave para el desarrollo



de sus municipios y estados. Sin embargo, son los gobiernos locales los que tienen una mayor interacción con las comunidades con operaciones mineras. Este nivel de gobierno también interactúa con el sector empresarial. Pero los gobiernos locales suelen contar con recursos económicos, humanos y tecnológicos limitados, lo cual obstaculiza su intervención e influencia en la industria a fin de promover mejores prácticas de relacionamiento social y ambiental.

Sociedad Civil

Las universidades mantienen relación con la industria minera metálica y cuentan con la confianza de diversos grupos de actores por su capacidad para tejer redes, así como por su contribución a la generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, incluyendo: autoridades a nivel federal, estatal y local; empresas mineras nacionales y extranjeras; organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias. Un número importante de universidades¹⁹⁵ en todo el país imparten programas de ingeniería en minería y metalúrgica, así como carreras afines¹⁹⁶. Los egresados de estos programas se incorporan en la industria minera, por lo que mantienen una relación cercana con las instituciones en donde se formaron, lo cual ha favorecido la colaboración entre las empresas y universidad. Las universidades pueden influir en la opinión pública y en la toma de decisiones en materia de políticas públicas de la industria, así como en la elaboración y fortalecimiento del marco normativo, aportando sus conocimientos y capacidades con los que cuentan sus investigadores.

Las Organizaciones de la sociedad civil (OSC)¹⁹⁷ presentan diferentes formas de involucramiento con la industria minera dependiendo de su naturaleza (definida en la misión de la organización) y la posición que tienen con respecto a la minería, lo cual está en función de: (1) los impactos ambientales incluyendo contaminación del agua, suelo y aire, degradación de la diversidad, y compensación ambiental; (2) afectaciones en materia de derechos humanos, indígenas y territoriales de las comunidades en sus zonas de influencia; (3) afectaciones en materia de derechos laborales, seguridad social y seguridad laboral para los trabajadores de las empresas mineras; y (4) atención de quejas y denuncias, así como iniciativas para promover la transparencia de esta industria extractiva.



Estas organizaciones han tenido la capacidad de tejer redes entre actores diferentes, participando en procesos de capacitación o de negociación para la resolución de conflictos. Pocas OSC colaboran con las empresas para elaborar planes participativos de cierres ambientales y económicos, así como planes participativos sobre el destino de la inversión social que las empresas realizarán durante su operación en las comunidades de sus zonas de influencia. En general, las organizaciones que cuentan con la confianza de un número importante de comunidades son aquellas que se dedican a la defensa de derechos humanos, indígenas, laborales y del territorio; estas OSC apoyan a las comunidades con asesoría legal y acompañamiento en denuncias y litigios.

Hasta el momento, en México no se ha realizado una consulta indígena en proyectos mineros, dado que los proyectos realizados de acuerdo con el Gobierno

Mexicano no se han llevado a cabo en comunidades indígenas o equivalentes. México está sujeto a cumplir las disposiciones en materia de consulta con base en el artículo 169 de la OIT. Sin embargo, en esta investigación se identificó que en una gran mayoría de las tierras comunales y ejidales en donde operan proyectos mineros habita población vulnerable debido a sus elevados niveles de pobreza, bajo nivel educativo, insuficiente infraestructura para la prestación de servicios básicos, y poca diversificación económica. Debido a que estas condiciones de marginación existían previo al inicio de operaciones de las empresas mineras, sus capacidades para participar de manera informada y empoderarse se ven limitadas, obstaculizando una mejor gobernanza de sus recursos naturales. En particular, en los lugares en donde se realiza la extracción de oro, las comunidades además de los factores mencionados que explican su vulnerabilidad, tienen que enfrentar la proliferación de la delincuencia organizada y trata de personas, lo cual los pone en una situación de mayor riesgo.

Las organizaciones comunitarias presentan posiciones tanto de confrontación para evitar que se inicien proyectos mineros en sus territorios, así como de colaboración con las empresas mineras en aras de que sus comunidades reciban los mayores beneficios posibles durante la operación y cierre de las mismas¹⁹⁸. Se identificaron cuatro tipos de organizaciones comunitarias: (1) el comisariado de los bienes ejidales y comunales; (2) las asambleas ejidales y comunales; (3) organizaciones y colectivos comunitarios; y (4) cooperativas comunitarias.

En el caso del comisariado de los bienes ejidales y comunales, compuesto por un presidente, secretario y tesorero, esta figura representa a los ejidatarios o comuneros en la toma de decisiones en las mesas que se entablan con las empresas mineras. El comisariado es el órgano encargado de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos tomados por la asamblea. Está encargado de convocar a la asamblea para discutir las propuestas de las empresas mineras con respecto a la compra o renta de las tierras ejidales y comunales, así como otros beneficios dirigidos a la comunidad.

Las asambleas ejidales y comunales se conforman por el comisariado y los ejidatarios o comuneros; en ellas se discuten los temas de interés para la comunidad. Tanto el comisariado ejidal y comunal como la asamblea pueden tener diferentes posturas, ya sea de apoyo a la minería al reconocer los beneficios económicos y laborales que esta actividad puede traer para el desarrollo económico de sus comunidades, o pueden estar



en contra de que esta actividad se realice en su territorio, debido a la percepción negativa que tienen los habitantes sobre sus impactos ambientales y sociales potenciales. En algunos casos, las posturas de las comunidades no están definidas, ya que algunos de sus habitantes pueden estar a favor del inicio de operaciones de las empresas mineras en sus territorios, y otro número importante puede estar en contra; en este caso, la comunidad suele confrontarse.

Por otro lado, también existen organizaciones y colectivos formados por miembros de la comunidad incluyendo a ejidatarios, comuneros o avecindados, grupos de mujeres, grupos indígenas y grupos de jóvenes que se organizan para la defensa del territorio, sus derechos humanos y sus derechos laborales. Son estas organizaciones en las que se identificó un mayor número de proyectos implementados junto con las empresas mineras para la mejora de las condiciones de vida de sus comunidades y de su participación en la toma de decisiones sobre las operaciones mineras en sus territorios. Finalmente, existen cooperativas comunitarias constituidas con fines económicos en materia de transporte, pesca, agricultura, apicultura, acuícola y ganadera, entre otras; dependiendo de la actividad económica realizada, pueden o no estar a favor de la minería. Por ejemplo, aquellas cooperativas que puedan prestar servicios a las empresas mineras y que representan una oportunidad para desarrollarse económicamente, generalmente estarán a favor de que la minería se realice en sus comunidades, dado que pueden prestar servicios de limpieza, transporte, provisión de alimentos, entre otros.

2.5.5. Marco legal

La legislación que regula la minería en México se deriva del artículo 27 constitucional, en el que se establece que es propiedad de la Nación el dominio de todos los recursos del subsuelo, definiéndose un régimen de concesiones particulares la explotación de los minerales. Derivado de la constitución se encuentran leyes, reglamentos y normas que permiten regular la formulación y conducción de la exploración y explotación minera. Dentro de las leyes, la Ley Minera es el principal instrumento legislativo que se encarga de autorizar los permisos, o concesiones en las actividades de exploración y explotación que deberán procurar el cuidado del medio ambiente.

La Ley Minera fue modificada en 1992 durante la apertura económica, con el fin de atraer mayor inversión extranjera a México, al igual que la Ley de Inversión Extranjera en 1993. Esto permitió crear las condiciones óptimas para facilitar los trámites de adquisición de concesiones y de aperturas de empresas dedicadas a la minería. Con estas mejoras normativas se otorgó certeza jurídica a los inversionistas mexicanos y extranjeros¹⁹⁹. Resultado de este proceso, el Estado Mexicano puso a la venta las empresas mineras públicas, conformándose grandes consorcios mineros con capital mayoritaria o totalmente mexicano y con un alto grado de integración vertical y horizontal, además de favorecer la entrada de capitales extranjeros en el sector, principalmente provenientes de Canadá y Estados Unidos.



Información

Otros avances relevantes en el marco normativo mexicano aplicables al sector minero son la promulgación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gubernamental y Protección a Datos Personales. Apoyando el compromiso del gobierno federal en materia de transparencia, México se sumó en 2017 como país candidato al Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), sentando las bases para reducir la opacidad en los flujos económicos de la industria minera. Con esta iniciativa, el gobierno, la sociedad civil y las empresas suman esfuerzos para promover una mejor gobernanza en el sector.

El análisis normativo evidencia que el acceso a la información está regulado y se han realizado avances importantes para favorecer su acceso. Sin embargo, estos mecanismos solo norman la información controlada por el Estado, por lo que no se precisa en la ley mecanismos que obliguen a las empresas a proporcionar información de manera oportuna y sistemática a las comunidades en las zonas de influencia de sus operaciones.



Consulta

Aunque México suscribió el Convenio 169 de la OIT en 1990, hasta el momento no se ha realizado una consulta de este tipo, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), las operaciones mineras no se encuentran en áreas indígenas. La CDI a solicitud de la Subsecretaría de Minería, es la instancia que determina las comunidades que son consideradas como indígenas o equiparables, y por ende, cualquier decisión que afecte su territorio deberá ser consultada previamente.²⁰⁰ Sin embargo, aunque la consulta no es obligatoria para proyectos mineros, la población puede solicitar por escrito a la Autoridad Ambiental una audiencia pública para analizar el proyecto, durante el análisis de la pertinencia de la evaluación de impacto ambiental. Lo anterior se sustenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) (artículos 20 bis, 34, 47, 58, 79, 157, 158 y 159).

Otros mecanismos de consulta en donde se considere la participación de la sociedad civil en la legislación minera de manera obligatoria están ausentes. En el caso de los niveles de relacionamiento asociados al diálogo, la colaboración y la alianza, éstos tampoco están considerados en la legislación vigente, dado que no se ha institucionalizado el uso de mecanismos de diálogo que faciliten la interacción entre el gobierno, la sociedad civil y las empresas. Asimismo, se carece de mecanismos que promuevan la colaboración y formación de alianzas entre estos actores.



2.6. PERÚ

Marina Irigoyen, Centro IDEAS: marinadelria@gmail.com

2.6.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en 2016, el sector extractivo ha aportado con 14% al PIB²⁰¹. El cobre, el oro y el zinc fueron las principales aportantes. En 2016, los sectores minería e hidrocarburos aportaron 64,65% de las exportaciones totales del país. En el mismo año, el monto de las transferencias económicas del sector extractivo a los gobiernos regionales y locales superó los 1.354 millones de dólares estadounidenses; además de ello hay otros aportes como los fideicomisos o el nuevo Fondo de Adelanto Social (FAS) en minería. Los aportes sufrieron una baja frente a 2015. Así por ejemplo, en el caso de los Gobiernos Regionales, las transferencias mineras e hidrocarburíferas significaron 5,50% de sus ingresos para 2015 y 3,30% para 2016. Para los Gobiernos Locales, las transferencias representaron 17,52% del total de sus ingresos para 2015 y 13,89% para 2016²⁰².

En 2016, la minería generaba 174.126 empleos directos (61.873 empleos de las compañías mineras titulares de la actividad minera y 112.253 empleos por las empresas contratistas mineras que brindan servicios a dichas compañías). Se estima que hay 1'567.138 empleos indirectos²⁰³ creados por el sector de minería²⁰⁴.

Social: la sociedad civil en Perú es dispersa aunque con creciente conciencia ambiental. Hay importantes movimientos de intelectuales, activistas y comunidades que se oponen a las actividades extractivas; por otro lado hay comunidades que negocian con las empresas y llevan a cabo actividades conjuntas así como ONG y universidades que establecen alianzas.

En diciembre de 2017, la Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos socioambientales²⁰⁵, entre latentes y activos, existiendo una declinación de éstos frente al 2016 (212 conflictos). El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible alienta desde 1999 el diálogo cívico entre líderes del sector público y privado.

Buenas prácticas



Alianza para promover el círculo virtuoso del agua: Cerro Verde en Arequipa (2010 - 2017, Diálogo/Alianza). A partir de conflictos sociales, se creó una alianza multisectorial que abarca también diferentes niveles de Gobierno para la ejecución y mantenimiento de obras de beneficio colectivo de captación de agua con represas, plantas de tratamiento y sistemas de distribución. El acuerdo entre la empresa minera, el Estado y la comunidad sobre distribución de gastos y responsabilidades es producto de un largo proceso de discusión y aproximación en una mesa de diálogo en la que han participado representantes de todos los sectores.

Monitoreo ambiental participativo en Orcopampa. Afirmando la colaboración y el diálogo (2007 - 2017, Diálogo/Colaboración). En la región Arequipa se ha establecido un "comité de monitoreo ambiental formado por delegados de las comunidades, la empresa minera, el gobierno local, ONG, entre otros. La colaboración permite un monitoreo participativo y regular de la calidad del agua y abre un espacio de relacionamiento para conversar sobre otros temas. La comunicación entre la empresa y los líderes comunitarios se volvió más periódica y específica y se pudieron mitigar conflictos, fomentando respeto, tolerancia, perseverancia y sinceridad entre los actores.

Mapa de Actores



Mesa de diálogo de Huari. Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari (2011 - 2017, Información /Diálogo/Colaboración). Después de protestas y la toma de carreteras, el gobierno intervino y se instalaron mesas de diálogo entre la empresa, autoridades nacionales y locales y representantes comunales y de la sociedad civil. En dos mesas, ambiente e inversión social, se lograron acuerdos. El diálogo empezó en un clima de confrontación y desconfianza. Posteriormente, se ha impulsado una cohesión social entre las comunidades así como aprendizajes significativos en todos los sectores.

REDyPAC en Hualgayoc: Una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía (2009 - 2017, Colaboración/Alianza). Dos organizaciones no gubernamentales y una empresa unen esfuerzos y recursos para fortalecer redes empresariales y participación ciudadana a través de proyectos de colaboración orientados a mejorar los ingresos de los campesinos del área de influencia directa y aledaños. Fomentan la toma de decisiones en una óptica de “todos ganan”. El modelo consiste en asistencia técnica y oferta de tecnologías para el crecimiento agrícola y la promoción de agroforestería, tanto como capacitaciones en participación ciudadana, relacionamiento con autoridades de nivel regional y nacional y una escuela de líderes.

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (1999 - 2017, Diálogo). Se trata de un grupo de trabajo multisectorial nacional de organizaciones, líderes, empresas e instituciones vinculadas al sector minero que anima a establecer un intercambio de opiniones diversas. Es innovador en el tipo de relacionamiento principalmente informal y a la vez el diálogo es estructurado según diferentes espacios de interacción. Ha logrado expresiones de acuerdos multisectoriales y ha promovido iniciativas similares a nivel regional y local.

Destaca la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como el más significativo gremio de las empresas de industrias extractivas, la cual congrega, defiende y promueve los intereses de los empresarios mineros, petroleros y de energía, con preponderancia de los primeros. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) es un gremio nuevo.

El Ministerio del Ambiente y sus entidades adscritas como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles que ve la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental, y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería con creciente presencia y legitimidad. El Ministerio de Energía y Minas como entidad de promoción del sector. La Defensoría del Pueblo, como entidad autónoma del Estado con presencia y reconocimiento nacional²⁰⁶. El viceministerio de Interculturalidad que coordina y acompaña la consulta a pueblos indígenas y originarios.

Están las comunidades indígenas y campesinas que no cuentan con una representación nacional sólida y representativa salvo las amazónicas²⁰⁷. Las ONG ambientalistas y de derechos humanos con creciente voz.

Marco Legal y Regulatorio



Perú cuenta con un marco jurídico extenso para el relacionamiento en la industria extractiva. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo fue ratificado en 1993 y entró en vigencia en 1995. Perú cuenta con una Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (N°29785, 2011) de la cual se deriva un reglamento (DS N° 001-2012-MC). La Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios se exige hasta en tres oportunidades según el Texto Único Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINEM. En minería se establece luego de la concesión, antes de la explotación minera, mientras que en la actividad petrolera se da antes de la adjudicación del lote.

La Ley General de Ambiente (N° 28611) remarca el derecho a información (art. 41 y 42) y el derecho a presentar opiniones, puntos de vista y aportes frente a decisiones tomadas en relación al ambiente (art. 46). Adicionalmente, la Ley de Gobiernos Regional, de Municipalidades, y del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental regula los diferentes niveles de relacionamiento.

Existen reglamentos para la participación ciudadana tanto para el sector minero como el petrolero. Los recursos del subsuelo son de propiedad de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento según establece la Constitución. La entidad encargada de otorgar los títulos de concesiones mineras es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Las empresas mineras requieren la autorización del propietario del terreno superficial, que en muchos casos son comunidades, para la exploración, además de cumplir con lo estipulado en la Consulta Previa. Se ha generado la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (ex ONDS) dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros como instancia para la gestión de los conflictos socioambientales.

2.6.2. Introducción

En Perú, el sector extractivo es la principal fuente de divisas que dinamiza la economía. Los recursos para los territorios regionales y locales dependen de los precios internacionales. Sin embargo, el sector extractivo es una actividad controversial²⁰⁸. Algunos temen impactos ambientales y la complejidad de las relaciones socio-económicas genera percepciones negativas en las poblaciones afectadas por la intervención.

Existe un extenso marco legal (suscripción del Convenio 169 OIT y normas de Consulta Previa así como participación) y una normatividad ambiental avanzada pero esta no se cumple a cabalidad en muchos casos²⁰⁹ denotándose en particular en el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En los últimos años, la conflictividad socioambiental, y el rechazo a importantes proyectos mineros, ha sido materia de análisis y búsqueda de propuestas, influenciada además por avances en la Responsabilidad Social Empresarial por parte de algunas empresas extractivas así como la presión de las propias organizaciones de la sociedad civil y la ampliación de la normatividad vigente. Esto alienta el surgimiento de buenas prácticas que promueven el desarrollo económico local, espacios de diálogo y experiencias de gestión ambiental.

2.6.3. Buenas prácticas

En esta sección se detalla el proceso que siguieron cinco buenas prácticas identificadas para mejorar el relacionamiento con la sociedad civil y las comunidades de la industria minera en Perú. Durante la investigación, fue posible identificar y validar un total de cinco buenas prácticas para los niveles Información/Diálogo (2), Colaboración (2) y Alianza. Paralelamente, se han identificado otras prácticas de relacionamiento que no han podido ser validadas por los tres sectores – empresa, sociedad civil y Estado – pero que demuestran esfuerzos que pueden contribuir a ser consideradas para su sistematización y difusión en el futuro. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.

Las buenas prácticas que se presentan a continuación fueron validadas con entrevistas, visitas de campo, revisión de fuentes secundarias y mesas de trabajo y son las siguientes:

- 2.6.3.1. Alianza para promover el círculo virtuoso del Agua: Cerro Verde en Arequipa
- 2.6.3.2. Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa. Afirmando la colaboración y el diálogo
- 2.6.3.3. Mesa de Diálogo de Huari. Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
- 2.6.3.4. REDyPAC en Hualgayoc: una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía
- 2.6.3.5. Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible

2.6.3.1. Alianza para promover el Círculo Virtuoso del Agua: Cerro Verde en Arequipa

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



DURACIÓN

2006 – 2017

ACTORES PRINCIPALES

Sociedad Minera Cerro Verde SAA (SMCV), Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa.

Ministro de Energía y Minas; Gobierno Regional de Arequipa; municipalidades provincial y distritales;

Frente Amplio Cívico de Arequipa; Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa; Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa; Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú; Frente de Defensa e Integración del Cono Norte de Arequipa; Coordinadora de Frentes (COFREN).





DESCRIPCIÓN

Ampliación extracción de cobre y molibdeno. en 2005 la SMCV planteó duplicar su producción (278 mil Tm de cobre y 6 mil Tm de molibdeno adicionales por año) y extender la lixiviación hasta 2025, aproximadamente, en la región Arequipa, en los distritos de Uchumayo y Yarabamba.

Conflictos de intereses: se generaron conflictos por el uso potencial del agua por parte de la empresa, en un contexto de escasez de este recurso y en que el río Chili, principal fuente de agua, se encontraba contaminado por las aguas negras sin tratar de la ciudad. A la empresa, los sectores sociales demandaron cada vez más recursos para el desarrollo. Una parte de la población con las autoridades municipales distritales y provincial se organizaron contra la empresa, generando un movimiento de protesta dirigido por un comité de lucha constituido para tal efecto.

Mesa de diálogo: tras una marcha de tres mil personas aproximadamente, en 2006, las autoridades nacionales, provinciales y distritales, la sociedad civil y la empresa SMCV iniciaron un proceso de diálogo e instalaron una mesa de diálogo que convocó al primer ministro de entonces, al Ministro de Energía y Minas y los representantes de alto nivel de la empresa. Posteriormente se incorporó el presidente del gobierno regional así como representantes de organizaciones populares²¹⁰. Ellos tenían reuniones quincenales, luego mensuales y finalmente más espaciadas.

Acta de compromiso: los actores firmaron el acta de compromiso en 2006, que establece un acuerdo sobre un convenio marco orientado a la preservación del medio ambiente, el desarrollo de obras de infraestructura y la promoción económica, productiva y social, llamando a una mesa de trabajo, lo que se ha llamado el Acuerdo de Arequipa. La descontaminación del agua del río Chili -con un significativo aporte de la empresa - fue una parte central del acuerdo dado el impacto en la sociedad arequipeña. Este río estaba contaminado principalmente por las aguas servidas de la ciudad.

Alianza para la captación de agua: los actores diseñaron una estrategia que consistió en mayor captación de agua con represas, construcción de la planta de tratamiento de agua potable y mejora de las líneas de distribución de agua potable; retiro de los desagües y tratamiento del río Chili. Se concordó una distribución de gastos entre la empresa y las municipalidades, y se formó una alianza para la ejecución y el mantenimiento de las obras, estableciéndose un fideicomiso inicial de 48 millones de dólares, monto que se incrementó progresivamente

Desafíos y soluciones para la implementación: las dificultades en la implementación incluían que sectores de la población se negaban a vender sus terrenos para las plantas de tratamiento o el atraso en el aporte de la municipalidad. Con el progresivo intercambio se fue ganando confianza y se pudo llegar a concretar los acuerdos, logrando un beneficio colectivo.



IMPACTO/ RESULTADO PRINCIPAL

Antes de la buena práctica, existía una competencia por el recurso hídrico entre actores con diferentes intereses. La ampliación de actividades de SMCV, concretada en 2016 y que posibilitaba 30 años de vida útil adicional a la minera, fue considerada una potencial amenaza tanto para el área rural como para el sector urbano que ya sufrían de escasez de este recurso. La buena práctica ha posibilitado mejores relaciones entre los diferentes actores. Se ha logrado incluir una visión común del tema del agua, evidenciando el potencial del trabajo con una perspectiva de desarrollo concordada en un plan a largo plazo. Se logra mejorar la calidad y cantidad de los recursos hídricos, y descontaminar las aguas del río Chili para consumo humano y la agricultura, con una potencial ganancia económica por la calidad del producto a ofrecer.



INNOVACIÓN

Lo innovador en esta buena práctica ha sido el aporte empresarial con una visión de integralidad que fue desarrollándose progresivamente en conjunción con la población y autoridades. SMCV fue altamente innovador al plantear -por ejemplo- el uso de aguas residuales de los desagües de uso humano proponiendo su tratamiento para sus operaciones, lo que (hasta donde se tiene información) no es una experiencia habitual. Esto se vio favorecido por la cercanía de la mina a la ciudad de Arequipa. La población y sus autoridades entendieron que era una salida viable que podría beneficiar a todos, al contarse con inversión garantizada.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: la participación de la sociedad civil a través de una amplia gama de organizaciones vecinales de la provincia de Arequipa, principalmente, fue muy dinámica en el establecimiento de la agenda y la presión para su cumplimiento. En la gestión misma las responsabilidades han recaído en las autoridades gubernamentales regionales y locales. La empresa ha mantenido canales de información periódicos a la ciudadanía sobre los avances de los compromisos.

- Pertinencia según necesidad: la falta de agua y la contaminación del río Chili como principal fuente era un problema real y prioritario que interesaba a la población cotidianamente. La solución planteada es pertinente ya que se ha generado una alianza en una apuesta de "todos ganan".
- Sostenibilidad institucional: técnicamente el sistema tiene una proyección de larga duración, hay compromisos de largo plazo de la empresa y el diálogo está abierto sobre el tema. Hay convenios y contratos firmados y sobre los que las autoridades y sociedad civil hacen seguimiento y se ha previsto presupuestos, sistemas y responsabilidades para sostener las inversiones.



ENFOQUES

Enfoque de Género: las dirigencias de la sociedad civil participantes en el proceso han sido principalmente de varones, que eran quienes ostentaban las representaciones gremiales en esos momentos. Mas el objeto del acuerdo, agua de calidad y en cantidad, mejoras ambientales, etc. es de interés prioritario de las mujeres que ven sus labores del hogar recargadas ante la escasez de agua, por el acarreo, almacenamiento, etc. y porque denotan una mayor sensibilidad al tema ambiental²¹.

Enfoque de Desarrollo Sostenible: Los contenidos del acuerdo se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible referidos a agua segura.



LECCIONES APRENDIDAS

Esta práctica demuestra que siendo el agua un bien escaso puede constituirse como eje, al ser priorizado en las relaciones empresa con la comunidad. La visión del ciclo completo del agua posibilita maximizar su potencial así como convocar a más actores.

La interacción de los diversos actores no es lineal y progresiva. Se requiere periódicamente evaluar avances y realimentar los procesos con nuevas iniciativas. Se requiere actualizaciones para refrescar periódicamente los avances y funcionamiento para compartir con la población los logros y compromisos y que éstos se respeten.



VALIDACIÓN

Esta buena práctica ha sido validada con los representantes de la empresa y con líderes sociales y la ONG Labor. Fue mencionada en la mesa de trabajo, realizada el 6 de junio de 2017. Ha merecido reconocimiento público en diversos eventos y por la SNMPE.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

AMAT Alonso 2016. "Minería y escasez de agua: El inédito acuerdo por el agua entre la minera Cerro Verde y la Región Arequipa". http://www.academia.edu/21156855/ARTICULO_CERRO_VERDE_-_Final
<http://www.horizonteminero.com/2017/08/03/cerro-verde/>

2.6.3.2. Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa. Afirmando la colaboración y el diálogo

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2007 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Compañía de Minas Buenaventura SAA. Autoridad Nacional de Agua, Ministerio de Energías y Minas, Gobierno Regional de Arequipa, municipalidades Orcopampa y Chilcaymarca. ONG Asociación Civil Labor, comunidades.



DESCRIPCIÓN

Operación minera: en 1967, la Compañía de Minas Buenaventura SAA empezó la exploración de Orcopampa (provincia de Castilla, región Arequipa) aunque éste ya era un pueblo minero desde la colonia, y en 1972 se inició su explotación, siendo una mina subterránea de oro y plata fundamentalmente. En 2016 se recuperaron 191.102 onzas de oro y 692.318 onzas de plata.

Monitoreo de agua: en 2007, se creó el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo (CMAP), que monitorea la calidad del agua desde entonces, en el ámbito de los ríos de Orcopampa y Chilcaymarca. La empresa asumió la importancia del monitoreo como mecanismo preventivo frente a posibles reclamos y conflictos. La ONG Asociación Civil Labor ha asumido la Secretaría Técnica y participa con un equipo de especialistas a cargo que cuenta con un financiamiento propio. La empresa muestra transparencia de información, mostrando los procesos ambientales mediante las pasantías, visitas planificadas a experiencias, instituciones y las propias instalaciones, con fines de aprendizaje. Las municipalidades también participan, nombrando a sus representantes y el alcalde de la municipalidad de Orcopampa preside el CMAP.

Miembros CMAP: está integrado por 16 delegados de las comunidades (dos por cada comunidad y adicionalmente suplentes) empresa, gobierno local y otras entidades, los que debidamente capacitados, realizan dos monitoreos de la calidad del agua. Cada comunidad elige a su delegado/a y se renuevan casi anualmente. Se cubren los gastos de los miembros pero no se asumen honorarios.

Capacitación: el monitoreo convoca una acción de capacitación sistemática (sesiones de capacitación de un día más un día de pasantía) con entidades de alto nivel de especialización, así como mujeres con una participación de alrededor del 40%. El monitoreo se realiza de acuerdo al protocolo nacional vigente (fueron alrededor de 40 empresas mineras que realizaron monitoreo ambiental y del agua en el año 2016) y se trabaja en coordinación con la Autoridad Local del Agua y la Autoridad Regional del Ambiente, realizando las pruebas de calidad del agua en un laboratorio certificado elegido por las partes, el mismo que es visitado por los participantes de CMAP. Un total de 140 líderes comunales y 30 líderes del sector público ha recibido la

capacitación, fortalecieron sus capacidades de liderazgo, y dirigieron los monitoreos en sus comunidades. En cada acción de monitoreo participan alrededor de 20 personas que cuentan con sus cuadernos de campo e instrumental facilitado por la ONG como ente a cargo.

Resultados del monitoreo: hasta 2017, se realizaron dos reuniones de monitoreo en campo por año. Los resultados del monitoreo son entregados por la secretaría técnica a la población en sesiones ampliadas, con dinámicas grupales, por ejemplo, se reconstruye el proceso de monitoreo a través de fotografías y cartillas por parte de los miembros del CMAP tomando como referencia los pasos del protocolo de monitoreo. Se usa presentaciones con diapositivas y diálogos fluidos y mediante una hoja informativa y un boletín. El representante municipal informa también en sesión de consejo municipal los resultados

Respuesta a emergencias: el CMAP está alerta en situaciones críticas. En 2014 se produjo la rotura de un ducto de la relavara, lo que generó una situación de alto riesgo. El CMAP se hizo presente en esa situación y puso de manifiesto sus protocolos.

Ampliación del CMAP a aire y suelos: la perspectiva es ampliar las funciones del CMAP y varios participantes están planteando otras acciones de monitoreo ambiental como del aire y de suelos.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

Con anterioridad a que se diera el monitoreo ambiental participativo solo la empresa ejercía esta acción y los demás actores desconfiaban de los resultados. Tampoco se compartían los resultados con la población ni autoridades locales. La buena práctica ha mejorado la comunicación y el diálogo, ha generado confianza y respeto entre las partes y ha mitigado potenciales conflictos. También, se genera y difunde información verídica sobre la calidad del agua, avalada por la Autoridad Local del Agua.



INNOVACIÓN

Se considera innovador el hecho de que el CMAP tenga un proceso realmente organizado para el desarrollo de capacidades y orgánico en el sentido de contar con representaciones de las comunidades y distritos que periódicamente se renuevan y son representativos, a lo que se suma representaciones estatales y de la empresa. Similares experiencias no cuentan con un desarrollo de capacidades consolidado. Asimismo, la activa presencia de las mujeres en el proceso destaca en esta experiencia.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el CMA integra representantes de los diferentes sectores, permitiendo renovación regular de sus miembros de las comunidades por elecciones. Se pone a disposición una capacitación ante los monitoreos y se asegura la posible participación de nuevos miembros, sobre todo jóvenes.
- Pertinencia según necesidad: la práctica responde al interés de la población en vigilar la calidad del agua, ya que es población campesina usuaria del agua y cuidadosa en mantener una fuente de calidad

- Sostenibilidad por consenso: la empresa, el gobierno municipal y la ONG Asociación Civil Labor valoran los monitoreos, se sostiene la presencia de líderes comunales y de las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de los resultados, periódicamente, y ellos socializan esos resultados en sus propios espacios.



ENFOQUES

Enfoque de Género: existe alta participación de las mujeres en el CMAP. Ellas asumen liderazgos proactivos y hay varias técnicas que vitalizan al comité.

Enfoque de Diversidad: hay especial atención para comunicar en forma sencilla y directa tanto a los participantes como a la comunidad en general ya que parte importante de la población es campesina y quechuahablante, contribuye a ello también la información radial.



LECCIONES APRENDIDAS

Sostener por varios años el monitoreo con participación de los diversos actores genera confianza y minimiza fuentes de conflicto. También, contribuye el generar capacidades incluyendo jóvenes y mujeres, con alicientes de certificación.

Contar con una institución de reconocido prestigio profesional e independencia ante las empresas en la Secretaría Técnica fortalece la confianza en la calidad del CMAP como espacio relacional.



VALIDACIÓN

Esta buena práctica ha sido validada con los representantes de la empresa, con líderes sociales y de ONG, además de representantes del GDMDS, y ha sido presentada en dos encuentros nacionales de comités de monitoreo ambiental. Asimismo, ha sido reconocida a nivel nacional obteniendo el primer puesto en el Premio “Cultura del Agua” realizado por la Autoridad Nacional del Agua.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

CARE PERÚ 2012. “Agua y Minería: Hacia una política de mejores prácticas en el uso y protección de los recursos hídricos en cuencas con actividad minera”.

<https://es.scribd.com/document/88587758/Agua-y-Mineria-Hacia-una-politica-de-mejores-practicas-en-el-uso-y-proteccion-de-los-recursos-hidricos-en-cuencas-con-actividad-minera>

http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2016/10/Presentaci%C3%B3n_CMVAP_Renee_Menard.pdf

2.6.3.3. Mesa de Diálogo de Huari. AMUCEP - Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Información



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2011 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa minera Antamina, Minera Nystar (luego Quenuales).

Asociación de Municipalidades de Centros Poblados - AMUCEP Huari, Ministerio del Interior, Ministerio de Energías y Minas, Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ahora Secretaría de Gestión Social y Diálogo en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM).

Comunidades, centros poblados.





DESCRIPCIÓN

Inicio extracción: las operaciones del complejo minero polimetálico iniciaron en 2001, produciendo concentrados de cobre (450.000 TM anual), zinc (2015.810 TMF anual), además de molibdeno, plata y plomo.

Inicio de conflictos: hasta 2011, no había una percepción ni mejoras evidentes en la calidad de vida de la población. Testimonios de la comunidad señalan que, a partir de la difusión de un estudio social realizado por una ONG se constató los altos niveles de desnutrición y anemia de la niñez en la zona mientras que la población percibía incumplimientos de compromisos de la empresa; el elevado Canon Minero que recibía la municipalidad no retribuíaba en beneficios a la población, y los acuerdos del Presupuesto participativo tampoco se implementaban. La incorporación de un nuevo dirigente legitimado animó la protesta por parte de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados Huari (AMUCEP) que organizó una acción de presión, paralizando por tres días las comunicaciones y el flujo de tránsito, e incluso tomando una de las instalaciones de la empresa minera, demandando más atención e inversiones.

Comisión para la gestión de conflictos: en vista de la escala del conflicto, el gobierno generó una comisión de alto nivel y se firmó un acta donde se recogieron las demandas y se plantearon su tratamiento, con el ánimo de comprometer al gobierno central. En 2012, se instalaron dos mesas de diálogo, ambiente e inversión social. Empezaron los diálogos y negociaciones entre AMUCEP (como representantes de las municipalidades de los centros poblados que son instancias de base de la población), la empresa minera Antamina y las representaciones del Estado, tanto municipalidad distrital como del Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Oficina Nacional y Diálogo Social. También, se integró la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en representación de la iglesia católica que contribuyó efectivamente al diálogo.

Interacción de entre gobierno, industria y sociedad civil: producto de este diálogo, se generó una alianza entre Estado, empresa y población representada por AMUCEP, para llevar adelante proyectos sociales y económicos como la forestación, represas, caminos, carreteras, infraestructura de salud, riego y educación. Los detalles de los proyectos – en este momento vivero y reforestación – son acordados entre los tres sectores. Estado y empresa se reparten los costos, siendo más de 8 millones de dólares lo correspondiente a la forestación (con un aporte de 26% de la empresa y la diferencia el Ministerio de Agricultura y Riego), además de otros en curso. Los comuneros han logrado empleo temporal en el proyecto de forestación. Además hay capacitaciones, pasantías e intercambios. La ONG Caritas asume la gestión del proyecto de forestación. Aunque con retrasos y ciertos incumplimientos de parte del gobierno, se continúa con las obras priorizadas.

Visión de largo plazo: la alianza está construida con una perspectiva de largo alcance y se basa en un “aprender haciendo”, aceptando también retrocesos y retrasos. Se visualizó la necesidad para fortalecer el tejido social, la mayor articulación entre las entidades estatales, y la comprensión mutua, además de definir de mejor manera el alcance del canon minero y la transparencia en el uso de los recursos por parte de las municipalidades.



IMPACTO/RESULTADO PRINCIPAL

El diálogo y la posterior alianza contribuyó a frenar las confrontaciones y avanzar a una lógica de desarrollo colaborativo. Hoy en día, ello se expresa en 3.052 hectáreas instaladas con eucaliptos, pinos y especies nativas. Se vislumbra el procesamiento y la comercialización de la madera y la producción de hongos comestibles. Junto a ello es de destacar los aprendizajes en el diálogo, la identificación de la necesidad de prepararse y tener una actitud concertadora así como priorizar sus demandas. A su vez, las representaciones del Estado tomaron conciencia que el Estado debe mantener sus compromisos y atención a este espacio.



INNOVACIÓN

La mesa propició el desarrollo de capacidades de las autoridades de centros poblados, un pequeño equipamiento y un fondo para el funcionamiento de AMUCEP, lo que le da cierta autonomía.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: fue muy significativo que –a pesar de haber empezado con una protesta violenta– se instalara la mesa de diálogo con la participación de todos los actores y se sostuviera en el tiempo, aunque no todos participan con la misma intensidad.
- Pertinencia según necesidad: la mesa de diálogo es **pertinente** frente a la escasa oportunidad de encuentro que existía entre las partes, y particularmente porque el gobierno central no estaba comprometido con los procesos locales.
- Sostenibilidad institucional: los acuerdos apuntan a proyectos de alta proyección de sostenibilidad ambiental y económica, como es el de reforestación y riego, así como a la continuidad del diálogo y las inversiones concertadas.



ENFOQUES

Enfoque de Género: las mujeres tienen escasa participación aunque muchas demandas atendidas responden a sus intereses. En la provincia, las mujeres no asumen mayormente puestos de liderazgo.

Enfoque de Diversidad: los participantes de la mesa de diálogo hicieron un esfuerzo para lograr un entendimiento cultural y enfrentar las diferencias de lengua.

Enfoque de Transformación de Conflictos: se buscó generar empatías, acuerdos consensuados y responsabilidad en el cumplimiento, para sostener la relación de confianza y prevenir crisis.



LECCIONES APRENDIDAS

El proceso de diálogo multi-actor posibilita que las comunidades conozcan el funcionamiento del Estado, la burocracia, las competencias, los plazos y requisitos así como -al interno- forjar la cohesión en sus demandas priorizando estas.

Las representaciones del Estado han asumido que se necesita reforzar su articulación a nivel del ejecutivo pero también entre los gobiernos municipales distritales, provinciales y regionales.



VALIDACIÓN

La buena práctica ha sido validada con líderes empresariales de Antamina y del Grupo de Diálogo Minería, con representantes de la Defensoría del Pueblo, líderes sociales participantes de la experiencia, de ONG y de la Iglesia.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://gestion.pe/economia/empresas/antamina-produciria-450-000-toneladas-cobre-ano-volumen-similar-2012-31739>

<https://gestion.pe/economia/produccion-zinc-cobre-acumulan-crecimiento-12-6-4-7-primer-semester-2017-140961>

<https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peruana-antamina-preve-duplicar-produccion-de-zinc-y-mantener-la-de-cobre-en-201>

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL PERÚ 2017. "Boletín Defensoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales 160, junio 2017". <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/Persistiendo-dialogo-Taller-Evaluacion-experiencia-AMUCEP.pdf>

2.6.3.4. REDyPAC en Hualgayoc: una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2009 - 2015



ACTORES PRINCIPALES

Empresa minera Gold Fields La Cima. ONG CEDEPAS Norte, cooperación internacional Lutheran World Relief (LWR) de EEUU.



DESCRIPCIÓN

Inicios: desde 2005, la empresa Gold Fields La Cima, en la concesión Cerro Corona, realiza explotaciones de cobre y oro (29.886 toneladas métricas finas de cobre y 166 mil onzas finas de oro en 2015), mediante métodos convencionales a tajo abierto y tratamiento de sulfuros mediante la extracción por flotación de concentrados, en la región Cajamarca, provincia y distrito de Hualgayoc, en la comunidad campesina El Tingo.

Iniciativa: la iniciativa de generar una acción conjunta surge de LWR y CEDEPAS Norte, ya que ambas habían desarrollado una relación de cooperación con algunas empresas, y CEDEPAS Norte tenía el contacto local con Gold Fields. Las tres instituciones firmaron un convenio que fue renovado hasta por seis años y aportaron los recursos económicos, siendo Gold Fields el principal donante (alrededor de 500 mil dólares en 5 años), más recursos de LWR y CEDEPAS Norte como implementador. Posteriormente, se logró una contrapartida con fondos estatales para el fortalecimiento de las actividades en ganadería.

Colaboración: el proyecto de colaboración Redes Empresariales y Participación Ciudadana (REDyPAC) tiene como objetivos mejorar los ingresos de los campesinos y ampliar la participación ciudadana del distrito. El propósito de esta alianza es que se tomen mejores decisiones concertadas, en una óptica de que todos ganen.

Retos: no fue fácil implementar el proyecto ya que se pidió contrapartida a los productores en una zona en la que las empresas mineras normalmente habían regalado los insumos, empezando con un reducido grupo. Al ver los resultados en mejoras productivas, poco a poco se interesaron más. En el caso del programa de liderazgo, la calidad de la propuesta, lúdica, dinámica, las pasantías, animó a sostener la participación.

Beneficiarios. a partir del proyecto, alrededor de 430 pequeños ganaderos han recibido asistencia técnica con inseminación artificial, dosificación, semillas para la mejora de pastos, pequeños sistemas de riego, micro reservorios, promoción de la agroforestería, entre otros, así como para la mejora de sus pequeñas plantas queseras, obteniendo incrementos en la producción de leche y en sus ingresos (hasta del 60% en la venta de quesos).

Participación ciudadana: el componente de participación ciudadana y desarrollo de capacidades convocó a los y las participantes del componente productivo y otras personas interesadas siendo un total de 163 personas. Un pequeño grupo de participantes se constituyó como el corazón del componente de participación ciudadana motivando a otros a integrarse.

Escuela de líderes: el proyecto creó una escuela de líderes, animaciones con teatro, intercambios, pasantías en la región y a Lima, participación en sesiones del GDMDS, y procesos de interaprendizaje, incluyendo dinámicas innovadoras y la reflexión sobre el propio Yo, conllevando a fortalecer líderes dialogantes con mejores niveles de información y habilidades en lo legal, en la capacidad de negociación y diálogo y en el desarrollo de propuestas viables. Se convocó a expertos e instituciones como la organización no gubernamental Prodiálogo para este programa. Así, los líderes pudieron desarrollar sus habilidades para relacionarse con autoridades de nivel regional y nacional y con funcionarios empresariales, se incorporaron jóvenes y algunas mujeres.



RESULTADO PRINCIPAL

Se ha logrado desarrollar conocimientos y capacidades técnicas (ensilaje de pastos, calendarios sanitarios, mejores prácticas de comercialización, higiene, mantenimiento, registros, etc.) de los productores locales y formar y fortalecer 35 plantas queseras artesanales, generando cinco redes empresariales que comercializan en forma conjunta. Se ha contribuido al mejoramiento de su pequeña infraestructura y equipamiento, con contrapartidas de cada productor. Así, han logrado subir los niveles de producción y el precio de venta, ampliando su cartera de clientes, tanto en Cajamarca como con ventas a Lima. Los productores ven en la ONG y empresa posibles aliados a la vez que no desestiman una mirada crítica a su intervención.

En un contexto de alto nivel de conflictividad regional, como fue la oposición y confrontación en torno al proyecto Conga, los liderazgos promovidos contribuyeron a que en la zona los conflictos no escalaran hacia niveles de movilización de masas y violencia.



INNOVACIÓN

Lo innovador ha sido conjugar a la par experiencias productivas con una labor de capacitación, desarrollando dinámicas innovadoras, conllevando a fortalecer líderes dialogantes con mejores niveles de información y habilidades en lo legal, en la capacidad de negociación y diálogo, y en el desarrollo de propuestas viables. Ellos fueron animadores de nuevas iniciativas presentadas ante la mesa de diálogo de Hualgayoc, mejorando la calidad de la participación. Algunos líderes pudieron desarrollar sus habilidades para relacionarse con autoridades de nivel regional y nacional, y con funcionarios empresariales.

En lo productivo, lo innovador ha sido la adecuación de buenas prácticas productivas a la zona, en la pequeña escala, redituando en mejores precios y calidad.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: se logró una participación sostenida de 430 productores y 163 líderes sociales con influencia en sus espacios locales y regionales, respetando sus diversos pareceres.
- Pertinencia según necesidad: la actividad ganadera y de producción de quesos a pequeña escala correspondía a las actividades económicas de la zona. Fue pertinente además el desarrollo de liderazgos concertadores en un ámbito con escasa experiencia de diálogo y creciente polarización.
- Sostenibilidad financiera e institucional: la experiencia en los aspectos productivos es sostenible ya que los involucrados están logrando mejoras significativas en nuevos mercados, ingresos, tecnologías, etc. y con cuidado ambiental, aunque demandan asistencia técnica por más tiempo. En lo social, líderes más empoderados tienen como referentes nacionales al GDMDS aunque faltaría consolidar espacios regionales para la interacción y fortalecimiento de liderazgos locales.



ENFOQUES

Enfoque de Género: Muchas mujeres son responsables de las actividades ganaderas de pequeña escala o de las plantas queseras artesanales ya que los hombres salen a trabajar a otras zonas o en las minas. Eso las ha empoderado ya que además varias de ellas se integraron a las actividades de participación ciudadana. En el desarrollo del proyecto se han formado 163 líderes de los cuales 70 son mujeres y progresivamente se incorporó un grupo de líderes más jóvenes. Las mujeres tuvieron un activo rol en el componente productivo, más que en la participación ciudadana, donde un reto es generar formas adecuadas de participación a su contexto cultural para sostener su participación.



LECCIONES APRENDIDAS

Se ha evidenciado que es posible generar confianza entre la empresa y la ONG a partir de experiencias concretas, con una intermediación profesional y autónoma.

El proyecto demuestra que el reto de articular desarrollo productivo y participación ciudadana es válido en tanto se retroalimenten ambos componentes y presenten la posibilidad de contribuir a generar una cultura dialogante y de transformación de conflictos.

Una lección es que un proceso de diálogo y colaboración requiere equipos altamente calificados y con estrategias definidas para convocar y articular respuestas dialogantes ante situaciones de tensión que se generen y para convocar a las mujeres en forma sostenida.



VALIDACIÓN

Representantes de LWR, CEDEPAS Norte, empresa Gold Fields La Cima, líderes comunales y autoridades locales. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

LWR 2016. "Documento interno de evaluación externa de LWR. Final Report Project: Evaluation of Civic Participation Initiatives in Peru". LWR USA.
<https://www.goldfields.com.pe/gamaderia-y-desarrollo-productivo.html>
AMAT Y LEÓN, Carlos y Francesca DASSO, 2015. "Un lugar para vivir feliz. Redes empresariales y participación Ciudadana en Hualgayoc". Lima, LWR y Gold Fields.
GOLD FIELDS LA CIMA SA 2013. "Annual Report and Sustainability Report". <http://static.globalreporting.org/report-pdfs/2014/0cb3d0be4239eb45d8535eff02dd610c.pdf>
https://www.goldfields.com.pe/upload/gold_fields_la_cima/reporte-integrado-2015-esp-final.pdf

2.6.3.5. Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



DURACIÓN

1999 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresas privadas (Compañía de Minas Buenaventura, Anglo American, Antamina, Milpo, Glencore, entre otras). Estado (Autoridad Nacional del Agua, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros). ONG Asociación Civil Labor (Labor), otras ONG como Prodiálogo, CARE, consultoras privadas, líderes sociales, académicos.



DESCRIPCIÓN

Plataforma multi-actor: el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) es una plataforma multi-actor reconocida al nivel nacional, incluyendo profesionales, líderes empresariales con una clara opción de responsabilidad social, líderes municipales y de comunidades, consultores y profesionales de ONG.

Su inicio: tiene su origen en 1999 en un contexto de proceso de privatización de los recursos naturales. La ONG Asociación Civil Labor impulsó una serie de reuniones de personas vinculadas al sector minero, animando a establecer un diálogo sobre los procesos en curso particularmente la reforma del mecanismo del canon minero.

Intercambio: temas de significación nacional para el sector fueron presentados en las reuniones GDMDS generando un vivo intercambio de opiniones diversas, pero con un denominador común: la responsabilidad social y ambiental.

Estructura de la plataforma: se han generado cuatro espacios básicos de interacción: (1) El Foro del Grupo de Diálogo es el espacio plenario abierto al público (más de 100 participantes, 2 veces al año) y que incluye una serie de dinámicas particulares, informes y temas de actualidad. (2) El Grupo de Diálogo Directo es el core del espacio dialógico,



aportando en preparar la agenda y las reuniones amplias, pero sobre todo se dialoga fluidamente sobre los temas sensibles, sus reuniones (unas 5 al año) son reservadas. (3) El Comité Coordinador formado por tres personas es un espacio de soporte. (4) La Red Electrónica del GDMDS, Comunicaciones. Anualmente más de 500 personas participan de sus diversas actividades y más de la mitad proviene de variadas regiones además de Lima, e incluso de otros países.

Comisiones: se han establecido comisiones temporales como Consulta Previa, Estudios de Impacto Ambiental, Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente que emiten algunos pronunciamientos.

Plataforma virtual: el mecanismo virtual es otro espacio de tratamiento de los conflictos. La red abierta del GDMDS cobra fuerte dinamismo en momentos críticos, da espacio a grupos de líderes de opinión que exponen sus puntos de vista, a veces controversiales.

Financiamiento: su financiamiento (para las sesiones de trabajo, los traslados de líderes sociales y un pequeño equipo de soporte para la coordinación y la red de comunicaciones) es también de corte multi-actor; pequeños fondos de empresas y de ONG como fuentes más significativas.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

El GDMDS cuenta con un conjunto de expresiones de acuerdos: la visión, los principios del GDMDS que contribuyen a fijar reglas de juego, y algunos pronunciamientos que cumplen un rol de integrar voluntades. El documento Visión de la Minería al 2021²¹² fue formulado en 2015, con cerca de 120 adscripciones.

El GDMDS ha contribuido a generar y fortalecer diversas iniciativas a nivel nacional e internacional, como la Red de Líderes Sociales, el Grupo Ancash y el Acuerdo Regional Arequipa, así como el Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible (GDL), una plataforma latinoamericana de intercambio y trabajo colaborativo, gestada e integrada por grupos e iniciativas de diálogo multi-actor sobre minería de ocho países de América Latina.



INNOVACIÓN

El espacio se sostiene por casi 20 años con la participación de representaciones de diversos actores del sector minero, alimentando diálogos multi-actor pero también en el seno de algunos sectores, como los líderes sociales. El diálogo es presencial, virtual, en espacios pequeños y más amplios, y va enriqueciéndose con la integración de formas lúdicas, el tratamiento del yo, las relaciones de género, por ejemplo. Y, a pesar de no contar con un financiamiento directo y concreto, genera variadas formas para sostener los recursos necesarios para la sostenibilidad del espacio.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el espacio multi-actor es de alta calidad, con fluidez y respeto ante la diversidad de opiniones de empresa, Estado y organizaciones sociales, y matices sobre el tratamiento a los conflictos.
- Pertinencia según necesidad: la temática tratada es altamente pertinente frente a la realidad nacional (conflictos socioambientales, recursos, experiencias innovadoras) y del sector, y contribuye a generar opinión informada y contrastada de los participantes.
- Sostenibilidad financiera: la experiencia del colectivo es sostenible por la naturaleza de la temática que se trata: aspectos ambientales, sociales y económicos del sector. El GDMDS se proyecta en el tiempo al contar con el soporte de diversas fuentes para los gastos básicos del espacio y tener el compromiso de las partes, aunque ello requiere un esfuerzo denodado para captar recursos orientados al apoyo para traslados de líderes sociales de regiones alejadas a los eventos, facilitar encuentros descentralizados, acciones comunicativas, etc.



ENFOQUES

Enfoque de Género: Hay una creciente participación de mujeres que bordea el 50%.

Enfoque de Diversidad: Concurren a las diferentes sesiones y niveles del GDMDS gerentes de alto nivel de empresas y proyectos internacionales y nacionales. Se busca propiciar diálogos con líderes de comunidades andinas de proyectos mineros ubicados en el norte y sur del país, que se han incrementado en los últimos años. En las reuniones de la Red de Líderes Sociales se presta especial atención a formas comunicativas e intercambios adecuados a diferentes participantes.



LECCIONES APRENDIDAS

La generación de espacios multi-actor contribuye a ampliar la visión de los participantes pero requiere un liderazgo reconocido y tenacidad para convocarlos, definir la agenda y gestionar las diferencias internas.

Una tensión a enfrentar es si el espacio de diálogo debiera intervenir directamente en los conflictos con un rol de mediación o negociación.

Los espacios multi-actor requieren una corresponsabilidad para su gestión, pero manteniendo la autonomía en su accionar.



VALIDACIÓN

La experiencia ha sido validada a partir de diálogo con líderes empresariales, de entidades de cooperación y de sociedad civil, así como con bibliografía secundaria.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

ARBELÁEZ-RUIZ, Diana y Daniel M. FRANKS, 2014. "Sentándose a la Mesa".
http://www.dialogolatinoamericano.org/wp-content/uploads/2015/08/AQ0214_FRANK_SPANISH_LAY03_single-1.pdf
<http://www.dialogolatinoamericano.org/>
CHÁVEZ, Julio y Marina IRIGOYEN, 2017. "El Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) como experiencia democrática deliberativa en los procesos socioambientales del Perú, en el siglo XXI". Tesis de Maestría. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/10005>

2.6.4. Análisis de Actores

A continuación, analizamos los actores clave del relacionamiento entre empresa, sociedad civil y Estado en la industria extractiva, incluyendo su accionar en esta temática, así como también algunas de sus fortalezas y debilidades.

Empresa

Destaca la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como el más significativo gremio de las empresas de industrias extractivas, la cual congrega, defiende y promueve los intereses de los empresarios mineros, petroleros y de energía, con preponderancia de los primeros. Ante sucesivos gobiernos nacionales, la SNMPE ha hecho prevalecer su poder por la importancia de la minería en la economía y por tanto se percibe la presión ante las autoridades gubernamentales para limitar controles ambientales, fiscales y solicitar una mayor intervención del Estado en la prevención y gestión de conflictos sociales. Un pequeño grupo de empresas está adscrito a los principios de ICMM como también la propia SNMPE, aunque eso no implica que todas las empresas socias lo refrenden y practiquen. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) es un gremio nuevo y busca un espacio propio para expresar los intereses de la industria petrolera enfatizando su competitividad. Tiene una propuesta proclive al diálogo y busca formas de relacionamiento con estándares de buenas prácticas.



Estado

El Estado carece de un ente rector legitimado que articule esfuerzos con los gobiernos regionales y a nivel sectorial, a la vez que cuente con recursos y capacidades, lo que mermaría su capacidad de intervenir en los conflictos socioambientales y llamar al diálogo²¹³. Recae en el gobierno central la principal competencia para atender los conflictos socioambientales²¹⁴ (más del 68% de los casos, seguido de los gobiernos regionales con 17%). Sectores de sociedad civil, principalmente, perciben al Ministerio de Energía y Minas como poco neutral frente a los conflictos socioambientales²¹⁵. En los aspectos ambientales hay un desarrollo significativo de la institucionalidad (normas, reglamentos, instancias como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), aunque es visto como insuficiente la coordinación de éste con las otras oficinas y con los espacios regionales²¹⁶. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, pero la reorganización y posterior

incorporación al Viceministerio de Gestión Social- Presidencia del Consejo de Ministros, así como sucesivos cambios en la coordinación neutralizó su rol. La Defensoría del Pueblo es el actor más reconocido en la intervención en conflictos socioambientales y en la búsqueda del diálogo multi-actor, según señalan las encuestas nacionales. Su función es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona -entre ellos el derecho a gozar de un ambiente saludable- y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Sociedad Civil

Las organizaciones no gubernamentales desarrollan líneas de acción de información, incidencia, y diálogo. Desde una perspectiva crítica, Cooperación - Acción Solidaria para el Desarrollo y el consorcio Propuesta Ciudadana, que aglutina 10 ONG, contribuyen a la transparencia en el sector extractivo mediante reportes y análisis, asistencia técnica y procesos de formación. La ONG Grufides combina la generación de información con la incidencia regional buscando imponer restricciones al ingreso o actividad de empresas mineras. El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible es un espacio multi-actor en el cual diferentes ONG como Labor o Prodiálogo juegan un rol importante de articulación.

El Consorcio de Investigación Económico y Social, asociación de 48 instituciones peruanas dedicadas a la investigación y la docencia, desarrolla análisis, diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos públicos; y busca fomentar el diálogo y la interacción entre la academia, el sector público y la sociedad civil. Cuenta con una línea de investigación: ambiente, recursos naturales y desarrollo rural, que analiza la problemática de las industrias extractivas y que enfatiza su rol analítico y de diseño de propuestas en los años recientes.

Dos representaciones de pueblos indígenas existen en la amazonía. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que cuenta con importantes bases locales aunque tiene dificultades para concertar acciones con las mismas y lleva a cabo acciones reivindicativas y de vigilancia ambiental ante las industrias extractivas. La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) que reúne a importantes etnias de la amazonía, aunque con menos presencia regional que AIDESEP; tiene un acercamiento al Estado, Perupetro y otras empresas extractivas.

La Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria son dos gremios nacionales que mayormente reúnen a federaciones y asociaciones de poblaciones andinas, no necesariamente indígenas. La Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería es un colectivo (suerte de gremio y ONG) que hacia 2010 tuvo alto protagonismo, contribuyendo al desarrollo de capacidades, con movilizaciones y vocería, haciendo visible las problemáticas y demandas de diferentes comunidades andinas. Ha sido enfática en su crítica a las industrias extractivas pero en los últimos años ha sufrido pugnas internas y no se encuentra mayormente activa. La Red Nacional de Líderes Sociales, conformada hacia 2010, es un espacio de diálogo y de coordinación, integrada por cerca de 50 líderes y lideresas de comunidades de las zonas de influencia de la actividad minera, organizaciones sociales de base y gremios, así como de gobiernos regionales y locales, está articulada al GDMS.

La Universidad ESAN y la P. Universidad Católica del Perú (PUCP) son universidades privadas que tienen algunos programas o diplomados en temas de relaciones comunitarias, negociación y similares. En general, los estudios e investigaciones de estas universidades son respetados. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es la universidad pública más importante del Perú y tuvo un convenio con la U. Queensland Australia para mejorar capacidades de sus profesores en temas sociales y llevar a cabo réplicas en otras universidades, aunque no se ha concretado. Además la PUCP y UNMSM cuentan con reconocidas facultades en ingeniería de minas, geología y temas afines.

De reciente constitución destaca el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de Universidad del Pacífico, espacio de investigación, educación, diálogo y reflexión sobre el sector minero. Sus esfuerzos apuntan a la integración del Estado, las empresas y las comunidades mediante políticas públicas y de gestión empresarial consensuadas. Es de creación reciente y busca consolidarse como referente técnico e independiente, a nivel nacional e internacional, para la consultoría y capacitación, orientada a potenciar el desarrollo sostenible de esta actividad económica.

2.6.5. Marco Legal

Según la Constitución Política del Perú (1993), los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento. Las circunscripciones de donde se extraen recursos naturales reciben el canon. El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).

La entidad encargada de otorgar los títulos de concesiones mineras en el Perú, administrar el catastro minero nacional y los pagos que hacen los titulares mineros para mantener sus derechos mineros es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMET).

Actualmente, en Perú las licencias de hidrocarburos son asignadas por Perupetro que otorga el contrato si la empresa cumple con los requisitos especificados en el marco normativo para la calificación de empresas, contratación y suscripción de contratos. La licencia está asociada a la aprobación del lote mediante concurso público o negociación directa. En cuanto a licitaciones otorgadas, en el período 2015 y 2016 no han existido casos de procesos de licitación en el sector hidrocarburos²¹⁷.



Información

La Constitución Política del Perú, el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (en su art. 6 del Título Preliminar) y la Ley General del Ambiente consideran el derecho de las personas a ser informadas en general y sobre las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas, la integridad del ambiente y los recursos naturales, así como a participar en la definición de la política general y adopción de medidas relativas al ambiente y a los recursos naturales.

En el sector minero la Ley General de Minería No. 23453 (1992) y el Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector minero DS No. 028-2008-EM y el DS N° 052-2010-MEM/DM enfatizan en brindar información oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas o en ejecución, promover el diálogo con las población del área de influencia y sus organizaciones representativas, recogiendo las opiniones de la población.



Diálogo

La misma Ley reconoce las mesas de diálogo como espacio de participación. Se han generado el Protocolo de Relacionamiento, el Plan de Participación Ciudadana y los Planes de Relacionamiento con las Comunidades que van de la mano de una Guía de Relaciones Comunitarias de obligatorio cumplimiento. En hidrocarburos, el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos DS N° 012-2008-EM. Art. 17 y 18 prevé el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana.

En hidrocarburos, el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos DS N° 012-2008-EM. Art. 17 y 18 prevé el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. También considera las etapas del proceso de participación ciudadana: en la negociación o concurso y suscripción de los contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos; durante la elaboración y evaluación de los estudios ambientales; y posterior a la aprobación de los estudios ambientales. Sin embargo, entidades especializadas denotan que “se verifica que Perupetro no cumple su función y no garantiza la participación ciudadana durante la etapa de concurso y negociación conforme lo dispone el propio reglamento que textualmente señala que «compete a PERUPETRO S.A. conducir el proceso de Participación Ciudadana de las áreas en las cuales se esté negociando o concursando para la suscripción de un Contrato de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos»”²¹⁸.



Consulta

Existe una significativa normatividad referida a la participación de las poblaciones alrededor de las industrias extractivas. Parte de ella está asociada a la realización de los estudios ambientales. Los diferentes tipos de estudios ambientales: Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA SD) y el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D) deben incluir un Plan de Participación Ciudadana²¹⁹. Si bien los estudios ambientales se dividen en categorías, existe un procedimiento similar en cada uno de ellos, incluyendo (1) la difusión en los lugares de

mayor afectación del proyecto, la información y documentos en un formato sencillo y claro y solicitando a la comunidad o sus representantes antecedentes u observaciones sobre el proyecto de inversión propuesto. (2) Convocatoria pública a los procesos de participación ciudadana, a través de los medios de prensa de mayor difusión y medios electrónicos de comunicación. (3) La audiencia pública se realizará en la zona donde se desarrollará el proyecto de inversión, procurando que el lugar elegido sea aquel que permita la mayor participación de los potencialmente afectados. (4) El proceso de participación pública debe ser debidamente documentado y registrado en el expediente, siendo de conocimiento público toda la información generada a partir de dicha consulta.

La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley N° 26505) establece que las personas tienen derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos referidos a la actividad minera. Constituyen trasgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana las acciones o medidas que tomen las autoridades, los titulares mineros o las poblaciones involucradas, que impida u obstaculice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana. La autoridad competente determinará los mecanismos a considerar en los procesos de participación ciudadana, según resulten apropiados, de acuerdo con las características particulares del área de influencia de la actividad minera, del proyecto y su magnitud, de la población involucrada, la situación del entorno y otros aspectos relevantes.

En 2008, se promulgó el Decreto Supremo No. 028-2008-EM y la Resolución Ministerial No. 304-2008-MEM/DM modificados por la Resolución Ministerial 009-2010-MEM/DM, que extiende sus provisiones a la modificación de los EIA semidetallados, la modificación de las actividades de exploración minera Categoría II, la modificación de estudios ambientales por ampliación y la modificación de las actividades de explotación o beneficio minero. Se destaca que reconoce el derecho a la información, la vigilancia ciudadana, el diálogo continuo. Se exige que las empresas cuenten con un Plan de Participación Ciudadana y un Plan de Relaciones Comunitarias y se establece que los mecanismos de participación ciudadana deben contemplar preferentemente la implementación de una Oficina de Información Permanente o un Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo. Estos siguen vigentes aunque se ha reconocido la normatividad específica para el ejercicio del derecho a la Consulta Previa.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue ratificado por el Congreso de la República en 1993 y entró en vigencia en el Perú desde el 2 de febrero de 1995. En 2011, se aprobó y promulgó la Ley del Derecho a la Consulta (Ley N° 29785). Además de la Ley y Reglamento sobre la Consulta Previa (D.S. N° 001-2012-MC) se cuenta con una Guía Metodológica publicada por el Ministerio de Cultura²²⁰.

La Ley N° 29785 señala que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, “salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes”. Indica además que el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, es el encargado de brindar, concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta. En ese marco, se ha desarrollado una Directiva de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, que ha identificado (al 2016) a 55 pueblos indígenas u originarios. La primera Consulta Previa en hidrocarburos en el Perú fue la del Lote 169 (región Ucayali) y en minería recién se inició en 2015; las experiencias están en progresivo ajuste.



2.7. REPÚBLICA DOMINICANA

Cristina Thomen Ginebra, Organismo Latinoamericano de Minería:
cthomen@gmail.com

2.7.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en la República Dominicana, no existen actividades de petróleo o gas. La actividad minera ha crecido significativamente²²¹. El porcentaje respecto al Producto Interno Bruto pasó de 0,4% en 2010 a 1,9% en 2016²²². En 2016, la exportación de minerales constituyó 18,13% de las exportaciones totales²²³. El oro aportó 76% del total de las exportaciones de minerales. Las provincias donde la producción minera ha tenido un impacto significativo, tanto en creación de riqueza como generación de empleos, han sido Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Pedernales. Aunque la Ley Minera establece impuestos y regalías para el sector, las cuatro compañías mineras grandes que operan en el país tienen contratos especiales. Está previsto un impuesto de 5% de los beneficios netos de las empresas para los municipios (Ley 64-00), pero no todas las empresas cumplen con eso a cabalidad. El sector de minería formal metálica²²⁴ crea 9.199 empleos directos y 25.760 indirectos. El porcentaje de empleo de la industria extractiva es de 0,21%.

Social: en la República Dominicana existen tensiones entre la industria y la sociedad civil sobre la actividad minera y también grandes retos en lo social y ambiental. Estas tensiones y retos se presentan por la necesidad de desarrollar políticas que aseguren la sostenibilidad del sector. Los dos retos más importantes, la gobernanza y la implementación y seguimiento de la licencia ambiental, tienen espacio para el desarrollo, sin olvidar también el hecho de que se debe validar la opinión de la sociedad civil a través de la licencia social.

Buenas prácticas



Planes de Desarrollo Municipales: (2009 - 2017, Diálogo/Consulta/ Colaboración/ Alianza). La empresa Barrick-Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) impulsó mesas de trabajo multisectoriales en los municipios cercanos a la mina, como antesala a un proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Municipales entre los diferentes sectores de las municipalidades y su respectiva aprobación por plebiscito el 3 de mayo de 2009. Hoy en día aún siguen vigentes, siendo la guía del desarrollo social y económico de cada municipio.

Incubadora de Empresas Cibao Sur: (2011 - 2017, Consulta/Colaboración/Alianza). Es el fruto de una alianza público-privada diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores de la Franja Oriental del Cibao Sur, a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales tales como estudios de mercado, análisis de procesos, asesorías legales y financieras. La incubadora responde a un plan de desarrollo elaborado de manera participativa y apoyado por la empresa PVDC.

Productos Candiver: (2003 - 2017, Alianza). Es una pequeña fábrica de productos de limpieza, medicinales y aseo personal, formada en diciembre de 2003 por un grupo de mujeres de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. En sus inicios se capacitaron a 22 mujeres en elaboración de productos químicos, con recursos propios, quienes

Mapa de Actores



a su vez se encargaban de promover y vender los productos. En 2009, Barrick-Pueblo Viejo Dominicana (PVDC) hizo contacto con Candiver y les apoyó en temas de financiamiento, capacitación y comercialización. En 2017, Candiver tuvo presencia en más de 75 comunidades y un grupo de 300 vendedores que llevan, distribuyen y re-venden los productos al detalle.

Mesas Redondas Comunitarias: (2013 - 2017, Diálogo/Colaboración). Con la iniciativa de la empresa Falcondo surgen las mesas redondas comunitarias como organismos de planificación y comunicación para lograr un relacionamiento comunitario directo con las 9 comunidades (63.700 habitantes) que habitan alrededor de la mina. Cada mesa redonda ha sido debidamente incorporada bajo la Ley para la Regulación y Fomento de la Asociaciones Sin Fines de Lucro (ley 122-05) y representa a la comunidad en diálogos con actores externos.

Apadrinamiento de Escuelas: (1989 - 2015, Alianza). El fin de este programa, ejecutado por la Fundación de la empresa Falcondo, es apoyar a escuelas públicas con capacitaciones a los maestros y responder a las necesidades que tengan el plantel escolar, incluyendo además un programa de alfabetización de adultos. El programa implicó el involucramiento del Ministerio de Educación y la sociedad civil a través de las asociaciones de padres y juntas de vecinos de las escuelas. Hasta 2016, 132 centros educativos participaron con más de 75.000 estudiantes que representan más del 70% de la población estudiantil de las provincias Monseñor Nouel y La Vega.

En el país, operan cuatro empresas mineras grandes, Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), Falconbridge Dominicana (Falcondo)²²⁵, Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y Las Lagunas Ltd. Como gremio existe la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) que agrupa las empresas metálicas, no metálicas y de servicios.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), creado en 2013, establece las políticas mineras. La Dirección General de Minería (DGM) es un ente adscrito al MEM y encargado del control de la actividad extractiva. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) aplica las regulaciones ambientales.

En la sociedad civil se destacan: la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como también la Comisión Ambiental, perteneciente a la misma universidad y con una posición crítica a la industria minera. Es importante incluir el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE) que agrupa más de 137 organizaciones populares, gremios, asociaciones campesinas y organizaciones no gubernamentales, formado en 2015 resultado de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI). La Comisión Nacional EITI está jugando un rol importante como iniciador de un diálogo multi-actor.

Como actores locales están las mesas redondas comunitarias en el municipio Bonao, el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), el Centro de Formación de Mujeres Organizadas María Liberadora (CEFOMOMALI) cooperativa que agrupa más de 3.000 mujeres en Cotuí, y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) única universidad en el país que ofrece la carrera de geología y minas.



El sector minero opera bajo la Ley Minera 146-71 y las disposiciones y regulaciones que ejerce el Ministerio de Energía y Minas. No obstante, las principales actividades mineras se rigen bajo contratos especiales con el Estado.

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), sus reglamentos y procedimientos, establecen las líneas de acción del sector, incluyendo la consulta pública como parte de la obtención de la licencia ambiental.

La Ley del Distrito Nacional y los Municipios (2007)²²⁶ establece el derecho a plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre proyectos de infraestructura (art. 234). También existe la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, por lo que los documentos y contratos entre el gobierno y la industria tienen acceso público (2004)²²⁷.

2.7.2. Introducción

La industria minera de la República Dominicana es relativamente nueva, aunque las exploraciones de minerales y de hidrocarburos se vienen realizando desde inicios del siglo pasado. Es a partir de los años 70 que se impulsa la minería mediante dos grandes proyectos: la mina de níquel de Falcondo y la mina de oro y plata de Pueblo Viejo²²⁸.

La minería se ha convertido en uno de los sectores clave del desarrollo económico de la República Dominicana. De acuerdo al ranking de empresas de la Dirección General de Impuestos Internos, el sector de minas y canteras ocupaba el 45% del total de impuestos recolectados por el gobierno por encima del sector comunicaciones con un 19% en 2015²²⁹. Estos datos reflejan un incremento importante en 2016 cuando esta cifra subió a un 51%²³⁰. Estos porcentajes son básicamente sustentados por las actividades de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).

Es a partir de finales de la primera década del milenio, que se empezaron a implementar nuevas iniciativas de relacionamiento entre los actores²³¹. Estas iniciativas se perciben en los entornos más cercanos a las minas y no son muy conocidas a nivel nacional. Las nuevas formas de relacionamiento impulsadas mayormente por PVDC en la provincia Sánchez Ramírez²³² han contribuido a un mayor nivel de educación de las poblaciones con programas de alfabetización de adultos, fortalecimiento del sistema educativo primario, capacitaciones técnicas en diversas áreas, tanto para servir a las minas directa o indirectamente, como para el desarrollo de emprendedores en las provincias mineras. Igualmente, se han desarrollado programas que fomentan la educación ambiental, la mejoría en los cultivos, el manejo de bosques y el ecoturismo, creando nuevas fuentes de empleo y fomentando el encadenamiento productivo. El aporte en responsabilidad social realizado por PVDC entre 2008 y 2014 superó los 25 millones de dólares en áreas educativas, emprendimiento, salud preventiva, infraestructura, autoempleo y microempresas y medioambiente, impactando más de 30 comunidades y alrededor de unas 66.500 personas²³³.

Los proyectos de responsabilidad social, que empezaron a desarrollarse en la última década (PVDC 2008, Cormidom 2010, Las Lagunas 2011) en las provincias mineras, han generado cambios para un mejor entendimiento del sector y una

actitud más abierta hacia el diálogo. Ejemplos de estos proyectos son los incluidos en este informe. En el caso de la provincia Sánchez Ramírez, el rol del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR)²³⁴ que fue formado para el manejo de los fondos generados por las mineras, ha sido importante para que la población logre entender qué es el Estado quién debe distribuir las rentas mineras pagadas por las operaciones de las empresas PVDC y Las Lagunas Ltd. a los municipios producto de 5% que establece la Ley 64-00. El FOMISAR es la institución que distribuye el dinero que proviene de la actividad extractiva para financiar los planes de desarrollo municipales.

2.7.3. Buenas prácticas

En la República Dominicana, se han identificado diversas buenas prácticas. Se han escogido cinco que abarcan todos los niveles de relacionamiento. La mayoría se encuentra a nivel de alianza. En estos casos, el relacionamiento parte de la empresa y tiene como objetivo la inversión de los recursos de manera coordinada con la sociedad civil y muchas veces con las autoridades locales. A nivel de la consulta, se analiza un plebiscito sobre planes de desarrollo que han ayudado a priorizar estas inversiones.

Las buenas prácticas son:

2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales

2.7.3.2. Incubadora de Empresas Cibao Sur

2.7.3.3. Productos Candiver

2.7.3.4. Mesas Redondas Comunitarias

2.7.3.5. Apadrinamiento de Escuelas



2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Consulta



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2008 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Barrick Pueblo Viejo Dominicana (PVDC), Fundación Falcondo.

Federación Dominicana de Municipios, Embajada de Canadá, Junta Central Electoral de la República Dominicana, gobiernos locales, oficinas sectoriales del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Agrario de la República Dominicana.

Representantes de las comunidades de Fantino y Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez y Maimón de la provincia Monseñor Nouel.



DESCRIPCIÓN

Explotación de oro: PVDC tiene un contrato de arrendamiento con el Estado dominicano para la operación de la mina de oro de Pueblo Viejo. Esta mina fue operada inicialmente desde 1973 por la empresa Rosario Resources LTD. En 1979, fue comprada por el gobierno dominicano y cerrada en 1999 cuando se terminaron los depósitos de óxido. En 2001, fue licitada y adquirida por la empresa Placer Dome. En 2006, PVDC adquirió Placer Dome y consecuentemente la concesión de la mina de Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es una de las minas de oro más grandes en el mundo. La producción para 2016 alcanzó 1.167 millones de onzas de oro. Cuenta con unas reservas probadas de unos 13,1 millones de onzas de oro, más alrededor de unos 78,4 millones de onzas de plata y 334,6 millones de libras de cobre contenidas en la reserva de minerales²³⁵.

Plebiscito como norma: la Ley Municipal 176-07 contempla la figura del plebiscito como herramienta de consenso y gestión para las municipalidades. En 2008, PVDC detectó la necesidad de trabajar con la población de los municipios cercanos al área de la mina, para prepararlos para recibir el 5% de los beneficios de la empresa según establece la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aprovechando la figura del plebiscito, en cada municipio se organizaron mesas redondas de trabajos con 4 ejes principales²³⁶, consensuados con su población, que derivó en el plebiscito celebrado el 3 de mayo de 2009, donde la población votó aprobando los planes de desarrollo de cada municipio.

Alianza con gobiernos locales: para llevar adelante estas mesas, PVDC estableció una alianza con líderes del gobierno local y la sociedad civil que incluyó la validación de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo a través de los Consejos Municipales en Maimón, Fantino y Cotuí.



Capacitación previa: primero, se preparó el equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de PVDC mediante talleres y reuniones. También, se capacitó a los líderes comunitarios, un total de 60 representantes del gobierno local y de las comunidades, que recibieron entrenamientos en la elaboración de planes de desarrollo.

Información: mediante diferentes vías, que incluyeron la celebración de talleres y reuniones, se informaba a las comunidades sobre el proceso.

Mesas redondas: con estos pasos previos, en cada municipio se organizaron mesas redondas. En las mesas se acordaron 4 ejes principales de trabajo²³⁷: a) Economía, Producción y Empleo; b) Recursos Naturales, Medio Ambiente, Mitigación y Prevención de Riesgos; c) Salud, Deporte, Educación y Cultura; d)

Fortalecimiento Institucional, Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana. En las mesas redondas se acordaron planes de desarrollo para cada municipio.

Foros de consenso: una vez que hubo resultados de las mesas redondas, se llevaron los resultados a ser consensuados por las comunidades a través de un congreso municipal con un mínimo de 500 participantes por cada municipio.

Plebiscito: en un proceso conjunto entre los municipios, en mayo de 2009, el plebiscito fue celebrado. La población votó aprobando los planes de desarrollo de cada municipio reconocido ante el gobierno central y local y cuyo proceso fue validado por la Junta Central Electoral²³⁸. Fue la primera vez, y única hasta el momento, que en la República Dominicana se celebraba un evento de esta categoría.

Guía de priorización: en este proceso participativo, que involucraba autoridades, sociedad civil y empresa, se generó también una guía que contenía las ideas sobre proyectos a ser realizados en cada territorio para su desarrollo en los próximos 5 años, basados en los 4 ejes de las mesas redondas de trabajo.

Implementación: la implementación de los planes fue apoyada por los Consejos Municipales Económicos y Sociales²³⁹, que se incorporaron a las mesas redondas de cada municipio como organismos reconocidos por el Estado.

Nueva forma de repartición: en 2013²⁴⁰, el contrato de operación de PVDC fue renegociado por el gobierno del presidente Danilo Medina. Como parte de esta negociación el 5% estipulado en la Ley 64-00 pasó a ser recolectado directamente por el gobierno central. Ante esto, ya las comunidades no percibirían directamente estos ingresos. Los aportes serían pasados a las comunidades a través del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), que aporta a las municipalidades de acuerdo a los proyectos plasmados en los planes de desarrollo.

Actual: en el presente como parte del programa de responsabilidad corporativa que desarrolla la empresa directamente con las comunidades, todo el accionar de PVDC hacia los proyectos de responsabilidad social está basado en los planes de desarrollo, reconociendo de esta manera como legítimas las solicitudes allí plasmadas para el desarrollo de las mismas.



IMPACTO/ RESULTADO PRINCIPAL

En resumen, parte de los impactos positivos de los proyectos de inversión de PVDC en las comunidades desde 2008 hasta 2017 y con una inversión que sobrepasa los 25 millones de dólares, son:²⁴¹

En educación: dentro del municipio de Cotuí se realizaron planes de alfabetización, nivelación escolar, actualización de maestros, capacitaciones en ciencias y formación de mujeres líderes. Entre estos proyectos se involucraron más de 84 comunidades, más de 3.000 mujeres, unas 20 escuelas cercanas a la mina más de 750 docentes más de 3.900 estudiantes y unos 15 técnicos de la regional del Ministerio de Educación, entre otros proyectos ²⁴². Además, se beneficiaron unas 3.266 personas del programa “Quisqueya Aprende Contigo” lanzado por la presidencia de la República en 56 comunidades. Se trabajó con 59 docentes y 928 estudiantes de 9 escuelas en el programa “Escuela que Transforma” y se ha beneficiado con transporte escolar a más de 950 estudiantes y 80 docentes. Otros programas incluyeron créditos educativos, becas, apoyo a la universidad UTECO, una Computadora por Nino²⁴³.

En lo referente a producción, empleos y medioambiente se establecieron programas a para 18 proyectos con unos 5000 beneficiados. Se implementó el proyecto Forestal Enda-Barrick beneficiando a más de 2.301 familias²⁴⁴, además de proyectos lecheros y crianza de peces en el lago de Hatillo²⁴⁵. Otros proyectos tienen que ver con infraestructura, como electrificación de zonas rurales²⁴⁶, reparación de canales de riego y carreteras y vías.



INNOVACIÓN

En la República Dominicana, las políticas de RSE de las empresas se concentran en el trabajo con y para las comunidades. En este caso fue diferente. La empresa fomentó activamente la articulación entre comunidades y autoridades municipales. Eso permitió impulsar procesos de decisión sobre el desarrollo del territorio de manera conjunta.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: todos los sectores fueron convocados con derecho a voz y voto y podían expresar sus necesidades. Cada mesa generó informes de resultados que se presentaban en pequeños congresos locales y luego esos resultados se presentaban abiertos a la población lo que llevó finalmente al plebiscito.
- Pertinencia según necesidad: se trabajó en conjunto basado en una visión del territorio buscando proyectos que generaran beneficios compartidos, a largo plazo y sostenibles en el tiempo.
- Sostenibilidad institucional: la sostenibilidad del proceso descansa en la fortaleza alcanzada por la sociedad civil al empoderarse para ser parte integral del proceso, lo que ha permitido que los planes de desarrollo estén vigentes.



ENFOQUES

Enfoque de Género: La alianza ha generado inclusión, empoderamiento y conciencia sobre el territorio creando valor compartido. Durante todo el proceso, la participación activa de los líderes con mayor trayectoria, incluyendo las mujeres, y la integración de jóvenes en la toma de decisiones fue altamente positiva.



LECCIONES APRENDIDAS

Se ganó una visión del territorio y del valor de crear alianzas que generen encadenamientos junto al tomar conciencia de que cada comunidad es responsable de su desarrollo.

El involucramiento de las comunidades y el trabajo en equipo generaron un compromiso con la ejecución del plan, ya que cada persona involucrada lo asumió como suyo. Esto a su vez fortaleció el plan.

Se logró la convivencia entre los que estaban en contra y a favor del proceso sin generar conflictos, sobre todo en comunidades donde generalmente se utilizaba más la protesta que el diálogo. Las capacitaciones, reuniones y talleres facilitaron este nuevo espíritu de diálogo logrando que fueran las comunidades directamente quienes trabajaran en su plan de desarrollo.



VALIDACIÓN

Entrevistas con el departamento de RSE de PVDC y ejecutivos del departamento de relaciones interinstitucionales de PVDC, autoridades provinciales como el gobernador provincial y la alcaldesa, rector de UTECO, representantes de la sociedad civil: CEFORMOMALI, Asociación de Campesinos, proveedores. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón.

Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí.

Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.

Ausland, Aaron, 2010: Estudio de Caso - Estableciendo Alianzas para el Desarrollo Local, Cámara Americana de Comercio de la Republica Dominicana: Santo Domingo.

<http://www.fomisar.com/>

<http://www.desarrollomunicipal.org/celebran-en-cotui-fantino-y-maimon-primer-plebiscito-municipal-del-pais/>

<http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>

2.7.3.2. Incubadora de Empresas Cibao Sur

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Consulta



Colaboración



Alianza



DURACIÓN

2011 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Pueblo Viejo Dominicana Corporation – PVDC

Municipios Piedra Blanca, Maimón, Cevicos, Fantino, Cotuí y Villa La Mata, Secretariado Técnico de la Presidencia, Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial PROINDUSTRIA, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo, Banco de Ahorro y Crédito de Cotuí, Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Gobierno Provincial.

Cooperativas agrícolas, comunidades campesinas, asociaciones de amas de casas, UTECO



DESCRIPCIÓN

Incubadora como parte del plan de desarrollo: El proyecto de la incubadora fue uno de los proyectos votados y aprobados durante el plebiscito resultado de las mesas redondas del municipio de Cotuí en la formulación de su Plan de Desarrollo²⁴⁷. Como alianza público-privada ha ido creciendo y ofreciendo servicios expandiéndose más allá del municipio que le dio vida.

Fase de consolidación: la incubadora inició su operación en el municipio de Cotuí y las comunidades de la provincia Sánchez Ramírez. En junio de 2011, se consolidó este proyecto al inaugurarse la oficina de incubadora de empresas de la región Cibao Sur. El proyecto recibió el financiamiento de PVDC, que aportó un capital semilla en el primer año de 41.580,00 dólares²⁴⁸. Esta suma se incrementó en el segundo año a 103.950,00 dólares y la empresa creó un fondo de garantía de 62.370,00 dólares. A partir del 4to año, la incubadora empezó a ser autosuficiente en la generación de proyectos emprendedores.

Sus servicios: la incubadora de empresas es el fruto de una alianza público-privada diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores de la Franja Oriental del Cibao Sur, a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales tales como estudios de mercado, análisis de procesos, asesorías legales y financieras y la identificación de oportunidades de negocios.



IMPACTO Y RESULTADO PRINCIPAL

Esta iniciativa impactó la provincia Sánchez Ramírez con una población estimada de 160.000²⁴⁹ habitantes al 2017, que incluye 4 municipios y 10 distritos municipales, además de los municipios de Maimón y Piedra Blanca, pertenecientes a la provincia Monseñor Nouel con 18.000 y 25.000 habitantes respectivamente. Un grupo significativo de jóvenes emprendedores, asociaciones y grupos de cooperativas se ha capacitado en la comprensión, implementación y manejo y conocimiento comercial de proyectos y se ha fomentado el emprendimiento. La incubadora ha ido agradando sus proyectos. Hasta 2017, se han incubado 18 proyectos, algunos ejemplos de ellos son: proyecto Mantas del Coco del grupo de mujeres Unidas De Hatillo; Cría de Peces de la Unión de Pescadores, la iniciativa de plantas medicinales de la Cooperativa COOPSEMUCO²⁵⁰. En 2016 recibieron el Premio Nacional de Excelencia otorgado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)²⁵¹



INNOVACIÓN

Se han formulado planes a través de un programa denominado Emprende Sin Límites (EPSI) para crear fuentes de trabajo para los discapacitados que en el último censo (2010) se determinó más de 8.000 personas en la provincia Sánchez Ramírez. Hay iniciativas para crear una fábrica de trapeadores y otra de ventanas.²⁵²



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: la incubadora beneficia un amplio campo de actores, desde campesinos, estudiantes universitarios, centros de asociación de amas de casa, cooperativas.
- Pertinencia según necesidad: la incubadora ha creado una fuente segura y creciente de empleos. Muchas personas y microempresas que han recibido el acompañamiento de la incubadora y se han convertido en suplidores locales de la PVDC, lo que les garantiza un mínimo de compras periódicas.
- Sostenibilidad financiera: luego de seis años de la implementación del proyecto, la incubadora es autosuficiente y sigue en pleno crecimiento.



ENFOQUES

Enfoque de Género: Para los nuevos proyectos, se está trabajando en la transversalización de género buscando igualdad en términos de recursos y capacitación.



LECCIONES APRENDIDAS

De acuerdo al Director Ejecutivo de la incubadora, la mejor lección aprendida ha sido “incubarnos nosotros mismos”. A pesar de ser la tercera incubadora de empresas en el país, es la primera con el formato de auto sostenibilidad. Han creado su propio fondo a partir de los servicios para incubar los proyectos.



VALIDACIÓN

Entrevistas con personal de la incubadora, PVDC, FOMISAR, alcaldía, UTECO, beneficiarios del programa. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.diariodominicano.com/dominicana-hoy/2010/12/10/67209/gobierno-y-sector-privado-crean-centro-de-incubacin-de-empresas-para-la-creacin-de-empleos-en-la-franja-oriental-de-la-regin-cibao-sur>

<https://www.listindiario.com/economia/2011/02/11/176966/sectores-publico-y-privado-impulsan-incubadora-de-empresasnbsp>

<http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/Epgy-sanchez-ramirez-2010-2011pdf.pdf>

“Con apoyo de Barrick, microempresas reciben más de RD\$ 4 millones”, Santo Domingo, <http://acento.com.do/2012/economia/21142-con-apoyo-de-barrick-microempresas-reciben-mas-de-rd-4-millones/>

Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia Sánchez Ramírez – Plandesar 2015-2020 2015 – Editado por el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez, Inc. (FOMISAR)

Primera Edición, Sánchez Ramírez, República Dominicana, 2015

2014 - <http://barrickpuebloviejo.do/sostenibilidad/proyecto-incubadora-de-empresas-cibao-sur/2016-10-18/163241.html>

2014 - <https://www.youtube.com/watch?v=IrFJGhtrlow>

<http://www.exsasoluciones.pe/rse-conoce-la-historia-de-exito-de-barrick-pueblo-viejo-en-republica-dominicana/>

2.7.3.3. Productos Candiver

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

2003 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

PVDC, Incubadora de Empresas Cibao Sur,

Municipios de Cotuí, Villa La Mata, Fantino y Cevicos, Embajada de Canadá

Comunidades de Zambrana, Quita Sueno, Platanal, Hernando Alonso, La Cueva.



DESCRIPCIÓN

Explotación de oro: PVDC adquirió la mina en 2006 con la compra de Placer Dome. Sus operaciones son las mayores de la República Dominicana habiendo aportado entre 2010 y junio de 2016 con una inversión de 4.935 millones de dólares²⁵³.

Surge la idea: el Centro de Formación para Mujeres Organizadas "María Liberadora" (CEFOMOMALI) es una organización no gubernamental, enfocada en la formación, promoción y desarrollo de la población más necesitada: organizaciones de mujeres de la zona rural y de barrios marginados de la provincia Sánchez Ramírez. Cuenta con el asesoramiento de las religiosas Hijas de Jesús y la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples "Uniendo Esfuerzo" para incentivar el ahorro cooperativo, préstamos y servicios múltiples. Beneficia a más de 3.000 mujeres, asociadas en 75 organizaciones.

Inicio de la iniciativa: Productos Candiver comenzó en 2003 por iniciativa de Sor Luisa Suarez, religiosa de las Hijas de Jesús y líder comunitaria, quien había participado en un proyecto similar en Bohechío al sur del país. Al inicio se capacitaron a 22 mujeres en la elaboración de productos químicos, con recursos propios. De inmediato, comenzaron a fabricar un galón de cada producto: detergente de lavar, producto de limpieza de pisos, cloro, champú para el pelo, entre otros. Los llevaban a sus casas y a sus barrios y los probaban para ver la efectividad y la reacción de sus vecinos. Ellas mismas adquirieron los productos para poder comprar de nuevo los químicos para la elaboración de nuevos productos.

Apoyo por parte de la empresa minera: en 2009, PVDC por mediación de la Embajada de Canadá, conoció la iniciativa y decidió apoyarla. La empresa ofreció financiamiento para mejorar la calidad de los productos y sus etiquetas. Para esto, se proporcionó un insumo químico y una experta en mercadeo. Se brindó capacitación en administración, finanzas y desarrollo de ventas, en alianza también con la universidad UTECO.

Consolidación y crecimiento: PVDC pasó a asegurarles una compra fija de sus productos de limpieza, para lo cual tuvieron que tomar entrenamientos adicionales y cumplir con las exigencias de seguridad e higiene de la empresa, incluyendo añadir información de seguridad en la etiqueta de los productos, modo de uso, registro industrial y sanitario, entre otros. También PVDC además aportó un vehículo para ayudar con la distribución de los productos que empezaron a ser adquiridos por otros proveedores de la empresa, así como escuelas públicas y privadas. Entre los clientes, también se encuentra un hospital estatal y una clínica privada además de unos 1.500 particulares que utilizan los productos de belleza personal en los salones de belleza o los revenden en sus comunidades.

Estado actual y proyecciones: hoy en día fabrican 16 productos y mujeres de 75 comunidades participan o como productoras o vendedoras de los productos. En su fuerza de ventas tienen registradas 300 vendedoras y en la fábrica trabajan 32 empleadas. El nuevo proyecto para mejorar la producción y distribución es adquirir nuevas máquinas mezcladoras y una máquina llenadora y selladora de pequeñas bolsas plásticas con sus productos para hacer más accesible la venta al por menor.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

El proyecto ha logrado un sitio en la provincia y se percibe como un ejemplo de perseverancia de la mujer campesina. Se han generado pequeños núcleos de emprendedoras que han abierto centros de belleza utilizando y distribuyendo los productos Candiver. Las voces y reclamos de la institución cuando son elevadas son escuchadas y atendidas, convirtiéndose en una institución respetada por todos los ámbitos sociales, el gobierno local y central y las empresas productivas de la región.



INNOVACIÓN

Lo innovador de Candiver es que es una iniciativa netamente de mujeres que elabora productos que no se fabricaban en la zona. A partir de 2009 con el apoyo de PVDC se consolida su posición en la provincia ampliando su gama de productos y en alianza con CEFORMOMALI se crea un centro de apoyo al desarrollo de la mujer con capacitaciones para su desarrollo personal y social.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: se fomenta la participación activa de mujeres contribuyendo a crear una independencia y el empoderamiento de la mujer.
- Pertinencia según necesidad: permite el desarrollo de una nueva industria donde la mujer aprende a ser emprendedora y desarrolladora de un proyecto que extiende su sentido emprendedor en diversas comunidades
- Sostenibilidad financiera: la capacitación se complementa con apoyo económico por parte de PVDC a través de financiamiento directo, adquisición de vehículo para la distribución y apoyo y seguimiento por parte de la empresa PVDC. La iniciativa es auto sustentable.



ENFOQUES

Enfoque de Género: es un proyecto que se dedica al empoderamiento económico y social de mujeres. Fomenta el reconocimiento de la mujer en igualdad de condiciones mediante procesos educativos, la promoción humana y el acompañamiento.



LECCIONES APRENDIDAS

En las entrevistas con varias de las mujeres que forman parte de Candiver hubo una gran coincidencia en que todo lo aprendido para mejorar la calidad de sus productos, los entrenamientos sobre seguridad e higiene, emprendimiento, administración y mercadeo son aplicables no solo para el negocio, sino también para su vida personal, lo que las hace sentir seguras y dispuestas a demostrar que la mujer puede emprender y tener éxito cuando se decide hacerlo. Empezaron con recursos propios muy escasos y hoy son ejemplo de cientos de mujeres en la provincia y el país.



VALIDACIÓN

Entrevistas con presidenta de Candiver, coordinadora de CEFORMOMALI e incubadora de empresas Cibao Sur, UTECO, Departamento de Responsabilidad Social de PVDC, alcaldesa de Cotuí, usuarios de los productos, consultas en la web y prensa, visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

http://w1.barrickpuebloviejo.do/productos_candiver_sinonimo_de_mujeres_empoderadas_de_su_futuro

<https://www.listindiario.com/la-vida/2017/05/26/467505/un-ejemplo-de-empoderamiento-y-superacion>

<http://www.productoscandiver.com/index.html>

<https://ceformomali.jimdo.com/>



2.7.3.4. Mesas Redondas Comunitarias

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2013 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo).

Director municipal del Ministerio de Medio Ambiente, director municipal del Ministerio de Agricultura, unidades de atención primaria del Ministerio de Salud y la alcaldía del municipio de Bonao.

Nueve comunidades (Bonaito, Jayaco, Peñaló, Palmarito, El Verde, Caribe, Hato Viejo, Rancho Nuevo y La Minita que forman parte del área de influencia de la mina).



DESCRIPCIÓN

La mina: en 1958, fue otorgada la concesión a la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo) para explotar ferroníquel en la provincia Monseñor Nouel en el centro de la República Dominicana. Inició sus operaciones en 1971. La mina fue cerrada entre 2008 y 2011. La producción reportada de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana es de 38.069 toneladas para el periodo 2010-2015. Actualmente, la mina es operada por Americano Nickel Limited, dueño de Falcondo.

El entorno: el desarrollo de la ciudad de Bonao, capital de la Provincia Monseñor Nouel con una población de 80.258 habitantes,²⁵⁴ ha estado intrínsecamente ligado al desarrollo y crecimiento de la operación de níquel.

Inicio de las mesas redondas comunitarias: como iniciativa de Falcondo surgieron a partir de 2013 las mesas redondas comunitarias para reactivar el relacionamiento después del cierre de la mina en 2011. Inicialmente, se trabajaba con 13 comunidades, pero el relacionamiento se mantuvo solo con las nueve comunidades más cercanas a la mina y planta de operaciones. Estas nueve comunidades conforman una población por encima de los 18.000 habitantes. Las mesas fueron diseñadas como organismos de planificación y comunicación para un relacionamiento comunitario adecuado.

Su estructura de participación: a través de las mesas redondas se desarrolló el relacionamiento con entidades comunitarias donde se concentraban los diferentes grupos sociales legítimos reconocidos por las comunidades (por ejemplo, el síndico, algún representante de la iglesia, las amas de casa, o algún representante de la juventud, por citar algunos). Cada mesa redonda estudió los problemas de la comunidad y cualquier solicitud ante la empresa fue canalizada a través de la misma.

Su frecuencia: cada mesa redonda sesionaba de manera mensual. Además, cada cierto tiempo se celebró una reunión en la cual todas las mesas comunitarias participaban conjuntamente, lo que ha permitido mejorar las relaciones entre las distintas comunidades y promover encadenamientos productivos.

El diálogo para abordar conflictos: como parte de la construcción del diálogo, los participantes tenían el derecho de exponer sus ideas y puntos de vista de manera organizada y las decisiones fueron tomadas por consenso. El diálogo en las mesas redondas ha permitido que esta iniciativa sea una herramienta efectiva de manejo de conflictos. A partir de su implementación, los conflictos por vías de acceso, ruido, contaminación, o falta de empleos se han reducido significativamente.

La institucionalización de las mesas: Cada mesa redonda ha sido debidamente incorporada bajo la Ley para la Regulación y Fomento de la Asociaciones Sin Fines de Lucro (Ley 122-05). Esta ley incentiva la incorporación jurídica de las organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es el de desarrollar actividades de bien social o interés público, fortaleciendo el desarrollo de una sociedad civil plural, democrática y participativa.



IMPACTO Y RESULTADO PRINCIPAL

Las mesas redondas comunitarias han venido a resolver conflictos, quejas y preocupaciones entre la empresa y las comunidades. Un ejemplo es el reclamo por el polvo que se levantaba por el paso de camiones por el cual la empresa implementó un sistema para mojar los caminos antes del tránsito de los camiones. También, entre las propias comunidades se ha mejorado su interrelación, al igual que las relaciones de estas con los gobiernos locales.

La forma de trabajo de las mesas ha logrado crear encadenamientos productivos importantes logrando diversificar la economía local incluyendo el intercambio comercial entre las comunidades entre sí y con otras zonas de la provincia. Un ejemplo se da en la comunidad de Peñaló de unos 200 habitantes, en donde los habitantes desarrollaron un proyecto de apicultura que produce miel para la comunidad. Los productores la venden a las demás comunidades y la empresa la ha conectado con una cooperativa apícola de la vecina provincia de La Vega para comercializar la miel en otras zonas de la región. Otro ejemplo ha sido la creación de la empresa de Coopyuna, una cooperativa para fomentar el ahorro y el financiamiento de proyectos. El centro de internet de Rancho Nuevo les ha permitido acceso al internet a los estudiantes. Además, sirve como centro de comunicación y del cual también se benefician otras comunidades cercanas.

A partir de la integración de las mesas y de su interacción con la empresa se han generado más de 300 empleos comunitarios, lo que representa un 29% del total del empleo de la mina.



INNOVACIÓN

Lograr la integración de todos los sectores de la comunidad ha sido algo innovador. Cada sector está representado y tiene voz y voto por lo que las decisiones son consensuadas. La empresa no recibe ninguna petición si no viene a través de la mesa y esta ha sido debidamente consensuada. Falcondo es la única empresa en la República Dominicana que adoptó esta forma de canalizar solicitudes de empleos, donaciones, ayudas comunitarias, entre otras.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: todos los sectores de la comunidad están representados en las mesas y tienen voz y voto en la toma de decisión.
- Pertinencia según necesidad: es pertinente porque abarca toda la zona de influencia de la operación minera, facilitando el manejo efectivo de conflictos comunitarios.
- Sostenibilidad institucional y financiera: es una iniciativa sostenible al constituirse las mesas en organizaciones no gubernamentales y tener personalidad jurídica. Las mesas han aprendido a administrar apropiadamente los recursos con los que cuentan las comunidades. Estos recursos provienen directamente de la mina o son generados por proyectos de la comunidad. Otra fuente de ingresos son proyectos agroforestales donde participan las comunidades y la mina. Para el 2018 la proyección del aporte del proyecto agroforestal es de US\$ 142,800.00.



ENFOQUES

Enfoque de Género: El rol de la mujer es muy activo y aceptado, de las 9 mesas, 4 son presididas por mujeres. Incluyen también en las mesas jóvenes líderes del proyecto de formación de líderes CRECIENDO, otra iniciativa de Falcondo para ir entrenando jóvenes de las diferentes comunidades en fortalezas técnicas y de liderazgo para que se vayan insertando en los proyectos de las mesas y garantizar el relevo generacional.



LECCIONES APRENDIDAS

Sin planificación no hay comunicación efectiva. La base del diálogo es la construcción de confianza. Se reconoció que las necesidades de las comunidades deben ser escuchadas, valorando su importancia y los derechos de las comunidades.

Las comunidades han entendido que es importante sentarse a establecer prioridades, a planificar cómo se van a desarrollar localmente sin necesariamente depender directamente de la mina. Han obtenido una cierta independencia económica-productiva que ha permitido a las comunidades crecer más allá de su relación con la mina.



VALIDACIÓN

Validado por entrevistas a funcionarios de la empresa y líderes comunitarios, presidentes de las mesas y visitas a varias comunidades.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://elcaribe.com.do/2015/12/06/falcondo-incorpora-13-mesas-redondas-para-programas-responsabilidad-social/>
<http://elresplandor.com.do/web/2017/11/29/falcondo-inaugura-nuevo-centro-de-internet-en-comuniad-rancho-nuevo-bonao/>
<https://acento.com.do/2016/economia/8388952-falcondo-asegura-esta-transparentando-ampliando-apoyo-las-poblaciones-vecinas/>

2.7.3.5. Apadrinamiento de Escuelas

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

1989 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Fundación Falcondo, empresa Falcondo

Ministerio de Educación, direcciones regionales y distritales del Ministerio de Educación, Asociación Dominicana de Profesores, gobiernos provinciales Asociaciones de padres y juntas de vecinos, Barna Business School



DESCRIPCIÓN

La mina: véase descripción en Mesas Redondas Comunitarias.

Responsabilidad Social Empresarial: La Fundación Falcondo surgió en 1989 como el brazo de responsabilidad social de la empresa Falcondo. Las áreas escogidas para realizar los programas de responsabilidad social fueron educación, salud preventiva, recursos naturales y desarrollo comunitario. La Fundación operó en Santo Domingo hasta finales de 2015 y luego su oficina fue trasladada a Bonao, año en que la empresa pasó de manos a Americano Nickel.

Inversión en educación: el área de educación recibió el 53% de la inversión total de la Fundación con un monto total 6' 974.552 dólares, siendo su principal programa el Apadrinamiento de Centros Educativos²⁵⁵. Este programa se convirtió en un modelo de participación del sector privado en la educación pública mediante alianza con el Ministerio de Educación y reconocido por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Interamericana para el Desarrollo.



Las contribuciones: las contribuciones a la educación ejecutadas a través de este programa fueron construcción y remozamiento de planteles escolares, equipamiento de mobiliario escolar y material didáctico, fortalecimiento de bibliotecas, programas de alfabetización, programas de créditos educativos y becas a estudiantes de escasos recursos, capacitación de maestros, alianzas y apoyo con las direcciones regionales y distritales de educación y con la Asociación Dominicana de Profesores.

Área de influencia: abarcó una escuela en Quita Sueños, Haina, provincia San Cristóbal, 54 escuelas en la provincia de la Vega que a su vez incluían 6 escuelas importantes de Constanza y 6 escuelas en Jarabacoa y 77 en la provincia Monseñor Nouel.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

Con la implementación de este programa a lo largo de 26 años se ha logrado mejorar la educación de las zonas donde el programa tiene incidencia, disminuyendo a su vez el nivel de analfabetismo de la región.

Específicamente, la provincia de Monseñor Nouel tiene el índice más alto de docentes con licenciatura de 70,7% cuando el promedio nacional es de 49,9% y de postgrado con un 5,7% de un 4,0% a nivel nacional. La calidad educativa es de 95,1% y el promedio nacional es de 94,7% por lo que el impacto de elevar la calidad de la educación es significativo²⁵⁶. El programa ha impactado directamente a 132 escuelas públicas y centros educativos, y 77.000 estudiantes que representan más del 70% de la población estudiantil de las provincias Monseñor Nouel y La Vega. 4.900 personas aprendieron a leer y escribir por medio del programa de alfabetización. 794 estudiantes de escasos recursos han cursado sus estudios técnicos y universitarios a través del programa de créditos educativos y becas con una inversión de 1'123.163 dólares²⁵⁷. Asimismo, 2.100 maestros han sido formados y actualizados con herramientas pedagógicas modernas, y 80 directores de centros se graduaron del programa de liderazgo y gestión de Barna Business School, con la cual la fundación realizó acuerdos estratégicos.



INNOVACIÓN

La implementación de un sistema de capacitación para elevar la capacidad de la educación y capacidad pedagógica de los docentes redundó en beneficios directos al estudiantado, utilizando los mismos recursos humanos empleados por el Estado dominicano a través de su Ministerio de Educación. Otras empresas no lograban esta alianza de trabajar con el Estado, sino que generalmente lo que hacen es donar equipos, uniformes, libros y mobiliario pero no comprometerse en la capacitación docente. La buena práctica fue un ejemplo al que siguieron otras empresas más adelante.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el programa es inclusivo, dirigido a escuelas y específicamente a escuelas rurales.
- Pertinencia según necesidad: el programa ha respondido a deficiencias del sistema educativo.
- Sostenibilidad: este programa ha producido efectos duraderos, al mejorar el nivel de educación y de la calidad docente elevando sus capacidades educativas.



ENFOQUES

Enfoque regulatorio de derechos y obligaciones: el proyecto ayudó a garantizar el derecho a la educación. Se logró elevar la calidad educativa, eliminar al absentismo escolar, la sobre-edad en las aulas y la deserción escolar y conseguir la prolongación de los niveles educativos.



LECCIONES APRENDIDAS

Puede tenerse sostenibilidad en el tiempo aún con el cambio de actores, a través de acuerdos con instituciones como el Ministerio de Educación y sus unidades provinciales y municipales, y con OSC como la Asociación Dominicana de Profesores, juntas de vecinos y líderes comunitarios y la empresa.

Las comunidades educativas, a su vez, pueden sostener sus estándares de calidad cuando participan y aprenden a cumplir con sus deberes y conocer sus derechos según establece nuestra legislación y desarrollan el sentido del bien común.



VALIDACIÓN

Entrevistas con dirección de Fundación Falcondo, profesores, líderes comunitarios, departamento de responsabilidad social de Falcondo. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2010/07/24/151874/falcondo>
https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monsenor_nouel.pdf
<http://www.funlode.org/notice/las-fundaciones-falcondo-y-brugal-potencian-la-educacion-dominicana/>
<https://www.diariolibre.com/noticias/la-fundacin-falcondo-invierte-rd624-7-millones-en-25-aos-HFDL941611>
<https://www.eldinero.com.do/5848/barna-y-falcondo-gradua-directores-de-escuelas-en-gestion-educativa/>

2.7.4. Análisis de Actores

Empresa

La República Dominicana es un país con tradición minera reciente. En los años sesenta se desarrolló la mina de bauxita en la provincia de Pedernales operada por Alcoa que luego fue abandonada por desacuerdos con el Estado. En los setenta empezaron a operar dos minas. La mina de oro y plata de Pueblo Viejo operada por la compañía de origen norteamericano Rosario Resources que luego fue adquirida por el Estado en 1989, cerrada en 1999, licitada en 2001, adquirida por Barrick en 2006²⁵⁸ y reabierta en 2012²⁵⁹.

La segunda, es la mina de níquel que fue operada en sus inicios por Falconbridge Dominicana (Falcondo) y que en la década iniciada en 2000 cambió de dueño varias veces y cerró en dos ocasiones debido a los precios en los mercados internacionales. En 2015, Falcondo fue comprado por Americano Nickel Ltd.

A manera de entender mejor la percepción que se tiene sobre la minería en el país, cabe citar que el cierre de la mina de Pueblo Viejo en 1999 que estuvo operando con producción mínima en sus últimos años y sin unos adecuados controles ambientales, al final de sus operaciones creó pasivos ambientales importantes, básicamente por concepto de Drenaje Ácido de Rocas (DAR) en terrenos y ríos cercanos a la mina²⁶⁰. El deficiente manejo ambiental de Rosario Dominicana, en la mina de Pueblo Viejo, dejó una imagen negativa sobre el sector²⁶¹.

Existen otras operaciones de minería metálica importante. Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) que extrae cobre, oro, plata y zinc y la operación de Las Lagunas Ltd. Fuera de la minería metálica existen minas importantes de sal y yeso, así como mármol y rocas coralinas, además de minas que suplen la industria cementera nacional con 7 plantas en diferentes partes del país.

Existe una asociación importante que representa a las empresas mineras y de servicios. La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) opera desde 1997 y poco a poco ha ido desarrollando un sitio en la opinión pública y es reconocida tanto por el gobierno, como por las ONG, sociedad civil, academia y diferentes gremios.

En el país no existe información básica a nivel escolar, ni universitario de la minería como renglón importante para el desarrollo del país, ni se promueve el conocimiento de los recursos minerales de la nación. Para suplir esta falta de información, CAMIPE ha diseñado un programa de charlas para las escuelas a nivel secundario, así como talleres informativos para llevar a gremios empresariales, incluyendo oficinas y dependencias estatales y a las comunidades, con el lanzamiento en conjunto con la Embajada de Canadá de las “Guías Mineras”, que son folletos editados que explican los procesos mineros desde la exploración hasta el cierre de minas²⁶².

Gobierno

El Ministerio de Energía y Minas fue creado en 2013 bajo la Ley 100-13. Los mensajes desde el Estado con respecto al desarrollo del sector han sido débiles. La renegociación del contrato de las operaciones de Barrick para la mina de Pueblo Viejo²⁶³ y el caso de Loma Miranda, una reserva importante de níquel que es parte de la concesión de Falcondo, han denotado cierta debilidad en la aplicación de reglas claras y garantías de seguridad jurídica²⁶⁴, aspectos ampliamente debatidos en la prensa nacional por los diversos sectores de la nación.



La Dirección General de Minería era una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio con casi nada de presupuesto para sus operaciones incluyendo fiscalización y controles bajo la Ley 146-71. Desde 2013 con la Ley 100-13 queda adscrito al MEM.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue creado en 2000 bajo la Ley 64-00. La Ley 64-00 es la que administra los recursos naturales del país y aplica las regulaciones ambientales junto a un conjunto de reglamentos y normas que la complementan.

Sociedad Civil

La sociedad civil está representada por diferentes instancias desde la academia, ONG y gremios comunitarios. La opinión del “No a la mina” crece cada vez más y la falta de información por parte de la industria genera vacíos que son llenados con informaciones que no son reales. La percepción de la población en general entiende que la industria no aporta lo suficiente y que hace más daño que bien.

A principios de 2017, se formó el movimiento Marcha Verde²⁶⁵, cuyo objetivo es combatir la corrupción e impunidad en la República Dominicana²⁶⁶. La sociedad civil viene organizándose cada vez más debido a casos de corrupción y falta de transparencia. Este tema detonó a principios de 2017 por un caso local y por el caso internacional de la empresa Odebrecht, lo que le dio fuerza y vigencia al movimiento en su lucha anticorrupción y que además ha tomado el tema minero como uno de sus temas de protesta. Los movimientos más críticos a la minería han venido desde la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)²⁶⁷, seguidos por un movimiento popular liderado por el Padre Rogelio Cruz, quien protagonizó una serie de protestas en contra de Loma Miranda y más recientemente en contra de una posible explotación de oro en la mina Romero de San Juan de la Maguana²⁶⁸ de la empresa minera GoldQuest. Estos tres grupos unidos al nuevo movimiento Marcha Verde han llevado el liderazgo de las protestas en contra de proyectos mineros²⁶⁹.

Existen diferentes iniciativas de diálogo a nivel nacional. El Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE) es uno de los ejemplos que ha creado un ambiente de mayor apertura y diálogo entre la industria y la sociedad civil y el gobierno. Sus miembros representan mayormente a las provincias de Pedernales, San Juan de la Maguana, Barahona, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata. Otros esfuerzos existen entre la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), organismo que representa al sector minero del país, con instituciones como la Academia de Ciencias, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD y la organización no gubernamental Participación Ciudadana²⁷⁰.

2.7.5. Marco Legal



Información

La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04 del 28 de julio de 2004 regula el acceso a la información. El capítulo 1 y el artículo 2 de la ley establecen la obligatoriedad y el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener acceso libre a la información sobre las actividades estatales, y sobre empresas del Estado o con vínculo estatal y los proyectos de desarrollo de la nación.

Con la Ley 100-13 (2013) se crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual en calidad de órgano rector está aún ajustando asuntos técnicos y legales relacionados tanto al sector minero como al de hidrocarburos. Las disposiciones que emite el MEM son informadas a los sectores a través de resoluciones que son publicadas en la página web del MEM. El MEM ha abierto el departamento Técnico de Gestión Social, que se encarga de vincularse con las comunidades mineras, educarlos sobre el tema minero, escuchar sus quejas y expectativas y enlazar a las partes interesadas en la búsqueda de soluciones.

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00 de 25 julio 2000) establece la obligatoriedad de difusión pública de los estudios de impacto ambiental (art. 48-50).



Consulta

La misma Ley establece los procedimientos de evaluación ambiental y sus alcances incluyendo la consulta pública (art. 38). El artículo 43 obliga a la solicitud de una carta de no objeción a los proyectos por parte de los gobiernos locales. En el Compendio de Reglamentos y Procedimientos para autorizaciones ambientales de la República Dominicana de 22 de Septiembre 2014 se estipula que el proceso de participación pública de todos los proyectos consiste en por lo menos cuatro instancias posibles y no excluyentes de participación: información o divulgación del proyecto; análisis de interesados; visitas públicas; comentarios a los estudios ambientales; audiencia pública.

En los proyectos susceptibles a estudios de impacto ambiental, el proponente deberá realizar una visita pública indicando el posible impacto en la zona de influencia que puede afectar el proyecto. La visita deberá ser de invitación abierta y publicada en un periódico de circulación nacional o a través de medios de comunicación asequibles a las comunidades del entorno del proyecto. La información publicada debe contener datos básicos sobre el proyecto, ubicación y objetivos. Dependiendo de la magnitud del proyecto y si el mismo contempla minería metálica o no metálica, se solicitarán más de una visita pública. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA)



se reserva el derecho a aplicar cualquier instrumento de participación pública y puede convocar audiencias públicas en cualquier instante del proceso de autorización ambiental.

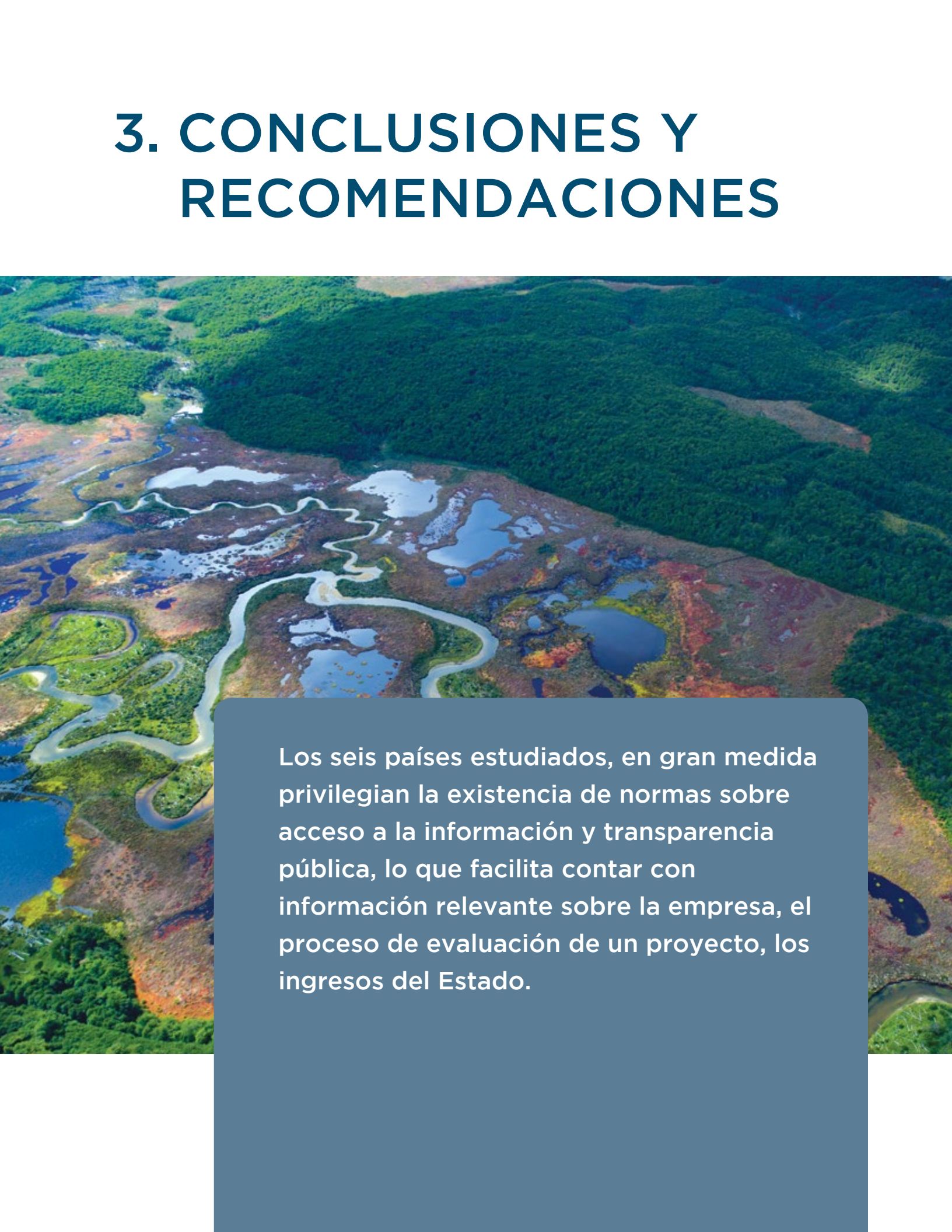
Los proyectos requieren audiencias públicas que serán coordinadas a través de MIMARENA. La comunidad tendrá una participación activa y debe incluir desde las juntas de vecinos, clubes, hasta asociaciones gremiales, empresariales, universidades o centros educativos y autoridades municipales, entre otros. Los comentarios y observaciones recogidos formarán parte del informe técnico y el informe final que se presenta dentro de la solicitud de la licencia ambiental. Este proceso es evaluado por MIMARENA y en caso de ser necesario repetirlo se procederá a una nueva convocatoria.

En la Ley General de Minería, 146-71 del 4 de junio de 1971, no se contemplan visitas públicas o consultas públicas, ni conceptos ambientales. Esta ley solamente se refiere a la necesidad de ponerse en contacto con los propietarios de terrenos para acordar derechos de paso o servidumbre o compra de terrenos.

Plebiscito

La Ley No. 176-07 sobre municipios del 17 de julio de 2007 establece la facultad de los municipios de administrar sus territorios y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos. El artículo 234 establece el derecho a plebiscito para consulta a la ciudadanía sobre lineamientos generales de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de ordenamiento territorial. Cabe destacar que como parte de la documentación que se presenta en el estudio de impacto ambiental para la solicitud de la licencia ambiental debe incluirse la carta de no objeción que debe emitir el ayuntamiento del área del proyecto indicando que no existe impedimento en cuanto a uso de suelo y tipo de industria en la zona de influencia del proyecto.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

An aerial photograph of a wetland landscape. A winding river flows through a marshy area with patches of green vegetation and brownish soil. In the background, there is a dense forest of tall trees. The overall scene is a natural, undisturbed environment.

Los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita contar con información relevante sobre la empresa, el proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del Estado.

3.1. Conclusiones

Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores

- El sector extractivo sigue manteniendo un sitio de importancia en cuanto a su aporte a la economía de América Latina, a pesar de la conclusión del denominado súper ciclo de los commodities mineros e hidrocarburíferos. Los marcos normativos nacionales se adecuaron para promover el arribo de grandes inversiones en este sector, como se puede apreciar en la apertura del sector hidrocarburífero en México, anteriormente bajo el monopolio estatal, con la reforma energética del 2014. Estas políticas han contribuido a que ingresen corporaciones internacionales las cuales han aumentado el nivel de los estándares de relacionamiento comunitario, y como consecuencia del incremento de la recaudación fiscal han contribuido, en conjunción con la sociedad civil, a impulsar mecanismos multi-actor que favorecen la transparencia, como es el caso de la EITI que viene operando auspiciosamente en algunos países de la región.

Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento:

- En relación a los marcos normativos nacionales, aparte de la normativa referida a la industria extractiva, medioambiental, fiscal y de desarrollo, los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre la empresa, proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del estado en algunos casos. La información que proveen las industrias extractivas al Estado en el marco de sus obligaciones está sujeta a este marco regulatorio.
- Igualmente, las normas que contemplan la participación ciudadana como derecho a participar en las distintas fases de la actividad extractiva están muy extendidas en los seis países estudiados y se manifiesta, como una de sus dimensiones, a través de la figura de la consulta pública.
- La información identificada en cada país da cuenta de que no existe normatividad específica referida a otros niveles de relacionamiento como colaboración o alianzas a excepción de Perú que cuenta desde el año 2010 con una norma que establece un compromiso previo de la empresa con las comunidades del área de influencia, como requisito para el desarrollo de las actividades extractivas.
- El diálogo es un mecanismo que se encuentra, en sentido amplio, en todos los niveles de relacionamiento comunitario y está incorporado en segmentos de la normativa vigente al momento de regular los procedimientos participativos y de consulta.
- La mayoría de los países de este estudio han firmado el Convenio 169 de la OIT, salvo República Dominicana, pero solo Colombia, Perú y Chile cuentan con una reglamentación para implementarlo. De hecho, en los otros países el proceso depende de la interpretación hecha por las empresas y las autoridades locales, con posibilidades de cuestionamiento y judicialización del proceso, causando inestabilidad e inseguridad para las partes.

Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador

- Cuando las prácticas están conformadas por varios niveles de relacionamiento, frecuentemente es el nivel de diálogo el que suele articularlas. Los diálogos podrían evolucionar hacia la definición de agendas de trabajo específicas.
- Debido al grado de complejidad que exige su implementación, por lo general, el relacionamiento a través de los niveles de colaboración y de alianza, suele producirse a través del diálogo multi-actor, en su versión más estructurada, al que fundamentalmente se recurre como mecanismo más propicio para aclarar los intereses y necesidades de las partes, así como para generar la confianza necesaria que exigen estos procesos complejos y negociar acuerdos de beneficio mutuo.
- El relacionamiento multi-actor adecuadamente organizado y gestionado y con mirada estratégica e integral, contribuye a implementar proyectos vinculados a planes de desarrollo local, a elevar las voces de los actores involucrados, a influir en las decisiones sobre la operación, así como sobre los planes de relacionamiento, a mejorar la relación y a contribuir al logro o la vigencia de la licencia social.

Sobre los principales actores

Sociedad Civil

- Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las comunidades, las ONG y los movimientos sociales, asumen diferentes roles frente a la industria extractiva: como proveedores o contratistas que ejecutan proyectos sobre desarrollo; tendiendo puentes e impulsando procesos colaborativos; siendo críticos de la forma como viene operando la industria; promoviendo el debate y haciendo incidencia en políticas públicas y en garantizar derechos individuales y colectivos de las comunidades u oponiéndose abiertamente a la actividad extractiva a través de acciones de resistencia.
- Las universidades que gozan de legitimidad son importantes recursos locales puesto que tienen la confianza de una cantidad relevante de actores como el poder de tejer redes con actores claves de diferente naturaleza, tanto en materia de generación de conocimiento como en el fortalecimiento de capacidades. Son vistos como un actor especializado e imparcial para asuntos técnicos y para realizar investigaciones sobre la industria extractiva.
- Las OSC se desempeñan también desde un rol de terceros en los procesos de relacionamiento entre comunidades y empresas, sea facilitando el diálogo o la negociación entre las partes, asesorando los procesos, capacitando a la empresa y/o comunidad para una participación adecuada y constructiva en los procesos, siendo observadores, o acompañando en la implementación de los proyectos de desarrollo.

Estado

- La relación entre el Gobierno Nacional/Federal con los Gobiernos Regionales/Estatales/Provinciales y Locales suele generar tensiones derivadas de las políticas y medidas referidas a la gobernanza de los recursos naturales. En situaciones extremas, las tensiones, eventualmente, han llegado a una franca oposición y rechazo hacia la industria extractiva. Resulta, por tanto, importante que los diferentes niveles de gobierno establezcan mecanismos de coordinación y diálogo intergubernamental para la discusión concertada e implementación de políticas públicas referidas al desarrollo económico sustentable, y determinen cuál es el papel que juegan las industrias extractivas en el desarrollo del país y los territorios locales.

Empresas

- Los equipos dedicados a la gestión social y el relacionamiento comunitario son imprescindibles para la operación de campo, articulados con las otras áreas de las empresas. Esta articulación interna es importante y necesaria. En algunos casos, las empresas optan por la contratación o suscripción de acuerdos con consultoras, organizaciones/entidades comerciales o de la sociedad civil especializadas en gestión social y relacionamiento comunitario. En algunos casos considerar a un equipo externo para apoyar el relacionamiento comunitario facilita los encuentros de diálogo, además de contar con una mirada externa del proceso.
- Los gremios de las industrias extractivas tienen como finalidad fundamental representar los intereses y necesidades de las empresas afiliadas. Tienen el potencial de ser importantes contribuyentes a través de proyectos dirigidos a las empresas en su relacionamiento con las comunidades, incluyendo perspectivas innovadoras, como la buena práctica de las Cuencas Sociales de Argentina, que desde la Cámara de Minería de Salta articula a las diferentes empresas mineras que operan en un territorio en su relacionamiento con las comunidades del entorno.

Sobre los temas abordados en las prácticas

- Las buenas prácticas incorporan una gama temática sumamente amplia, vinculadas a las necesidades humanas y derechos de los entornos sociales y a las necesidades operativas de los proyectos extractivos. Desde un nivel básico de información sobre el proyecto, todos los niveles de relacionamiento dan pie a la incorporación de asuntos de múltiples tipos, como:
  - » Temas ambientales, como aquellos vinculados al agua, aire, ruido, uso de la tierra;
  - » Búsqueda de soluciones concertadas con la comunidad vinculadas a las necesidades de la operación (infraestructura en salud, vialidad, electricidad, agua potable, entre otros);
  - » Manufactura de productos;
  - » Educación y servicios básicos;
  - » Asuntos que atañen a grupos específicos como mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad;
  - » Cuestiones sobre desarrollo local;
  - » Establecimiento de relaciones duraderas en el marco del desarrollo sostenible y la licencia social;
  - » Fortalecimiento de la institucionalidad comunitaria y local.

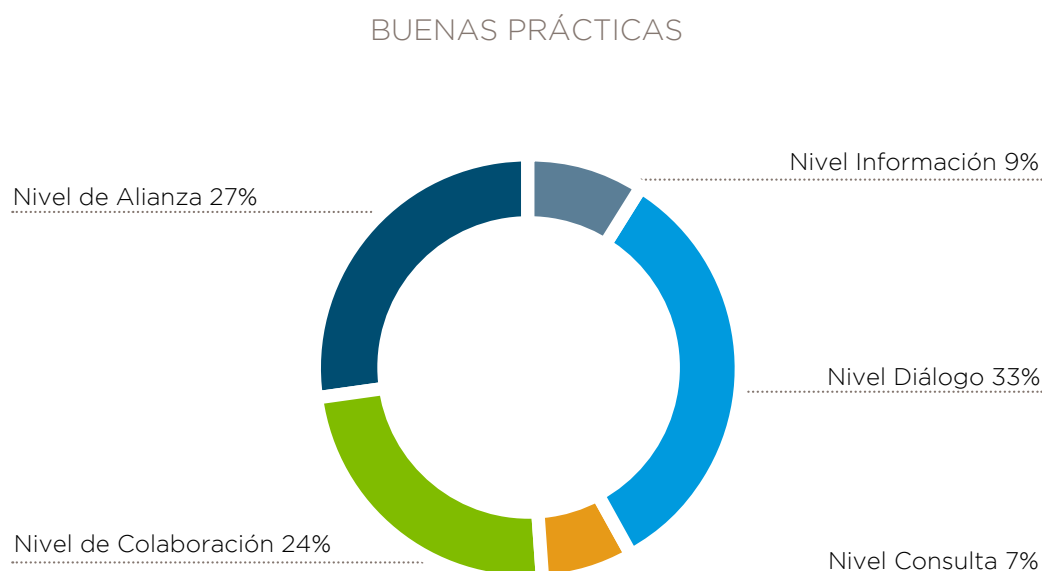
Sobre el relacionamiento

- *Aporte del sector extractivo en la economía nacional y regional:* Existe un reconocimiento de parte de todos los actores que el sector hace aportes relevantes a la economía nacional. Sin embargo, a nivel local las comunidades aun sienten que existe una deuda pendiente de parte de la industria al desarrollo y mejora local.
- *Estándares mínimos de relacionamiento:* La industria extractiva, en relación con otras actividades económicas, considera el tema del relacionamiento con las comunidades del área de influencia como parte relevante, inclusive en ocasiones como parte clave para el negocio y no como un tema netamente voluntario. Existe consciencia de los potenciales costos que puede significar para el desarrollo de un proyecto extractivo un entorno de riesgo social.
- *Lo exigido y lo voluntario:* Los procesos de relacionamiento reflejan que el comportamiento de la industria se derivan tanto de las normas definidas por el Estado como por las políticas internas de las empresas (códigos de conducta) y los estándares de la industria a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado está empezando a asumir un rol más activo en definir estándares mínimos de relacionamiento, en base a las buenas prácticas reconocidas y con ello dar seguridad tanto a las empresas como a las comunidades sobre la mejor forma de establecer relaciones armoniosas y constructivas orientadas al desarrollo sostenible. Adicionalmente la industria sigue avanzando en políticas voluntarias que benefician el desarrollo del territorio en la cual está la operación.
- *Las OSC:* En los últimos 5 años han cumplido un importante rol, logrando una cierta incidencia en las decisiones de políticas públicas, a la hora de proponer, acompañar y velar por el cumplimiento de la normativa de los proyectos de la industria extractiva. Han logrado en los diferentes niveles (local, regional/provincial y nacional) de incidencia, que se reconozcan sus aportes para alcanzar objetivos comunes con la industria. Sin dudas esta incidencia se vio favorecida por el uso masivo de las redes sociales y el desarrollo de la transformación digital.
- *El relacionamiento con la sociedad civil en continuum:* La construcción de confianza es una tarea prioritaria. Adicionalmente quienes faciliten y participen en estos espacios de construcción de buenas prácticas de relacionamiento deben ser actores con conocimiento y trayectoria en esta materia, que faciliten los procesos de interacción; actores imparciales que construyan un relacionamiento permanente y útil reconociendo las diferencias de cada una de las partes.
- *Percepciones respecto a las industrias extractivas:* Aún existe rechazo hacia el sector extractivo por parte de algunos sectores. Generalmente, estos se basan en la percepción de que el crecimiento de la actividad extractiva no se ha traducido en mejores condiciones de vida para algunas comunidades que conviven con los proyectos extractivos, y que en algunos casos han visto desplazadas las actividades económicas previamente existentes (agricultura, turismo local, ganadería, entre otras), generando dependencia a una actividad finita, además de la preocupación por los impactos ambientales y a la salud que pudiera traer consigo esta actividad.

- *De conflicto al acuerdo negociado:* La revisión de algunas prácticas estudiadas da cuenta de que la relación entre la industria extractiva y las comunidades ha pasado de un proceso de conflicto y oposición a un proceso de negociación transaccional que compensa a las comunidades con beneficios sociales, empleo y obras de infraestructura. Esta dinámica eventualmente aporta a los procesos de desarrollo local.
- *Tejido interno de las comunidades:* Muchas veces, la complejidad de las relaciones al interno de las comunidades han generado tensiones que se traducen en reclamos de difícil comprensión y donde las empresas sin contar con metodologías para abordar la conflictividad de manera más amplia e integral.
- *Rol del Estado:* La característica histórica del Estado ha sido conservar una posición distante y mirar desde afuera los procesos de relacionamiento que se dan en los diferentes niveles entre las empresas y las comunidades. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un actor clave en el nivel de consulta.

Sobre las prácticas de relacionamiento

- Este estudio ha encontrado en los diagnósticos de los seis países 27 buenas prácticas en todos los niveles de relacionamiento, 5 a nivel de Información, 18 a nivel de Diálogo, 4 a nivel de Consulta, 13 a nivel de Colaboración, y 15 a nivel de Alianza. Cabe agregar que en la mayoría de las buenas prácticas se han identificado dos o más niveles simultáneamente.



- Grandes avances: Las buenas prácticas del estudio muestran que ha habido varios avances en miras a mejorar la relación entre la industria y las comunidades, tales como la incorporación de políticas corporativas de relacionamiento, equipos de profesionales especializados y recursos económicos. Sin embargo, todavía hay debilidades en el relacionamiento entre la sociedad civil y las industrias extractivas. Las experiencias documentadas han contribuido al aprendizaje y a la generación de nuevas e innovadoras prácticas de relacionamiento que pueden ser aprendidas, mejoradas y replicadas en otros proyectos.
- Se considera que el sector extractivo tiene una gran experiencia de buenas prácticas, reconocidas y validadas con resultados positivos para la calidad de vida y el relacionamiento de actores, labor que debería ser orientada tanto a las comunidades, academia como a las propias empresas.
- Un conflicto observado en la mayoría de las buenas prácticas estudiadas es la oposición al proyecto por parte de la comunidad, por la forma en la que el proyecto convive con su entorno (ambiental, social, cultural) y/o por la falta de beneficios directos y al desarrollo de la comunidad. El diálogo se destaca como el canal necesario para resolverlo, siendo una alternativa para establecer acuerdos y negociar con la comunidad. Los espacios de diálogo se hacen necesarios para resolver las problemáticas de pequeños sectores rurales del entorno de una gran explotación extractiva. Por ejemplo, alianza para mejorar la producción ganadera .
- Instancias de participación ciudadana temprana: Las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no cuentan con la participación efectiva y el consenso de los gobiernos locales y comunidades de los territorios. Sin este paso que le da legitimidad social al proyecto, los procesos de participación ciudadana (incluyendo la consulta previa) se tornan complejos, lentos y/o conflictivos.
- Las alianzas entre OSC han comenzado a jugar un papel de acercamiento comunitario, como es el caso del Clúster de Energía Coahuila cuyo papel, entre otros, es informar sobre las implicaciones de la reforma energética y el nuevo papel de las empresas en la región. La intermediación de la sociedad civil puede ayudar en que la información sea más confiable y por ello mejor aceptada por las comunidades.

3.2. Recomendaciones

Para las empresas

- Contar con una planificación temprana, oportuna y a largo plazo de relacionamiento con las comunidades que contribuya al progreso económico y atención de temas de orden social y ambiental en los territorios donde desarrollan sus proyectos.
- Contar con un área dedicada exclusivamente a la gestión social y las relaciones comunitarias. Este estudio , ha podido constatar que contar con un área y equipo de trabajo idóneo ha ayudado a las empresas a desarrollar mejores prácticas.
- Considerar las particularidades del territorio y asimilar como una buena práctica el reconocimiento de los derechos de las diferentes comunidades. Se recomienda incluir dentro de sus protocolos de debida diligencia un levantamiento de información detallada sobre la dinámica del territorio y las comunidades presentes en el área de influencia, ya sea de la mano de la comunidad o posteriormente validada por ella.
- Coordinación regular con los líderes comunitarios desde el principio involucrándolos en los diferentes niveles de relacionamiento, información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas.



- Generar acciones por nivel de información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas que sean revisadas sistemáticamente, que incluyan plazos para su revisión y que sean flexibles para ser replanteadas, que tengan objetivos, metas y tiempos bien definidos desde el principio, que se apeguen a la legislación y que busquen un relacionamiento con acompañamiento constante y sistemático.
- Seguimiento a las acciones derivadas de la legislación referida a las industrias extractivas, en lo ambiental y en lo social, con el cumplimiento y continuidad a los acuerdos de las mesas de diálogo con coordinación intersectorial e intergubernamental.
- Fortalecer a los gremios y organizaciones representativas de las empresas que pueden participar en los más diversos espacios de diálogo y concertación para una mayor fluidez en el relacionamiento.
- Propiciar capacitaciones para fomentar alianzas con proyectos en los territorios, incentivando la participación comunitaria.
- Considerar a las Agencias Multilaterales de Desarrollo (MDB por sus siglas en inglés) líderes en América Latina y el Caribe que cuentan experiencia en el relacionamiento ciudadano²⁷¹ para un enfoque interdisciplinario en la región y con experiencia comparada en temas de sociedad civil como aliados técnicos en la elaboración de planes de relacionamiento, así como a OSC del país con experiencia territorial, para fortalecer los principios de relacionamiento entre empresas y comunidades gracias a sus conocimientos técnicos y cercanía con la comunidad.
- En la medida que las actividades extractivas van a producir afectaciones ambientales, se recomienda que las empresas prioricen el cumplimiento ambiental en el marco de las legislaciones nacionales, así como el relacionamiento social con información oportuna, veraz y transparente, promoviendo el relacionamiento con las comunidades para el análisis de los problemas y la toma de decisiones.

Para la Sociedad Civil

- Formar una estructura orgánica que permita dar a conocer los líderes comunitarios representativos como legitimados para dar información en tiempo oportuno, interactuando con el gobierno, las empresas y otras comunidades si fuera el caso, para la elaboración de iniciativas conjuntas en el marco de un relacionamiento sistemático y no solo circunstancial.
- Por la disparidad de culturas, ritmos y tradiciones, es necesario que el Estado y las empresas adapten espacios de relacionamiento a esta realidad. Asimismo, las propias comunidades para alcanzar resultados efectivos han de identificar los recursos para acercar sus enfoques de un modo oportuno.

- Asegurar la integración de los miembros de las comunidades por parte de los líderes comunitarios, en las decisiones sometidas a consulta como así en aquellas instancias de influencia a través de mesas temáticas que contemplen la disparidad de género, y con el fin de facilitar la formación de capacidades, así como la apropiación de conocimientos por parte de la comunidad. El trabajo de los líderes comunitarios para la participación significativa de la comunidad evidenciada en las prácticas analizadas ha sido clave para transformar la percepción que tienen las comunidades sobre la industria extractiva, mejorar las relaciones existentes y prevenir el surgimiento de conflictos.
- Los líderes comunitarios deben estimular y promover la disseminación de información oportuna así como diálogos con miembros de la comunidad y de las personas de las empresas cuyas labores están relacionadas, para la elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en las distintas fases de la actividad extractiva.
- Los líderes comunitarios y las empresas pueden apoyar procesos de acompañamiento, formación y capacitación, orientados a fortalecer capacidades de diferentes grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, minorías) en procesos que incorporen una mirada integral de territorio, para que se pueda tener un desarrollo sostenible e independiente de la presencia de la empresa.
- Contactar a actores imparciales, (como universidades), para la resolución de problemas y toma de decisiones en relación a conflictos internos de la comunidad o con los otros actores (gobiernos, empresas).

Para el Estado

- Implementar acciones de monitoreo periódico para recibir retroalimentación sobre la percepción que tienen tanto la sociedad civil como la empresa. La experiencia muestra que el monitoreo es importante para involucrar a otros actores y sectores, comunicar sobre la práctica, dar más transparencia y hacer ajustes necesarios de acuerdo con especificidades locales.
- Contar con metodologías para las consultas públicas incluyendo a las autoridades locales, minorías (grupos de mujeres, ancianos, jóvenes). Se sugiere construir procesos sistemáticos y periódicos de los niveles de información y diálogo, habilitando la colaboración con mecanismos de quejas, accesibles desde la misma comunidad y de forma anónima.
- Promover la participación ciudadana temprana indispensable para generar espacios de relacionamiento que promuevan oportunidades de crecimiento y mitiguen impactos adversos potenciales de las operaciones de extracción, prevenir conflictos, construir confianza y legitimidad social, así como optimizar el valor potencial en las regiones.
- Reglamentar la aplicación de la Convención OIT 169 con estándares mínimos para las consultas públicas. Respaldar la labor de los organismos de supervisión, fiscalización y de revisión de los estudios ambientales, sosteniendo y afinando los mecanismos de participación y Consulta Previa (Convenio 169 OIT), el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo y otras instituciones de defensa de los derechos ciudadanos.
- Fortalecer los instrumentos ambientales que permitan a la autoridad ambiental vigilar el cumplimiento de los planes de mitigación y los compromisos en materia del cierre de proyectos extractivos. La planeación anticipada del cierre económico y ambiental

es un aspecto de gran relevancia para contener pasivos ambientales y sociales y a la postre mejorar la percepción que tienen las comunidades en la zona de influencia de los proyectos y de la población en general.

- Fortalecer mecanismos de transparencia para la administración de los fondos generados por las rentas de la actividad extractiva apoyando nuevos proyectos, que a su vez generen nuevos emprendimientos en las regiones ricas en recursos naturales de modo de asegurar la creación de empleos de fuentes alternas, que fortalezcan las economías locales innovando y generando ingresos a largo plazo.
- Capacitar a los gobiernos locales sobre los temas que afectan los intereses de sus territorios, apoyando la generación de capacidades políticas y técnicas que apoyen y articulen los procesos de ordenamiento territorial.

Para los tres actores

- Utilizar las nuevas tecnologías a favor de formas más eficaces de relacionamiento. La madurez de los sistemas democráticos de la región, el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías, está dando una oportunidad sin precedentes para que responsables de los gobiernos, oficiales de empresas y líderes comunitarios cuenten con nuevos instrumentos de acercamiento e información para la discusión de intereses territoriales comunes.
- Tanto desde los gobiernos, como desde las empresas y de las comunidades, resulta relevante fomentar y acercarse a través de espacios de relacionamiento con acciones de información oportuna y confiable; promoción de diálogos que incluyan minorías, consultas públicas siguiendo regulaciones sectoriales que hayan contado con instancias de información y dialogo previos, promoción de colaboraciones en formación de capacidades que permitan un desarrollo territorial sostenible, promoción de alianzas en acciones de monitoreo participativo y/o de desarrollo de pequeñas empresas.
- Construir planes de relacionamiento iniciado por cualquiera de los actores principales, con actividades claras genera confianza, por lo que un rol más activo del gobierno y de grandes empresas en el fomento de espacios de concertación, donde las comunidades participen contando con la previa información y capacitación para exponer intereses y preocupaciones representa, como lo demuestran los hallazgos, un avance para el crecimiento sostenible.
- Incluir a otros recursos existentes, OSC locales, y sobre todo universidades con legitimidad para fortalecer un relacionamiento sostenible.
- Informar y revisar las proyecciones sobre los recursos de las industrias extractivas y los límites para la dinamización de la economía, reconociendo que esta es una actividad que depende de una serie de variables ajenas a planificaciones específicas. En particular, los espacios subnacionales han de proyectar sus actividades considerando recursos de otras fuentes y del sector extractivo, de forma de no generar frustraciones por eventuales variaciones en las transferencias desde el gobierno nacional. En este aspecto se requiere reforzar la información y análisis de las proyecciones de las industrias extractivas con autoridades y líderes de la sociedad civil, teniendo como base las acciones de transparencia de las industrias extractivas en marcha.

4. HOJAS DE RUTA

A continuación, se proponen cuatro hojas de ruta elaboradas a partir de los hallazgos del diagnóstico. Las mismas tienen como objetivo ofrecer lineamientos claros a representantes de empresas, de agencias gubernamentales y de la sociedad civil, para fortalecer la articulación de estos tres actores, promoviendo espacios de interacción que se enfoquen en el territorio y respondan a las necesidades de las comunidades. Esto con la meta última de contribuir con los esfuerzos para promover una actividad extractiva responsable como sinónimo de desarrollo.

Tres de las hojas de ruta están basadas en países específicos del diagnóstico (Colombia, Perú y República Dominicana), mientras que la cuarta es un ejercicio regional que busca promover un mejor relacionamiento entre los diferentes actores intervinientes en el desarrollo de la minería responsable en América Latina y el Caribe.

Las hojas de ruta buscan rescatar los hallazgos del diagnóstico de Perú, Argentina, Colombia, Chile, México y República Dominicana, en lo referido a los cinco niveles de relacionamiento: Información, Diálogo, Consulta, Colaboración y Alianza, así como agregar otras experiencias regionales, con un enfoque en el diálogo multi-actor.





Hoja de Ruta de Colombia

GOBIERNO



Nivel Información

La viabilidad de un proyecto extractivo en Colombia requiere de dos tipos de autorizaciones: por parte de la Agencia Nacional de Minería por un lado y la licencia ambiental por parte de la autoridad competente por otro lado. También, en Colombia el marco normativo contiene varias disposiciones para temas de participación ciudadana. Sin embargo, la participación de la sociedad civil, generalmente se da cuando los proyectos ya se encuentran autorizados y licenciados.

Al respecto, sería importante considerar la buena práctica de Argentina: Cuencas Sociales como área de intervención, donde se logró coordinar la entrega de información de las empresas a las comunidades, contando con la participación del gobierno quien oficializa un acta con las necesidades, preocupaciones e intereses de la comunidad y los compromisos asumidos por las empresas.

De esta manera, el primer esfuerzo debería realizarse entre las autoridades para definir la viabilidad de potenciales proyectos antes de otorgar la licencia. De manera complementaria, es recomendable que el Ministerio de Minas y Energía adelante una estrategia de relacionamiento con las autoridades departamentales y municipales donde se realizarán las actividades extractivas para acordar entre entidades públicas las restricciones y condiciones de las áreas con potencial de intervención.



Nivel Diálogo

En los últimos años han sido activados mecanismos de participación ciudadana en el ámbito político como consultas, referendos, iniciativas populares y cabildos abiertos²⁷²; todos estos dirigidos a la defensa de los recursos naturales y de los territorios.

Es aconsejable definir, generar y apropiar espacios de relacionamiento contextualizados que reduzcan las asimetrías entre las partes para poder generar acercamientos y facilitar espacios en los diferentes niveles de relacionamiento. La experiencia del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible en Perú, puede dar pautas para desarrollar diálogos articulados entre diferentes niveles.

Para el Gobierno, se sugiere participar en espacios colectivos o mesas de trabajo para ser garante de los acuerdos o compromisos adquiridos entre la empresa, las autoridades locales y miembros de la sociedad civil, generando un diálogo permanente y útil para cada uno de los sectores. Este rol cumple el Estado, por ejemplo, en la experiencia de Cuencas Sociales como área de intervención en Argentina.



Nivel Consulta

A nivel de Consulta en Colombia, es la Ley 21 de 1991 el instrumento legal a través del cual se reglamenta la consulta previa como única oportunidad formal de relacionamiento entre los tres sectores. Sin embargo, esta normativa solo aplica para el caso de comunidades indígenas y afrodescendientes con presencia en los territorios de influencia de los proyectos, dejando por fuera gran parte de las comunidades que no tiene estas características.

En aras de evitar potenciales contradicciones y conflictos entre autoridades de nivel nacional y local y las comunidades presentes en la zona de influencia de los proyectos, se considera una buena práctica la articulación y coordinación institucional antes de ofertar un área para exploración y posterior explotación minera o petrolera. Lograr una articulación entre instituciones evitaría trasladar al inversionista/empresa la incertidumbre de los territorios y de las áreas excluibles de proyectos extractivos por restricciones ambientales o sociales.

Al respecto es interesante destacar el proceso de Chile: **Participación Ciudadana en etapa de elaboración del EIA proyecto Minero Nueva Unión**, en donde se inició un proceso de participación ciudadana anticipada, es decir, antes de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresara para ser evaluado ambientalmente con la finalidad de informar e incluir tempranamente las observaciones de las comunidades locales en el desarrollo del EIA y de esta forma consensuar a través de mecanismos de diálogo que permitieron recoger los temas de interés y dar cuenta de los avances y resultados.



Nivel de Colaboración

La legislación colombiana carece de mecanismos que promuevan la Colaboración y formación de alianzas entre los actores. La colaboración entre los sectores se da generalmente en el ámbito local a partir de interacciones generadas por el Diálogo multi-actor. Una vez los proyectos son licenciados e inician operaciones en las regiones, se generan los relacionamientos entre empresas, comunidades y autoridades. En especial, a partir de mesas de trabajo donde se logran consolidar acuerdos que redundan en compromisos de Colaboración.

Al respecto, es importante destacar la práctica de Perú: **Monitoreo ambiental participativo en Orcopampa**, donde se estableció un comité de monitoreo ambiental formado por delegados de las comunidades, la empresa minera, el gobierno local, ONG, entre otros, permitiendo un monitoreo participativo y regular de la calidad del agua y abriendo un espacio de relacionamiento para conversar sobre otros temas.

Lograr generar y mantener espacios de Colaboración donde se disponga de una lectura regional de los proyectos facilita la concepción de acuerdos y alianzas entre los sectores.



Nivel de Alianza

No se cuenta con una normativa específica que promueva las alianzas entre los sectores. Estas alianzas generalmente se dan a partir de acuerdos motivados por el cumplimiento de obligaciones ambientales o sociales interpuestas una vez el proyecto es licenciado e inicia su intervención en el territorio. Dichos acuerdos son establecidos generalmente entre empresas y comunidades, siendo las autoridades un garante o veedor de los acuerdos en el marco del cumplimiento de los actos administrativos.

EMPRESA EXTRACTIVA



Nivel Información

A nivel de Información, el país cuenta con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), que, aunque no es específica para las industrias extractivas, sí promueve el acceso a la información pública de manera transparente, oportuna y eficaz, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre los proyectos.

Es de resaltar que la mejor práctica que puede desarrollar una empresa es tomarse el tiempo necesario para socializar y explicar el proyecto que pretende adelantar, utilizar los canales institucionales para llegar de la mejor manera al territorio y vincularse a los instrumentos y esquemas de planificación y administración pública; identificar los programas y proyectos de inversión local que merezcan ser fortalecidos sea a través de esquemas de incentivos o apoyo para lograr más o mejor cobertura social. Un ejemplo es la participación ciudadana en etapa de elaboración del EIA proyecto Minero Nueva Unión en Chile.

Es una oportunidad de lograr un mejor relacionamiento, poner a disposición de la región la información de los proyectos, previo al inicio de cualquier actividad en campo, donde se informe claramente cuáles son los canales de comunicación que tiene cualquier representante de la sociedad civil sobre el proyecto.



Nivel Diálogo

La buena práctica de **Diálogo intercultural con pueblo indígena en Colombia** ha generado acciones favorables para promover el Diálogo con comunidades indígenas. La empresa al reconocer las necesidades e intereses de las comunidades vinculando una analista que conoce y comparte la idiosincrasia y lenguaje, generó confianza, guió y facilitó el diálogo y la construcción de acuerdos.

En los espacios de Diálogo, es importante tener miradas de largo plazo, de carácter estratégico, y no solo respuestas a problemas inmediatos. El propósito principal es construir acuerdos en lugar de solamente ratificar las diferencias (de intereses, de narrativas, de visiones, etc.). El diálogo debe ser incluyente, no exclusivo y adaptado a cada uno de los actores involucrados.





Nivel Consulta

Merece la pena resaltar la experiencia de Chile, sobre la **Participación Ciudadana en la etapa de diseño del EIA** donde a través de un proceso de participación de las comunidades se lograron incluir tempranamente las preocupaciones de las comunidades locales en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y de esta forma consensuar a través de mecanismos de diálogo que permitieron recoger los temas de interés y dar cuenta de los avances y resultados. Es recomendable facilitar espacios de participación en los que pueda ser consultada la sociedad civil desde las etapas tempranas de los proyectos, lo cual no los exime de los espacios oficiales establecidos en el marco legal de participación ciudadana.



Nivel de Colaboración

A nivel de Colaboración es importante resaltar la buena práctica desarrollada en Colombia por varias empresas mineras en el Departamento del Cesar, como es la de **Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal** en el que no solo se agruparon las obligaciones de inversión de varias empresas mineras presentes en una misma región, sino que se formularon estrategias de Colaboración, a través de acuerdos de conservación con las familias campesinas participantes. Otro ejemplo es la práctica Cuencas Sociales como área de intervención, Argentina. Lograr generar acuerdos entre varias empresas mineras presentes en una zona maximiza los beneficios de las comunidades locales y aporta confianza en el relacionamiento con las empresas presentes en los territorios.



Nivel Alianza

La estrategia de Alianza construida en México denominada **Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)**, que busca impulsar el desarrollo social a partir de la corresponsabilidad entre los sectores público y privado en comunidades, cobra relevancia para Colombia, ya que cuenta con una empresa de economía mixta llamada Ecopetrol y que tiene participación en gran parte de los bloques petroleros adjudicados en el país. Sería provechoso que buscara replicar esta buena práctica.

SOCIEDAD CIVIL



Nivel Información

Involucrarse desde las etapas tempranas de un proyecto minero permite que la comunidad y el proyecto minero manejen la misma información desde el inicio de los estudios, por eso la buena práctica adelantada en Chile **Participación Ciudadana en etapa de diseño del EIA** donde se utiliza un enfoque participativo en la producción de la información del estudio de impacto ambiental, es tan relevante. Es importante desarrollar acciones y agendas de trabajo que permitan implementar y mejorar los diferentes niveles de relacionamiento para compartir y generar información y conocimientos. Incentivar la participación ciudadana a nivel local es importante para incidir en la toma de decisiones informada.



Nivel Diálogo

Los diálogos multi-actores han sido una experiencia liderada principalmente en el Perú y que se ha replicado en países como Argentina, Colombia, Chile, entre otros. El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible en el Perú se ha constituido como un canal de interacción de múltiples actores, incorporando enfoques innovadores como la integración de formas lúdicas, el tratamiento del yo, las relaciones de género, contando con un soporte múltiple para la sostenibilidad del espacio. La apuesta de sociedad civil es generar espacios descentralizados, con base a la configuración política administrativa (región, municipalidad) o de cuenca, convocando representaciones institucionales para el desarrollo como en Argentina o con participaciones más personales de líderes multi-actor.



Nivel Consulta

En Colombia la consulta se entiende en el marco de la Convención 169 de la OIT, la cual está reglamentada por el Decreto 2613 de 2013. Sin embargo, esta investigación ha encontrado que las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no se negocian con los gobiernos locales y las comunidades de los territorios donde se ejecutarán, de manera que los procesos de participación ciudadana (incluyendo la Consulta previa) se tornan complejos y lentos. Es aconsejable reconocer las particularidades del territorio y los intereses de sus comunidades como una buena práctica de relacionamiento a nivel de Consulta e incluir dentro de la planeación y desarrollo de los proyectos la dinámica de los territorios y sus individuos.



Nivel Colaboración

En términos de Colaboración, merece la pena explorar la experiencia mexicana sobre **Monitoreo participativo de la calidad del agua**, ya que permite la participación no solo de comunidades presentes en el área de influencia del proyecto sino representantes de la academia/universidades regionales que pueden fortalecer los protocolos de muestreo y el conocimiento sobre la relación del recurso hídrico con otras especies indicadoras en un paisaje, como lo han logrado también en Perú en los ejercicios de **Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa**.



Nivel Alianza

Las comunidades se verían altamente beneficiadas al fortalecer sus capacidades para el desarrollo de proyectos sostenibles, en niveles de Alianza y Colaboración. Existe un interés superior en que las comunidades permanezcan en sus territorios, generando productividad y evitando que las actividades extractivas generen desplazamientos humanos. En ese sentido, una buena práctica desarrollada en Colombia por varias industrias mineras en el Departamento del Cesar, ha sido la **Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal** en el que no solo se agruparon las obligaciones de inversión de varias empresas mineras presentes en una misma región, sino que se formularon estrategias de colaboración, a través de acuerdos de conservación con las familias campesinas participantes, en las que se incluía incentivos económicos y capacitaciones técnicas para el florecimiento y desarrollo de negocios sostenibles al tiempo que se interiorizaron acciones de conservación de las zonas de influencia del proyecto.

Hoja de Ruta de Perú

Actores: En el desarrollo de la presente Hoja de Ruta se evidenció el especial interés que habría en el Perú en fortalecer la participación de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según el art. 58 del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM esta es el órgano con autoridad técnica normativa a nivel nacional responsable de prevenir, gestionar y solucionar controversias, diferencias y conflictos sociales; y por ser parte de la PCM tiene la responsabilidad de coordinar las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial.

GOBIERNO:



Nivel Información

El marco normativo peruano promueve diversos mecanismos participativos que enfatizan brindar información oportuna y adecuada respecto de las actividades extractivas proyectadas o en ejecución y promover el diálogo con la población del área de influencia y sus organizaciones representativas, recogiendo sus opiniones. Retomando la experiencia del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible que anima el acercamiento multi-actor a nivel nacional, se plantea que sería positivo considerar espacios descentralizados en ámbitos de concentración de empresas extractivas, para que las diversas autoridades de gobierno brinden información de calidad sobre temas relacionados con el desarrollo de la minería. Las experiencias de monitoreo participativo, como en México, son otras oportunidades para brindar información. En ellas se valora la pertinencia y calidad de la información, así como las formas comunicativas con una mirada intercultural.



Nivel Diálogo

Las normas peruanas en el subsector minero de Perú reconocen mecanismos de Diálogo como la vigilancia ciudadana y el monitoreo ambiental, indicando que las empresas contemplen una Oficina de Información Permanente o Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo. Se cuenta con al menos 40 comités de monitoreo participativo. La Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua y OSINERGMIN como entidad de fiscalización, pueden compartir su conocimiento y práctica de monitoreo generando un espacio de intercambio y diálogo a partir de los hallazgos del monitoreo, posibilitando tomar decisiones sobre el cuidado del recurso hídrico.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo, con involucramiento de la Defensoría del Pueblo, puede tener un rol para impulsar una Mesa de Diálogo descentralizada, que contribuya a acercamientos de varias empresas y comunidades, en ámbitos donde se den intervenciones múltiples; la experiencia del GDMDS ilustra este proceso a nivel nacional. Es de especial importancia que se facilite acercamientos con metodologías que favorezcan el diálogo productivo, cara a cara, en “espacios seguros”, enfrentando las condiciones de asimetría. Probablemente ello requiera de un facilitador de las sesiones de trabajo. Así como en Argentina, la autoridad regional puede cumplir un rol de coordinador y fiscalizador convocando a representantes de las empresas y a la comunidad para que compartan experiencias y coadyuven en el establecimiento de puentes ante divergencias.



Nivel Consulta

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo está incorporado en la Constitución peruana y además se cuenta con una ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (N°29785, 2011) con su respectivo reglamento. La aplicación de estos marcos legales es relativamente reciente, en minería a partir del año 2015, estando los procedimientos en progresivo ajuste, aunque persisten cuestionamientos de parte de la sociedad civil. El Ministerio de Cultura podría enfatizar la interacción con el Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo procesos de Consulta previa transparentes y con mirada intercultural, potenciando la intervención de la Defensoría del Pueblo y otros entes reconocidos como imparciales. Para esto, se podría tomar como referencia la buena práctica del Diálogo con el Pueblo Wayuú en Colombia, que aun tratándose de otro nivel de relacionamiento, proporciona elementos interculturales importantes que pueden servir de referencia.



Nivel Colaboración

En Hualgayoc dos ONG y la empresa minera GoldFields lograron aunar fuerzas con el programa estatal Fondo Empleo para la mejora productiva de campesinos pobres. Pero el involucramiento del Estado es complejo por la naturaleza de los requerimientos y tiempo de tramitación, lo que amerita su revisión. También en Colombia diversas instancias del Gobierno formaron parte de una iniciativa de fomento a proyectos forestales y productivos sostenibles con empresas, en zonas afectadas por la explotación del carbón. Esta experiencia destaca el compromiso del Estado y su involucramiento en la planificación del desarrollo y el monitoreo. Incluso instituciones educativas agropecuarias son activas participantes, lo que se constituye como un modelo referencial.

Sería conveniente que Perú considerara -desde el Ministerio de Energía y Minas y con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- incentivar acciones colaborativas multi-empresas, en espacios de confluencia de varias intervenciones extractivas para potenciar resultados



Nivel Alianza

Son pocas las ocasiones en las que el Gobierno peruano establece alianzas con terceros. De alguna forma se han dado oportunidades en que se conjuga la Colaboración y Alianza para el desarrollo productivo (aunque no así para el desarrollo de capacidades). El marco legislativo es limitado en este campo, requiriéndose flexibilizarlo para la incorporación efectiva del desarrollo de capacidades en la planificación presupuestaria, y una orientación más clara a las autoridades para su implementación.



Nivel Información

Los comités de monitoreo ambiental participativo en Orcopampa y en México y las mesas de diálogo se han presentado como espacios para que las organizaciones de sociedad civil recojan y soliciten información sobre temas ambientales e informen de acciones en curso con la empresa, teniendo la oportunidad de socializarla con su comunidad o grupo de influencia. Contribuye a la calidad de la información contar con medios de difusión adecuados y oportunos, como cartillas, informativos, programas radiales, etc.

SOCIEDAD CIVIL



Nivel Diálogo

La sociedad civil ha sido tenaz impulsora del Diálogo multi-actor en Perú. El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible se ha constituido como un canal de interacción de múltiples actores, incorporando enfoques innovadores como la integración de formas lúdicas, el tratamiento del yo, las relaciones de género, contando con un soporte múltiple para la sostenibilidad del espacio. La apuesta de la sociedad civil es generar espacios descentralizados, con base en la configuración política administrativa (región, municipalidad) o de cuenca, convocando representaciones institucionales para el desarrollo como en Argentina o con participaciones más personales de líderes multi-actor. Cualquiera de ellas requerirá conjugar fuerzas con entidades del Estado como la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.



Nivel Consulta

No hay mayor experiencia de Consulta Previa sistematizada en Perú que se presente como una práctica de éxito. El Viceministerio de interculturalidad, como órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo en el Perú, sería beneficiado de sistematizar las experiencias de Consulta Previa tanto en actividades hidrocarburíferas como en minería, convocando a la academia y entidades de sociedad civil para este fin.



Niveles de Colaboración y Alianzas



ONG y universidades forman parte de acciones Colaborativas o alianzas tanto con empresas como con el Estado, ilustrando procesos de conjunción de saberes y especialidades que reeditan en la calidad de la propuesta, sea en temas ambientales, propuestas de desarrollo económico, etc. Es de destacar que estas conservan su autonomía y ponen por delante el profesionalismo y los aspectos consensuados definidos. Así se constituyen en una pauta a replicar que se fortalecerá trabajando con transparencia y rendición de cuentas.

EMPRESA



Nivel Información

La normatividad peruana es fecunda en términos del requerimiento de brindar información oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas o en ejecución, promover el Diálogo con la población del área de influencia y sus organizaciones representativas, recogiendo las opiniones de la población. La empresa debe jugar un rol activo en brindar Información, reconociendo el derecho de la población y de la comunidad de mantenerse informada de las acciones que se den en el territorio. A partir del proceso de monitoreo ambiental, afirmando la Colaboración y el Diálogo, la empresa podrá intercambiar información sobre sus sistemas de gestión ambiental y resultados del monitoreo a los recursos hídricos (y del suelo o del aire) en espacios de Diálogo seguros, con delegados comunales y autoridades, dando respuesta a las preocupaciones ambientales de la población.

La mesa de Diálogo de Huari ha sido una oportunidad para el encuentro de actores diversos, donde se intercambia información y preocupaciones sobre el desarrollo. En Argentina, se observa cómo se constituye un espacio común reuniendo a varias empresas y comunidades, para que estas puedan plantear sus inquietudes y obtener una respuesta única y consensuada desde el sector empresarial en un proceso fiscalizado por el Estado. En su primera fase el espacio se focalizó mayormente en el intercambio de Información sobre los proyectos.

Uno de los mayores esfuerzos sistemáticos de facilitar Información especializada es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que se implementa en varios países, incluyendo México. La misma que promueve la transparencia en los flujos económicos derivados de la explotación de minerales, petróleo y gas de los países que son miembro y que cuenta con la participación de una coalición de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, inversores y organizaciones internacionales. También EITI se implementa en Perú y se recomienda fortalecer la difusión de sus hallazgos a nivel sociedad, coordinando con los medios.



Nivel Diálogo

Un amplio proceso de Diálogo multi-actor, se generó en Arequipa alrededor del agua y en Huari por obras para el desarrollo, ambos posteriormente a un conflicto, evidenciando cómo todos los actores, incluyendo la empresa, requieren desarrollar sus capacidades dialógicas, sostener su voluntad de Diálogo y presentar canales bilaterales de tratamiento de conflictos en caso necesario.



Nivel Consulta

En Perú la Consulta Previa a los pueblos Indígenas y originarios es de aplicación reciente, tanto en hidrocarburos como minería. Tampoco existen muchas experiencias sistematizadas en los diferentes países de la región. En República Dominicana se ha avanzado en el involucramiento de las comunidades con base en Consultas amplias normadas por ley, en la planificación del desarrollo a nivel municipal, con la intervención de empresa y Estado.

Se sugiere el acompañamiento de terceros a los procesos de Consulta Previa en el sector extractivo en Perú, para analizar y sistematizar su desenvolvimiento, revisando el rol de la empresa que por norma no participa directamente del proceso.



Nivel Colaboración

En el caso de Perú, son muchos los esfuerzos de empresas que en forma individual llevan a cabo acciones colaborativas con organizaciones de sociedad civil. Los monitoreos participativos, desarrollados en Perú con activa participación de empresas, así como en otros países como el caso de México, delegan en una entidad especializada y reconocida la labor técnica, conllevando a cambios en la percepción, comunicación y relación de la empresa con la comunidad de una manera positiva, fortaleciendo un relacionamiento de largo plazo. Pero se potencia el impacto con la conjunción de empresas, caso del Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba - CGDBU que reúne a las socias del Consorcio Camisea, a cargo de la explotación de gas, para atender las demandas de las poblaciones indígenas.

El reto es cómo desarrollar acciones colaborativas a nivel grupal de las empresas, rompiendo los límites de la acción bilateral a acciones de mayor impacto. En Colombia, se han mostrado resultados positivos de la Colaboración a cargo de diversas empresas por el desarrollo forestal, como resultado de afectaciones a un conjunto de comunidades. Igualmente, en Argentina con el Proyecto Cuencas Sociales y en Chile con la Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda empresas que trabajan en la misma zona se agrupan para llevar a cabo iniciativas en los territorios de influencia de sus operaciones, involucrando a comunidades y gobiernos locales.



Nivel Alianza

El Proyecto REDyPAC de Hualgayoc ilustra cómo una acción Colaborativa y de Alianza entre agencia de cooperación internacional, ONG y empresa, impulsa con éxito un innovador programa de desarrollo productivo (mejoramiento ganadero y de producción quesera) con el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de ciudadanía. Igualmente, la Alianza para promover un Círculo Virtuoso del Agua es una demostración de esfuerzo multisectorial de empresa con diferentes niveles de Gobierno para la ejecución y mantenimiento de obras de beneficio colectivo en torno a captación, tratamiento y distribución del agua del río, lo que ha posibilitado mejorar las relaciones entre los diferentes actores y construir una perspectiva de desarrollo concordada con un plan a largo plazo, además de claros beneficios en la cantidad y calidad del agua para la población.

En Perú se podría explorar más profundamente la generación de alianzas de empresas con ONG para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento, como se ha dado en República Dominicana con base en la maestría y compromiso de estas.

Hoja de Ruta de República Dominicana

Actores: En el diseño de esta hoja de ruta se evidenció como especialmente importante potenciar los esfuerzos de quienes conforman la *Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI)*. Desde julio de 2015, la República Dominicana se ha unido a la iniciativa con su propia Comisión Nacional. La implementación de la EITI en la República Dominicana ha permitido articular el trabajo del gobierno, la sociedad civil y la industria, en torno al sector extractivo, con una mayor comprensión de las inquietudes de la sociedad civil y de la forma en que el gobierno administra los recursos provenientes de esta actividad.

GOBIERNO:



Nivel Información

La República Dominicana cuenta con diferentes mecanismos que promueven Información en el sector y que constituyen una oportunidad para mejorar el acceso a la Información para la sociedad civil. Adicionalmente, en el marco de la iniciativa EITI se publica Información sobre contratos y rentas mineras en línea.

A la vez, se observa la necesidad de promover un mecanismo que permita el intercambio de Información entre los diferentes actores de forma conjunta a nivel local. Este diagnóstico ha identificado experiencias en las que a través de mesas de Diálogo se promueven intercambios, como el caso de Cuencas Sociales de Argentina, la Mesa de buenos vecinos de Sierra Gorda en Chile, la participación de familias campesinas en programa de compensación forestal de Colombia y el Grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, de Perú. Todas las experiencias tienen en común que la Información se genera y pone al acceso del público en el marco de un proceso de Diálogo multi-actor, evidenciando así como los diferentes niveles de relacionamiento se complementan generando círculos virtuosos de relacionamiento.



Nivel Diálogo

La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) adoptada por el gobierno de la República Dominicana en 2015, ha sentado un precedente importante y el principal ejemplo de Diálogo multi-actor en el país. Otro ejemplo del rol positivo que puede jugar el Estado en procesos de Diálogo es el del Gobierno provincial de Sánchez Ramírez, que logró articular otras instancias gubernamentales simultáneamente, lo cual no había sido la práctica en ocasiones anteriores. Para fortalecer dichos esfuerzos, las experiencias Cuencas Sociales en Argentina, Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda en Chile, Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal de Colombia y Grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, de Perú ilustran el poder del Diálogo para articular e integrar una diversidad de actores, muchos de ellos con intereses contrastantes.



Nivel Consulta

La Ley No. 176-07 sobre municipios prevé la participación de comunitarios en la toma de decisiones y establece el derecho a plebiscito. Este marco legal es reciente y solo se lo ha aplicado en el caso de Planes de Desarrollo Municipales en la República Dominicana. El plebiscito para confirmar los resultados de Consulta con la sociedad civil es un ejemplo a seguir. Alternativamente, a nivel comunitario, el gobierno se beneficiaría al promover la validación de acuerdos logrados mediante Consulta a toda la comunidad potencialmente afectada por los proyectos, como en el caso de la Consulta con la Comunidad de Caimanes en Chile.



Nivel Colaboración

El gobierno cuenta con las herramientas para establecer acuerdos de Colaboración multi-actor basados en la gestión del conocimiento sobre el sector, sus aportes, estadísticas, logros, recaudaciones, inversión y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. En Perú se dio una experiencia donde una pluralidad de actores reconoció como lección aprendida el hecho de que los actores conozcan el funcionamiento del Estado, sus burocracias, competencias, plazos, requisitos, etc. Esto ayuda a la construcción de confianza y a poder gestionar las acciones que garanticen un clima armónico dentro de los objetivos de desarrollo del sector. Otro ejemplo que vale la pena recalcar es el caso de Colombia: Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal, en el cual la participación del gobierno junto a las empresas, las ONG y la comunidad fue un gran apoyo al éxito del proyecto.



Nivel Alianza

Este diagnóstico ha identificado varias alianzas en torno al sector extractivo en las que el gobierno de la República Dominicana forma parte, notablemente la Incubadora de Empresas Cibao Sur, que se derivó de un plebiscito. Por lo tanto, se exhorta a los gobiernos locales y nacional a continuar involucrándose en estos esfuerzos y se observa una gran oportunidad para profundizar su relacionamiento con empresas extractivas y sociedad civil en este nivel. Algunas referencias interesantes para ello se encuentran en el caso del Perú con el proyecto de Mesa de Diálogo Huari, cuya Alianza resultante logró frenar problemas y confrontaciones. En este caso el compromiso del gobierno fue significativo para el cumplimiento de la solución del conflicto. La Alianza Valor Minero en Chile también integra una red multi-actor y es un ejemplo de Alianza Público-Privada que sería un buen referente para el desarrollo del sector extractivo en la República Dominicana.

SOCIEDAD CIVIL



Nivel Información

El diagnóstico de la República Dominicana demostró la necesidad de crear un foro donde se intercambien informaciones relevantes entre la sociedad civil y la industria extractiva. La sociedad civil se vería beneficiada de jugar un rol más activo en la demanda de información veraz al gobierno y a las empresas. La información abierta y fluida genera confianza y permite un monitoreo del accionar de la industria, como demuestran las experiencias de las Mesas Redondas Comunitarias de Bonao y los resultados de los Planes de Desarrollo Municipales, en los que la sociedad civil jugó un papel esencial. En México existen como referencia dos proyectos para el sector minero que documentan la importancia de demandar información de las empresas. Uno es el



Monitoreo Participativo de Calidad de Agua, de la Minera Media Luna , en el que el reclamo de la comunidad resultó no solo en la comprobación de la calidad del agua, sino además en la capacitación de líderes para el monitoreo del recurso hídrico. La segunda referencia es el Plan Integral de Cierre, de la empresa New Gold , en el que la intermediación de una organización de la sociedad civil apoyó el levantamiento de información cierta, permitiendo la implementación de acciones en concordancia con las necesidades de la población.



Nivel Diálogo

La construcción del Diálogo como herramienta de relacionamiento ha demostrado ser muy efectiva en el país. Los diferentes actores de las Mesas redondas Comunitarias que incluye a gobiernos locales y a los diferentes gremios de cada comunidad, toman decisiones consensuadas para el desarrollo local y reciben el acompañamiento de la empresa Falcondo en sus procesos. Este ejemplo de Diálogo puede ser llevado a otros niveles, siguiendo el ejemplo del Perú y el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible que ha trascendido fronteras y formado el Grupo Diálogo Latinoamericano. En el caso de la República Dominicana, la sociedad civil puede tomarlo como ejemplo para trascender la frontera provincial y llevar el Diálogo a nivel nacional.



Nivel Consulta

Un referente de Consulta en la República Dominicana fueron los Planes de Desarrollo Municipales implementados en las provincias Sánchez Ramírez y Bonao. El éxito de la Consulta se basó en la construcción de Diálogo como herramienta con participación multi-actor entre autoridades locales, comunidad y empresa, evidenciando nuevamente la complementariedad de los distintos niveles de relacionamiento. Se recomienda a la sociedad civil participar activamente en espacios regionales para conocer las experiencias de Consulta en otros países y promover procesos de aprendizaje y gestión de conocimiento a nivel nacional.



Nivel Colaboración

Un gran ejemplo de relacionamiento en la República Dominicana son los acuerdos de Colaboración que existen entre las Mesas Redondas Comunitarias y la empresa Falcondo. Este caso adicionalmente conectó a las nueve comunidades entre sí en torno al tema extractivo, creándose un enlace que antes no existía a pesar de su cercanía geográfica y potenciando las oportunidades de desarrollo para la sociedad civil. Un proyecto similar e interesante que ha recorrido todos los niveles de relacionamiento desde la Información hasta la Alianza y que tienen elementos replicables en la República Dominicana es el de la Mesa Buenos Vecinos de Sierra Gorda en Chile. En esta experiencia se ha construido un Diálogo territorial que ha vinculado a varias comunidades, integrando toda la información generada para el bien común de todo el territorio y dando pie a niveles de relacionamiento más complejos. Algo similar se podría plantear desde la sociedad civil, ya que en la República Dominicana las empresas Barrick, Falcondo y Cormidom comparten territorios muy cercanos y para las comunidades sería conveniente colaborar con ellas de manera unificada.



Nivel Alianza

Este diagnóstico ha identificado varias alianzas en torno al sector extractivo en las que la sociedad civil juega un papel clave. Por ejemplo, el Apadrinamiento de Escuelas en el cual las asociaciones de padres, la Asociación Dominicana de Profesores y juntas de vecinos tuvieron tanta relevancia. Se recomienda a las comunidades a continuar involucrándose en este tipo de esfuerzos y se observa una gran oportunidad para profundizar su relacionamiento con empresas extractivas, gobiernos y con otros miembros de la sociedad civil en este nivel a través de su participación en alianzas similares.

EMPRESA



Nivel Información

Positivamente, todos los proyectos mineros por ley 64-00 deben de proveer la Información obligatoria. Por lo tanto, las empresas ya colocan a disposición una cantidad significativa de Información, al público en general, incluyendo la comunidad y el gobierno. La Ley también contempla la realización de vistas públicas donde se explica el proyecto, sus alcances y se escuchan las preocupaciones de las comunidades que serán influenciadas por el proyecto. En los diagnósticos de Argentina, Chile y Colombia, se identificaron tres prácticas que demuestran que el trabajo en equipo tiene beneficios compartidos importantes para el desarrollo, no solo de una mina sino también de una región. Las Cuencas Sociales en la provincia de Salta, Argentina donde lo interesante es que 5 empresas, 4 de ellas aun en etapa de exploración y una en la etapa de construcción, se reúnen y deciden conjuntamente la estrategia para trabajar con las comunidades y mantenerlas informadas sobre los diferentes procesos mineros que llevan a cabo. Así, las comunidades tienen un espacio unificado donde acudir en caso de preocupaciones. Otros ejemplos similares son: Participación de Familias Campesinas en Programas de Compensación Forestal, Colombia y Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda, Chile. La información que generan las empresas extractivas al realizar buenas prácticas debe de llegar también al público en general a nivel nacional, asegurando que la población tiene conocimiento de los proyectos y del beneficio que estos generan en el desarrollo de las comunidades y la nación.



Nivel Diálogo

El Diálogo como pilar del relacionamiento entre sociedad civil e industria se hace notar en República Dominicana en los procesos de las Mesas Redondas Comunitarias y de los Planes de Desarrollo , mientras que en Argentina nuevamente destacan las Cuencas Sociales , y en el Perú, la Mesa de Diálogo Huari, el Grupo Diálogo de Perú y el caso de Arequipa sobre el Círculo Virtuoso por el Agua . En todos los casos, el Diálogo es el sello indispensable para garantizar el éxito del proyecto en su relación con las comunidades y los gobiernos, por lo que se exhorta a las empresas dominicanas a continuar profundizando en esta práctica de relacionamiento.



Nivel Consulta

En República Dominicana el proceso de Vistas Públicas de la Ley 64-00 es punto de partida de la Consulta, en la cual se expone el proyecto y sus alcances y la población participa, se informa, expresa preocupaciones y se llega a acuerdos importantes. Podría haber un mayor aprovechamiento en los resultados, en la medida que los resultados de la Consulta sean divulgados ampliamente en el ámbito nacional.



Nivel Colaboración

Existe una gran oportunidad de fortalecer el nivel de Colaboración para las empresas en República Dominicana, si se sigue el ejemplo de los proyectos regionales hallados por el diagnóstico: Mesa de Buenos Vecinos Sierra Gorda (Chile) , Cuencas Sociales (Argentina) y Participación de Familias Campesinas en Programa de Compensación Forestal (Colombia). Estos tres casos tienen en común que, además de ser buenos ejemplos de Diálogo y Colaboración con gobierno y sociedad civil, integran varias empresas en una misma zona para trazar planes coordinados y avanzar el desarrollo local. Es una clara muestra del poder de la Colaboración también entre empresas en los procesos extractivos y el alcance positivo que esta acción puede generar para el desarrollo.



Nivel Alianza

Las empresas en República Dominicana han liderado varias alianzas. Para continuar con estos esfuerzos, se recomienda remitirse al caso de Colombia, Participación de Familias Campesinas en Programa de Compensación Forestal no solo es un ejemplo del proceso de relacionamiento entre las partes interesadas, sino que marca un hito ambiental. Este ejemplo demuestra que las alianzas pueden contribuir a la conservación de áreas y rescate de zonas degradadas y que se puede trabajar en Colaboración con las autoridades ambientales. Esta perspectiva ambiental no está muy consolidada en la República Dominicana y es un ejemplo a seguir e implementar en proyectos mineros colindantes con zonas ambientalmente sensibles.

Hoja de Ruta Regional para América Latina y el Caribe

Actores: A nivel regional y global contamos con importantes actores que pueden concertar y mejorar sus respectivas misiones, como: Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), International Council on Mining & Metals (ICMM), Programa de Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD), Banco Mundial, Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), gobiernos de países mineros como Canadá o Australia.

GOBIERNOS:



Nivel Información

En Chile se cuenta con la buena práctica de la Participación Anticipada en la Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, cuya mensaje clave es la necesidad de brindar Información a las poblaciones en el instante que se está elaborando el Estudio de Impacto Ambiental. Ello se puede complementar con otra buena práctica iniciada en este país denominado Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión. Uno de sus objetivos es entregar información antes iniciado o incluso decidido una futura inversión en la zona. Ello puede ser muy atractivo para los Gobiernos que desean atraer nuevas inversiones y desean una intervención preventiva antes de que la inversión esté en marcha.

La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva es otro valioso esfuerzo que existe en varios países, por ejemplo, en América Latina, en Perú, República Dominicana, Colombia y México. Al ser convocados por los gobiernos se logra la variedad adecuada de presencia de actores empresariales y de sociedad civil, lográndose un buen estándar de entrega de información. La ampliación de la misma para que no sólo se reduzca al tema financiero y económico en las empresas es una de los cambios que está en marcha.



Nivel Diálogo

La institucionalización en la gestión pública del diálogo se muestra en diferentes países. Un ejemplo es el Valor Minero en Chile. En Perú, la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial, la Secretaría de Diálogo y Gestión Social en la Presidencia del Consejo de Ministros, como también oficinas de diálogo y gestión de conflictos en la mayoría de los ministerios son otras modalidades de institucionalización de Diálogo.

Los diagnósticos han arrojado otras buenas prácticas de diálogo con la participación de entidades estatales como Mesa de Diálogo de Huari, Perú, Plan de Reasentamiento Participativo, México, Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda, Chile.

Es importante que los gobiernos participen y promuevan procesos de diálogo, asegurando una articulación entre los diferentes niveles del Estado y entre los Ministerios. El éxito del proceso de institucionalización de diálogo depende de esta articulación, como también de la participación de la sociedad civil. Las diferentes experiencias invitan a promover encuentros regionales entre los gobiernos para reflexionar sobre condiciones, metodologías y roles en los diálogos en el sector extractivo.



Nivel Consulta

La Consulta previa está regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el mismo que está firmado por todos los países que fueron incorporados al diagnóstico, menos República Dominicana. A la vez, los diagnósticos reportan procesos de consulta que se desarrollan bajo leyes nacionales, que no necesariamente tienen vínculo con el Convenio 169. Buenas prácticas de consulta son: en la República Dominicana, Planes de Desarrollo Municipales, Conformación de Agencia de Desarrollo en Chile, Mesa de Diálogo de Huari.

En estos procesos, el Estado tiene roles diferentes. Sería importante realizar encuentros regionales que traten estos procesos de Consulta y permitan relacionar estas experiencias con el Convenio 169. En estos espacios, las entidades estatales podrían revisar y redefinir sus roles en los procesos de Consulta.



Nivel Colaboración y Alianza

En los países, no existen normativas o instituciones estatales que regulan los niveles de colaboración y alianza, por lo que el Estado no tiene competencias definidas de relacionamiento con la sociedad civil en el sector extractivo.

No obstante, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constituyen un vínculo importante entre las prioridades de una población en un determinado territorio y la inversión que proporciona el sector extractivo. La sociedad ha participado en la construcción de los Planes, aunque no siempre se trata de una participación activa y representativa, y debe cumplir un rol de veeduría en el cumplimiento de los Planes.

Dos buenas prácticas identificadas en los diagnósticos hacen mención de la importancia de los Planes de Desarrollo. En el caso de la República Dominicana, la construcción y aprobación de Planes de Desarrollo locales estaban en el centro de una experiencia. También, la experiencia de la conformación de Agencia de Desarrollo en Argentina se basó en la elaboración de un Plan de Desarrollo. Los Planes de Vida de los pueblos indígenas también deben ser considerados como demuestra una práctica, aunque no validada, de Perú.

A nivel regional, se sugiere impulsar evaluaciones por parte de los gobiernos para conocer en qué medida las inversiones del sector extractivo contribuyen al cumplimiento de los Planes tanto a nivel nacional como local. Adicionalmente, los gobiernos nacionales deberían impulsar la construcción de capacidades para que los gobiernos locales tengan más herramientas para considerar el sector extractivo en el proceso de ordenamiento territorial.



SOCIEDAD CIVIL



Nivel Información

En el marco de la EITI, la sociedad civil juega un rol importante. Eso se pudo constatar en la buena práctica de la EITI, reportada en México . También, la Hoja de Ruta de la República Dominicana destaca el rol de la sociedad civil en torno al diálogo multi-actor que promueve la EITI. La Hoja de Ruta de Perú reitera a la EITI como práctica importante y recomienda una mayor difusión de las informaciones a nivel de la sociedad.

Otra iniciativa global para mejorar la transparencia en el sector extractivo es *Publique lo que Pagan*, que también canaliza informaciones a través de la EITI. La misión de esta organización con sede en Londres es conseguir un sector extractivo más transparente y responsable, que permita a las ciudadanas y los ciudadanos participar en la toma de decisiones sobre la extracción o no extracción de sus recursos, sobre cómo se extraen y cómo se gastan los ingresos procedentes de la extracción²⁷³. A la fecha de publicación de este informe, *Publique lo que Pagan*, aún no trabaja en América Latina.

El rol de la sociedad civil en demandar y contribuir a la generación de Información verídica, se observa en las buenas prácticas Monitoreo participativo de la calidad del agua en México , el Monitoreo Ambiental participativo en Orcopampa en Perú , y la Mesa de Diálogo de Huari Perú , en cuyo marco las organizaciones de sociedad civil recogen y solicitan Información sobre temas ambientales e informan de acciones en curso con la empresa, teniendo la oportunidad de socializarla con su comunidad o grupo de influencia.

EITI podría identificar y recoger las experiencias de estas y otras iniciativas locales, para mejorar la difusión de la Información a nivel local y apoyar su uso por parte de las comunidades. El Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDL), una plataforma regional de intercambio y trabajo colaborativo, lanzó en 2015 el Protocolo de Transparencia para las Industrias Extractivas en América Latina, para impulsar una mejor participación informada de la sociedad civil. El carácter multi-actor del GDL puede ser una ventaja comparativa para identificar y articular las diferentes iniciativas de transparencia que existen en la región.



Nivel Diálogo

En diferentes países de la región, existen procesos de diálogo multi-actor como son el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible o la Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales. Muchos de estos procesos fueron impulsados por organizaciones de la sociedad civil, y cuentan con la participación de academia, y en algunos casos de las comunidades.





Nivel Consulta

El diagnóstico mostró algunas pocas buenas prácticas²⁷⁴ en este nivel de relacionamiento y ninguna de ellas tiene relación directa con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Eso demuestra que se puede aprovechar la normativa nacional y local como marco para el desarrollo de la Consulta. De hecho, la Consulta popular en Colombia es una herramienta normativa importante para organizaciones que se resisten a proyectos extractivos.

Pero también de demuestra que la implementación del Convenio 169 aún tiene retos muy serios. A pesar del marco normativo extenso que regula la Consulta previa, libre e informada en Perú, los actores involucrados en el diagnóstico no reportaron buenas prácticas de la implementación de estas normas. Tampoco fueron identificadas en los otros países.

La sociedad civil y específicamente los movimientos indígenas, deberían seguir insistiendo en la implementación del Convenio 169 que corresponde a lo estipulado en el mismo y en el desarrollo de un marco normativo para su aplicación en los países en los que aún no existe. Las consultas populares o plebiscitos pueden dar insumos importantes para enriquecer el debate sobre el Convenio 169. En la medida de lo posible, la sociedad civil debería articularse con los tomadores de decisión en los sistemas políticos para tener el respaldo respectivo y debería buscar con organismos regionales un marco regulatorio regional de referencia.

El diagnóstico demostró como el diálogo multi-actor no solamente contribuye a la articulación entre diferentes sectores en un territorio, sino también logra articular los niveles local y nacional y es una condición importante para relacionar los diferentes actores alrededor del acceso a la información y para conformar alianzas y relaciones de colaboración.

Este rol articulador del diálogo se puede observar en algunas buenas prácticas como la Firma de Acuerdos de Servidumbre en Argentina o en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) en el sector hidrocarburífero de México, donde el diálogo multi-actor ayuda a establecer alianzas para la inversión de recursos de la empresa en proyectos productivos.

A pesar de un sinnúmero de experiencias muy valiosas de Diálogo a nivel local, nacional y regional, falta un estudio comparativo que pueda identificar factores de éxito y retos en los procesos de diálogo en el sector extractivo. La identificación de estos factores, independientemente del contexto en el cual se realizan los diálogos, sería un aporte regional importante y podría superar algunas dificultades que se presentan en estos procesos. Idealmente, tal estudio comparativo debería ser desarrollado por la academia en coordinación con organizaciones no gubernamentales con experiencia práctica en la facilitación de procesos colaborativos.



Niveles Colaboración y Alianza



Una de las pocas organizaciones con impacto regional que promueven activamente la Colaboración entre sociedad civil y empresas extractivas es la Iniciativa Devonshire (DI). La DI es un foro establecido en Canadá para que las principales ONG internacionales de desarrollo y las empresas mineras se reúnan en respuesta a la emergente agenda social en torno a la minería y el desarrollo comunitario²⁷⁵. La Iniciativa Devonshire cree que las ONG y los sectores mineros son más capaces de mejorar resultados de desarrollo en las comunidades en el que operan cuando colaboran el uno con el otro en vez de cuando ellos funcionan por separado.

Un documento publicado por DI plantea como una lección aprendida de proyectos de Alianza y Colaboración entre sociedad civil y empresas del sector extractivo la necesidad de iniciar el relacionamiento con la construcción de confianza y una comprensión mutua. Además, menciona factores de éxito como el establecimiento de un acuerdo formal, la inversión necesaria de tiempo y recursos, la importancia de relaciones personales, una óptima comunicación interna y compromisos frente a la comunicación externa y la evaluación continua de éxitos y retos²⁷⁶.

Las buenas prácticas identificadas en el diagnóstico confirman y complementan estos hallazgos. La transparencia entre las partes que conforman una Alianza, la complementariedad de los roles de la sociedad civil y empresa, la comunicación permanente y abierta, la necesidad de acuerdos de voluntades y de socios con legitimidad frente a las comunidades o el respeto a las formas de representatividad de las comunidades son algunos factores de éxito reportados en el diagnóstico.

Las organizaciones de la sociedad civil que tienen interés en formar alianzas o relaciones colaborativas con las empresas del sector extractivo, deberían realizar más esfuerzos para sistematizar estas prácticas y aprender de ellas. Las lecciones aprendidas podrían mitigar el riesgo que las alianzas y Colaboraciones no tengan el éxito esperado y que estas formas de relacionamiento pierdan legitimidad.



EMPRESA



Nivel Información

Los diagnósticos identificaron una serie de buenas prácticas para facilitar el acceso a la Información por parte de las comunidades. Una innovación reportada es que las empresas que trabajan en una misma área geográfica se asocien lo que mejora su capacidad para entregar Información verídica, oportuna y coherente. La Mesa de Buenos Vecinos de Chile da un ejemplo como una estrategia de común de acceso a la Información de varias empresas de manera conjunta fomenta procesos de diálogo y la construcción de alianzas.

Las Cámaras de Minería pueden jugar un rol esencial para fomentar este tipo de formas de asociación. A nivel regional, el Consejo Internacional de *Minería* y Metales (ICMM) como también las embajadas de países como Canadá o Australia podrían impulsar el acceso a la Información por parte de diferentes empresas que trabajan en una misma área.

Otras buenas prácticas en el nivel de relacionamiento de Información se refieren al monitoreo participativo de los recursos hídricos. Una de las características es que se capacitan a las comunidades para que estas puedan tomar las muestras y se asegura la trazabilidad desde la toma de la muestra hasta su análisis en el laboratorio. El monitoreo participativo no solamente genera informaciones sobre la calidad del agua sino también confianza para un relacionamiento a largo plazo y puede prevenir conflictos.

Recientemente, el NBSAP Forum²⁷⁷ y la plataforma GOXI²⁷⁸ con el apoyo de PNUD han realizado una serie de Webinars sobre el tema de monitoreo ambiental participativo en el sector extractivo²⁷⁹. Este tipo de difusión logra tener un público muy amplio y se recomienda a las empresas que puedan usar esta forma de comunicación que debería estar dirigida no solamente al sector privado, sino también a la sociedad civil y al Estado, para poder impulsar un Diálogo multi-actor en torno a este tema.



Nivel Diálogo

En el diagnóstico se han identificado una serie de prácticas que muestran capacidad y voluntad del sector extractivo para dialogar a nivel local. Las buenas prácticas de Diálogo fueron encontradas en todos los países del diagnóstico y tocaron temas como reasentamiento de comunidades indígenas en Colombia, el Diálogo sobre un Plan de Cierre en México, o cuestiones productivas y ambientales en Perú, República Dominicana, Argentina y Chile.

A nivel nacional, la empresa participa en procesos de Diálogo en el marco de EITI o en algunos grupos de Diálogo como el de Perú. La apertura de la industria extractiva hacia la sociedad civil permite a las empresas conocer otros puntos de vista y son oportunidades importantes para identificar posibilidades de mejora en el relacionamiento entre los diferentes actores.

En algunos países y a nivel regional, la apertura del sector extractivo aún es incipiente. Es importante consolidar el Diálogo con la sociedad civil sobre todo a nivel regional, para intercambiar experiencias y generar nuevas metodologías y herramientas para la implementación de procesos colaborativos. Una de las conclusiones del diagnóstico es que el Diálogo es transversal a relaciones de Alianza y Colaboración. En este sentido, un debate a nivel regional podría identificar sinergias para consolidar relaciones colaborativas entre sociedad civil e industria extractiva.



Nivel Consulta

En el diagnóstico se encontraron pocas buenas prácticas en el nivel de Consulta. Paralelamente, el debate sobre el Convenio 169 de la OIT que estipula la Consulta previa, libre e informada está estancado sobre la cuestión si es vinculante o no. Una iniciativa del sector privado para retomar el debate y mostrar voluntad para avanzar con su regulación a nivel nacional y quizás regional podría no solamente mejorar las prácticas de Consulta sino también mostrar la buena fe del empresariado para consultar a las comunidades sobre los proyectos extractivos en su fase temprana.



Niveles Colaboración y Alianza



Los diagnósticos muestran cambios en las políticas de las empresas extractivas frente al relacionamiento sociedad civil – Empresas. Los cambios no son lineales, homogéneos y ordenados son más bien procesos progresivos, desiguales y a veces reversibles.

Como muestra de los cambios, cabe mencionar que se ha transitado de contar con Gerencias de Relaciones Públicas que se encargaban de las relaciones con la comunidad en la década de los 80, a Gerencias o Áreas de Relaciones Externas con un fuerte componente del área legal que asumieron estas funciones a inicios de los 90. Más tarde en los 2000 se conformaron las Gerencias de Relaciones Comunitarias y a partir del 2012 se han empezado a conformar las Vicepresidencias de Gestión Social en donde se reúnen las funciones de relaciones comunitarias, medio ambiente y en algunos casos seguridad y relaciones institucionales. En resumen, al interior de las empresas la atención a las comunidades recibió progresivamente más poder, competencias y recursos.²⁸⁰

En cuanto la prioridad otorgada al agua en las empresas, se puede encontrar en sus operaciones la siguiente evolución: en los 2000 el presupuesto asignado al uso, manejo y disposición del recurso hídrico en un proyecto minero no excedía del 1 o 2% para luego en 10 años multiplicarse con porcentajes que llegan al 5 y 10% .²⁸¹

Las tendencias en la política y práctica de la Responsabilidad Social Empresarial abren oportunidades entre sociedad civil y empresas del sector extractivo para encontrar nuevas formas de Alianza y Colaboración para la mejora de la calidad de las comunidades. Las empresas deberían consolidar su trabajo con la sociedad civil, identificando claramente las ventajas comparativas de la sociedad civil frente a acciones unilaterales de la empresa. El proceso requiere la construcción de confianza por lo que se recomienda tener una visión de mediano y largo plazo para este tipo de relacionamiento.

Endnotes

1. La mayoría de los proyectos extractivos se encuentra en el área rural y las comunidades aledañas son los principales actores afectados con los que se buscan relacionar las empresas en primera instancia. Otros actores importantes son municipios pequeños con un alto índice de población rural. Proyectos cercanos a ciudades medianas o grandes, como en el caso de Arequipa, Perú, o en Chile, son menos frecuentes, ver por ejemplo: Valor Minero, 2017: Los desafíos para el desarrollo futuro de la minería en la zona central, Las Condes; Valor Minero, http://valorminero.cl/site/docs/2017/desafios_desarrollo_futuro_mifffferia_zona_central.pdf.
2. Cameron, Peter, y Michael Stanley, 2017: Oil, gas and mining – A sourcebook for understanding the extractive industry, Washington: The World Bank, p. 19.
3. Los criterios como también los detalles de la metodología empleada se encuentran en el anexo 1.
4. Ver marco metodológico conceptual (anexo 2). Para mayor información ver BID, 2018: Grupo BID – Sociedad Civil, <https://www.iadb.org/es/sociedad-civil/home>
5. Ver Milano, Flavia y Andrea Sanhueza, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para agencias ejecutoras pública y privadas, Washington: BID, <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>
6. A los fines de esta investigación son los recursos no renovables petróleo, gas y minerales metálicos, estatales en cualquier fase del ciclo de la extracción (prefactibilidad, factibilidad, exploración, explotación)
7. La página web de la ICMM es <http://www.icmm.com/en-gb>
8. Los miembros del ICCM se comprometen a cumplir con 10 principios para contribuir al desarrollo sostenible, ver: ICCM, 2015: Sustainable Development Framework: ICCM Principles, London: ICCM, http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/revise-2015_icmm-principles.pdf
9. La página web de la IOGP es <http://www.iogp.org>
10. Con este fin, IOGP ha formado diferentes comités, como por ejemplo el de ambiente, que pretende poder responder a las demandas de diferentes actores, ver: IOGP, 2018: Our committees, <https://www.iogp.org/our-committees/>.
11. Wilson, Emma, Sarah Best, Emma Blackmore y Saula Espanova, 2016: Meaningful Community Engagement in the Extractive Industries, London: International Institute for Environment and Development, <http://pubs.iied.org/pdfs/16047IIED.pdf>.
12. Por un lado, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos fueron lanzados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con empresas y algunas organizaciones no gubernamentales, en 2000, ver: Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 19 de diciembre del 2000, http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf. Son los únicos estándares de Derechos Humanos que están diseñados exclusivamente para el sector extractivo. Actualmente, se han adherido 30 empresas a los principios, ver: Voluntary Principles, 2018: For companies, <http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/>. Por otro lado, en 2011 las Naciones Unidas publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se aplican a los Estados y a todas las empresas transnacionales y de otro tipo, ver: Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2011: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos – Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar, remediar”, Nueva York / Ginebra: NNUU, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf.
13. Salmón, Elizabeth (coord.), 2016: La Progresiva Incorporación de las Empresas en la Lógica de los Derechos Humanos. Lima: Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDHPU), p.17-18.
14. Diferentes estudios constatan los retos de una mayor vinculación de la economía local con el sector extractivo en los países de América Latina. Ver por ejemplo: Rudas, Guillermo, 2014: Notas sobre la minería de carbón a gran escala en Colombia, en: FES (Friedrich Ebert Stiftung): La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales, Análisis 1/2014, p. 5-22. Albriue, Ramiro, 2012: La macroeconomía de los recursos naturales en América Latina, en: Albriue, Ramiro; Andrés López, y Guillermo Rozenwurcel (coord.) Los Recursos Naturales como Palanca del Desarrollo en América Del Sur: Ficción o Realidad? Montevideo: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, p. 105-147.
15. Ed O'Keefe, director de Synergy Global, en una entrevista realizada por Sarah Busque, el 10 de diciembre de 2013, en: Borealis, 2013: Claves para mejorar las prácticas en las relaciones comunitarias, <https://www.boreal-is.com/es/blog/mejorar-relaciones-comunitarias/>.
16. Wilson 2016, cit. arriba.
17. Ibid.
18. ICCM, 2012: Mining´s contribution to sustainable development, InBrief, Junio 2012). Ver también: López-Morales, José Satsumi, y otros, 2017: Strategies of social responsibility in Latin America: a content analysis in the extractive industry, en: Ad-Minister (Universidad Eafit), No. 31 julio a diciembre 2017, pp 115-135.
19. Oxfam Internacional y Social Capital Group (SCP), 2007: Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú.
20. Es importante diferenciar el gobierno nacional como poder ejecutivo de otros actores estatales como el poder judicial o el poder legislativo. El análisis a continuación se refiere al poder ejecutivo exceptuando cuando sea señalado de otra manera.
21. Ver Penfold, Michael y José Luis Curbelo, 2013: Hacia una nueva agenda en inversión extranjera directa. Tendencias y realidades en América Latina, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 10 / 2013. Corporación Andina de Fomento (CAF).
22. Medina, Leandro, 2010: Efectos dinámicos de los precios de las materias primas en las posiciones fiscales de América Latina, CAF Working Papers No 2010/02.
23. Marczak, Jason y Peter Engelke, 2016: América Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros, Washington: BID, p. 21.
24. Datos de los diagnósticos de este estudio. Estas cifras no incluyen el empleo indirecto.
25. Monge, Carlos, 2017: Minería y marco institucionales en la región andina, Lima: NRGi / GIZ, p. 3-14.
26. Marczak 2016, cit. arr., p. 21
27. El único país de este estudio que no ha ratificado el convenio 169 es la República Dominicana.
28. En Argentina, no existe norma legal que regula el convenio. En México, la reforma constitucional de 2011 incorporó el Convenio 169 de la OIT a la constitución que está regulado mediante un protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), publicado mediante decreto, ver: Castillo Lara, Clara, 2017: La constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en: Alegatos, No. 97, p. 575.

29. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
30. En Chile, hay un Ministerio de Minas y otro de Energía.
31. CONADI, 2018: <http://www.conadi.gob.cl/>
32. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
33. Salinas Alvarado, Carlos Eduardo, 2011: La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales en Colombia, consultado en: <https://revistas.ueh.ueh.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055>.
34. Wilson, Emma, 2016, cit. arriba.
35. Ibid.
36. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
37. De hecho, "en muchos países de América Latina las consultas populares sobre minería se han convertido en un conflicto entre gobiernos nacionales, por un lado, y gobiernos locales y actores sociales", ver: Dietz, Kristina, 2017: Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa, en: Colombia Internacional (93), 93-117, p. 96.
38. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), 2014: Pactos Igualdad – Hacia un futuro sostenible, p. 294 - 298.
39. Sanborn, A. Cynthia, y Juan Luis Dammert, 2013: Extracción de recursos naturales, desarrollo económico e inclusión social: Perú, Americas Quarterly, p. 26. Perry, Guillermo y Mauricio Olivera, 2009: El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia, CAF, documentos de trabajo 2009/06.
40. Mayores ingresos para los gobiernos locales no necesariamente se traducen en una mejora de la calidad de vida. Ver por ejemplo: Paredes Gonzales, Maritza Victoria, 2016: Los efectos del boom de las industrias extractivas en los indicadores sociales – países andinos, Natural Resource Governance Institute. Ministerio de Minería, Comisión Chilena de Cobre, 2013: Minería en Chile: impacto en regiones y desafíos para su desarrollo; Chile.
41. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
42. IIED, y otros (International Institute for Environment and Development, Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, World Business Council for Sustainable Development), 2002: Abriendo brecha: minería, minerales y desarrollo sustentable, IIED, p.224.
43. Respecto a las diversas necesidades de formación, ver por ejemplo: CEPAL / UNCTAD, 2003: Guía para la gestión de las autoridades locales de pueblos y distritos mineros de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, consultado en: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/13966/lcr2114e.pdf>.
44. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
45. IIED, y otros, 2002, cit. arriba, p. 204.
46. Astorga, Eduardo, Francisco Carrillo, Mauricio Folchi, Magdalena García, Bernardo Grez, Bernardita McPhee, Claudia Sepúlveda, y Hans Stein, 2017: Resumen ejecutivo informe final proyecto: evaluación de los conflictos socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el período 1998 – 2015, Santiago de Chile: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), p. 12-13.
47. Watkins, Graham, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, María Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, Andreas Georgoulas, 2017: Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, Washington: BID, p.20-1.
48. Davis, Rachel y Daniel Franks, 2014: Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector, Harvard: Harvard Kennedy School.
49. Ibid., p. 21.
50. Wilson, Alana y Miguel Cervantes, 2013: Survey of Mining Companies 2013: Vancouver: Fraser Institute.
51. Watkins et al 2017, cit arriba, p.5
52. Saade, Hazin, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú, Santiago de Chile CEPAL.
53. Franks et al. 2014, cit. arriba, p. 7576
54. Ibid
55. CEPAL: Argentina: Perfil Nacional Económico, http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish.
56. Elaborado sobre la base de datos del INDEC: https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=39, según categoría: Minas y Canteras.
57. Ley N° 23.548 – Coparticipación Federal de Impuestos Período 2017 (1): <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/esquemas/ley23548.pdf>.
58. 4 Cabe destacar que el sector de hidrocarburos tiene una mayor preponderancia en la cantidad de puestos de trabajo registrados con un 66,6% de los empleos registrados en 2016, en comparación con los 33,4% de los empleados de la industria minera metalífera para el mismo año. Elaborada sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_empleo.asp
59. Jueguen, Francisco, 2017: El desempleo terminó 2016 en 7,6%, según el Indec, en La Nación, 16 de marzo de 2017, <https://www.lanacion.com.ar/1994231-el-desempleo-termino-2016-en-torno-al-76-segun-el-indec>. Según este artículo, la PEA fue de 18 millones de personas en 2016.
60. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, www.noalamina.org.
61. Fundación Cambio Democrático, 2017: Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Capital Federal, <http://cambiodemocratico.org/2017/02/07/plataforma-argentina-dialogo-para-uso-sustentable-recursos-naturales/>.
62. El Atlas de Justicia Ambiental es liderado por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su propósito es recolectar historias de comunidades que luchan por la justicia ambiental en todo el mundo. Los datos son enviados desde los diferentes países por academia, ciudadanos preocupados, comités informales y organizaciones no gubernamentales. Un equipo de edición verifica los datos. Es importante mencionar que el tipo y el número de los conflictos registrados depende de la perspectiva de los actores que envían los datos por lo que no se trata de un dato objetivo. En este documento, se emplean los datos del atlas cuando no existe una cifra más confiable en el país, como es el caso de Argentina. Para mayor detalle de la metodología del Atlas, ver: Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. Journal of Political Ecology 22: 255-278. El link de acceso al Atlas de Justicia Ambiental es: <https://ejatlas.org/>.

63. CIPPEC, Fundación Vida Silvestre, y Consejo Empresarial Mendocino, 2015: Minería responsable para el crecimiento con equidad. El caso de Mendoza, <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1052.pdf>.
64. Chubut (Ley 5001, 2003), Tucumán (Ley 7879, 2007), Mendoza (Ley 7.722, 2007), La Pampa (Ley 2349, 2007), Córdoba (Ley 9526, 2008), San Luis (Ley 634, 2008), Tierra del Fuego (Ley 853, 2012)
65. Conflicto Famatina: desde 2004, se realizan en Famatina, provincia de La Rioja, acampes, marchas y cortes de ruta para impedir el paso a la mina a funcionarios del Gobierno y representantes de las empresas. Así la población ha logrado impedir los proyectos de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y, el de la salteña Midais tras la pancarta de "El Famatina no se toca" Conflicto Esquel: en julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto ubicado a diez kilómetros de esta ciudad. Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal y en noviembre nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Luego de varias marchas, el Concejo Deliberante aprobó una consulta popular. El 23 de marzo de 2003 el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación del yacimiento de oro y plata. Si bien la consulta no era vinculante los resultados hicieron que se suspendiera la ejecución del proyecto.
66. Velarde Ponce de León, Claudia, 2018: Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina, <https://aida-americas.org/es/blog/defendiendo-comunidades-del-avance-del-fracking-en-argentina>.
67. Se han identificado una serie de otras prácticas que no han podido ser validadas en el marco de este estudio. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.
68. La investigación de campo concluyó en 2017, por lo que se puede asegurar la duración de la buena práctica solo hasta este año, lo que no excluye la posibilidad de que sea vigente en el futuro. Esta observación es válida para todas las buenas prácticas.
69. Este espacio es accesible a la comunidad y ésta ha planteado dentro del mismo problemáticas a las cuales se les ha buscado soluciones (falta de leña - donación, falta de capacitación minera - aula móvil, falta de comunicación - wifi libre para toda la comunidad)
70. La innovación se refiere a prácticas que fueron novedosas al momento de su validación en el país respectivo.
71. Cada buena práctica fue evaluada según las dimensiones participación, pertinencia y sostenibilidad en base a indicadores diseñados anteriormente. Para mayor información referirse al marco conceptual y metodológico, 4.3. (anexo 2).
72. Todas las buenas prácticas que incluyen el diagnóstico fueron analizados según la consideración de los siguientes enfoques: enfoque participativo, enfoque de regulación de derechos y obligaciones; enfoque de desarrollo sostenible; enfoque de diversidad; enfoque de igualdad de género; enfoque de transformación de conflictos. Las definiciones se pueden revisar en el marco conceptual (anexo 2). Si los enfoques no son mencionados en el análisis de la buena práctica, significa que no se han encontrado elementos que indican su inclusión en la implementación de la buena práctica.
73. Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration - an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario, p. 194.
74. Ibid.
75. Información suministrada por PAE.
76. Cámara Argentina de Empresarios Mineros: HMS, <http://www.caem.com.ar/hms/>.
77. Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse a provincia de La Rioja con su conflicto en Famatina antes mencionado y la postura del gobernador de la provincia. DyN, 2011, Beder Herrera les pidió a los ambientalistas que se "dejen de joder" con la minería, Clarín Noticias, 31/05/2011, https://www.clarin.com/medio_ambiente/Beder-Herrera-ambientalistas-joder-mineria_O_Skl-TiWawXx.html.
78. Una organización importante es Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). FARN ha realizado diferentes estudios, entre otros sobre la explotación de Litio. Respecto a las actividades extractivas sostienen: Los efectos sociales y ambientales de este tipo de actividades son demoledores: destrucción ecológica, pérdida de bosques naturales, deterioro del suelo, contaminación por agroquímicos, desplazamiento de comunidades locales, nula generación de empleo de calidad e incluso violación de derechos, entre otros. Desde FARN afirmamos que no existen políticas extractivas que sean amigables con la sociedad, ni con el ambiente (<https://farn.org.ar/actividades-extractivas>).
79. Un ejemplo es la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, un movimiento vecinal que surgió en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut y se extendió a otras localidades del país. Según su página WEB, ya se encuentran en 15 lugares del país. No posee una organización formal con cargos y funciones. Sus acciones y su presencia como grupo opositor a la minería son muy fuertes en Argentina. Para mayor información, véase: Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, cit. arr.
80. Universidad Nacional de San Martín, <http://www.unsam.edu.ar>
81. Puede mencionarse como ejemplo, las Universidades de San Martín y Tres de Febrero que realizaron durante varios años capacitaciones a los docentes de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la mina Bajo La Alumbrera
82. Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación, 2015: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Tierras y registro nacional de comunidades indígenas, <https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/6-INAI-Tierras-y-registro-nacional-de-comunidades-indigenas.pdf>
83. Por ejemplo, referente a las instancias de participación en el marco del Informe de Impacto Ambiental. Ejemplos son: Ley N° 123 de Evaluación del Impacto Ambiental de Buenos Aires, última modificación publicada el 18/05/2012. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, provincia de Santa Cruz, publicada el 21/08/2003. Ley 10.208. Política Ambiental Provincial (Córdoba), publicada el 27/06/2014.
84. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016: Informe del estado de ambiente 2016, Buenos Aires. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds_informe_estado_ambiente_2016_baja_1_0.pdf.
85. Covo, María Julia, 2013: Derecho de minería y energía - El principio de congruencia de la ley general del ambiente en el Derecho Minero, en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 10, no. 43, p. 151-160; p. 153
86. La producción de petróleo y gas es marginal en Chile y la autora no encontró cifras macroeconómicas que incluyan el petróleo. La producción petrolera se concentra en ENAP, una empresa del Estado, cuyo objeto es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Para la producción de Gas Natural existen 10 empresas agrupadas en un gremio. El reporte de sustentabilidad de ENAP señala que la producción de petróleo en Chile, (Región de Magallanes) alcanzó 987 millones de barriles para 2016; en tanto, la producción de gas natural en Chile (Magallanes), alcanzó a 1.004 millones de metros cúbicos estándar (5.909.500 barriles equivalentes). Las exportaciones de ENAP llegaron a 0,42 millones de metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo que equivale al 3,8% de la producción total de sus refinerías.

87. Consejo Minero, 2018: Cifras actualizadas de la minería, <http://dev.consejominero.cl/wp-content/uploads/2018/03/Cifras-actualizadas-de-la-miner%C3%ADa-Marzo-2018.pdf>.
88. Comisión Nacional de Productividad 2016: Productividad de la Gran Minería el Cobre, <http://www.comisiondeproductividad.cl/productividad-de-la-gran-mineria-del-cobre/>
89. Consejo Minero, 2018, cit. arr.
90. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
91. Consultado en: Sociedad Nacional de Minería, El nivel de empleo en la minería es el más bajo de los últimos siete años, <http://www.sonami.cl/site/noticias/el-nivel-de-empleo-en-la-mineria-es-el-mas-bajo-de-los-ultimos-siete-anos/>.
92. Comisión Chilena del Cobre, 2017: Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Metales 1997-2016, Santiago de Chile, <https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/17/Anuario-%20avance7-10-7-17.pdf>.
93. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
94. -Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015: Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, Santiago de Chile, <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5>.
95. Comisión Minería y Desarrollo de Chile Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014: Minería. Una Plataforma de futuro para Chile, http://valorminero.cl/site/docs/2017/mineria-una-plataforma_futuro_para_chile.pdf.
96. Hallazgos Mesa de Trabajo Industrias extractivas realizada el 18 de agosto 2017 en Santiago de Chile para este estudio.
97. Alianza Valor Minero, Seminario Valor Minero Inversión y Diálogo para el Desarrollo, http://valorminero.cl/site/docs/2017/informe_seminario_inversion_dialogo_desarrollo.pdf.
98. Informe Sistematización Caracterización Socio-Ambiental Proyecto Acuerdo Territorial Para El Desarrollo - Localidad De Sierra Gorda. Agencia de Cambio Climático- Alianza Valor Minero septiembre 2017.
99. Ibid.
100. No se cuenta con información de los montos de inversión social de las empresas en Sierra Gorda.
101. Alianza Valor Minero es una institución público-privada que reúne a múltiples actores con el objetivo de generar las condiciones para transformar a la minería chilena en una plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y sostenible, Valor Minero, <http://www.valorminero.cl/valor-minero/>
102. Chile Transparente, Transparencia Caimanes, Santiago de Chile, <http://www.chiletransparente.cl/project/transparencia-caimanes/>.
103. Nueva Unión, 2017: Corproa elige a Nueva Unión como "Empresa Destacada del Año", <http://www.nuevaunion.cl/noticias/2017/corproa-elige-a-nuevaunion-como-empresa-destacada-del-ano>.
104. Ibid.
105. Política de Pueblos Indígenas Nueva Unión. Consultada en : Nueva Unión, Sustentabilidad, <http://www.nuevaunion.cl/sustentabilidad>.
106. Desarrollo Futuro de la minería en la zona Central. Diagnóstico y recomendaciones para la sostenibilidad. Alianza Valor Minero. Noviembre 2017
107. Otras iniciativas entre diferentes sectores son Consejo Nacional de la Innovación para el Desarrollo, Consejo Consultivo para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Grupo de Exploraciones Sustentables, Grupo de Trabajo Agenda 2030, Mesa de trabajo Mujer, Minería y buenas prácticas del ministerio de Minería.
108. Alianza Valor Minero, cit. arr.
109. Alianza Valor Minero, cit. arr.
110. Ministerio de Minería, Misión Institucional, <http://www.minmineria.gob.cl/mision-institucional/>.
111. Mapa de las organizaciones de la sociedad Civil 2015. Centro de Políticas Públicas Universidad Católica (2016).
112. Villalobos, Fernanda, 2017: Ambientalistas y rechazo a Dominga: Quiénes gobiernan "están tomando las decisiones correctas", Santiago de Chile, <http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html>.
113. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas , <http://www.conadi.gob.cl/registro-de-comunidades-y-asociaciones-indigenas>.
114. Portal Minero, 2014: Corte rechaza recursos contra proyecto minero El Morro, <http://www.portalminero.com/display/NOT/2014/04/29/Corte+rechaza+recursos+contra+proyecto+minero+El+Morro?showComments=true&showCommentArea=true>.
115. OIT (2014) Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. Matías Abogabir. ES ESTO UNA FUENTE DE LIBRO O DE PÁGINA WEB? POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS DATOS SEGÚN EL FORMATO ENVIADO.
116. Delamaza, Gonzalo, 2011: Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Revista de la Universidad Bolivariana, volumen 10, N°30, 2011, pp. 45-75.
117. Ministerio de Desarrollo Social, 2013: Decreto Supremo N° 66 .
118. OIT (2014) Matías Abogabir. Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión.
119. DANE, 2016: Atlas Estadístico de Colombia, Bogotá, <http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/>.
120. Incluye carbón, níquel y petróleo y sus derivados de las exportaciones tradicionales del país para el 2016. Ibid.
121. No existe información oficial para establecer una repartición de ingresos a nivel nacional o central.
122. De acuerdo con las cifras del DANE, para 2016 el total de la población ocupada es de 22,8 millones. La definición de la población ocupada incluye personas en una de las siguientes situaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
123. Observatorio de las industrias extractivas en Colombia, 2015: El sector extractivo en Colombia 2014, Bogotá: Foro Nacional por Colombia, y otros, http://media.wix.com/ugd/ef61f6_3c07a995db4a4f5b98b151e3a370e1c0.pdf.
124. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr
125. Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 2017: Tendencias de la Conflictividad Socioambiental en América Latina y Propuestas para su Abordaje, Quito, https://www.ffla.net/publicaciones/doc_details/320-tendencias-de-la-conflictividad-socioambiental-en-am%C3%A9rica-latina-y-propuestas-para-su-abordaje.html.
126. Fundación Foro Nacional por Colombia, 2017: La agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en Colombia, Bogotá: Foro Nacional por Colombia y Natural Resource Governance Institute, <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/reporte-colombia.pdf>.

127. La Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (“PND”) clasifica los tipos de minería en minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería.
128. Fundación Avina y Gestión Ambiental Estratégica, 2012. Elementos diagnósticos para una caracterización de la minería en Colombia. Bogotá, Colombia. Mesa de Diálogo permanente de Minería en Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?
129. Ley 34 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
130. Morales, Lorenzo, 2017. La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible, Bogotá: Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes, http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp_web-res_final-for-email.pdf
131. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Bogotá, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>.
132. Morales 2017, cit arr.
133. Jiménez, Carlos Mario, 2017: En 6.3 % aumentó producción de carbón en el Cesar, <http://elpilon.com.co/en-6-3-aumento-produccion-de-carbon-en-el-cesar/>.
134. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar es la autoridad encargada por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.
135. Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
136. Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica. Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013, Bogotá Colombia. En bibliografía consta el link: Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Disponible en: <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/> - NO SE PUEDE ACCEDER A ESTA PÁGINA - FORBIDDEN
137. <?> Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. Bogotá, Colombia. En bibliografía consta el link: Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/> - NO SE PUEDE ACCEDER A ESTA PÁGINA - FORBIDDEN
138. <?> Ministerio de Minas y Energía: Relacionamento Territorial, <https://www.minminas.gov.co/relacionamiento-territorial>.
139. <?> La Resolución 0322 de 2015 adopta el manual específico de funciones y competencias del Ministerio del Interior.
140. <?> La Ley 1444 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como organismo técnico con autonomía administrativa y financiera -sin personería jurídica- para el estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. La ANLA debe asegurar que los proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento cumplan con la normativa ambiental (Decreto 3573 de 2011).
141. <?> Departamento Nacional de Planeación, 2016: Evaluación de operaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que mida la capacidad con la que cuentan para lograr sus objetivos y proponer acciones de mejora para el fortalecimiento integral de las mismas y el mejoramiento de la gestión ambiental en el país, Bogotá, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAR_Producto_4_Informe_Resultados_v20161128.pdf
142. <?> Ministerio de Ambiente, 2013: Decreto 2613 de 2013 por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa, http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2013/dec_2613_2013.pdf.
143. <?> Lloreda Francisco, presidente ACP. Septiembre 2017. III Congreso de la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo ACP. Bogotá, Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
144. La fuente de todas las cifras de 2016 es: PEMEX, 2016: Anuario Estadístico 2016, México, pp. 5-6 y 15-16, <http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico-2016.pdf>. La fuente del valor de 2010 es: González, Ixel, 2015: Petróleo aporta menos al crecimiento del PIB en 2014, México, <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleo-aporta-menos-al-del-pib-en-2014.html>.
145. Los datos nacionales estadísticos no desglosan por industria de hidrocarburos.
146. Centro Mexicano para la Filantropía, 2017: Número de organizaciones en cada estado por figura legal, <http://200.57.117.52/Directorio2/Estadisticas/frmoOrganizacionesFiguraLegal.aspx>.
147. El amparo en un amplio sentido se revela como un conjunto de actos procesales o procesos que culminan en resolución judicial o sentencia, que constituye su causa final común, y en un sentido estricto, como un derecho, como una potestad que tiene la persona para hacer que se repare en su favor cualquier violación a sus garantías individuales. La Constitución mexicana de 1917 establece como órgano de control constitucional al Poder Judicial Federal, facultándolo para modificar los actos de autoridades o leyes violatorias de garantías individuales, y dispone que a través del amparo pueden impugnarse actos o leyes de cualquiera de los tres Poderes, creando así el juicio de amparo en contra, también, de resoluciones judiciales. Consultado en: Ensayos Universitarios GMORR, 2009: Juicio de amparo en México, <https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/>
148. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
149. Enciso, Angélica, 2016: Hay en México 420 conflictos socioambientales: Investigador, <http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038nlsoc>.
150. David Shields, analista, periodista y consultor de la industria energética. Director General del proyecto Energía a Debate; y Jorge Arriaga, PhD en Desarrollo Regional por la Universidad de la Sorbona en París; fue Subgerente de Atención a Organizaciones Sociales en PEMEX y actualmente es consultor para la industria energética.

151. "En primer lugar, la ASF (Auditoría Superior de la Federación – SC) señala que existen vacíos normativos, toda vez que los Lineamientos en materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos no establecen líneas claras sobre el seguimiento de la aplicación de los recursos y bienes. Lo anterior deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios", en: De la Fuente López, Aroa, 2017: Donativos y Donaciones de PEMEX: Deficiencias e Irregularidades, México, pp.2-3, <http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ASF-Donativosydonaciones.pdf>.
152. Morris, Stephen, 1992: Corrupción y Política en el México Contemporáneo, México, pp. 76-79, https://books.google.com.mx/books?id=H1_dodEHuloC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=paternalismo+en+mexico+pemex&source=bl&ots=Vrtsu6fuc0&sig=_oDNsdtRnbjJW16XNi7jQB9VFM&hl=es&sa=X&ved=0OahUKEwjTqMkt5_rYAhWQ7VMKHdwICYQ6AEIZDAJ#v=onepage&q=paternalismo%20en%20mexico%20pemex&f=false.
153. Diario Oficial de la Federación, 2014: Ley de Hidrocarburos, México, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014.
154. Entrevistas con académicos y académicas expertos en energía.
155. Entrevistas con actores sociales en el marco de este diagnóstico.
156. Secretaría de Energía, 2016: 4º Informe de Labores de la Secretaría de Energía 2015-2016, México, pp. 69, http://transparencia.energia.gob.mx/rendicion_cuentas/archivos/SENER-4oInformeLabores.pdf.
157. A noviembre del 2017, el gasoducto aún tenía parada la operación en el tramo Guaymas- El Oro. Consultado en: Zúñiga, Norma, 2017: Pide CFE liberar ducto Guaymas-El Oro, México, <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1262784&md5=0164b194d21007299490c50495577918&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>.
158. Resolutivo de la consulta previa, libre e informada del gasoducto Sonora. Consultado en: Gob.mx, 2015: Resolutivo de la CPLI a la Tribu Yaqui, México, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo_de_la_CPLI_a_la_Tribu_Yaqui.pdf.
159. Comentarios al diagnóstico del Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía.
160. Tribunales federales ordenaron a los tres órganos de gobierno frenar el gasoducto. Consultado en: Escobar, Amalia, 2017: Tribunal ordena a secretarías frenar obras de gasoducto, México, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/27/tribunal-ordena-secretarias-frenar-obras-de-gasoducto>.
161. Las entrevistas, con los diferentes actores en cada proyecto y con funcionarios de organizaciones de la sociedad civil permiten realizar esta aseveración, que de ninguna manera pretende ser generalizada.
162. Es decir, las formas históricas clientelares han tenido que cambiar por formas basadas en acuerdos internacionales para llevar a cabo la consulta indígena, por ejemplo, en donde la información previa y la consulta son un principio que se debe respetar.
163. Empresa filial de PEMEX que financia el proyecto.
164. El Plan de Gestión Social se incluye en los lineamientos que establece la Secretaría de Energía (SENER) para la evaluación de impacto social contemplada en la Ley de Hidrocarburos. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016: Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético, www.cofemersimir.gob.mx/expediente/14565/mir/34590/archivo/948300.
165. En los lineamientos de la Evaluación de Impacto Social (Evis), uno de los requisitos es que la empresa debe presentar su Plan de Gestión Social dentro de la Evis.
166. Informe de labores de la Secretaría de Energía, Marco Legal y Participación en EITI y otros espacios regionales y bilaterales. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016, cit. arr., p. 5 y p. 160.
167. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf.
- 168.
169. Se retoma esta ley en el reporte, ya que el gas natural es un insumo que va en crecimiento para la generación de energía eléctrica. Las atribuciones son claras para el momento de la extracción y transporte del gas y cada instancia reguladora.
170. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018, México, <https://www.gob.mx/sgm>. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018: Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), México, <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/>.
171. Estas cifras no incluyen información de las empresas prestadoras de servicios y tampoco incorpora información de la minería artesanal y de pequeña escala.
172. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 2017: Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, México, <https://www.gob.mx/sedatu>.
173. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018: Informe Anual 2018, México.
174. Saade Myriam, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los Casos de Colombia, México y el Perú, Santiago de Chile, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5369/LCL3706_es.pdf;jsessionid=C8F9D8F34833870162349695B7F0FE7F?sequence=1.
175. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
176. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2013: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2017: Informe Anual 2017, México.
177. CCC forma parte de una red de organizaciones denominada Partners.
178. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.
179. Secretaría de Economía (SE), 2016: Manual de Inversionistas en el Sector Minero Mexicano, México, <https://www.gob.mx/se/documentos/manual-del-inversionista-en-el-sector-minero-mexicano?state=published>.
180. Poder Judicial Federal, 2016: Tesis 2a.XXVIII/2016(10a), número de registro 2011955 Materia Constitucional, p. 1211, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio 2016, Tomo II.
181. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2016, México, <https://www.gob.mx/sgm>.
182. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.

183. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 1990: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, México, <http://www.contactopyme.gob.mx/mercados/info/secofi.html>. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
184. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
185. Los pasivos ambientales fueron el resultado de las operaciones de otras empresas entre las que se encuentran ASARCO, la cual posteriormente vendió sus concesiones a Grupo México. Durante la operación de estas empresas, México carecía de regulación ambiental, por lo que la remediación de los pasivos ambientales no era una exigencia para las empresas.
186. Un total de 490.000 m³ de suelo vegetal recuperado y almacenado para acciones de restauración.
187. Este proyecto tendrá un costo de más de 2 millones de dólares, ya que se requiere retirar y encapsular los contaminantes que fueron depositados por las otras empresas como parte del proceso de remediación. Es relevante destacar que New Gold, como estrategia para garantizar y cumplir con los compromisos definidos como parte de su plan participativo de cierre ambiental, cuenta con una fianza pagada ante la tesorería de la Federación por casi 30 millones de dólares que respalda el 100% del cierre biofísico y socioeconómico. De manera que el "Patio Paseo Victoria" es hoy en día una de las obras de recuperación de espacios urbanos más importantes en la entidad, así como un ejemplo palpable del legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las generaciones actuales y venideras en este municipio.
188. Los "Pueblos Mágicos" es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en México desde el año 2001, para promover la oferta turística en el país, en sitios en donde sus habitantes y gobiernos locales han logrado proteger su riqueza cultural, por lo que son reconocidos como sitios que tienen grandes atributos históricos-culturales. En estos lugares se promocionan las artesanías, festividades, gastronomía del lugar, así como productos turísticos basados en la aventura, senderismo o ecoturismo.
189. New Gold Minería San Xavier S.A de C.V Cerro de San Pedro, 2015: Reporte de Sustentabilidad 2015, México, http://s1.q4cdn.com/240714812/files/documents_sustainability/Reporte-de-Sustentabilidad-2015-MSX.pdf.
190. Incluye Sonora (Nacozari, Esqueda, Guaymas y Cananea); Coahuila (Nueva Rosita); San Luis Potosí (Charcas y San Luis Potosí); Chihuahua (Santa Bárbara y Santa Eulalia); Michoacán (Angangueo); Zacatecas (Sombrerete); Guerrero (Taxco); Guanajuato (León); Oaxaca (Juchitán); Campeche (Ciudad del Carmen), y Baja California Sur (Guerrero Negro).
191. *Industria*: los representantes del sector industrial incluyen a Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Estas organizaciones agrupan a las principales empresas del sector de hidrocarburos en México y a las empresas mineras que generan aproximadamente 90% de la producción minera del país. Sociedad civil: los representantes de la sociedad civil fueron elegidas por un grupo de aproximadamente 40 OSC, que fueron invitadas e informadas en talleres nacionales y regionales sobre la intención del gobierno de adherirse a este estándar por un grupo impulsor conformado por Transparencia Mexicana, FUNDAR y PODER. Se eligió un grupo de representantes y suplentes que está conformado por: PODER, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSTA), Transparencia Mexicana (TM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. En la actualidad, ALCOSTA no forma parte de este grupo de representantes y suplentes. El gobierno conformó un Grupo Intersecretarial (GI) integrado por medio de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) (por medio de la Subsecretaría de Minería) y la Subsecretaría de Hidrocarburos (SENER). Actualmente, la responsabilidad de presidir el GI está a cargo de la Subsecretaría de Minería.
192. USAID, Banco Mundial, Natural Resource Governance Institute, GIZ, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada Británica.
193. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2016: Informe Anual 2016, México. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
194. Secretaría de Economía (SE), 2016, cit. arr.
195. (1) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (Nuevo León), (2) Universidad Veracruzana (Veracruz), (3) Universidad Autónoma de Coahuila (Coahuila), (4) Universidad de Colima (Colima), (5) Universidad de Guanajuato (Guanajuato), (6) Universidad Autónoma del Estado de México (México), (7) Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), (8) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Chiapas), (9) Universidad de Sonora (Sonora), (9) Universidad Autónoma de Puebla (Puebla), (10) Universidad Estatal de Sonora (Sonora), (11) Universidad Politécnica Juventino Rosas (Guanajuato), (12) Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (Hidalgo), (13) Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Zacatecas), (14) Instituto Tecnológico de Chihuahua (Chihuahua), (15) Instituto Tecnológico de Morelia (Morelia), y (16) Instituto Tecnológico de Querétaro (Querétaro).
196. Unversia México, 2016: Licenciaturas en Ingeniería en Minas, <http://www.universia.net.mx/estudios/ugto/licenciatura-ingenieria-minas/st/152715>.
197. Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Transparencia Mexicana (TM), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSA), los Socios México/Centro de Colaboración Cívica (CCC), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, CartoCrítica, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Amigos del Río San Rodrigo, Oxfam, The Nature Conservancy, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Fundación Heinrich Böll, Fundación Desarrollo Sustentable A.C., el Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) y el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (CIIDES).
198. Saade Myriam, 2013, cit. arr.
Temper Leah, del Bene Daniela y Joan Martínez-Alier, 2015, cit. arr.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 2018, cit. arr.
Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014, cit. arr.
Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
199. Díaz, Luis y Morones Guadalupe, 2001: Inversión extranjera; derecho mexicano y derecho internacional, Edición 01, México: Themis.
200. Poder Judicial Federal, 2016, cit. arr.
201. Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2017: Anuario Minero 2016, Lima, <https://es.scribd.com/document/351009672/ANUARIO-MINERO-2016-pdf>.

202. EY, 2018: Informe Final Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 2015 y 2016. Consultoría para la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú, Lima, http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI_INT_2015_2016%20EITI_%20PERU.pdf.
203. Ministerio de Energía y Minas, 2017: Anuario Minero 2016, Lima, p. 118.
204. Lamentablemente no existen cifras accesibles para el sector hidrocarburos.
205. Defensoría del Pueblo, 2018: La Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos sociales a diciembre de 2017, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=19531>.
Defensoría del Pueblo, 2017: Reporte de Conflictos Sociales N.º 166, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-166---Diciembre-2017.pdf>.
206. Lanegra Iván, 2016: ¿Qué está en juego con la elección del Defensor del Pueblo?, Lima, <http://ojo-publico.com/294/que-esta-en-juego-con-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo>.
207. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
208. Glave Manuel y Kuramoto Juana, 2007: La minería peruana: Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber, Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Grade, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, pp. 135-181.
209. Baca Epifanio, 2015: Estudio sobre Marco Normativo Minero en Perú Lima, <http://propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Estudio%20Baca.pdf>.
210. Participaron el Gobierno regional y Municipalidad Provincial de Arequipa, diez municipalidades distritales, la asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores, el COFREN, el FREDICON, CONREDE, Comité de Gestión Ambiental de Uchumayo.
211. ONU Mujeres, La mujer y el medio ambiente, <http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment>.
212. Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, Por una Minería con Responsabilidad Social y Ambiental en el Perú Un acuerdo fruto del diálogo y las lecciones aprendidas, <http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2015/03/Visión-Minería-2021.pdf>.
213. Cooperación, 2017: Actualidad Minera del Perú, No. 222, <http://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/AMP-diciembre-2017.pdf>.
214. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de los Conflictos y la Gobernabilidad, 2017: Competencias en la atención de conflictos sociales, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=6>.
215. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 2018: Poder Ejecutivo presenta Proyecto de Ley que pretende modificar Ley Orgánica de Hidrocarburos favoreciendo al sector privado y en detrimento de los pueblos indígenas y el medio ambiente, <http://www.dar.org.pe/noticias/poder-ejecutivo-presenta-proyecto-de-ley-que-pretende-modificar-ley-organica-de-hidrocarburos-favoreciendo-al-sector-privado-y-en-detrimento-de-los-pueblos-indigenas-y-el-medio-ambiente/>.
Scurrah Martin y Chaparro Anahí, 2014: La participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos indígenas: Políticas Públicas para un nuevo rol de la minería y los hidrocarburos en el Perú, Lima, <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20y%20la%20consulta%20previa%20en%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20-%20M.%20Scurrah%20y%20A.%20Chaparro.pdf>.
216. CEPAL y OCDE 2016: Evaluaciones del desempeño ambiental Perú. Aspectos destacados y recomendaciones, Santiago, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40171-evaluaciones-desempeno-ambiental-peru-2016-aspectos-destacados-recomendaciones>.
217. EY, 2018, cit. arr.
218. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2018: La Participación Ciudadana en la Actividad de Hidrocarburos, http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=3556.
219. Milano Flavia y Sanhueza Andrea, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, Washington, <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7499/Consultas-publicas-con-sociedad-civil-Guias-para-agencias-ejecutoras-publicas-y-privadas.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
220. Ministerio de Cultura, 2015: Derecho a la Consulta Previa Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta Previa, Lima, <http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Guia-Metodologica-para-la-Facilitacion-de-Procesos-de-Consulta-Previa.pdf>.
221. Con respecto a los proveedores para la minería, el país no cuenta con datos registrados
222. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Real, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/.
223. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Externo, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/.
224. Datos levantados para este diagnóstico por la consultora apoyados en el Banco Central de la Republica Dominicana, encuestas directas a las empresas metálicas, y el Ministerio de Energía y Minas.
225. El dueño de Falcondo es American Nickel.
226. Ley 176-07
227. Ley 200-04
228. Thomen Ginebra, Cristina, 2012: Informe País - Trabajo Final Diplomatura Industria Extractiva, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, Julio 2012, Santo Domingo, República Dominicana.
229. Dirección General de Impuestos Internos, 2015: Ranking de Empresas 2015, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/Ranking%20de%20Empresas%202015.pdf>.
230. Dirección General de Impuestos Internos, 2016: Ranking de Empresas 2016, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/RankingEmpresas2016.pdf>.
231. Salvo los proyectos de la minera Falcondo, realizados a través de su rama de responsabilidad social Fundación Falcondo que iniciaron en 1989.
232. En 2007 PVDC empezó sus programas de responsabilidad social.
233. Barrick Pueblo Viejo: Estudio demuestra la sostenibilidad de los proyectos sociales implementados por Barrick Pueblo Viejo, Santo Domingo D.N, <http://barrickpuebloviejo.do/noticias/estudio-demuestra-la-sostenibilidad-de-los-proyectos-sociales/2016-10-13/144111.html>.
234. FOMISAR Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, <http://www.fomisar.com/>.

235. Oro Información, 2017: Las cinco mayores minas de oro del mundo. <https://www.oroinformacion.com/es/OroInformacion/metales/487/Las-cinco-mayores-minas-de-oro-del-mundo.htm>.
236. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
237. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
238. Los resultados a favor fueron con 86,22% en Maimón, 98,66% en Cotuí y 98,78% en Fantino (véase Planes de Desarrollo publicados por los ayuntamientos de Maimón, Cotuí y Fantino).
239. Son los órganos de participación ciudadana directamente relacionados con la planificación municipal, ver: Malagón, Angela, y Rosa Arlene María, 2012: Guía para la Creación del Consejo Económico y Social Municipal, Santiago de los Caballeros: Federación Dominicana de Municipios, <http://fedomu.org.do/wp-content/uploads/2016/05/Guia-CES-FEDOMU-final.pdf>.
240. Bonilla, Teófilo, 2013: Diputados aprobaron renegociación de contrato con Barrick Gold, <http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>.
241. Barrick Pueblo Viejo, Responsabilidad Social Corporativa, <http://barrickpuebloviejo.do/responsabilidad-social/responsabilidad-social-corporativa/2016-10-13/122340.html>.
242. El Dinero, 2015: El lado amable de Barrick Pueblo Viejo - La minera dice que su accionar ha sido positivo en la provincia Sánchez Ramírez, <https://www.eldinero.com.do/10147/el-lado-amable-de-barrick-pueblo-viejo/>.
243. Al Momento, 2015: Barrick Pueblo Viejo inicia programa "una Computadora por Niño" en RD, Santo Domingo, <http://almomento.net/barrick-pueblo-viejo-inicia-programa-una-computadora-por-nino-en-rd/>.
244. El Veedor Digital, 2015. ENDA y la Barrick extienden proyecto para reforestar Piedra Blanca-Los Haitises, Santo Domingo, <http://elveedordigital.com/provincias/item/6431-enda-y-la-barrick-extienden-proyecto-para-reforestar-piedra-blanca-los-haitises>.
245. Álvarez, Yulissa, 2017: La piscicultura, un atractivo ecoturístico de Cotuí La actividad, apoyada por la Barrick, impulsa el desarrollo de la provincia Juan Sánchez Ramírez, Cotuí, <https://www.eldinero.com.do/40640/la-piscicultura-un-atractivo-ecoturistico-de-cotui/>.
246. Listín Diario, 2017: Inician trabajos de electrificación, Sánchez Ramírez, <https://www.listindiario.com/economia/2017/10/05/485133/inician-trabajos-de-electrificacion>.
247. Véase: Buena Práctica: 2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales
248. RD\$2'000.000,00, tasa de cambio del Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) para diciembre 2017.
249. Basado en cálculos estimados de la incubadora por efectos del aumento de empleo producto de las mineras y del aumento estimado de población calculado por The World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos a un 1,7% anual de incremento de población. El link de acceso a The World Factbook es: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
250. Matos, Heidi, 2012: Más de 4 millones de pesos para microempresarios de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, Cotuí, <http://eljacagüero.com/mas-de-4-millones-de-pesos-para-microempresarios-de-sanchez-ramirez-y-monsenor-nouel/>.
251. Acento, 2016: INFOTEP y Fundación Rica entregan Premio Nacional a la Excelencia 2016, Santo Domingo, <https://acento.com.do/2016/sociales/8391590-infotep-fundacion-rica-entregan-premio-nacional-la-excelencia-2016/>.
252. Barrick Pueblo Viejo, Inician proyecto de emprendimiento para personas con capacidades motoras especiales, Sánchez Ramírez, <https://www.barrickpuebloviejo.do/inician-proyecto-de-emprendimiento-para-personas-con-capacidades-motoras/2017-10-20/184050.html>.
253. Severino, Jairon, 2016: Minería aporta RD\$226,023 millones a economía dominicana desde 2010 Su ponderación promedio en el PIB se mantiene en 1.73%, Santo Domingo, <https://www.eldinero.com.do/31719/la-mineria-ha-agregado-rd226023-millones-a-economia-dominicana-desde-2010/>. Conversión a dólares según la tasa de cambio del Banco Central de junio 2016
254. Según censo del 2010. Consultado en: Oficina Nacional de Estadística, 2008: Monseñor Nouel en Cifras Perfil Sociodemográfico Provincial, https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monsenor_nouel.pdf.
255. Equivalentes a RD\$335'475.957 a la tasa vigente del Banco Central de la República Dominicana al cierre de diciembre de 2017.
256. Oficina Nacional de Estadística, 2008, cit. arr.
257. Corresponde a RD\$ 54'024.173 según tasa Banco Central RD al 31 diciembre 2017.
258. Wikipedia, 2017: Proyecto Pueblo Viejo, https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Pueblo_Viejo.
259. Barrick Pueblo Viejo, Nuestra historia, <http://barrickpuebloviejo.do/informacion-general/nuestra-historia/2016-10-11/163729.html>.
260. La firma BGC Engineering Inc, de Canadá elaboró el Plan de Cierre para Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) 31 de Julio de 2013, Proyecto No: 0011-159 -. Consultado en: BGC Engineering Inc, 2013: Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo: Mejita, Cumba, Hondo, Pendiente Oeste y Desechos Peligrosos Final., https://www.mem.gob.do/transparencia/images/docs/documentos/Plan_de_Administraci%C3%B3n_Medioambiental_del_Estado_1era_y_2da_Enmienda/Plan-del-Estado-Original.pdf.
261. Diario Libre, 2007: Contaminación afecta aún entorno de mina Pueblo Nuevo sufre las secuelas de la explotación, <https://www.diariolibre.com/noticias/contaminacin-afecta-entorno-de-mina-INDL148462>
262. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, <http://camiperd.org/category/documentos/guias-mineras/>.
263. El Día, 2013: Barrick Gold y la historia de un contrato muy complejo, Santo Domingo, <http://eldia.com.do/barrick-gold-y-la-historia-de-un-contrato-muy-complejo/>.
264. Diario Libre, 2014: Expertos se oponen a que el Senado declare Loma Miranda como Parque Nacional Afirman que la decisión sería inconstitucional, Santo Domingo, <https://www.diariolibre.com/noticias/expertos-se-oponen-a-que-el-senado-declare-loma-miranda-como-parque-nacional-ANDL636701>
265. Marcha Verde, <https://marchaverde.com/>.
266. Paula, Elexido, 2017: Marcha Verde: Patrimonio del Pueblo, <http://hoy.com.do/marcha-verde-patrimonio-del-pueblo/>.

267. Fundación Acción Verde, 2009: Declaración de La Comisión Ambiental de la UASD sobre la construcción de una Cementera, <http://www.accionverde.com/declaracion-de-la-comision-ambiental-de-la-uasd-sobre-la-construccion-de-una-cementera/>. Maimón Punto de Encuentro, Presidente de la Comisión Ambiental de la UASD habla sobre la minería en el país (Video), Maimón, <http://maimonpuntodeencuentro.blogspot.com/2015/09/presidente-de-la-comision-ambiental-de.html>
268. EFE, 2014: El padre Rogelio Cruz llama a la desobediencia civil por caso Loma Miranda, Santo Domingo, <https://www.listindiario.com/la-republica/2014/09/04/336184/el-padre-rogelio-cruz-llama-a-la-desobediencia-civil-por-caso-loma-miranda>.
269. Hoy, 2017: Marcha Verde reclama pago de RD\$3,000 millones a provincia Sánchez Ramírez, <http://hoy.com.do/marcha-verde-reclama-del-gobierno-pago-de-rd3000-millones-a-provincia-sanchez-ramirez/>.
270. Participación Ciudadana: ¿Qué es PC?, https://pciudadana.org/?page_id=4893.
271. Ver Grupo BID-sociedad civil Estrategia de Relacionamiento, 2018
272. Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
273. Publique lo que pagan, 2018: Objetivos, encontrado en: <http://www.publishwhatyoupay.org/es/quienes-somos/objetivos/>.
274. En la República Dominicana, Planes de Desarrollo Municipales (2.7.3.1., p. 137), Conformación de Agencia de Desarrollo en Chile (2.1.3.3., p.29), Mesa de Diálogo de Huari, Perú (2.6.3.3., p. 120).
275. Devonshire Initiative, 2017: About us, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/about-us/>.
276. Devonshire Initiative, s/a: Partnering and Partnerships: lessons learned in the DI, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/wp-content/uploads/DI-Partnership-Lessons-Learned-FINAL-.pdf>.
277. Es una plataforma de intercambio y comunidades de aprendizajes sobre el tema de conservación de la biodiversidad, apoyada por GEF, Convención sobre Diversidad Biológica, UN Environment y PNUD, ver: NBSAP Forum, 2018: Welcome to the NBSAP Forum, encontrado en: <http://nbsapforum.net/>.
278. Goxi es una comunidad virtual sobre gobernanza en industrias extractivas, apoyada por el Banco Mundial y PNUD, ver: GOXI, 2018: Guidelines for how to use GOXI, encontrado en: www.goxi.org.
279. GOXI, 2018: GOXI learning series, encontrado en: <http://goxi.org/page/goxi-learning-series>.
280. Entrevista Ricardo Morel Ex Vicepresidente de Antamina y ex gerente de relaciones comunitarias de Yanacocha y Angloamerican.
281. Intervención de Raúl Benavides Vicepresidente de Negocios de Buenaventura en reunión del Grupo de Diálogo Directo Noviembre del 2016

ANEXO 1: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Como herramientas de investigación se previó la revisión de materiales, entrevistas semi estructuradas y visitas de campo. Adicionalmente, en cada país se realizó una mesa de trabajo para presentar y validar las buenas prácticas ya identificadas y recoger otras buenas prácticas de relacionamiento a fin de organizarlas de manera sistemática. Cabe mencionar que, por tiempo y recursos limitados, se incluyen en el texto las prácticas que fueron validadas por los tres sectores (Gobierno, Industria y sociedad civil). Otras prácticas que el equipo de investigación no pudo visitar fueron incluidas en los anexos de este estudio. Eso no significa que no se las considere buenas prácticas, o que tengan menor relevancia, sino exclusivamente que en el marco de este estudio se validaron las anteriores.¹

1.1. Construcción del marco metodológico conceptual

Para orientar la investigación de campo, se construyó un marco metodológico conceptual (anexo 2). El documento consta de dos partes. La primera parte indica las definiciones que se emplean para la construcción del diagnóstico con la finalidad de asegurar la coherencia y el uso común de los términos entre todos los países, describe los pasos metodológicos para realizar la investigación de campo y propone matrices para la sistematización de la información.

1.2. Entrevistas

Las entrevistas se basaron en una Guía de Preguntas que fue socializada previamente y utilizada en los países seleccionados. Las preguntas apuntaron a dos objetivos: 1. se buscaba una caracterización de los actores en torno a los proyectos extractivos y el conocimiento de sus capacidades de relacionamiento, con un enfoque en las organizaciones de la sociedad civil; 2. se apuntaba a identificar buenas prácticas, que podrían ser validadas posteriormente. En una fase posterior, las entrevistas también sirvieron para confirmar datos y percepciones de buenas prácticas ya recolectadas.

En los seis países, se realizaron un total de 180 entrevistas (72 mujeres, 108 hombres). Del total de las entrevistas realizadas, 31% fue con el sector empresarial, 18% con el sector público, y 51% con la sociedad civil, incluyendo academia, comunidades, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. En general, las entrevistas fueron llevadas a cabo en el lugar de trabajo de la persona entrevistada. Los resultados principales fueron sistematizados en matrices.

Tabla 1: Total entrevistados por país, sexo y sector

País	No. entrevistas	Sexo		Sectores		
		H	M	Empresa	Estado	sociedad civil
Argentina	14	8	6	5	2	7
Chile	12	8	4	5	1	6
Colombia	27	11	16	11	4	12
Perú	21	15	6	7	6	8
México	74	51	23	18	13	43
República Dominicana	32	15	17	9	7	16
TOTAL	180	108	72	55	33	92

Fuente: Elaboración propia

1.3. Visitas de campo

Para conocer las buenas prácticas en el terreno, y poder conversar con los actores locales, se visitaron las regiones en donde se desarrollan las prácticas. En total, se realizaron 27 visitas de campo. Dependiendo de las personas contacto, la visita fue coordinada con la empresa involucrada o con las comunidades u OSC. Durante las visitas, hubo la posibilidad de observar los procesos implementados y conversar con una serie de actores para conocer su perspectiva sobre la práctica. Cada visita está respaldada por un informe de visita de campo. Se realizaron las siguientes visitas:

Tabla 2: Visitas de campo: lugares visitados, fechas y buena práctica relacionada

No.	País	Región	Localidad	Fecha	Nombre de buena práctica
1	Argentina	Provincia de Chubut	Comodoro Rivadavia	4 de julio 2017	Programa Pymes
2	Argentina	Provincia de Salta	Tolar Grande	10 al 12 de agosto 2017	Cuencas Sociales como área de intervención
3	Chile	Región Antofagasta	Localidad Sierra Gorda	17, 18 y 19 de Julio 2017	Mesa Buenos Vecinos
4	Chile	Región de Coquimbo	Localidad de Caimanes	14 y 15 junio 2017	Proceso de Diálogo, Consulta y Participación Caimanes
5	Colombia	Cundimarca	Bogotá	12 de julio 2017	Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia
6	Colombia	Cesar	Valledupar	10 de noviembre 2017	Programa de compensación forestal en las cuencas media y alta de los ríos Tucuy y Sororia
7	Colombia	Antioquia	Medellín	20 y 21 de noviembre 2017	Mesa de sociedad civil para Industrias Extractivas
8	México (hidrocarburos)	Estados Coahuila y Tamaulipas	Municipios: Ciudad de Saltillo de Coahuila, Río Bravo	15 al 17 de agosto 2017	Clúster de Energía Coahuila
9	México (hidrocarburos)	Estado Campeche	Ciudad del Carmen: Nuevo Progreso y Nuevo Campechito	18 de agosto 2017	Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
10	México (minería)	San Luis Potosí	Municipio de Cerro de San Pedro	4 al 6 de julio de 2017	Plan Integral de Cierre de Mina Responsable
11	México (minería)	Guerrero	Municipio de Taxco	17 y 18 de junio de 2017	Casa Grande: Programa de Desarrollo Comunitario
12	México (minería)	Guerrero	Municipio de Chichila	17 y 18 de junio de 2017	Zona de conservación de Chichila
13	México (minería)	Guerrero	Municipio de Cocula y Taxco	17 y 18 de junio de 2017	Monitoreo de la calidad de agua en los jales /Jales secos
14	México (minería)	Guerrero	Municipio de Cocula, Iguala y Taxco	17 y 18 de junio de 2017	Plan de Reasentamiento
15	México (minería)	Guerrero	Municipio de Ixtacamaxtitlán	4 a 6 de agosto de 2017	Consulta participativa para la exploración / Proyecto de una presa en la Zona Ixtacamaxtitlán

No.	País	Región	Localidad	Fecha	Nombre de buena práctica
16	México (minería)	Hidalgo	Municipio de Zimapán	20 y 21 de junio de 2017	Mesas de diálogo y apoyo en la realización de proyectos comunitarios para el uso del fondo minero
17	México (minería)	Hidalgo	Municipio de Zimapán	20 y 21 de junio de 2017	Universidad Tecnológica de Zimapán
18	México (minería)	Hidalgo	Municipio de Zimapán	20 y 21 de junio de 2017	Presa de retención para evitar la contaminación con sólidos del río de los ejidos el Mezquite I y II
19	México (minería)	Durango	Durango	30 de agosto al 2 de septiembre	Uso de energía solar y agua tratada en la operación minera
20	Perú	Departamento Cajamarca	Provincia, Hualgayoc, distrito Hualgayoc	1 al 3 de agosto 2017	REDyPAC en Hualgayoc: Una experiencia de desarrollo productivo y formación de ciudadanía
21	República Dominicana	Provincia Sánchez Ramírez	Ciudad Cotuí	9 de junio 2017	Incubadora de Empresas Cibao Sur
22	República Dominicana	Provincia Monseñor Nouel	Bonao	5 de julio 2017	Apadrinamiento de Escuelas
23	República Dominicana	Provincia Sánchez Ramírez	Cotuí	25 de julio 2017	-CEFOMOMALI, Productos Candiver
24	República Dominicana	Provincia Monseñor Nouel	Bonao, comunidades: Palmarito, Hato Nuevo, Peñalo	26 de julio 2017	Mesas Redondas Comunitarias
25	República Dominicana	Provincia Sánchez Ramírez	Ciudad Cotuí	13 de septiembre	PRODUCTOS CANDIVER
26	República Dominicana	Provincia Sánchez Ramírez	Ciudad Cotuí	18 de septiembre 2017	PRODUCTOS CANDIVER, Incubadora de Empresas
27	República Dominicana	Provincia Sánchez Ramírez	Mina Pueblo Viejo y Maimón	13 febrero 2018	Proyecto Planes de Desarrollo Municipales

Fuente: Elaboración propia

1.4. Mesas de Trabajo

En cada uno de los países, se realizó una Mesa de Trabajo multisectorial que tenía como objetivos a) identificar los actores clave en el relacionamiento en materia de industrias extractivas y b) identificar buenas prácticas de relacionamiento en los ámbitos nacional, regional, local. Las Mesas de Trabajo siguieron los mismos pasos para cumplir con estos objetivos².

Las Mesas de Trabajo se realizaron en las oficinas del BID en cada uno de los países. En total, participaron 200 representantes de los tres sectores en las siete Mesas de Trabajo realizadas³. Muchos de los participantes en las Mesas también fueron entrevistados y el porcentaje de los diferentes sectores sobre el total de los participantes fue similar al de las entrevistas. Las fechas en las que se desarrollaron las Mesas de Trabajo y el número de participantes por país se pueden observar en la tabla siguiente.

Tabla 3: Mesas de Trabajo por país, fecha y número de participantes

País	Fecha	No. participantes
Argentina	28 de junio 2017	29
Chile	16 de agosto 2017	29
Colombia	11 de julio 2017	23
México (hidrocarburos)	14 de julio 2017	14
México (minería)	13 de julio 2017	43
Perú	6 de junio 2017	36
República Dominicana	20 de septiembre 2017	26
TOTAL		200

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

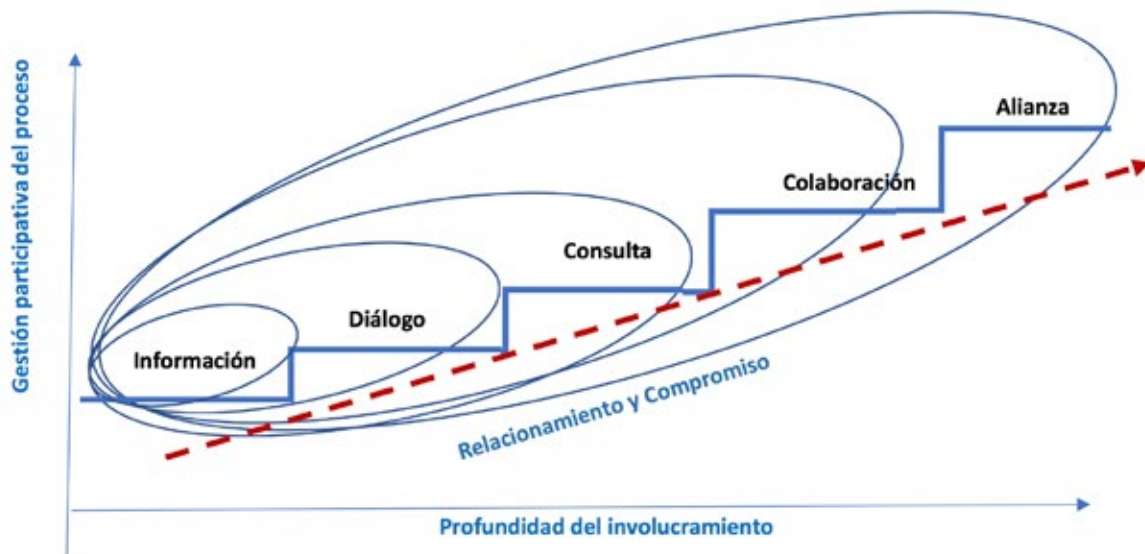
Marco Conceptual y Metodológico para el diagnóstico de relacionamiento por país

El marco conceptual y metodológico presenta los enfoques, define los términos a utilizar y orienta sobre la manera en que se elaboró el diagnóstico.

1. Marco Conceptual

- **Agencia ejecutora:** se refiere a una empresa extractiva minera o de hidrocarburos pública o privada.
- **Buena práctica:** es aquella experiencia que ha impulsado un proceso innovador y ha logrado un resultado positivo en un contexto determinado, y que se estima que pueda ser replicada en entornos similares para lograr procesos y resultados equivalentes. Una buena práctica tiene algunas características como⁴:
  - » Presenta un proceso y resultado valioso y satisfactorio para los actores involucrados.
  - » Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar.
  - » Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa.
  - » Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos).
  - » Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta, pero con condiciones similares.
  - » Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción, sino que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de reorganizarlas).
  - » Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y reorganización de ellas a partir de lo aprendido (lecciones aprendidas).
  - » Ha logrado un resultado satisfactorio para todas las partes implicadas.
- **Industrias extractivas:** todas las empresas que tienen como objetivo extraer recursos naturales. Para los fines de esta investigación, se refiere a recursos no renovables como petróleo, gas y minerales metálicos. Este término incluye todas las empresas privadas y estatales en cualquier fase del ciclo de la extracción (prefactibilidad, factibilidad, exploración, explotación). También, incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que prestan torres de perforación). A la vez, excluye a todas las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de pipelines, buques, gasolineras, etc.
- **Niveles de relacionamiento:** Son los grados de involucramiento y compromiso de trabajo con sociedad civil. A mayor nivel de involucramiento y compromiso mayor posibilidades de contribuir a un mejor nivel de impacto. Los niveles de relacionamiento pueden darse de forma secuencial o simultánea. Todos los niveles contienen mejores

prácticas para la debida diligencia y algunos de los niveles están regulados en marcos legales del país y/o internacionales. A los fines de este diagnóstico los niveles de relacionamiento cuentan con actividades e indicadores que les son propios y permiten orientar y medir su aplicación para la debida diligencia. El impacto en el desarrollo aumenta a medida que el nivel de relacionamiento también escala según el orden detallado en la siguiente gráfica⁵:



- **Información:** Comprende tanto la entrega de datos y referencias por parte de la agencia ejecutora acerca de sí misma, del alcance, beneficios y riesgos, medidas de mitigación del proyecto como del primer borrador del plan de relacionamiento. Respetar principios de debida diligencia propios como la entrega oportuna, pertinente y entendible de información (información en el lenguaje e idioma de la audiencia). Es un movimiento que tiene como protagonista y responsable principal a las autoridades estatales competentes y a la agencia ejecutora, así también como a las organizaciones de sociedad civil presentes en el terreno que facilitan información con el objetivo de asegurarse que la agencia ejecutora esté en conocimiento de los portadores de interés. La agencia ejecutora toma contacto con los actores para ofrecerles y entregarles toda la información relativa a la operación principal, así como las acciones y/o proyectos que se planean realizar en relación a la primera. En el nivel de la información se encuentran tres subniveles:

I1: dar información unilateral a través de medios impresos, electrónicos, radiales o televisivos;

I2: es la información bilateral, cara a cara con la informante o la oficina de Relaciones Comunitarias, se produce la interacción entre los actores.

I3: disponer de mecanismos institucionalizados para proporcionar información transparente de manera regular

- **Diálogo:** El diálogo se refiere al proceso de relacionamiento activo y continuo, que a partir de diversos grados de contacto entre diversos actores buscan crear o fortalecer relaciones constructivas entre las partes. Estos procesos pueden ser eventuales o sostenidos en el tiempo y, además, con un potencial de cambio constructivo de las relaciones. En este último caso, nos referimos al diálogo como “un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros”⁶. En el nivel del diálogo se encuentran dos subniveles:
  - » D1: en este subnivel se produce el “diálogo del evento”, que se limita a acciones puntuales para generar apertura, construir confianza o discutir temas de interés común. El diálogo no está concebido como un proceso. Estos eventos pueden ser creativos como organizar la proyección de una película, eventos deportivos que aseguren la confraternidad, eventos culturales en general así como temáticas. La lógica es el acercamiento a nivel personal.
  - » D2: El “diálogo como gestión estratégica de proceso”, con participación multi-actor (empresa, sociedad civil y Estado), que se focaliza en dos planos. El primero, establecer las reglas y el proceso que ayuden a construir conjuntamente un plan de proceso de diálogo en los que se incluyan factores como el tiempo y la estructura del proceso, las metas, las condiciones, y las formas de participación. El segundo es atender a los intereses y necesidades de las partes y con eso contribuir a la solución de temas estructurales de desarrollo como pobreza, educación y salud entre otros. La lógica del proceso se basa en fortalecer las relaciones entre los actores a través de la escucha profunda, la empatía mutua y la confianza y lograr acuerdos por la vía del consenso. Este subnivel de diálogo se puede producir también en los otros niveles de relacionamiento incluyéndolos, permanente o momentáneamente, en forma simultánea o secuencial.
  - » **Consulta pública**⁷: Proceso formal, público y organizado en etapas que responde a obligaciones legales o regulatorias, así como principios de mejores prácticas universales, sigue una metodología precisa y busca dar información fidedigna, con el objetivo de recibir insumos respecto a un proyecto/estrategia/programa. Se diferencia del nivel de Diálogo puesto que la Consulta Pública responde a ordenamientos legales, sigue metodologías que le son propias como contener un plan de consulta sobre temas puntuales, y como su nombre lo indica busca fundamentalmente escuchar y conocer las dudas, cuestionamientos y propuestas de los grupos humanos portadores de interés, que se verán afectados directamente (en términos positivos y/o negativos) por la implementación de un determinado proyecto/estrategia/programa⁸. En el nivel de la consulta se encuentran dos subniveles:
    - » CON1: Responde a un ordenamiento o marco regulatorio nacional o internacional⁹; cuenta con un plan de consulta específico que se comparte con los portadores de interés e incluye las fases de la consulta. Se manifiesta a través de una plataforma o estructura más amplia de actores que es informada presencialmente o virtualmente y cuenta con un periodo preestablecido para expresar sus opiniones e insumos. Sigue una metodología propia donde se incluye una fase de sistematización de las opiniones con la consecuente devolución a la comunidad de la consideración de las opiniones. Los resultados de la consulta no son vinculantes.

- » CON2: Tiene las mismas características como CON1, pero los resultados de la consulta son vinculantes. El proceso es a través de Audiencias o Plebiscitos de amplia convocatoria en el cual se comparte información y recibe aportes, críticas, pedidos y recomendaciones. Por el carácter vinculante, resultara obligatorio que las recomendaciones sean consideradas para el diseño del proyecto final. Se incluye a la consulta libre, previa e informada cuando existe un acuerdo, según las normas internacionales del Convenio 169 de la OIT.
- **Colaboración:** Son las acciones donde la Sociedad Civil y la agencia ejecutora producen productos de conocimiento o donde la misma sociedad civil participa en iniciativas de formación para agregar capital humano capacitado en una determinada área/tema/oficio. El objetivo de este nivel es de dos vías: 1. sumar el conocimiento de las OSC en grado de dar aportes técnicos; 2. mejorar las capacidades de las OSC para llevar adelante proyectos satélites a la operación principal. La audiencia es técnica o moderadamente técnica. El nivel de la colaboración en el plan de relacionamiento implica efectivizar los insumos recibidos en las consultas y en los espacios de diálogo.
- **Alianza:** Son las acciones en donde se incluyen y financian a OSCs para que sean estas últimas las encargadas de implementar un proyecto o componente de proyecto. El objetivo es incluir a OSCs técnicas o debidamente capacitadas para planificar conjuntamente e implementar iniciativas y/o componente/s de proyecto satelitales a la operación principal y donde tal inclusión resulte más efectiva. La audiencia es técnica en el sentido de ser organizaciones conocedoras del terreno y tejido social, o ser previamente capacitadas (en el nivel de “colaboración” anterior).
- **Sociedad Civil:** Se entiende por sociedad civil a una amplia gama de organizaciones y/o grupos humanos sin fines de lucro que representan sectores e intereses sociales, culturales, étnicos. Su radio de acción puede estar tanto a nivel rural como urbano, local, regional y/o internacional. Puede tratarse de fundaciones; organizaciones comunitarias; asociaciones; grupos profesionales; organizaciones no gubernamentales; academia; movimientos sociales; ONGs o fundaciones de las empresas extractivas que financian proyectos de desarrollo; sindicatos; grupos indígenas; grupos afro descendientes. Pueden ser formales (debidamente registradas en sus respectivos países) o informales (organizaciones no registradas oficialmente). La sociedad civil actúa en el espacio público, con otros actores como Gobiernos y Sector Privado. Para los efectos de esta publicación consideramos como sociedad civil a la amplia diversidad de grupos humanos mencionados que no pertenecen ni al Estado ni al Sector Privado.

2. Marco metodológico

A la luz de las experiencias existentes y la complejidad como característica del entorno y del relacionamiento con actores de sociedad civil, empresa y Estado, se requirió contar con los siguientes enfoques para aplicar la metodología de obtención de información por cada nivel de relacionamiento y realizar el posterior análisis:

- a. *Enfoque participativo:* a través de una metodología participativa se busca obtener la información necesaria para la elaboración de los productos solicitados en la presente consultoría.

- b. *Enfoque regulatorio de derechos y obligaciones*: la presencia de la industria extractiva tiene importantes implicancias sociales, políticas y jurídicas puesto que interactúan con comunidades y Estados, pudiendo existir consecuencias sobre derechos y obligaciones de tipo económico, civil, laboral, ambiental y cultural. Siendo los estados competentes dentro de su jurisdicción, a partir del derecho nacional e internacional, para exigir el respeto de derechos y el cumplimiento de obligaciones, paralela y progresivamente las empresas extractivas han venido adoptando iniciativas voluntarias que han aportado al respeto de los derechos de las comunidades.
- c. *Enfoque de desarrollo sostenible*: Concebimos el desarrollo sostenible como un modelo integral e integrador, que articula de manera equilibrada las dimensiones económica, social, ecológica, política y cultural, asumiendo que no es posible responder a los grandes desafíos de la sostenibilidad, si no es desde una perspectiva holística. Proyectos extractivos deben considerar las cinco dimensiones si buscan contribuir al desarrollo sostenible. En el diagnóstico se debe especificar si las buenas prácticas identificadas, adicionalmente, contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- d. *Enfoque de diversidad*: la presencia de proyectos extractivos en comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes requiere que el relacionamiento cuente necesariamente con un enfoque intercultural. Con poblaciones indígenas o tribales es de aplicación el derecho a la consulta derivado del Convenio 169 OIT. El enfoque de diversidad demanda el respeto a todas las identidades, sean éstas étnicas, lingüísticas, culturales, o basadas en orientaciones sexuales u otras. Una identidad diferente a la culturalmente dominante no debe ser causa de exclusión o discriminación.
- e. *Enfoque de igualdad de género*: significa que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales. La búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo cual implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se reduzcan las brechas existentes, reconociendo asimismo que estas brechas pueden perjudicar tanto a mujeres como a hombres. Se entiende por empoderamiento de la mujer la expansión en los derechos, recursos y capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar con autonomía en las esferas social, económica y política¹⁰.
- f. *Enfoque de transformación de conflictos*: mira al conflicto como un proceso complejo que administrado adecuadamente se convierte en un esfuerzo de cambio constructivo. Se basa en dos premisas: el conflicto es normal en las relaciones humanas y, además, es un motor de cambio. Habrá transformación cuando los actores cambian internamente, como cuando obtienen más tranquilidad interna, cooperan más o cuando mejoran su disposición hacia sus contrapartes. En el plano de las relaciones entre los actores habrá cambio si se mejora la comunicación, la confianza, surge la empatía y la cooperación entre las partes. En el plano de lo cultural, se crea un patrón bajo el cual el conflicto es manejado a través de vías pacíficas y cara a cara; y en el plano estructural cuando las instituciones y las normas que contribuían a propiciar conflictos son cambiadas¹¹.

2.1. Estrategia de mapeo de actores en industrias extractivas:

2.1.1. Obtención de información sobre experiencias y actores de sociedad civil:

Se recopiló la información pertinente de fuentes primarias y secundarias en relación a cada nivel de relacionamiento. La información secundaria considerada fue la más actualizada y proveniente de fuentes estatales, privadas, de cooperación internacional, de sociedad civil y academia entre otras.

La información primaria se obtuvo utilizando metodologías como los grupos focales, entrevistas y visitas de campo.

Grupos Focales

Para la realización de los grupos focales se convocó a 15 personas claves provenientes de los cuatro sectores sociedad civil, sector privado, academia y del Estado para profundizar la información investigada. Se identificó en cada país a aquellos actores clave a partir de los siguientes criterios:

- Criterio 1: Capacidad para generar nodos a partir de los cuales se tejen redes con otros actores similares a nivel local en proyectos extractivos.
- Criterio 2: Capacidad para tender puentes entre actores de naturaleza diferente (sociedad civil - Estado - empresas)
- Criterio 3: Legitimidad; es decir, gozan de confianza de una cantidad importante de actores.
- Criterio 4: Disponen de recursos materiales o inmateriales que le otorguen un rol central en la red de actores.
- Criterio 5: tienen la capacidad de influir en la opinión pública y decisores.

Entrevistas

Las entrevistas se aplicaron a personas claves provenientes de los cuatro grupos anteriormente indicados y aplicando los mismos criterios de selección, pudiendo ser las mismas personas u otras que enriquecieran los hallazgos.

Visitas de Campo

Las visitas de campo se realizaron a aquellos lugares en donde se identificaron buenas prácticas.

2.1.2. Identificación de minorías y grupos en situación de vulnerabilidad.

También fue necesario mapear a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad y minorías involucrados en acciones de relacionamiento de empresas extractivas

Se entiende por minoría a parte de la población de un Estado que difiere de la mayoría de la misma población por características de raza, lengua, religión u otros criterios. El término vulnerabilidad se refiere a aquellos sectores o grupos de la población como los niños, niñas y jóvenes abandonados, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y poblaciones indígenas que se encuentran en condición de riesgo, lo que no les permite satisfacer sus necesidades básicas, y ante las actividades de la industria extractiva podrían aumentar su condición de vulnerabilidad ante posibles impactos socio ambientales como, por ejemplo, en el plano ambiental por la contaminación del agua; en el plano social, por la trata de personas; y en el cultural, por la afectación a sus modos de vida.

2.2. Identificación de las buenas prácticas de relacionamiento en base a los cinco niveles de relacionamiento

Se identificaron experiencias de relacionamiento consideradas buenas prácticas, según la definición del glosario en este documento, intentando cubrir todos los niveles de relacionamiento. Luego de un primer registro de lo encontrado, las buenas prácticas han sido verificadas por el equipo investigador.

2.3. Indicadores comunes y comparables para medir mejores prácticas

Los indicadores sirven para clasificar las buenas prácticas según cada nivel de relacionamiento. Los indicadores miden el involucramiento de la sociedad civil del proceso y la profundidad del involucramiento, es decir, corresponde a la misma escala de los mismos niveles de relacionamiento.

El cumplimiento de los indicadores ha sido reportado de la siguiente manera:

Participación

- *Participación institucionalizada*: Existen reglas, mecanismos, acuerdos firmados, o algún otro mecanismo que está regulado para asegurar la participación.
- *Participación incluyente*: La diversidad de los actores está en capacidad de participar y no se discrimina a ningún actor en particular.
- *Participación regular*: La participación se da de manera regular durante un tiempo prolongado.

Pertinencia

- *Pertinente a realidad*: Responde a una demanda real de alguna o todas las partes interesadas.
-
- *Pertinente por necesidad*: Responde a necesidades de un territorio que fueron diagnosticadas por actores externos.
- *Pertinencia metodológica*: Las herramientas y metodologías aplicadas tiene un formato adecuado para el público meta (lenguaje, tiempos, aspectos culturales, y otros).

Sostenibilidad

- *Sostenibilidad por consenso*: Mecanismo reconocido por los portadores de interés de los 3 sectores (gobierno-empresa-sociedad civil).
- *Sostenibilidad financiera*: Recursos financieros o de otro tipo disponibles para continuación de buena práctica.
- *Sostenibilidad institucional*: Mecanismo institucionalizado mediante política empresarial, acuerdo formal entre los tres sectores o normas legales.

2.4. Marco normativo o regulatorio de cada uno de los cinco niveles de relacionamiento por país

Se identificaron las normas nacionales e internacionales y códigos de conducta referidos a la industria minera y de hidrocarburos en cada uno de los niveles de relacionamiento de los países en los que se focalizó la investigación, de acuerdo con el texto *Consultas públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras públicas y privadas*¹² corroborando incluir la información más vigente.

2.5. Insumos para la Hoja de Ruta

Con base en los hallazgos y resultados del diagnóstico, se eligieron tres países a partir de los cuales se elaboró una hoja de ruta por país, basada en los hallazgos del diagnóstico para que los tres sectores puedan orientar su plan de acción en cada uno de los niveles de relacionamiento, considerando criterios como calidad de la información obtenida en el diagnóstico país, voluntad política de decisores y un contexto favorable para colaboración entre los distintos sectores.

La Hoja de Ruta apunta al objetivo final de la investigación, que es promover un sector extractivo responsable, en un clima de inversión mejorada y con la participación de la sociedad civil en los diferentes niveles de relacionamiento, reduciendo los costos y riesgos vinculados a la industria extractiva.

ANEXO 3: OTRAS BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO¹³

	Nombre corto	Lugar	Breve descripción	Actores participantes	Nivel de relacionamiento
ARGENTINA					
1	Programa de educación energética y ambiental	Todo el país	2015-2017. Consta de diversas iniciativas integradas: un programa para educadores líderes y referentes en políticas públicas de todo el país; el portal web Energías de Mi País junto a Educar; la publicación “Vos y la Energía” para chicos en edad escolar; la serie de TV “Los No Convencionales” y las Plazas de la Energía en ciertas localidades.	Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A, Fundación YPF, universidades y ONG de diversas partes del país. Ministerios de Energía y Minería, de Educación, de Ambiente de la Nación y de los distintos gobiernos provinciales	Información
2	Grupo de Diálogo Neuquino	Neuquén	2014 – 2017. Busca mecanismos y procesos que contribuyan a la justicia y la paz social, ante los riesgos y oportunidades que implican para la región las actividades extractivas y productivas, en particular Vaca Muerta y los reservorios no convencionales.	Autoridades mapuches; empresarios del petróleo, la fruta y el comercio; representantes de ONG; referentes del sector educativo; autoridades de colegios profesionales; periodistas; y autoridades religiosas, entre otros actores.	Diálogo

3	Monitoreo Ambiental participativo ¹⁴	San Juan	2009-2017- Minas Argentinas realizó el monitoreo ambiental participativo en su mina Gualcamayo. Siguiendo sus buenas prácticas ambientales invitó a miembros de las comunidades de Jáchal y Guandacol para que formaran parte de la toma de muestras y luego las custodiaran hasta al laboratorio que realiza las determinaciones analíticas.	Minas Argentinas y 12 personas de las comunidades, entre ellos periodistas, comerciantes, docentes, funcionarios municipales y productores.	Colaboración
4	Producción de plantas autóctonas	Neuquén	2012 – 2017. “Pensamiento Nativo” es un emprendimiento de producción de plantas autóctonas de la meseta neuquina, apoyado por la empresa Pluspetrol. Lo lleva adelante un grupo de jóvenes con alto riesgo social proveniente de barrios carenciados del oeste de la Ciudad de Neuquén	Fundación Familia, Escuela Nuestra Señora de la Guardia, Facultad de Ciencias de Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la empresa Pluspetrol S.A.	Colaboración
5	Plan de mejora educativa	Catamarca	2006-2015. Buscaba mejorar los resultados del trabajo escolar. Consiguió disminuir la repitencia, introducir el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza, brindar herramientas actualizadas de lectoescritura y matemática, y mejorar la gestión escolar.	Minera Alumbraera – Universidad de San Martín- Universidad de Tres de Febrero	Alianza
6	Control de infecciones de adquisición hospitalaria ¹⁵	Tierra del Fuego	2016. La empresa Total Austral colabora en la consolidación de un programa sobre manejo, vigilancia y control de las infecciones de adquisición hospitalaria (IAH) y la mejora de los servicios de laboratorio, esterilización e higiene hospitalaria, a través de la asistencia para la conformación de un Comité de Control de Enfermedades Infecciosas y la transferencia de conocimientos a los profesionales locales de la salud.	Total Austral, FUNCEI, Hospital Regional de Río Grande, Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Municipalidad de Río Grande.	Alianza

COLOMBIA

8	Iniciativa Empresarial sobre Biodiversidad y Desarrollo	En 8 zonas Priorizadas	2012 – 2017. Mesa de trabajo conjunto que busca fortalecer las capacidades de autoridades y empresas en la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, a través de iniciativas empresariales colectivas, que representen adicionalidad en el territorio.	Vicepresidencias de Desarrollo Sostenible y de Minería, Hidrocarburos y Energía de Asociación Nacional de Empresarios de <i>Colombia</i> , Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Alexander Von Humboldt	Información y Diálogo
9	Proceso de licenciamiento ambiental en proyecto de minería aurífera	Municipio de Santa Rosa de Osos	La empresa Red Eagle en diálogo con las comunidades respetó lugares cuya importancia ecológica y ambiental no podía ser sacrificada bajo ninguna consideración económica. A través de a partir de diálogos mensuales, se han formulado programas sociales destinados a la educación, la cultura, el deporte, la salud, fortaleciendo las instituciones locales y promocionando empresas sostenibles en diversos sectores	Empresa Red Eagle, comunidades del área de influencia directa del proyecto	Información y Diálogo
10	Emprende con Equion	Municipios de Tauramena, Nunchía, Yopal y Aguazul, Departamento de Casanare	2014 – 2017. La empresa Equion Energía crea el programa "Emprende con Equion" donde la empresa realiza una asesoría y acompañamiento al desarrollo y fortalecimiento de ideas de negocio, contribuyendo a la diversificación económica de regiones dependientes del petróleo. Algunos logros: 250 iniciativas de emprendimiento acompañadas, 86 empresas formalizadas, 369 empleos generados	Empresa Equion Energía, emprendedores y empresarios de los municipios	Colaboración

11	Al campo con Equion	Municipios de Yopal y Nunchía, Departamento del Casanare	La empresa implementa un programa de fortalecimiento de seguridad alimentaria para las familias, que les permitan disponer de alimentos que benefician su nutrición y, bajo principios empresariales. El programa actualmente cuenta con 143 Familias de los municipios de Yopal y Nunchía.	Empresa Equion Energía, familias de Yopal y Nuchía, <i>Corporación Autónoma</i> Regional de la Orinoquia

MÉXICO

12	Zona de conservación	Chichila, Guerrero	2015 – 2017. Esta práctica consiste en la protección ambiental de una zona de San Pedro y San Felipe Chichila. La innovación de la misma es que se trata de un área de reserva ecológica voluntaria propuesta por la comunidad. Se realizaron mesas de trabajo entre las comunidades mencionadas y la Minera Media Luna para establecer un convenio de colaboración, en el que se define que la empresa otorgaría un monto económico para la conservación de esta área por los próximos 6 años como parte de su plan de mitigación de sus impactos ambientales.	Minera Media Luna, Comisariados ejidales de San Pedro y San Felipe Chichila, comunidades aledañas a la zona del Balsas, población de Chichila, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero	Diálogo
13	Jales secos	Cerro Media Luna, Cocula, Guerrero	Esta práctica está orientada a promover la eficiencia en el uso del agua en hasta un 80%, y evitar la generación de jales durante el proceso de procesamiento de oro de la Mina El Limón-Guajes. La decisión de realizar este proceso por parte de la empresa recogió la preocupación de las comunidades en la zona de influencia del proyecto de los potenciales impactos ambientales de los jales en los cuerpos de agua en donde pescan varias cooperativas de las comunidades.	Minera Media Luna, comunidades aledañas al Balsas, expertos en materia de remediación.	Diálogo

14	Estrategia de transparencia	Puebla, Hidalgo y Morelos	Esta práctica se basa en promover la transparencia en las tomas de decisiones como un ejercicio cotidiano para mejorar las relaciones entre la empresa y la comunidad, atendiendo las solicitudes de información de la comunidad.	Diversas empresas mineras como Alamos Gold, Almaden Minerals y Carrizal Mining; comunidades de La Esperanza (Morelos), Ixtacamaxtitlán (Puebla) y Zimapán (Hidalgo).	Información
15	Rescate de tradiciones	Tetlama, <i>Temixco</i> , Morelos	El polígono de la zona en la que se encuentra este proyecto minero está muy cercano a la zona de Xochicalco, una zona arqueológica importante del estado. La empresa identificó que existía un desconocimiento y desarraigo de las raíces culturales de la población de Tetlama, en el municipio de Temixco en el Estado de Morelos. Por ello, esta práctica se centra en trabajar con la comunidad para que conozca y construya una identidad. Algunas acciones han sido apoyar para la construcción de un centro de desarrollo en el que se imparten clases de náhuatl para mantener las raíces culturales de la comunidad.	Alamos Gold, comunidades de Temixco, Miacatlán y Xochitepec, gobiernos locales, Academia.	Diálogo, colaboración
16	Testigos Sociales	Tetlama, <i>Temixco</i> , Morelos	La práctica de testigo social es una forma en la que se puede tener una comunicación constante, calidad y de confianza de la información que otorga la empresa a la comunidad donde se está trabajando. Además, se genera hacia la comunidad un proceso de transparencia en el que se busca reforzar la legitimidad y fidelidad de lo que se está haciendo por parte de la empresa. Los testigos sociales pueden ser miembros de la comunidad o de una OSC encargado de verificar que se cumplan los acuerdos realizados con la empresa.	Empresa Alamos Gold, comunidad	Información

17	Proempleo	Chihuahua, Zacatecas; Sonora; Durango	Es una práctica que impulsa a personas que desean lograr una vida más digna y productiva, mediante la capacitación y asesoría para el autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas. Se basa en la creación de sólidas relaciones de colaboración y crecimiento mutuo con la comunidad, para contribuir en oportunidades de negocio que fortalezcan la economía local, lo cual ayuda a combatir la incertidumbre ante las posibilidades del cierre de la mina. Se trabaja con base en acuerdos de cooperación con instancias educativas dedicadas a la formación de personas en oficios, lo que favorece la capacitación de capital humano para realización de proyectos basados en el emprendedurismo.	Minera Peñoles, trabajadores, comunidades, capacitadores, instituciones financieras	Colaboración
PERÚ					
18	Consejo de Coordinación del Convenio Marco de Antapaccay	Espinar Cusco	2003 – 2017. Es un acuerdo promotor de alianza estratégica en las relaciones comunidad – empresa - gobierno local. Se dedica un 3% de las utilidades de la empresa para el financiamiento de proyectos de inversión social. El Comité de Coordinación, con 37 instituciones socias, prioriza y aprueba proyectos. Destacan los proyectos referidos a la Planta de Lácteos, desarrollo ganadero, mejoramiento de infraestructura de salud.	Empresa Antapaccay, comunidades, gobierno local	Colaboración

19	Mesa de diálogo y concertación de Hualgayoc	Cajamarca	Se generó una “canasta para el desarrollo” con aportes del gobierno local, nacional y de la empresa que llegaron hasta 180 mil dólares. Ante la dificultad de transparencia de los recursos por parte de la municipalidad estos fueron centralizados para la gestión directa de la Mesa de Diálogo. Destaca un Plan Concertado que ha significado esfuerzo de diálogo. De manera concreta se ha mejorado el centro médico, los caminos y el servicio de agua potable.	Empresa Goldfields, comunidad	Diálogo y Colaboración
20	Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba	Bajo Urubamba, Cusco	1999 – 2017. Está conformado por representaciones tripartitas (de empresa, Estado y comunidad) que se reúnen cada tres meses para tomar decisiones respecto a los proyectos de las comunidades del Bajo Urubamba, área de influencia del Proyecto Camisea. Se articula a las organizaciones indígenas. Se han generado planes de vida de las comunidades, y se trabaja con un enfoque de género, así como empresas comunales que prestan servicios directos a las empresas que operan en la zona. También se evalúa el accionar de las empresas que operan – por ejemplo, Ex Petrobras, ahora NPC, REPSOL.	Empresas, comunidades, municipio	Diálogo y Colaboración

21	Programa de monitoreo ambiental comunitario del Bajo Urubamba	Bajo Urubamba, Cusco	2002 – 2017. En Camisea se lleva a cabo el monitoreo ambiental desde el inicio de sus actividades. En este participan los representantes de las comunidades nativas, agrupados en tres federaciones indígenas. Para su desarrollo se promovió un componente de capacitación en la población constituyéndose el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba. El monitoreo ambiental se realiza mediante visitas mensuales a las distintas locaciones y áreas de operación de Pluspetrol	Empresa Pluspetrol, organizaciones indígenas, entidades del Estado	Diálogo y Colaboración
22	Mesa de Diálogo de Moquegua		En el año 2011 se instaló una Mesa de Diálogo con representantes de la sociedad civil de Moquegua, autoridades locales, distritales, la empresa AngloAmerican Quellaveco S.A. y representantes del Poder Ejecutivo, bajo la iniciativa del Gobierno Regional de Moquegua. Durante años se habían generado controversias en lo referido al uso del agua, e incluso se había ajustado el EIA que la empresa tenía aprobado. Tras 22 sesiones la Mesa logró consensuar acuerdos en tres temas: 1) medidas en relación con el uso de los recursos hídricos, 2) medidas para el cuidado y sostenibilidad del medioambiente, y 3) la creación de un fondo para el desarrollo local destinado a la inversión en ejes de desarrollo definidos por los gobiernos locales y el Gobierno Regional.	Sociedad civil, la empresa AngloAmerican Quellaveco y autoridades locales, de GR y del Poder Ejecutivo	Diálogo y Colaboración

23	Programa de desarrollo económico local	Varios	2010 – 2017. El Programa Ganadero auspiciado por la mina San Rafael de MINSUR, tiene en el Centro de Reserva Genética (CRG) “Charcahuallata” su corazón. Se lleva a cabo en alianza con la ONG Desco. Incluye: Mejoramiento genético de ganado, especialmente alpaca: incremento de la oferta forrajera; técnicas de esquila y selección de fibra; y mejoramiento de capacidades para la acción productiva y desarrollo institucional.	Empresa MINSUR, ONG DESCO	Colaboración

ANEXO 4:

VALIDACIÓN FINAL DEL ESTUDIO

Entre el 19 y 29 de mayo del 2018, el equipo consultor de los diferentes países realizó una validación de la versión final del documento de diagnóstico con los actores que estaban involucrados en la fase de levantamiento de información. Los diagnósticos país fueron enviados a un total de 201 actores de los cuales 57 respondieron y 38 contribuyeron con comentarios que fueron incluidos en el documento. El resumen del proceso de validación por país se encuentra en la tabla a continuación.

País	Contactos enviados	Respuestas	Comentarios incluidos	Observaciones
Argentina	13	9	7	En dos caso fueron comentarios más amplios que no han podido ser considerados
Colombia	45	3	1	Dos respuestas solo agradecieron envío del documento
Perú	45	13	4	La mayoría de las respuestas fueron agradecimientos por el envío del documento y comentarios generales
Chile	28	8	8	
México	62	17	11	8 respuestas felicitaron el trabajo y no tuvieron comentarios
Rep. Dom.	8	7	7	
TOTAL	201	57	38	

Annex Endnotes

1. En Perú, algunas de las prácticas que no fueron analizadas a fondo son prácticas ya estudiadas y que aparecen en otras publicaciones. Ejemplos en Perú son: Camisea, Tintaya, Constancia y La Granja.
2. El programa fue ligeramente cambiado después de la primera Mesa en Perú. El programa fue acompañado por una agenda anotada que incluía todos los detalles como orientaciones para facilitadores.
3. En México se realizaron dos Mesas, uno para el sector minero y otro para el de hidrocarburos.
4. Tomado de <http://buenaspracticassaps.cl/que-es-una-buena-practica/>
5. Milano, Flavia y Viviane Espinoza (2016). Grupo BID y sociedad civil: revisión de las acciones de relacionamiento y compromiso 2014-2015. BID. Pág. 10. Ver en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7496?locale-attribute=es&>
6. Esta definición del diálogo se refiere al diálogo democrático, diálogo genuino o diálogo transformativo y ha tenido que ser calificado para no asociarse al término diálogo (a secas), que se presta a múltiples interpretaciones. Ver Pruitt, Bettye y Philip Thomas (2008). Diálogo democrático: un manual para practicantes. Washington: ACDI, IDEA, OEA, PNUD. Págs. 20-21. Ver http://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/dial_%20demo_s.pdf
7. Ver BID Milano, F. Sanhueza, A. Consultas Públicas con sociedad civil: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>
8. Milano, Flavia y Viviane Espinoza (2016). Grupo BID y sociedad civil: revisión de las acciones de relacionamiento y compromiso 2014-2015. BID. Pág. 17
9. Ver BID Milano, F. Sanhueza, A. Consultas Públicas con sociedad civil: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&> sobre Consulta libre, previa e informadas según normas internacionales del Convenio 169 de la OIT
10. Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del BID. Tomado de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35428394>
11. Basado en el texto de Lederach, John Paul (2009). El pequeño libro de la transformación de conflictos. Bogotá: Good Books - Justapaz.
12. Milano, F. y Sanhueza, A. Consultas Públicas con sociedad civil. Disponible en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>. La normativa argentina se encuentra en la página 33 y ss., la chilena en la pág. 79 y ss., la peruana en la pág. 176 y ss., la colombiana en la pág. 93 y ss., la dominicana en la pág. 191 y ss, y la mexicana en la pág. 149 y ss.
13. Ver Anexo 1 - Metodología
14. El Monitoreo Ambiental Participativo realizan diversas empresas en Argentina, entre las que pueden mencionarse aparte de Minas Argentinas, Barrick (Mina Veladero), Troy Resources Limited (Mina Casposo) e YPF.
15. IAPG: La responsabilidad social de las empresas de la industria del petróleo y del gas. Informe 2016. www.iapg.org.ar

